

# PANORAMA DE LAS NECESIDADES HUMANITARIAS COLOMBIA

CICLO DE PROGRAMACIÓN  
HUMANITARIA

2022

PUBLICADO FEBRERO 2022



# Sobre este documento

Este documento ha sido consolidado por el Equipo Asesor Humanitario de OCHA en Colombia en nombre de la comunidad humanitaria del País y de los socios. En éste se ofrece un entendimiento común de las emergencias, incluidas las necesidades humanitarias más apremiantes y el número estimado de personas que necesitan asistencia humanitaria. También, representa una base de pruebas consolidada y ayuda a informar la planificación estratégica conjunta de la respuesta. Este es un documento técnico y debe ser interpretado como tal sin implicaciones o connotaciones políticas.

## FOTO DE LA PORTADA

Misión a Chocó. Bram Ebus.

*Las designaciones empleadas y la presentación del material en el informe no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas en relación con la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en relación con la delimitación de sus fronteras o límites.*

## Últimas actualizaciones



OCHA coordina la acción humanitaria para garantizar que las personas afectadas por emergencias con impacto humanitario reciban la asistencia y la protección que necesitan. OCHA trabaja para superar los obstáculos que impiden que la asistencia humanitaria llegue de manera efectiva a la población afectada por emergencias y proporciona liderazgo para la movilización de la asistencia y los recursos por parte del sistema humanitario

<https://www.unocha.org/colombia>  
[twitter.com/ochacolombia](https://twitter.com/ochacolombia)

## Humanitarian RESPONSE

Humanitarian Response es el sitio web central para las herramientas y servicios de gestión de la información, permitiendo el intercambio entre los clústeres y los socios del IASC que operan en una emergencia prolongada o repentina.

<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia>



Humanitarian InSight apoya a los tomadores de decisiones brindándoles acceso a datos humanitarios. La herramienta provee la última información verificada sobre necesidades, entrega de la respuesta humanitaria y las contribuciones financieras.

[www.hum-insight.com](http://www.hum-insight.com)



El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor primario de los datos reportados constantemente sobre el financiamiento humanitario global y contribuye a la toma de decisiones estratégicas identificando brechas y prioridades para una asistencia humanitaria eficaz, eficiente y basada en los principios humanitarios.

[fts.unocha.org](https://fts.unocha.org)

# Tabla de contenido

---

<b>08</b>	<b>Resumen de Necesidades Humanitarias y resultados claves</b>
<b>19</b>	<b>Parte 1: Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias</b>
20	1.1 Contexto de la crisis
27	1.2 Choques e Impacto de la Crisis
44	1.3 Alcance del análisis
48	1.4 Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades
69	1.5 Número de Personas en Necesidad
<b>96</b>	<b>Parte 2: Análisis de riesgo y monitoreo de situación y necesidades</b>
97	2.1 Análisis de riesgos
106	2.2 Monitoreo de la Situación y Necesidades
<b>107</b>	<b>Parte 3: Análisis Sectorial</b>
112	3.1 Protección
113	Sub-grupo de Protección, Protección de la infancia
115	Sub-grupo de Protección, Violencias Basadas en Género (VGB)
116	Sub-grupo de Protección, Acción Contra Minas
119	3.2 Seguridad Alimentaria y Nutrición
122	3.3 Agua Saneamiento e Higiene
128	3.4 Salud
133	3.5 Educación en Emergencias
137	3.6 Alojamientos Temporales
140	3.7 Recuperación Temprana
<b>144</b>	<b>Parte 4: Anexos</b>
145	4.1 Fuentes de los datos
149	4.2 Metodología
152	4.3 Vacíos de información y limitaciones
154	4.4 Acrónimos

## Personas en Necesidad (PiN)



### PiN Intersectorial situación interna

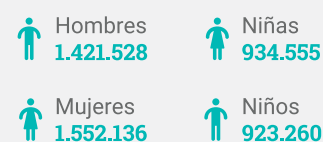
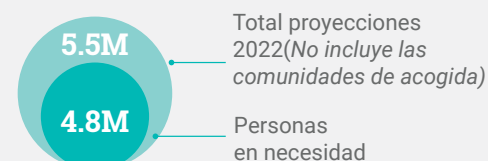


#### Desagregación por sexo y edad de personas en necesidad



### Refugiados y Migrantes\*

\*Refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos y sus comunidades de acogida



## Grupos vulnerables



**1.3M**

Comunidades afrodescendientes



**629.6k**

Pueblos indígenas



**913.8k**

Personas afectadas por desastres naturales



**830.7k**

Comunidades anfitrionas



**454.3k**

Personas desplazadas



**53.9k**

Personas confinadas



**5.8M**

Personas que viven bajo influencia de los GAO/GAD



**2M**

Vocación de permanencia



**179.1k**

Población en Tránsito



**1.1M**

Población pendular



**645.2k**

Colombianos Retornados



**876.3k**

Comunidades de acogida



## Personas en Necesidad (PiN) por año:

Factores para el marco del análisis del PiN:



Factores de violencia



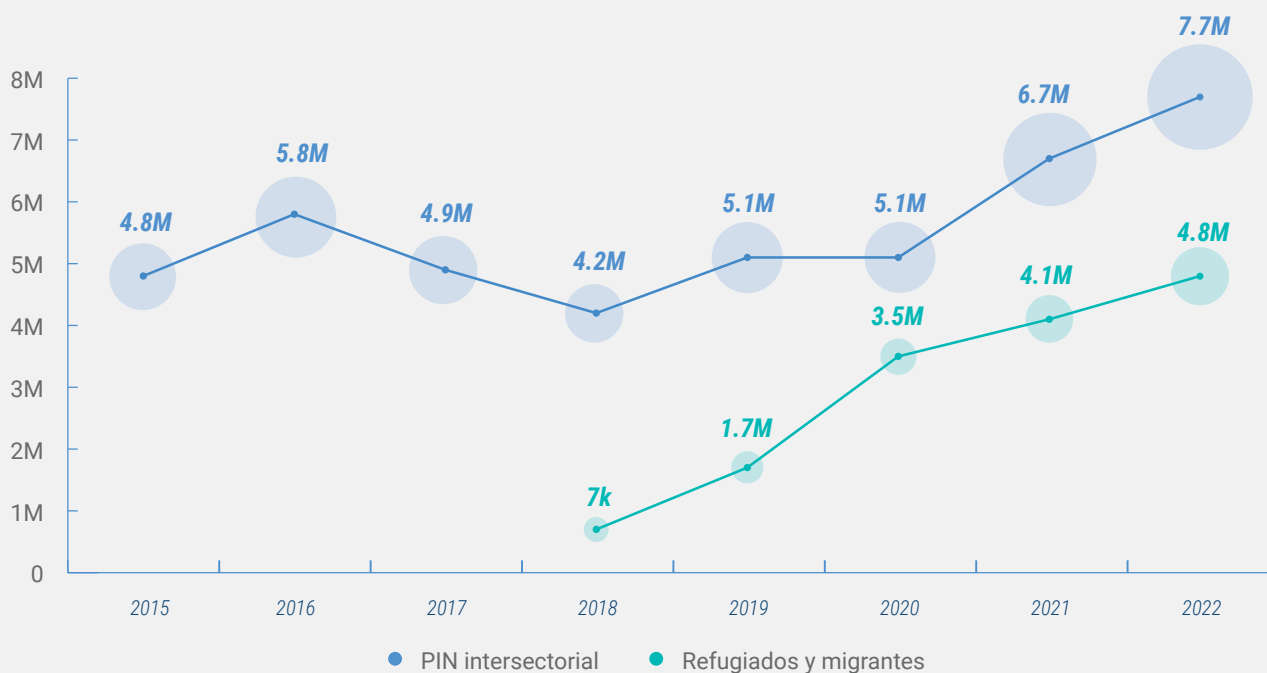
Desastres naturales



COVID-19



Flujos migratorios



## Personas en Necesidad (PiN) por clúster:



## Cifras clave:



**7.7 millones**  
Personas con necesidades de asistencia

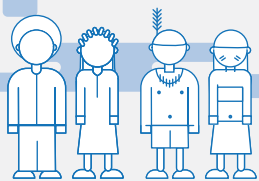
En los municipios donde se concentran las mayores necesidades humanitarias, el promedio de la proporción de población que habita en zonas rurales es del

**56.4%**



Afectación especial para

**pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes**



Se registra un total de

**1.9 millones**

**de personas de grupos étnicos presentan necesidades humanitarias**

Siendo el 67% (1.279.966) comunidades afrodescendientes y el 33% (629.602) restante población indígena.

Uno de los determinantes de las necesidades es el **impacto de los factores de violencia**

**5,8 millones**

**de personas tienen necesidades humanitarias por vivir bajo la influencia de los grupos armados en 373 municipios** con presencia de MAP/MUSE, cultivos ilícitos lo que ha generado un riesgo advertido en Alertas Tempranas.



Afectación cíclica de eventos de **origen natural**

**914.000 personas en 557 municipios presentan necesidades** (de esos 557 municipios afectados por eventos de de origen natural, 318 están bajo la influencia de grupos armados).



Entre las afectaciones por la **COVID-19**

**48%**

de los productores agrícolas encuestados por FAO en Colombia, manifestaron que han tenido que recurrir a estrategias como la reducción de gastos de insumos, gastos de ahorros para la compra de alimentos y venta de activos productivos.



**Impacto humanitario en zonas afectadas por el conflicto armado (ZOMAC)**



Al menos **4.5 millones**

de personas que no cuentan con acceso a fuentes de agua mejorada y



**3.2 millones**

de personas no cuentan con acceso a servicios sanitarios seguros



(cerca del 68,5% de las personas a nivel nacional que se encuentran en esta situación) y **habitan en municipios con presencia e influencia de grupos armados**. Las mayores necesidades se concentran en Córdoba, Antioquia, Nariño y Chocó.



Aproximadamente

**2.4 millones**

de personas enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud (corresponde 75.3% de las personas a nivel nacional que se encuentran en esta situación). Las mayores necesidades se concentran en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Meta.



**2.9 millones**

tienen necesidades agudas (**302 Municipios**)

**293 mil** tienen necesidad aguda (**23 Municipios**)



**962 mil**

Personas han sido afectadas por eventos de desastres entre 2020 y 2021.



**574 mil**

Personas se han visto afectadas por ataques contra la población civil entre 2020 y 2021.



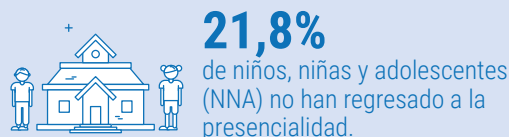
**54 mil**

Personas confinadas tienen necesidades por las restricciones a la movilidad por presencia y accionar de grupos armados.



**830 mil**

Personas que integran las comunidades anfitrionas y se ubican en 744 municipios tienen necesidades humanitarias.



Lo anterior es calculado, teniendo en cuenta que la matrícula registrada en 2021 fue de 9.968.865 NNA y en presencialidad están 7.793.152 NNA. Por lo cual, **no han retornado a la presencialidad 2.175.713 (21.8%).**



Los principales departamentos en los cuales las personas entre los 5 y 19 años con proporción de internet muy baja o nula son Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare y La Guajira.



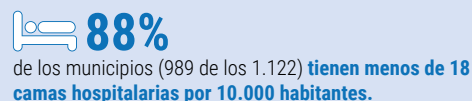
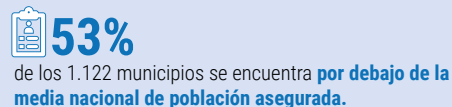
y los departamentos con el mayor índice de deserción son Cesar, Magdalena, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Norte de Santander, Antioquia, Tolima y Bolívar.



## 483 municipios

tienen una alta tasa de mortalidad infantil por encima de la media nacional.

Los departamentos en donde más se concentran estas cifras son: Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Nariño, Chocó, Córdoba, Atlántico, Sucre, Magdalena, entre otros.



Para el 2020\* en promedio **1 de cada 4 personas en Colombia viven a más de una hora de distancia de un centro de salud. (502 municipios)**



De acuerdo con fuentes oficiales **285 personas de cada 100,000 son víctimas de violencia intrafamiliar y delito sexual.**



de personas enfrentan barreras de acceso a los servicios de salud (el 75.3% de las personas a nivel nacional que se encuentran en esta situación) y habitan en municipios con presencia de grupos armados. **Las mayores necesidades se concentran en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Meta.**

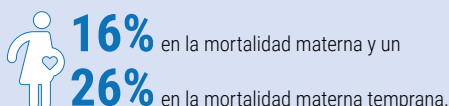


De acuerdo con DANE

**En 2020\* se registraron 14.273 partos en menores de 14 años.**

Los municipios con mayor proporción de partos en esta población (Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés) **presentan bajas tasas de reporte de casos de delito sexual ante las entidades.**

Hasta la semana 43 (octubre) de 2021 se ha observado un incremento del



Las comunidades indígenas y afrocolombianas presentan serias **barreras para acceder a servicios de salud especialmente en la Amazonía y el Pacífico. Esta situación se ha agravado los ataques contra la misión médica y las restricciones de acceso.** Preocupa que en 2021 la cifra de víctimas indígenas haya aumentado un 142% y de afrocolombianas un 103%.



## 7,6 millones

de personas con necesidad de seguridad alimentaria y nutrición **en los 1.122 municipios en el 2021 y se prevé continúen en 2022.**



Las zonas geográficas como el **corredor pacífico y de frontera** tienen una **mayor prevalencia de inseguridad alimentaria grave.**

**Chocó, La Guajira, Sucre, Arauca y Putumayo**

son los departamentos con mayor inseguridad alimentaria que, registran además, una alta prevalencia de afectaciones por los factores de violencia y desastres de origen natural.

\*Para la fecha de publicación no había disponibilidad de esta información para 2021.

# Resumen de Necesidades Humanitarias y resultados claves

## Cifras actuales

PERSONAS EN NECESIDAD

**7.7M**

TENDENCIA (2015-2022)



MUJERES

**50,5%**

NIÑOS Y NIÑAS

**31,7%**

CON DISCAPACIDAD

**2,6%**



**RESGUARDO EMBERA KATÍO / CÓRDOBA. COLOMBIA**

Población en evento de desplazamiento.

Crédito de la foto: Laura Arias, OCHA, 2021.



## Severidad de las necesidades 2022

MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
272k	3.2M	4.8M	2.6M	293k

## Severidad de las necesidades por nodos\* de ruralidad

NODOS DE RURALIDAD	SEVERIDAD/ # MUNICIPIOS					TOTAL
	MÍNIMO (1)	ESTRÉS (2)	SEVERA (3)	EXTREMO (4)	CATASTRÓFICA (5)	
Ciudades intermedias	44	94	130	46	-	314
Ciudades y aglomeraciones	10	38	52	16	1	117
Rural	25	97	148	100	3	373
Rural disperso	8	62	112	117	19	318
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>87</b>	<b>291</b>	<b>442</b>	<b>279</b>	<b>23</b>	<b>1.122</b>
Participación %	8%	26%	39%	25%	2%	100%
Participación %	<b>(Severidad 1 y 2) 34%</b>		<b>(Severidad 3,4 y 5) 66% PIN</b>			

\*Territorios con características homogéneas entre si pero heterogéneas en comparación con otros nodos, conformando categorías de clasificación de desarrollo



Para acceder al tablero dinámico con los resultados de las Personas con Necesidades (PIN) y su nivel de Severidad, por favor acceder al siguiente enlace:  
<https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/infographic/colombia-avances-plan-de-respuesta-humanitario-hrp-intersectorial>

## Por población vulnerable


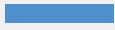

GRUPO VULNERABLE	PERSONAS EN NECESIDAD
Personas que habitan en municipios con presencia de GAOS	5.8M 
Niñas y niños	2.4M 
Comunidades afrocolombianas	1.3M 
Población adulto mayor	973k 
Afectados por desastres naturales	913k 
Comunidades anfitrionas	831k 
Población Indígena	630k 
Personas desplazadas	454k 
Personas en condición de discapacidad	196k 
Personas confinadas	54k 

Las personas pertenecientes a los afectados por desastres naturales, comunidades de acogida y las personas que están bajo la influencia de grupos armados, pueden también hacer parte de otros grupos vulnerables al mismo tiempo.


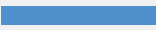

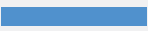

## Por género

GÉNERO	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Hombres	3.3M 	50%
Mujeres	3.3M 	50%
Niñas	1.1M 	15%
Niños	1.2M 	16%

## Por edad


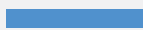



EDAD	PERSONAS EN NECESIDAD	% PIN
Adultos (18 - 60)	4.3M 	56%
Niños, niñas y adolescentes (0 - 17)	2.4M 	32%
Adultos mayores (61+)	973k 	13%

## Tasa de mortalidad infantil por miles de habitantes (menores de 5 años de edad)

AÑO	VÍCTIMAS MORTALIDAD INFANTIL
2017	13 
2018	14 
2019	14 
2020	12 
2021*	13 

Fuente DANE: Defunciones No Fetales-Estadísticas Vitales  
\*Proyectado (fecha de corte octubre de 2021)

## Evolución anual de población en situación de desplazamiento

AÑO	VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
2017	128k 
2018	175k 
2019	159k 
2020	96k 
2021	124k 

\*Fuente: UARIV (fecha de corte diciembre de 2021)

## Contexto, choques/eventos, e Impacto de la Crisis<sup>1</sup>

En medio de múltiples desafíos Colombia avanza en la recuperación socioeconómica causada por el impacto de la pandemia por la COVID-19. Dicho impacto se refleja en una emergencia sanitaria que se extendió durante más de un año (desde marzo de 2020) y una consecuente recesión económica. Sin embargo, gracias a las medidas de respuesta rápida basada en políticas públicas adaptadas y dirigidas a proteger la vida, medios de subsistencia y a apoyar la economía de millones de personas, la reactivación económica ha permitido que casi se alcancen rápidamente los niveles de estabilidad y crecimiento económico que se tenían a finales de 2019 en algunos sectores<sup>2</sup>. A pesar de este progreso a lo largo de 2021 persisten retos que ya existían antes de la pandemia, los cuales siguen siendo factores de vulnerabilidad y necesidades, y que se prevé continúen en 2022.

Es así como, a cinco años de la firma del *Acuerdo Final con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)*<sup>3</sup>, se propició un alivio humanitario<sup>4</sup> durante varios años en algunas regiones (2012 – 2017) en relación con décadas previas. Lo anterior ha instado a consolidar los avances y seguir haciendo frente a los retos; sin embargo, existe una fragilidad particular por las nuevas dinámicas de la violencia y las víctimas de ésta que continúan en las zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC)<sup>5</sup>.



En este documento se utiliza la terminología “afectado o víctima por factores de violencia armada” en línea con la terminología utilizada por el Gobierno, sin perjuicio a otras caracterizaciones del contexto utilizadas en otros informes oficiales de las Naciones Unidas o de otras organizaciones humanitarias.

La presencia, expansión, reconfiguración y el fortalecimiento de los grupos armados no estatales (GANE)<sup>6</sup> y otras organizaciones criminales, continúan agravando las necesidades humanitarias de personas que ya viven en condiciones de vulnerabilidad y habitan zonas rurales apartadas e incluso urbanas de varias regiones del país como el Pacífico, noroccidente y centro-sur incluyendo zonas fronterizas con Venezuela, Ecuador, Panamá y Brasil. Dichos grupos tienen intereses en controlar los territorios y las comunidades en donde ejecutan diversas economías ilícitas<sup>7</sup> que permiten el financiamiento de sus actividades.

Adicionalmente, existen otros impulsores que exacerbaban las consecuencias humanitarias, entre los cuales se destacan: el incremento de cerca del 100 por ciento (en comparación con 2020)<sup>8</sup>, en el número de afectados por inundaciones causadas por las temporadas de lluvias de 2021, el aumento de personas afectadas y damnificadas por el paso de dos huracanes por el Caribe colombiano a finales de 2020, principalmente el huracán Iota de

1. Para uso de este documento se entiende por crisis o emergencias las situaciones humanitarias ocasionadas por los factores de violencia, los desastres, la COVID-19 y las situaciones mixtas que generan afectaciones en la protección y la pérdida de medios de vida de la población civil.
2. Se destaca el histórico manejo fiscal y macroeconómico que permitió que la economía creciera desde el 2000.
3. De aquí en adelante se denominará **Acuerdo Final** al *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera alcanzado en noviembre de 2016 al final del proceso de negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP*.
4. Evidenciado en disminución de víctimas por los diferentes hechos victimizantes registrados por la UARIV-RNI.
5. El término factores de violencia armada se utilizará en adelante sin perjuicio de la clasificación del CICR disponible en: <https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-DIH-balance-humanitario>; así como al derecho internacional humanitario y a la ley 2078 de 2021 a los cuales se adhiere la comunidad humanitaria en el país.
6. Se utiliza la denominación global de grupo armado no estatal (GANE) para hacer referencia a los diferentes grupos armados que ejercen violencia armada en el territorio colombiano, enfrentándose entre ellos o contra la fuerza pública colombiana. Esta definición incluye Grupos Armados Organizados (GAO) que son quienes ejercen violencia armada con una intensidad que excede el de los actos de violencia aislados y esporádicos y con un nivel de organización colectiva que les permite llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas. Por su parte, los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) son quienes, por su presencia, accionar y responsabilidad inciden en diferentes factores de violencia armada, ligada más a delincuencia organizada y los Grupos Generadores de Violencia (GGV) son otros grupos armados que ejercen algún tipo de violencia en menor intensidad. Estas clasificaciones independientes del criterio para dicha clasificación dejan un impacto humanitario en varias regiones del país.
7. Explotación ilícita de minerales, siembra de cultivos de uso ilícito, vacunas o extorsiones financieras, explotación sexual y laboral, deforestación, narcotráfico, trata de personas, entre otros.
8. Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), con corte a octubre de 2021.

categoría cinco y el inicio del fenómeno de La Niña. No obstante, aunque los indicadores macroeconómicos se están recuperando, las consecuencias de la COVID-19 en términos de pobreza, desigualdad e inseguridad alimentaria a nivel familiar persisten. Al escenario expuesto, se suma la recepción de al menos 1,8 millones de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela<sup>9</sup>, cuya llegada, tránsito y permanencia en el país continuó a pesar de los cierres de los puntos de control migratorio decretados entre 2020 y 2021<sup>10</sup> a raíz de la emergencia sanitaria, y que de acuerdo con las proyecciones para diciembre de 2022 alcanzará los 2,45 millones de personas<sup>11</sup>; así mismo, el flujo masivo y acelerado de personas en movimientos migratorios transcontinentales que hacen tránsito por el país<sup>12</sup>, ha registrado cifras récord en 2021, donde se presentan riesgos de protección frente a diferentes hechos relacionados con la situación interna del país.

## Alcance del Análisis

Todos los factores mencionados siguen desencadenando impactos y situaciones de crisis humanitaria concentradas en zonas particulares de varios departamentos de la región Pacífico, noroccidente, oriente y sur, configurando una doble y múltiple afectación en diferentes grupos vulnerables por la combinación de los diferentes impulsores. En consecuencia, el análisis cualitativo y cuantitativo realizado este año por los socios humanitarios en coordinación con instituciones del Estado del nivel territorial y nacional, ha identificado para 2022 cerca de 7,7 millones de personas en necesidades, representando un aumento (14%) respecto al año anterior.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las mujeres, así como los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas que están bajo la influencia de los grupos armados no estatales, adultos mayores, personas desplazadas y confinadas, personas afectadas por eventos de origen natural, personas en condición de

discapacidad, comunidades anfitrionas, entre otros grupos, se han visto afectados de manera desproporcionada y diferenciada, reflejando la severidad de sus necesidades que dejan las diferentes emergencias. Estas personas requieren asistencia humanitaria en diferentes sectores afectados (protección, seguridad alimentaria, salud, educación, entre otros) no solo de manera individual y colectiva sino de manera intersectorial, para asegurar que las medidas de prevención y protección garanticen la seguridad y bienestar de estas personas, además de mitigar daños que probablemente son irreversibles.

## Condiciones Humanitarias, Severidad y Personas en Necesidades

Como parte del análisis, de las 7,7 millones de personas en necesidad se identificaron al menos 2,9 millones de personas en necesidades agudas (nivel de severidad 4 y 5) de las cuales 293.000 (nivel de severidad 5) están en una situación crítica, por los riesgos e impactos de protección asociados a temas de morbilidad y mortalidad, ya sea por la situación de seguridad o por la falta de acceso a los bienes indispensables para la supervivencia, y que requieren atención urgente en el corto y mediano plazo para evitar la pérdida de la vida o deterioro de ésta.

Es el caso de **las víctimas de emergencias humanitarias como desplazamientos masivos y confinamientos que, de manera alarmante en 2021 y en comparación con los años previos ya superan las 139.000 víctimas<sup>13</sup>, el 71 por ciento de ellas pertenecen a grupos étnicos; mientras que la UARIV registra un total de 145.129 de personas desplazadas y confinadas en 2021<sup>14</sup>**. Las principales causas de estas emergencias son el accionar de los diferentes grupos armados no estatales ya sea de manera unilateral o conjunta, reflejada en enfrentamientos entre ellos, combates entre éstos y las Fuerzas Armadas, ataques de éstos contra población e infraestructura civil, misiones médicas o humanitarias. Se destaca que los GANE, utilizan cada vez más artefactos explosivos

9. <https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021>

10. No hay que olvidar que desde junio de 2021 ninguna frontera terrestre colombiana se encuentra formalmente cerrada.

11. Según proyecciones del RMRP 2022.

12. Hallazgos Evaluación MIRA realizada en Necoclí y Acandí, por el incremento de movimientos transcontinentales: <https://assessments.hpc.tools/assessment/312c6120-d3fd-43f7-a187-275d42024b5a>

13. Fuente: Monitor-OCHA, registros entre enero y diciembre de 2021.

14. Registro UARIV-RNI con corte a 31 de diciembre de 2021. <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#/enfoqueDiferencial>





#### ARAUCA, COLOMBIA

Resguardo La Ilusión. Comunidad La Vorágine

Crédito de la foto: OCHA

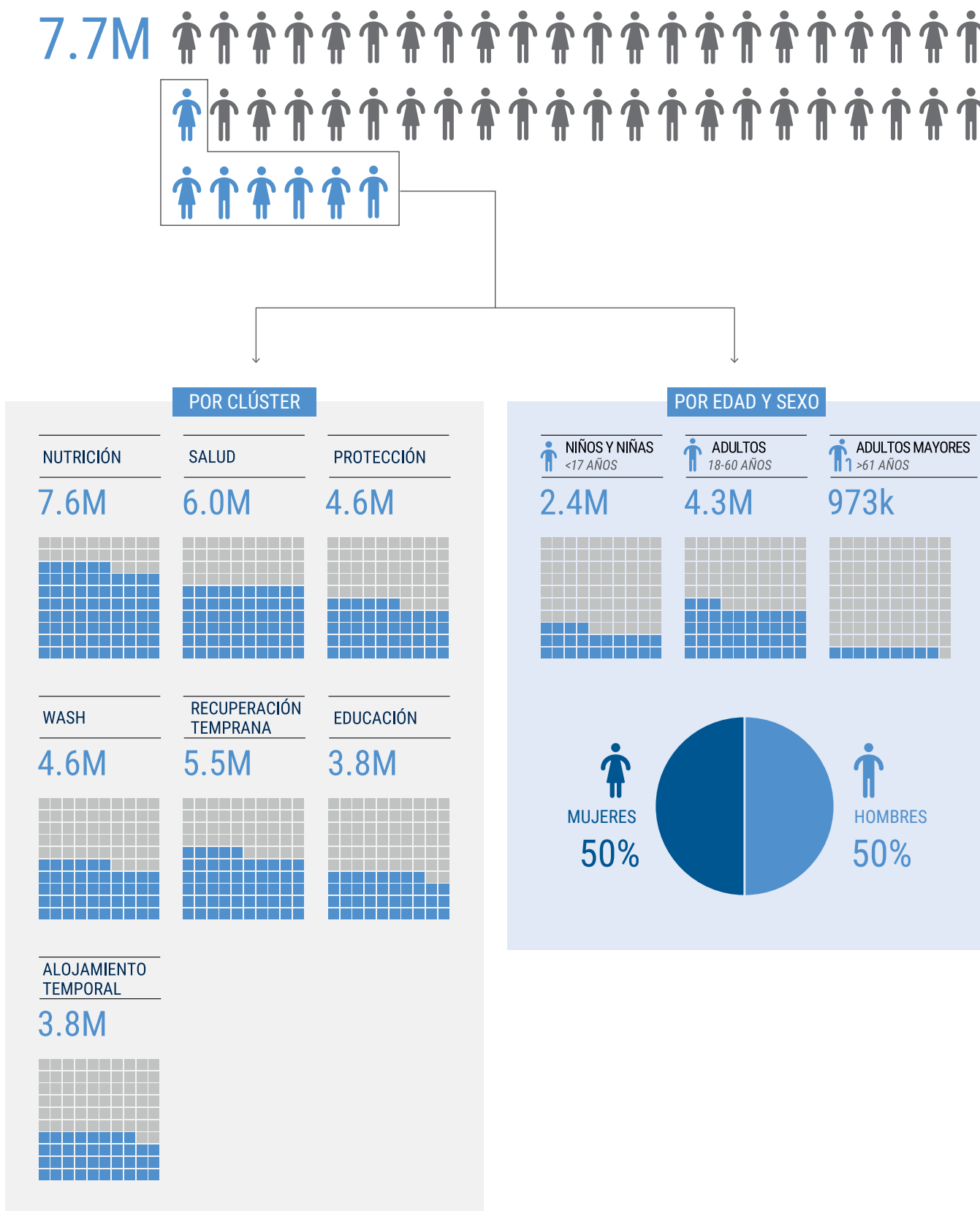
con impacto en personas que quedan en medio de las hostilidades. A este accionar, se suma la contaminación por minas antipersonal como estrategia de defensa para el cuidado de cultivos de uso ilícito y el control territorial, siendo la causa de algunas de las emergencias mencionadas y de graves restricciones de acceso en la población civil.

En varias regiones como el Pacífico, noroccidente, nororiental y centro-sur del país, también preocupa la continuidad de ataques contra civiles como las masacres y homicidios selectivos (líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación, entre otros civiles), casos y riesgos de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, violencia sexual y basada en género en diferentes edades y sexo los cuales se han incrementado y propiciado en la pandemia. Estas dinámicas no siempre

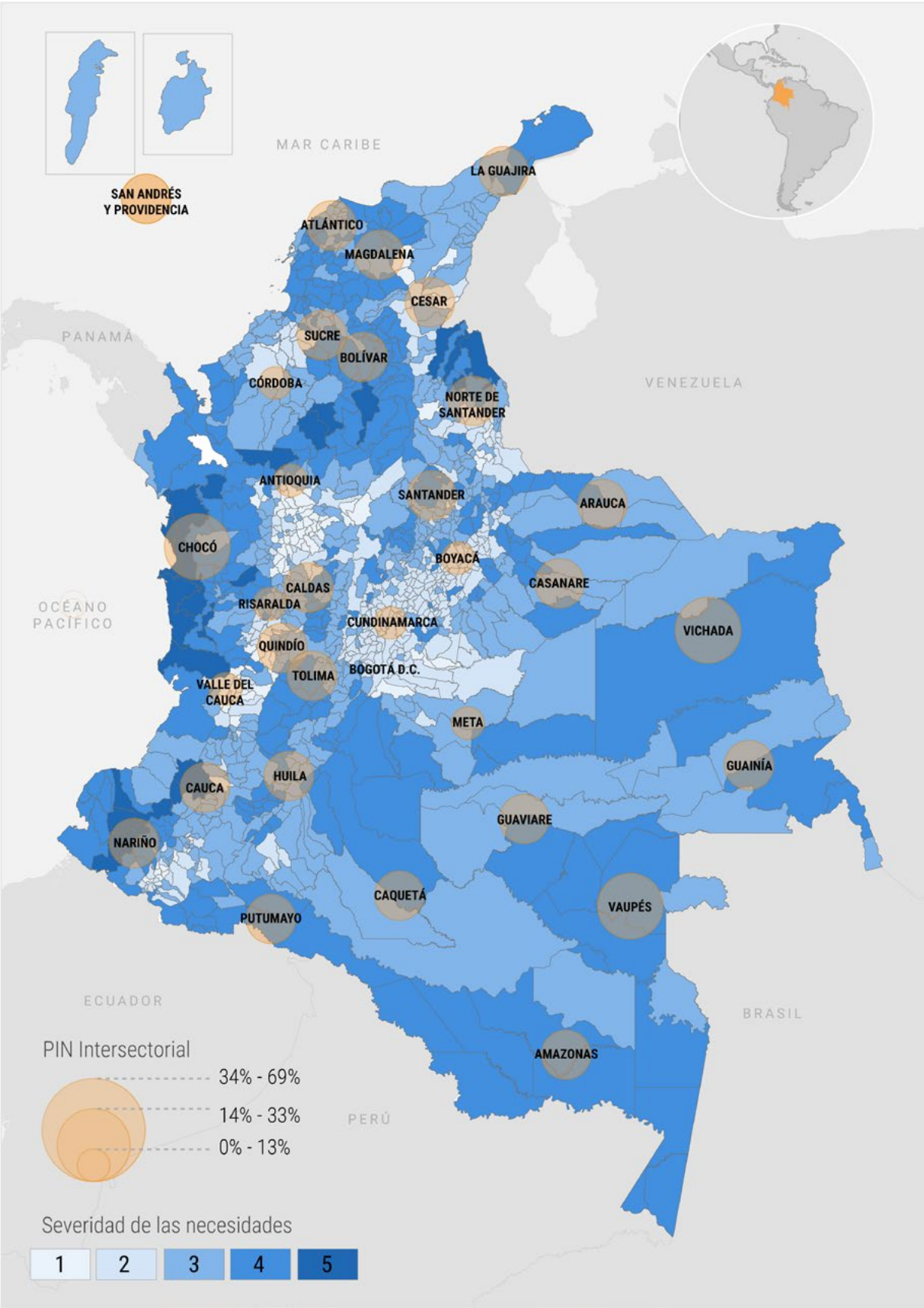
son visibilizadas ya sea por las restricciones de acceso y control social en varios territorios, el miedo a represalias, la falta de confianza en la institucionalidad o la falta de acompañamiento a las comunidades rurales. (Ver más detalles en la sección 1.4: Condiciones humanitarias y severidad de las necesidades).

Así mismo, debido a las dificultades o limitaciones de acceso a alimentos, medios de vida, servicios de salud, mínimas condiciones de salubridad, higiene y habitabilidad se identificaron cerca de 2,6 millones de personas con necesidades extremas, que, de no atenderse en un mediano plazo pueden agudizarse. Finalmente, al menos 4,7 millones de personas presentan necesidades de recuperación temprana sostenible, que requieren la garantía de sus ingresos y el acceso a los mecanismos de afrontamiento adoptados, para estabilizar sus medios de vida y consecuentemente sus expectativas de vida.

## Número estimado de personas en necesidad



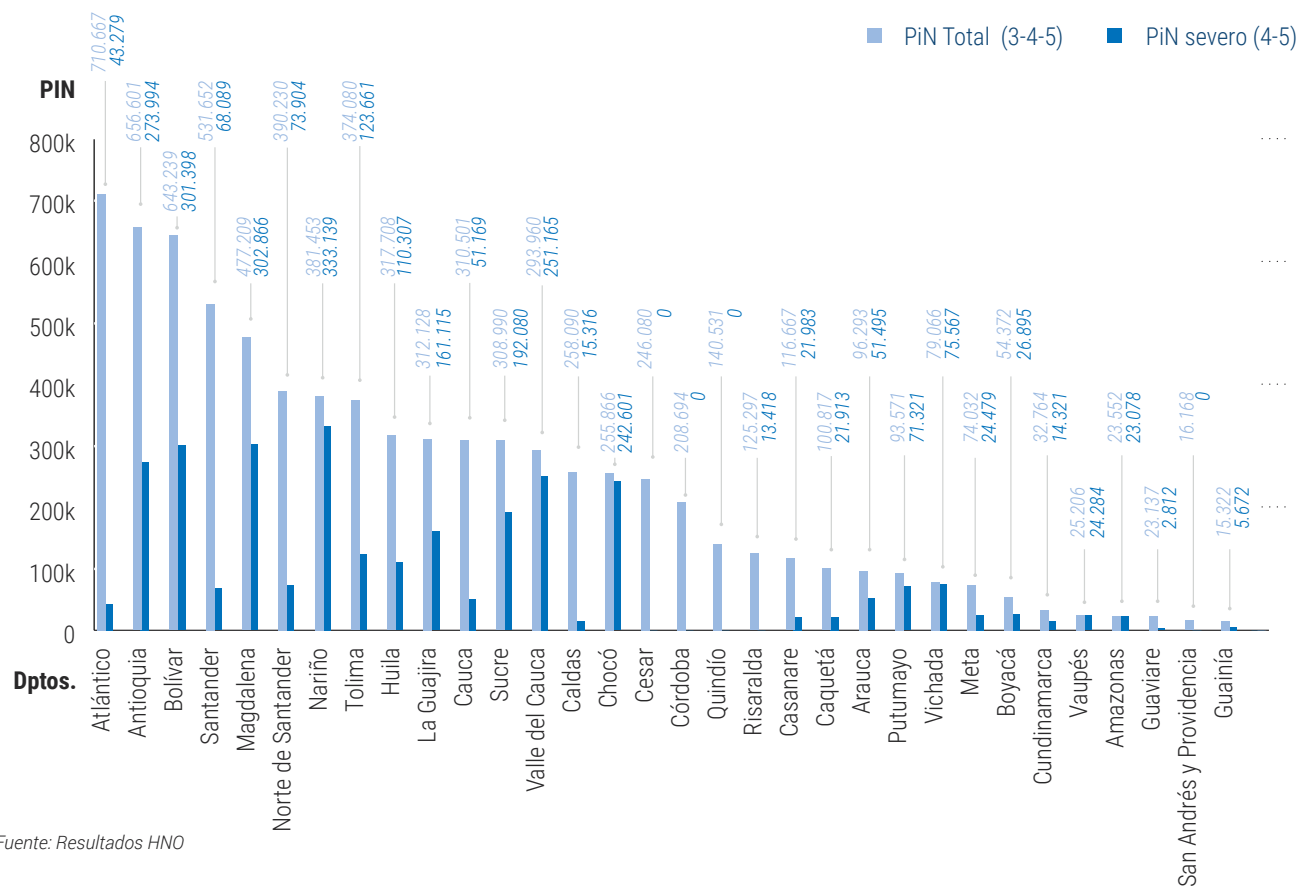
SEVERIDAD DE LAS CONDICIONES HUMANITARIAS Y  
NÚMERO DE PERSONAS EN NECESIDAD



Fuente: Resultados HNO



Personas en necesidad por departamento



Fuente: Resultados HNO



NARIÑO, COLOMBIA








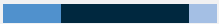



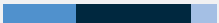






































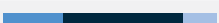














Desplazamiento, Magüi Payán, Roberto Payán.  
Crédito de la foto: Felinto Córdoba, 2021.



## PIN POR DEPARTAMENTO, POBLACIÓN Y SEVERIDAD

DEPARTAMENTO	NÚMERO DE PERSONAS EN CADA NIVEL DE SEVERIDAD					PIN SEVERO (3-5)	PIN TOTAL
	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO		
Amazonas	-	-	474	23.078	-	23.078	23.552
Antioquia	113.081	405.176	382.607	226.178	47.816	273.994	656.601
Arauca	-	-	44.798	51.495	-	51.495	96.293
Archipiélago de San Andrés	-	-	16.168	-	-	0	16.168
Atlántico	-	-	667.388	43.279	-	43.279	710.667
Bogotá, D.C.	-	1.026.194	-	-	-	0	0
Bolívar	-	-	341.841	291.943	9.455	301.398	643.239
Boyacá	-	189.291	27.477	26.895	-	26.895	54.372
Caldas	-	-	242.774	15.316	-	15.316	258.090
Caquetá	-	4.461	78.904	21.913	-	21.913	100.817
Casanare	-	-	94.684	21.983	-	21.983	116.667
Cauca	-	76.892	259.332	-	51.169	51.169	310.501
Cesar	28.174	32.878	246.080	-	-	0	246.080
Chocó	-	-	13.265	152.709	89.893	242.601	255.866
Córdoba	9.425	187.560	208.694	-	-	0	208.694
Cundinamarca	-	451.324	18.443	14.321	-	14.321	32.764
Guainía	-	-	9.650	5.672	-	5.672	15.322
Guaviare	-	-	20.325	2.812	-	2.812	23.137
Huila	-	-	207.401	110.307	-	110.307	317.708
La Guajira	-	-	151.013	161.115	-	161.115	312.128
Magdalena	-	-	174.343	302.866	-	302.866	477.209
Meta	7.509	125.955	49.553	24.479	-	24.479	74.032
Nariño	15.826	140.624	48.314	280.831	52.308	333.139	381.453
Norte de Santander	3.887	31.569	316.326	31.350	42.554	73.904	390.230
Putumayo	-	3.110	22.250	71.321	-	71.321	93.571
Quindío	-	-	140.531	-	-	0	140.531
Risaralda	-	48.721	111.879	13.418	-	13.418	125.297
Santander	-	26.297	463.563	68.089	-	68.089	531.652
Sucre	-	-	116.910	192.080	-	192.080	308.990
Tolima	-	-	250.419	123.661	-	123.661	374.080
Valle del Cauca	94.130	464.800	42.795	251.165	-	251.165	293.960
Vaupés	-	-	922	24.284	-	24.284	25.206
Vichada	-	-	3.499	75.567	-	75.567	79.066
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>272.032</b>	<b>3.214.851</b>	<b>4.772.622</b>	<b>2.628.129</b>	<b>293.194</b>	<b>2.921.323</b>	<b>7.693.945</b>

## PIN TOTAL DESAGREGADO POR GÉNERO, EDAD Y PERSONAS DESPLAZADAS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	POR GÉNERO HOMBRES / MUJERES (%)		POR EDAD NIÑOS / ADULTOS / ADULTOS MAYORES (%)		DISCAPACITADOS (%)	PERSONAS DESPLAZADAS (QUE NO SUPERARON SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD)
Amazonas	52 / 48		42 / 50 / 8		3%	265
Antioquia	49 / 51		30 / 57 / 12		3%	70.2k
Arauca	50 / 50		34 / 57 / 9		2%	6.8k
Archipiélago de San Andrés	48 / 52		27 / 59 / 14		2%	-
Atlántico	49 / 51		30 / 58 / 13		1%	786
Bolívar	50 / 50		32 / 55 / 12		2%	21.2k
Boyacá	51 / 49		31 / 50 / 19		4%	217
Caldas	48 / 52		24 / 57 / 19		3%	479
Caquetá	50 / 50		35 / 55 / 10		3%	8.6k
Casanare	50 / 50		33 / 58 / 9		3%	954
Cauca	50 / 50		31 / 56 / 13		2%	29.9k
Cesar	49 / 51		34 / 56 / 10		3%	2.3k
Chocó	50 / 50		39 / 52 / 9		1%	52.8k
Córdoba	50 / 50		34 / 53 / 13		2%	27.1k
Cundinamarca	53 / 47		26 / 51 / 23		4%	37
Guainía	52 / 48		47 / 47 / 6		1%	668
Guaviare	53 / 47		37 / 54 / 9		2%	1.9k
Huila	50 / 50		33 / 55 / 13		6%	3.5k
La Guajira	49 / 51		39 / 53 / 8		1%	1.9k
Magdalena	50 / 50		34 / 55 / 11		3%	3k
Meta	52 / 48		35 / 54 / 11		3%	3.9k
Nariño	49 / 51		33 / 55 / 12		3%	85.4k
Norte de Santander	49 / 51		31 / 58 / 12		2%	69.1k
Putumayo	50 / 50		34 / 57 / 9		3%	6.4k
Quindío	48 / 52		22 / 58 / 20		4%	260
Risaralda	48 / 52		26 / 56 / 18		3%	1.9k
Santander	49 / 51		27 / 58 / 15		3%	1.2k
Sucre	50 / 50		32 / 55 / 13		4%	6.6k
Tolima	50 / 50		27 / 55 / 17		3%	5k
Valle del Cauca	48 / 52		34 / 53 / 13		2%	39.8k
Vaupés	52 / 48		51 / 42 / 6		1%	293
Vichada	53 / 47		45 / 49 / 6		1%	990
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>50 / 50</b>		<b>33 / 54 / 12</b>		<b>3%</b>	<b>454.345</b>



Parte 1:

# Impacto de la Crisis y Condiciones Humanitarias

---

RESGUARDO BARÍ, NORTE DE SANTANDER. COLOMBIA

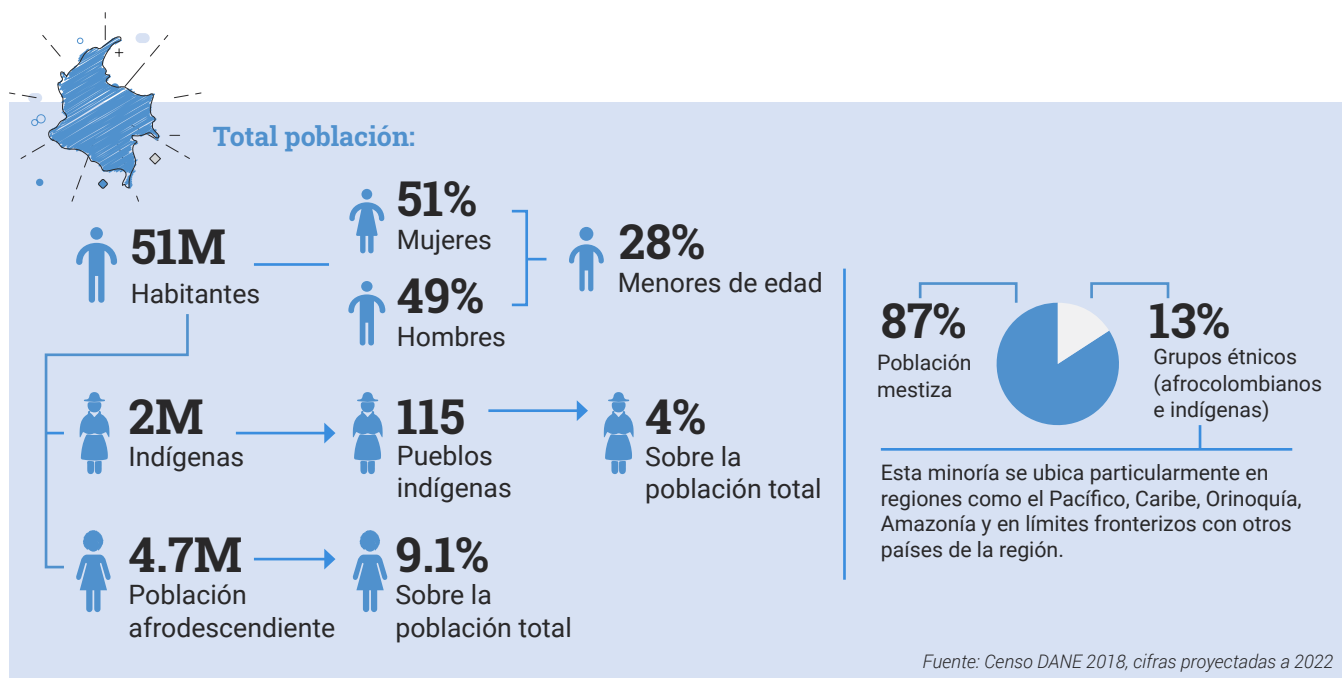
Crédito: Laura Rodríguez, OCHA.





## 1.1

## Contexto de la crisis



Colombia cuenta con marcos legales, políticas públicas y medidas de inversión que permiten avanzar en la implementación de proyectos dirigidos a proteger y apoyar la vida, medios de subsistencia y la economía de millones de personas, además de fortalecer grandes obras de infraestructura en algunas regiones del país. Sumado a lo anterior, se destaca la rápida reactivación de la economía después de meses de contracción por el impacto de la pandemia.

En medio de estos progresos, también hay que tener en cuenta la evolución de todos los factores agravantes<sup>15</sup> que impulsan la crisis en el actual contexto y que son previstos en el presente análisis del panorama de necesidades humanitarias. Algunos de ellos responden a situaciones históricas, estructurales y cambiantes que dejan en muchos casos múltiple afectación, reflejada

en las crecientes y aceleradas estimaciones sobre las necesidades humanitarias y configuran también una crisis de protección. Se destaca la limitada presencia del Estado en las zonas rurales que dejaron las extintas FARC-EP y el surgimiento de los grupos armados no estatales que aprovecharon para ocupar dicho vacío intensificando su accionar con graves consecuencias. Este suceso está creando una situación de seguridad compleja en algunas zonas, especialmente en el Pacífico y las zonas de frontera con Venezuela y Ecuador. En respuesta a estos vacíos, se destaca la iniciativa del Gobierno de crear cinco “zonas estratégicas de intervención integral (ZEII)”<sup>16</sup> que buscan iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en esas zonas. El despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de los derechos humanos<sup>17</sup>.

15. Factores de violencia armada, eventos naturales, el impacto de la pandemia que agravo condiciones de pobreza de muchas familias y los movimientos migratorios mixtos.

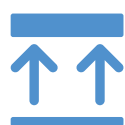
16. Decreto 2278 del 16 de diciembre de 2019.

17. <https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anales/9562-informe-de-la-alta-comisionada-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2020>



En paralelo a los factores mencionados, a los movimientos migratorios mixtos y transcontinentales<sup>18</sup>, a los factores socioeconómicos resultantes de la pandemia y a las conflictividades por temas socioambientales, se prevé que continúe el impacto significativo sobre la protección, la seguridad alimentaria, las oportunidades de subsistencia y los mecanismos de afrontamiento de las comunidades afectadas, incluidos los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y las personas refugiadas y migrantes.

### Contexto demográfico, económico, de infraestructura y ambiental.



**Colombia continúa recuperando sus indicadores macroeconómicos tras los efectos de la pandemia por la COVID-19, a pesar de la persistencia de brechas reflejadas en la pobreza e inseguridad alimentaria a nivel familiar.**

El Fondo Monetario Internacional (FMI) **proyecta un crecimiento en la economía de Colombia de un 3,8 por ciento en 2022, que de cumplirse convertiría al país en el tercero con mayor crecimiento en Latinoamérica en ese período**, por debajo de Perú y Bolivia, siendo una señal positiva de la recuperación que promovería la inversión extranjera<sup>19</sup>. En contraste, expertos destacan la profundización de la pobreza en Colombia especialmente en grupos vulnerables como mujeres cabeza de hogar, niños, niñas y adolescentes por causa de las medidas implementadas por el Gobierno de Colombia para hacer frente a la pandemia por la COVID-19. Es importante resaltar que, los problemas tanto estructurales como coyunturales se agudizaron, aunado a un importante porcentaje de la población que se encuentra en informalidad laboral y desempleo creando una división, desigualdad de género y desprotección

social, que agravan el impacto en la población por la afectación diferencial sobre grupos vulnerables. En términos de desempleo a nivel mundial, la recuperación ha sido muy leve en los últimos 4 o 5 meses y las más afectadas han sido las mujeres en términos de ocupación e ingresos por causa del decrecimiento en el empleo del 4,2 por ciento (es decir se perdieron 54 millones de puestos de trabajo)<sup>20</sup>, además de los jóvenes que están en la brecha entre el estudio y el trabajo.

Esta situación afectó especialmente los indicadores de pobreza monetaria, la cual aumentó un 6,8 por ciento, haciendo que 3,5 millones de personas entraran en condición de pobreza sin ingresos suficientes para acceder a la canasta de bienes y servicios básicos; mientras que la ocupación se redujo en aproximadamente 4,5 millones de empleos y el desempleo se incrementó hasta el 21,4 por ciento. La **pobreza multidimensional**, por su parte, tuvo un aumento de un 1 por ciento, siendo la región Pacífico la que más contribuye en gran medida en el aumento de este indicador por el impacto socioeconómico y las condiciones de vulnerabilidad<sup>21</sup>; el componente de la educación fue el más afectado, por la pérdida de casi un año educativo dada la falta de infraestructura y la falta de acceso a internet durante los meses de cuarentena estricta y preventiva de 2020 y 2021.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en las **zonas urbanas** se ha visto la mayor incidencia de la pobreza, donde 13 ciudades principales y zonas metropolitanas presentaron un aumento de la pobreza hasta del 12,3 por ciento, por encima del nivel nacional. En contraposición, en la **ruralidad dispersa** las medidas de mitigación promovidas por el Gobierno frente a la COVID-19 generaron un alivio en términos de subsidios para la ruralidad, a pesar de mantenerse los niveles de pobreza

18. Colombia por su ubicación geográfica un país receptor y de acogida para personas con vocación de permanencia como de personas que van en tránsito.

19. <https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-consolida-como-tercera-economia-latina-que-mas-crecera-3246119>

20. <https://nacionesunidas.org.co/noticias/la-pandemia-aumenta-la-desigualdad-entre-generos-en-2021-solo-el-43-de-las-mujeres-tendra-trabajo/#:~:text=La%20pandemia%20aumenta%20la%20desigualdad, trabajo%20%2D%20Naciones%20Unidas%20Colombia%20%7C%20CINU>

21. <https://www.portafolio.co/economia/regiones-pacifico-y-central-con-la-mayor-concentracion-de-la-pobreza-555824>

históricos en dichas zonas. En las zonas urbanas, los hogares con mujeres como cabeza de hogar tuvieron 1.5 veces mayor incidencia de la pobreza que los hombres con este rol. Respecto a los grupos etarios, los hogares con jóvenes de entre 18 y 25 años tuvieron una incidencia más alta de la pobreza, así como aquellos con edades entre los 46 y 55 años con una relevante incidencia en términos de pobreza.



**Con el fin de enfrentar el impacto económico generado por la pandemia, el Gobierno de Colombia invirtió en una serie de proyectos de infraestructura** y de gran impacto regional,

que ya están en progreso y que serán fundamentales para las diversas actividades económicas a nivel local como el transporte y la agricultura; entre ellos se destacan la red vial, vivienda, minas y energía, entre otros sectores como efecto de las medidas tomadas para contrarrestar la pandemia. A pesar de las brechas observadas en las tecnologías de la información y comunicación, durante el primer semestre de 2021 Colombia registró al menos 237.668 nuevos accesos a usuarios de internet fijo, cifra con la que se alcanzaron 8,05 millones de conexiones en el país; en cuanto a internet móvil hubo 400.000 accesos nuevos alcanzando 32,9 millones de accesos totales incluyendo estratos 1 y 2, según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC)<sup>22</sup>. De otro lado, según la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares) realizada por el DANE, solo el 39,3 por ciento de los hogares colombianos tienen acceso a computador o tableta electrónica, sin embargo, solo el 56 por ciento tienen acceso al servicio del internet. La cobertura de los servicios también dejó ver grandes brechas entre las áreas urbanas y rurales de algunos lugares, especialmente los más apartados y de difícil acceso por su geografía; la misma situación se presenta en algunas vías secundarias y terciarias, que requieren de mejoras para expandir la conexión entre las zonas productivas rurales con las troncales, al igual que el acceso a servicios.



**Cabe destacar que el Gobierno Nacional desplegó las actividades del Plan Nacional de Vacunación desde febrero de 2021 y a la fecha 25,3 millones de personas<sup>23</sup>** (65% de la meta de vacunación) han completado el esquema de vacunación, especialmente los grupos priorizados por edad, enfermedades preexistentes y personal de salud más expuesto. Colombia demuestra el impacto positivo de las vacunas contra la COVID-19 para disminuir el número de casos y muertes reportadas. La amplia cobertura de la campaña de vacunación del país se atribuye a la larga experiencia en campañas de vacunación masiva, los esfuerzos de comunicación por medios públicos e inclusive en los idiomas nativos de pueblos indígenas, así como la generación de puntos de vacunación en lugares públicos, tales como estaciones de bus, metro y centros comerciales. No obstante, la aplicación de la vacuna ha sido un reto en los territorios con acceso remoto, con presencia de los GANE, insuficiencia de vías o mal estado de algunas, o con afectación por desastres naturales activos que no permiten la movilidad de los equipos de vacunación de las administraciones municipales. En Chocó y Vichada, se ha reportado falta de recursos financieros y de personal técnico capacitado para llevar a cabalidad el plan de vacunación nacional.



**Colombia sigue destacándose en el contexto ambiental por su biodiversidad y la riqueza en recursos naturales y minerales**, que han hecho necesaria la creación de leyes para su protección y conservación. Hoy más que nunca la conservación de los recursos ambientales está en la agenda política y económica, reflejado en el aumento de la conciencia social mediante nuevos hábitos de consumo y la creación de bio economías, como parte del aporte y compromiso individual y colectivo en la lucha contra los impactos del cambio climático. A pesar de que Colombia es rica en biodiversidad dada su ubicación geográfica y estratégica, existen megaproyectos en los que se lleva a cabo la exploración y explotación de recursos

22. <https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/conexiones-a-internet-fija-y-movil-que-hay-en-colombia-segun-mintic-554259>

23. Presidencia. Avance Plan nacional de vacunación con corte a 04 de diciembre de 2021: ([Ver enlace](#))



#### NARIÑO, COLOMBIA

Población desplazada en municipios de Magüi Payán y Roberto Payán.

Crédito de la foto: Felinto Córdoba, 2021

ambientales de manera progresiva en varios territorios; estos atienden intereses económicos propiciando vínculos en algunas oportunidades con economías ilegales, dejando daños socioambientales en los ecosistemas y hasta consecuencias o riesgos en la salud, seguridad alimentaria, medios de subsistencia y hábitat de las personas. En varias oportunidades, esta situación también resulta por la ocurrencia de emergencias de origen natural de gran magnitud, que sobrepasan en ocasiones la capacidad de respuesta de las instituciones, ya sea en el marco de la temporada de sequía y/o lluvias, propiciada cambios antrópicos en el entorno ambiental sin importar que el entorno sea urbano o rural.

#### Marco legal existente y Contexto de seguridad



**Colombia como Estado Social de Derecho cuenta con marcos jurídicos sólidos y un sistema nacional que soporta la arquitectura de respuesta basados en la Constitución Política<sup>24</sup> y estándares internacionales para la defensa y estabilización del territorio.** Estos mecanismos garantizan la protección y el acceso a derechos fundamentales de la población frente a los diferentes desafíos vinculados a los recursos financieros y capacidades a nivel territorial para la efectiva implementación. Entre estos marcos se destaca la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual se prorrogó hasta 2030<sup>25</sup> y cobija actualmente a más de 9.2 millones de víctimas de las cuales el 89 por ciento corresponde a desplazados internos, y 7,4 millones aún son sujeto de atención y reparación<sup>26</sup>. Esta prórroga de la ley supone una oportunidad para avanzar en la reparación y la restitución de las víctimas, a través de

24. Constitución Política de la República de Colombia. [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)

25. <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202078%20DEL%208%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf>

26. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394>

una coordinación eficaz con el Sistema Integral y una adecuada implementación del punto cinco del Acuerdo Final<sup>27</sup>, en particular los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Por otro lado, se destaca el incremento del presupuesto de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y los avances en materia de atención a las mismas. En relación con la gestión, prevención y atención de desastres por fenómenos naturales o antrópicos existe la Ley 1523 de 2012<sup>28</sup> que desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) brinda protección a la población civil en su entorno físico e integridad. El Gobierno Nacional también ha dispuesto, mediante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), un mecanismo de flexibilización migratoria complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que permite el acceso a bienes, servicios y derechos, y en consecuencia, la integración socioeconómica y cultural de la población refugiada y migrante venezolana en el país, a partir de su regularización<sup>29</sup>.



**Colombia es un país pluriétnico y multicultural, que implica el reconocimiento de pueblos que manejan**

**una estructura de gobierno y justicia propios, un llamado a reconocer y validar las identidades culturales reconocidas desde la constitución de 1991** y otros marcos normativos que comprenden su reconocimiento. Entre ellos, se destaca el convenio 169 de la OIT<sup>30</sup>, que invita a los gobiernos al reconocimiento de la autonomía, la autodeterminación y la identidad colectiva de los pueblos indígenas y tribales que tienen una conexión trascendental con el uso del territorio, la naturaleza, los procesos espirituales, las visiones propias de ver el mundo y la salvaguarda de las tradiciones ancestrales.

Por otro lado, la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas<sup>31</sup>, reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales, sus culturas, sus tradiciones espirituales, su historia y su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Colombia reconoce la existencia de 115 Pueblos Indígenas y según las estadísticas del DANE<sup>32</sup> existe un total de 1.905.617 personas que se auto reconocen como indígenas (954.714 mujeres y 950.902 hombres); con un PiN de 630 mil personas, éstos son identificados como personas en necesidad de acuerdo con el análisis intersectorial y resultados del Panorama General de las Necesidades<sup>33</sup>. Los departamentos con mayor proporción de población indígena en su orden son: La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Chocó (Embera y Wounaan), Caldas, Cesar y Putumayo. Dentro de estos departamentos se destaca la presencia de los Pueblos y Naciones Indígenas Wayuu (Guajira), Zenú (Córdoba), Nasa (Cauca) y Pastos (Nariño) siendo los más numerosos del país (58,1% de la población indígena).

De los 115 pueblos indígenas alrededor de 40 tienen planes de salvaguarda conforme al auto 004 del 2009<sup>34</sup>, lo cual implica que estos Pueblos (40) se encuentran en riesgo de exterminio y extinción cultural y espiritual. Dentro de las principales causas se encuentran las dinámicas históricas de violencia y su recrudecimiento actual, el predominio de las economías extractivistas como la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito y los desastres naturales; todo ello ha debilitado la fuerza de la estructura organizativa, política y espiritual particularmente en las zonas de frontera como Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

27. <http://es.presidencia.gov.co/Documents/Punto5.pdf>

28. Ley 1523 del 24 Abril 2012. <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley152324042012.pdf>

29. [https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/ok\\_esp\\_abc-estatuto\\_al\\_migrante\\_venezolano\\_05mar-2021.pdf](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/ok_esp_abc-estatuto_al_migrante_venezolano_05mar-2021.pdf)

30. [1] Microsoft Word - OIT (oacnudh.org.gt)

31. [UNDRIP\\_S\\_web.pdf](#)

32. Grupos étnicos información técnica (dane.gov.co)

33. Este documento contiene en diferentes secciones análisis cualitativo de socios en territorio, realizado en diferentes ejercicios, representando un juicio de expertos por el conocimiento del contexto

34. Planes de salvaguarda | Portal Sistema de Información Indígena de Colombia (mininterior.gov.co)



Según el último censo (2018) el 9,4 por ciento de la población colombiana se auto reconoce como perteneciente a Pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP), con un total de 4.671.160 personas; de estas, 1.279.966 personas presentan necesidades. Estos pueblos están ubicados principalmente en la región Pacífico y Caribe del país en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Antioquia, Cauca y Nariño.



**Tras cumplirse cinco años de la firma del Acuerdo Final y su implementación, en medio de muchos desafíos, se destacan cambios en la situación del**

**país y la lógica sobre el tratamiento político que se presentaba anteriormente hacia algunos grupos armados no estatales**, generando nuevos factores de violencia armada por disputas territoriales y las nuevas lógicas organizativas de grupos armados no estatales. Según el análisis de expertos respecto a la presencia de los grupos armados no estatales y basados en datos cuantitativos, durante el 2021 se destaca una expansión e incremento en la ocupación de municipios por parte de los GANE de la siguiente manera: *i) Las disidencias de las extintas FARC-EP tenían presencia y/o controlaban*

*56 municipios, ahora 138; ii) el ELN tenía presencia y/o controlaba 99 municipios, ahora más de 170; iii) el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tenía presencia y/o controlaba 170 municipios, ahora 212; iv) el EPL fue el único que disminuyó pasando de controlar 28 municipios a 20<sup>35</sup>. Aunque se presume un debilitamiento de los Caparros por la baja de uno de sus cabecillas y el control hegemónico del Clan del Golfo en la subregión del Bajo Cauca, según analistas podrían darse otras dinámicas o fortalecerse nuevamente<sup>36</sup>. En total 373 municipios están hoy bajo la presencia, influencia y/o control de GANE y cerca de 5,8 millones de personas están bajo el control y/o la influencia de estos<sup>37</sup>.*

Preocupa el deterioro de la situación en el Pacífico y zonas del sur del país y, además, subregiones como del Bajo Cauca, Bajo Putumayo e inclusive una zona del Caguán en Caquetá. Igualmente, hay que hacer seguimiento a la dinámica de los grupos armados con presencia en la frontera con Venezuela y el impacto humanitario en Colombia, así como la afectación en la dinámica electoral debido al discurso sobre la amenaza venezolana, usado por ciertos actores políticos.

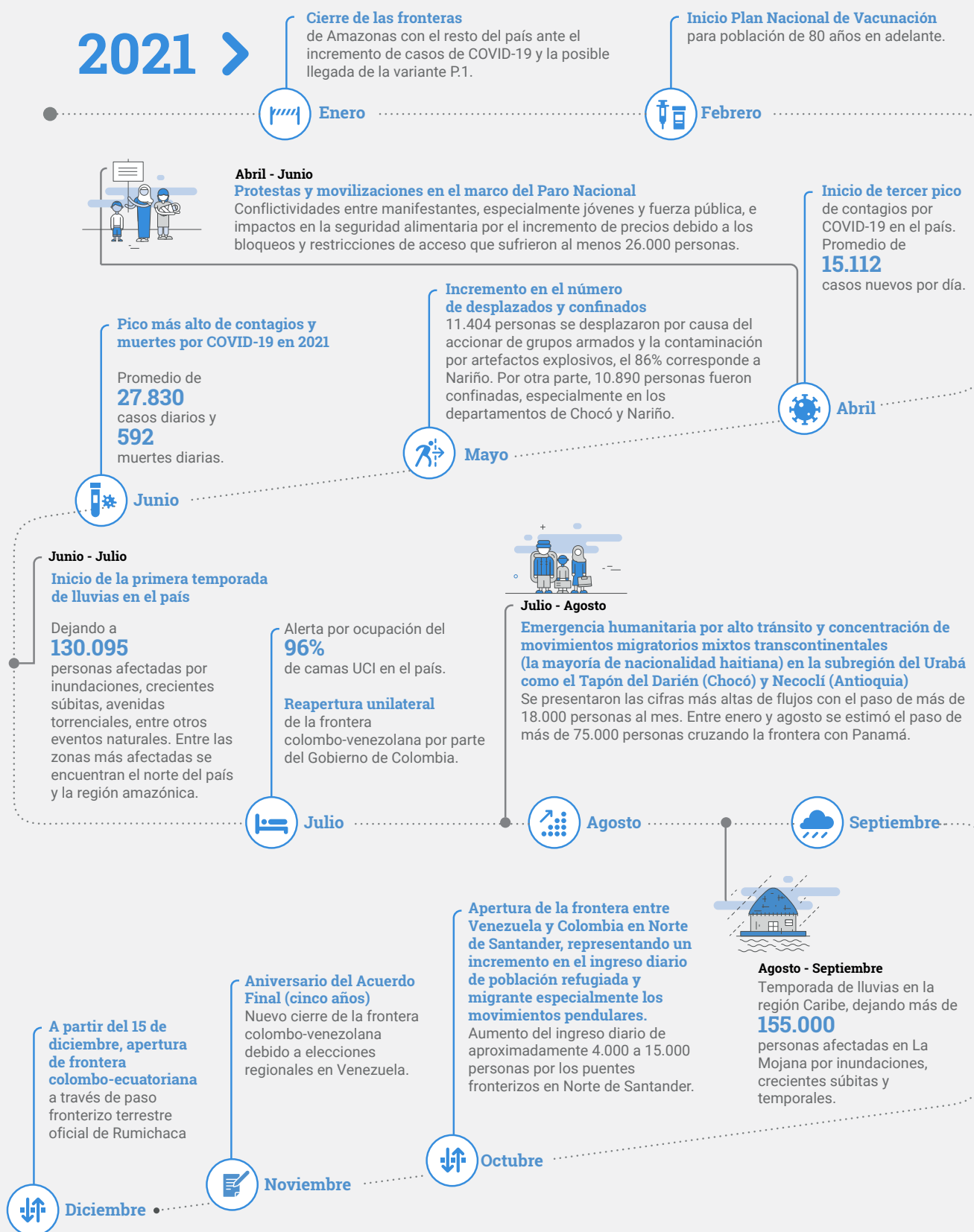
35. Información sobre la presencia de grupos armados consolidada de diferentes fuentes, según informes, mapeos y herramientas de información: Defensoría del Pueblo, UNDSS, HAT-OCHA.

36. <https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/02/esta-es-la-historia-de-los-caparros-y-por-que-no-se-habrian-acabado-como-asegura-el-gobierno/>

37. Información sobre la presencia de grupos armados consolidada de diferentes fuentes, según informes, mapeos y herramientas de información: Defensoría del Pueblo, UNDSS, HAT-OCHA.



## LÍNEA DE TIEMPO DE EVENTOS RELEVANTES 2021



## 1.2

# Choques e Impacto de la Crisis

---



### LA MONTAÑITA/CAQUETÁ, COLOMBIA

Víctima beneficiada de desminado por parte de excombatientes de las FARC  
Crédito de la foto: UNMAS.

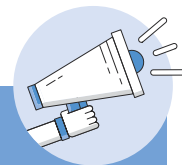
## Impacto por factores de la violencia armada en las personas, los sistemas y en el acceso.



**Múltiples emergencias masivas y riesgos de protección a nivel individual son causados por las dinámicas de violencia:** Durante 2021, al menos 284.300

personas han sido afectadas por factores de violencia armada (incluyendo más de 65.000 confinadas, 85.500 con restricciones a la movilidad y/o al acceso -incluso de asistencia humanitaria-, más de 73.000 desplazados en eventos masivos, entre otras)<sup>38</sup>. Hay que tener en cuenta que, la UARIV tiene registro de 129.953 personas desplazadas (individuales y masivos) y 21.176 personas confinadas durante 2021<sup>39</sup>. Además de las miles de personas afectadas por la presencia, influencia y/o control de grupos armados no estatales, dado que éstos afectan la capacidad de las comunidades para acceder a cultivos, alimentación y servicios esenciales. Las emergencias fueron causadas, en su mayoría, por enfrentamientos entre los GANE y/o amenazas de éstos contra la población civil, en donde se cometieron graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

Al mismo tiempo, se evidencia un incremento en la utilización de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MSE) por parte de los GANE, especialmente en municipios con presencia de cultivos de uso ilícito y despliegue de actividades de erradicación forzada. Dichos artefactos han afectado la libre movilidad de la población, el acceso a medios de vida y desarrollo de actividades cotidianas -incluidas las de sustento propio-. Se estima que al menos 479.805 personas están en riesgo de ser afectadas por la contaminación de MAP/MSE en 2022<sup>40</sup>.



*“En Quibdó, la gente se desplaza de un barrio a otro a causa de la inseguridad, ya que las diferentes bandas criminales luchan entre sí”*

**- Mujer desplazada en Quibdó, entrevista de IDMC.**

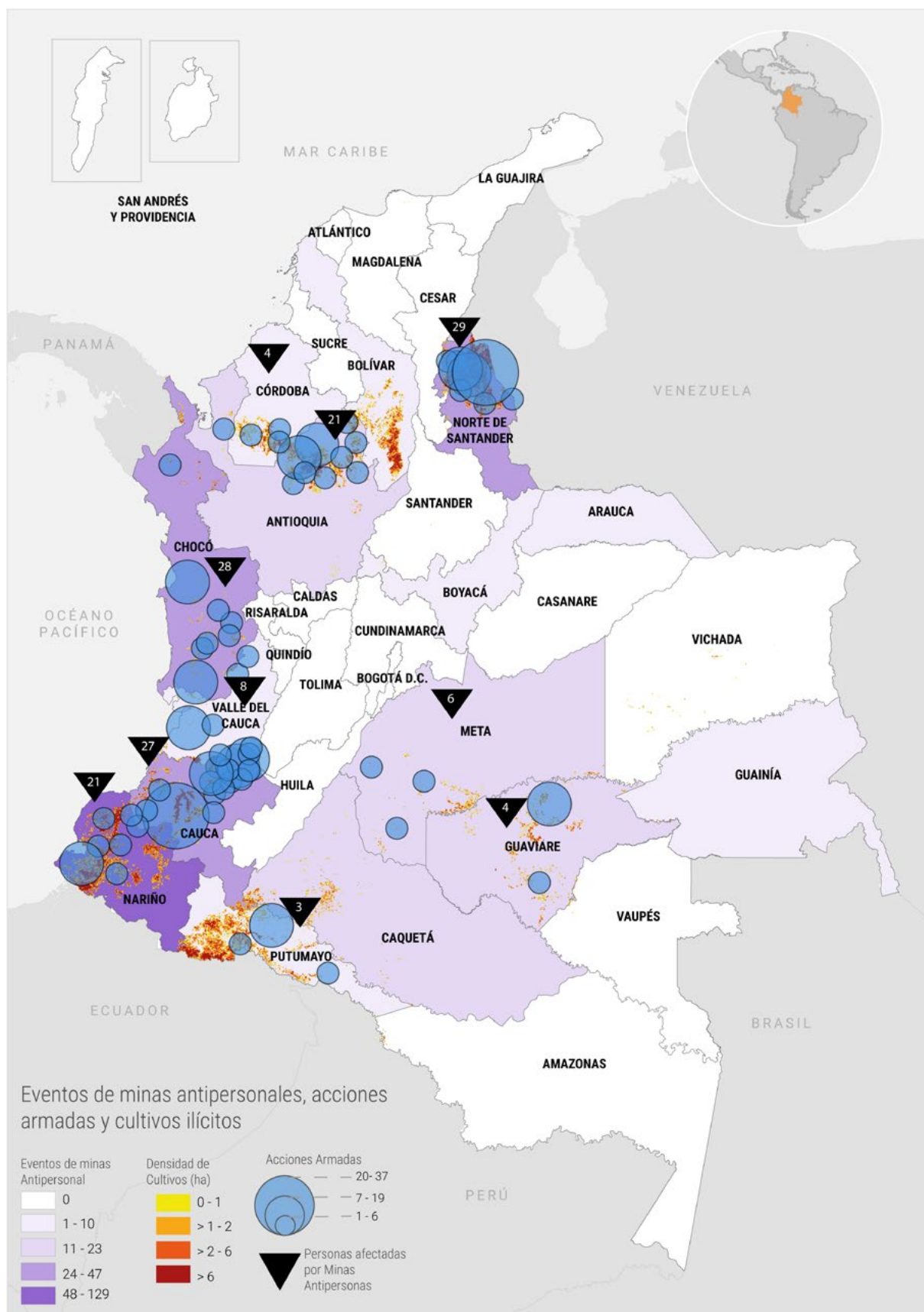
El impacto humanitario de los factores de violencia armada ejercida por los GANE, es visible en la cantidad de emergencias masivas que se presentan en la zona del Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó), en los nuevos reportes de emergencias masivas en la zona Noroccidental (Antioquia, Córdoba, Sur de Sucre y de Bolívar) y en los múltiples riesgos de protección a nivel individual que enfrentan las poblaciones de la zona de frontera con Venezuela (La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada) y en la zona Centro-Sur (Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía).

38. OCHA. Monitor de Violencia Armada y Desastres Naturales ([Ver Enlace](#))

39. Según registro de la UARIV-RNI con corte a 31 de diciembre de 2021. <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/enfoqueDiferencial>

40. Datos Subclúster de Acción Contra las Minas

## ACCIDENTES CON MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR, ACCIONES ARMADAS Y PRESENCIA DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO





## Personas desplazadas en eventos masivos<sup>41</sup>

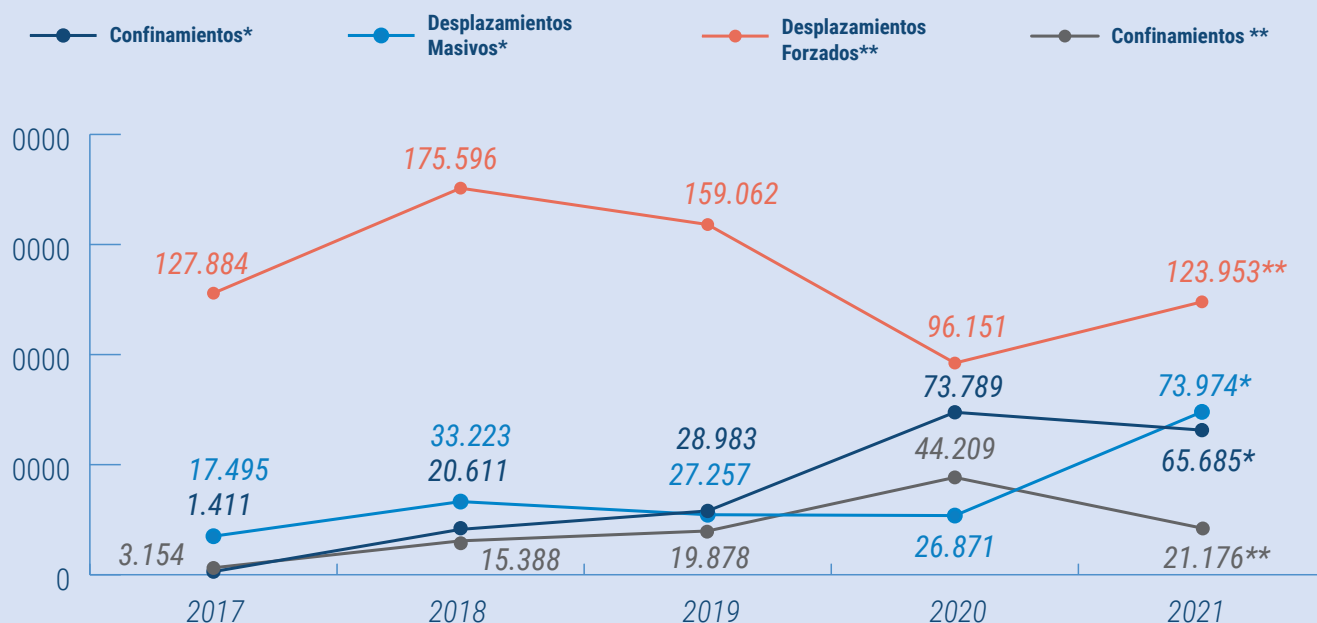


**Las familias desplazadas se enfrentan a graves necesidades intersectoriales de protección, alojamientos, seguridad alimentaria, salud y agua, saneamiento e**

**higiene.** En la mayoría de los casos, no se asegura el acompañamiento para un retorno seguro a sus lugares de origen, debido a las condiciones de seguridad inadecuadas por la presencia y accionar de los GANE. Durante 2021, se han recibido reportes de familias que decidieron retornar sin garantías de seguridad, siendo revictimizadas por las acciones de los GANE

en el corto y mediano plazo. Además, persisten vacíos posteriores a la fase de la emergencia, persistiendo las necesidades sectoriales. De otro lado, se presenta un fenómeno paralelo de no retorno, donde las familias desplazadas se ven forzadas a buscar un nuevo lugar para establecerse y asegurar su acceso a derechos fundamentales, protección, servicios y bienes básicos. Lo anterior, genera una pérdida definitiva de los medios de vida de la población, una ruptura del tejido social y obliga a las familias a establecerse en lugares con vulnerabilidades subyacentes donde suelen enfrentar retos de integración social.

## EVOLUCIÓN DE DESPLAZAMIENTO



Fuente:

\*Confinamientos y Desplazamiento masivo - Monitor OCHA corte diciembre 2021.

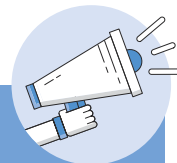
\*\*Desplazamiento forzado (masivos e individuales) y Confinamiento- UARIV-RNI corte diciembre 31 de 2021. Puede existir subregistro considerando que la víctimas se acerca a realizar declaraciones posterior a los hechos (no necesariamente el mismo año), y considerando otros procesos de registro

41. Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión a las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la Ley 1448 (infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de DDHH, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno). El desplazamiento masivo es el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas. (<https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf>)



**En 2021 se han identificado al menos 73.000 personas afectadas por desplazamiento forzado en eventos masivos.** Desde la

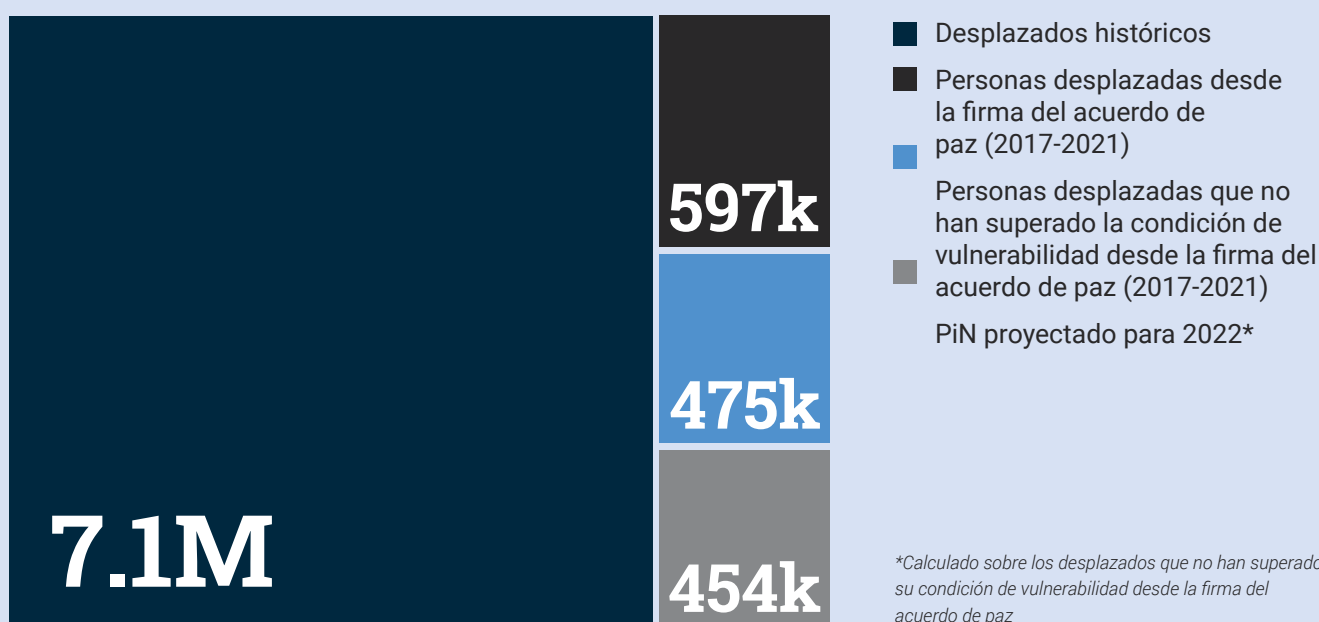
firma del Acuerdo Final se registran más de 590.000 personas que se han desplazado –con una media de 136.000 desplazados por año<sup>42</sup>– y de éstas, al menos 120.000 han sido en eventos masivos. Las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas han sido gravemente afectados por los desplazamientos masivos y los confinamientos en 2021. De las víctimas de desplazamiento forzado, el mayor impacto se da en los grupos étnicos (71%) principalmente en la región Pacífico; sin embargo, departamentos como Antioquia y Córdoba también preocupan por estos hechos. El Equipo Humanitario País (EHP) ha identificado que más de 454.000 personas desplazadas y más de 53.000 personas confinadas se encuentran en necesidad (PIN); no obstante, hay que considerar el subregistro y rezago de información que presentan los desplazamientos individuales, repercutiendo en las limitaciones o falta de acceso a la ayuda humanitaria por parte de las víctimas.



*“La mayoría de los desplazados internos trabajan de manera informal, lo que hace que su situación socioeconómica sea muy inestable. Además, la presencia de organizaciones criminales [en la zona] puede tentar a los jóvenes en particular a trabajar para ellos.”*

- Representante de una autoridad local en Quibdó, entrevista IDMC

## Proporción de desplazamientos individuales y masivos



Fuente: UARIV 2017-2021 (fecha de corte julio de 2021)

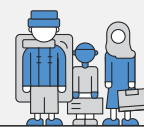
42. Red Nacional de Información y Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV): <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento>

Según información recopilada por el Foro de Organizaciones Humanitarias<sup>43</sup> en Colombia en 15 departamentos del país y con una compleja situación humanitaria, se pudo estimar que entre enero y septiembre de 2021 se vieron forzadas a desplazarse al menos:



**252.997**

personas dentro del territorio colombiano por factores de violencia armada.



PERSONAS DESPLAZADAS EN NECESIDAD

**454k**

5.9% del PiN

## Personas confinadas<sup>44</sup>



**Las dinámicas que generan los confinamientos de comunidades incrementaron en 2021.**

En los últimos 10 años -excluyendo 2013 y 2020- el número de personas confinadas no había sido tan alto como en 2021, en el que al menos 65.685 personas han sido forzadas a confinarse por la presencia y accionar armado de los GANE<sup>45</sup>. Dicho accionar incluye amenazas, homicidios, instalación de MAP, ataques directos en contra de la población, reclutamiento forzado, entre otros. Más del 86 por ciento de las personas confinadas en 2021 pertenecen a grupos étnicos. Particularmente afrodescendientes e indígenas han sido los grupos más afectados con 44.361 indígenas y 11.683 afrodescendientes confinados. Chocó (72%) es el departamento donde de manera recurrente se producen confinamientos revictimizando a comunidades, seguido de Nariño (12%) y Valle del Cauca (5%). Los confinamientos evidencian una nueva dinámica alcanzando casi al número de personas desplazadas en eventos masivos, lo que al mismo tiempo invisibiliza otros impactos y agresiones que se cometen contra los civiles durante el periodo de confinamiento.

Adicionalmente, las restricciones en la movilidad (que no configuran un confinamiento, porque no exceden más de una semana y/o no impiden el acceso a tres o más bienes o servicios básicos), han afectado a 84.800 personas en todo el país -incluyendo un 10 por ciento indígenas y afrodescendientes-<sup>46</sup>.



**Se identifican impactos sobre el acceso a educación y servicios públicos básicos tras el accionar de los grupos armados no estatales.** Asimismo, se destaca que hay un vínculo entre las zonas con mayores necesidades en el sector de educación y las zonas más afectadas por factores de violencia armada y los desastres de origen natural a causa del daño de la infraestructura escolar o inclusive instituciones educativas (IE) usadas como alojamientos temporales por las personas afectadas por estos hechos (o utilización de la infraestructura educativa por parte

43. Se recopiló información entre julio y septiembre de 2021 a través de una encuesta completada por 3.032 personas con acceso a internet, con una técnica de recolección remota en 15 departamentos (Antioquia, Arauca, Bolívar, Bogotá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Valle del Cauca.)

44. Según lo contemplado en la Ley de Víctimas 1448 de 2011, es la conducta dirigida contra la población civil y que implica la restricción de la movilidad de un sujeto o un grupo por una zona geográfica específica causado por amenazas de Grupos Armados Organizados (GAO), situación que acarrea la falta de acceso a bienes indispensables para la supervivencia personal y del grupo ([www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf](http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/glosario.pdf)). Desde julio de 2013 OCHA Colombia estableció un marco para el monitoreo del confinamiento en Colombia. Según este marco, una población se encuentra confinada cuando sufre limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes, servicios básicos o asistencia como: alimentos, educación, salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. Ver nota conceptual: [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427\\_confinamiento\\_nota\\_conceptual.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf)

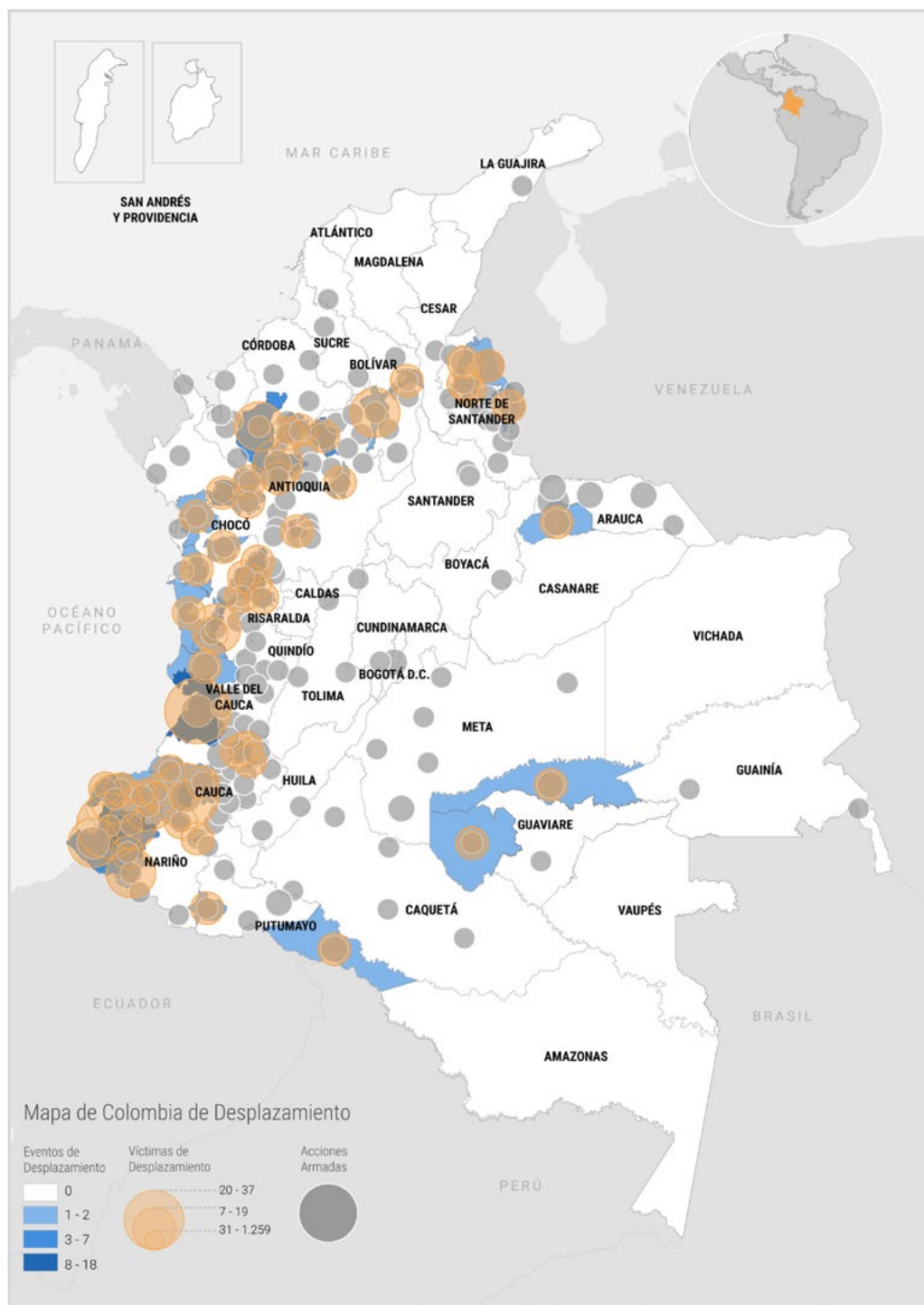
45. OCHA. Monitor de Violencia Armada y Desastres, con corte a diciembre 31 de 2021. (ver Enlace)

46. OCHA. Monitor de Violencia Armada y Desastres, con corte a diciembre 31 de 2021. (ver Enlace)

de los actores armados), generando que los procesos educativos se vean interrumpidos ante situaciones de emergencia. Además, la provisión de servicios básicos de electricidad y/o gas, suelen ser interrumpidos en departamentos como Arauca, Amazonas, Putumayo,

entre otros, debido a ataques armados de estos grupos contra la infraestructura de telecomunicaciones, de energía eléctrica y constantes ataques a los oleoductos, cuyas reparaciones pueden tardar hasta un mes.

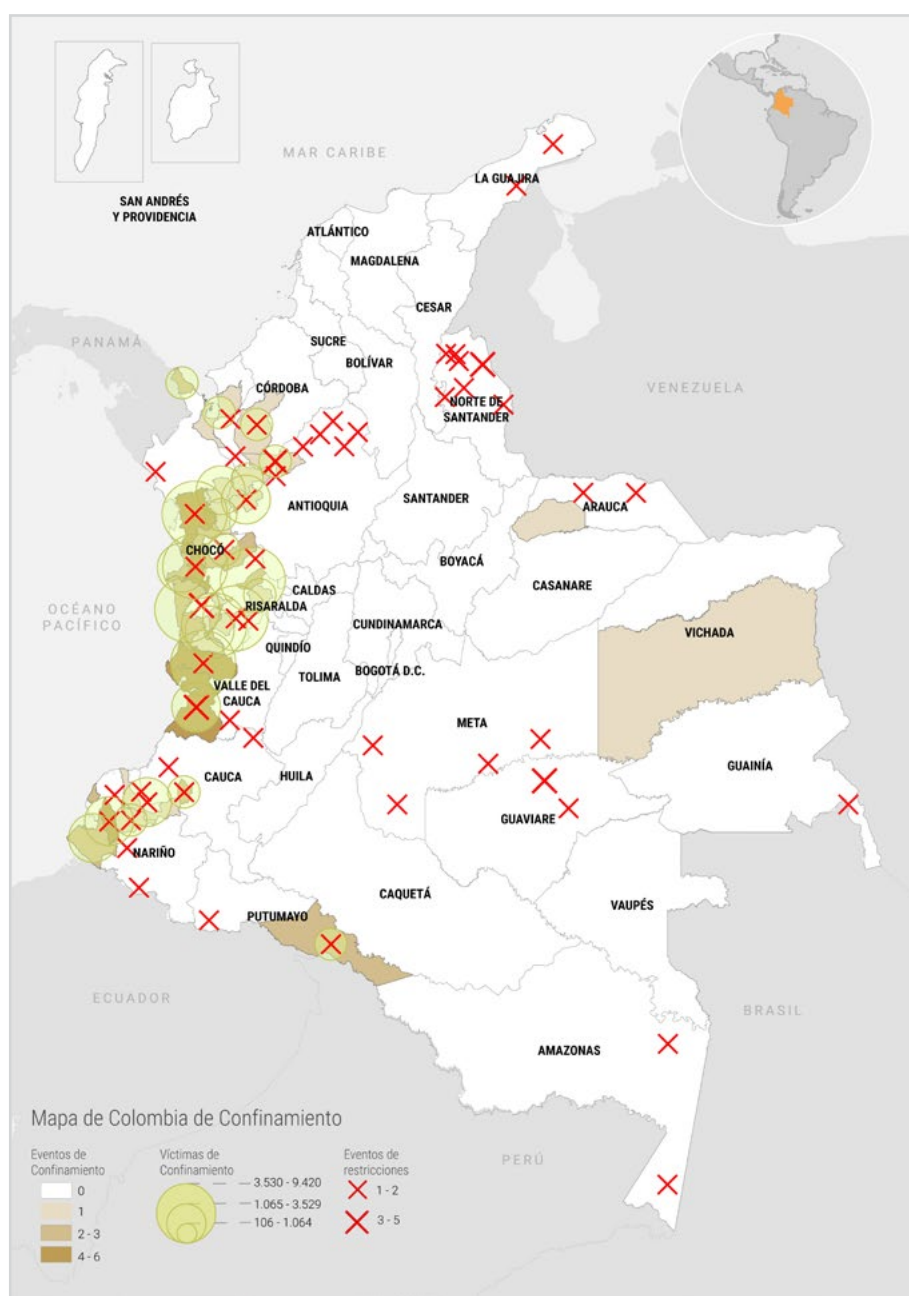
## Mapa de desplazamientos masivos en 2021



Fuente: Monitor-OCHA



## Mapa de confinamientos en 2021



Fuente: Monitor-OCHA



PERSONAS CONFINADAS EN NECESIDAD

**53.9k**  
0.7% del PiN

PERSONAS CON RESTRICCIÓN EN SU MOVILIDAD Y ACCESO:



**84.800**  
personas



**10%**  
grupos étnicos



**57**  
Eventos

## Acceso humanitario



**Las restricciones impuestas sobre la movilidad en vías terrestres o trayectos fluviales conllevan a la limitación de acceso a fuentes de alimentación y**

consecuente desabastecimiento, a servicios de salud, al desarrollo de actividades culturales propias de algunas etnias al sostenimiento de los medios de vida de las comunidades y en algunas ocasiones resultan en la configuración de confinamientos.

En algunas regiones del país en donde existe control predominante por parte de un GANE o donde se mantienen disputas activas entre GAO, GDO y GGV, la población se enfrenta a restricciones a la movilidad ya sea por la imposición de toques de queda, amenazas individuales y colectivas, paros armados, instalación o amenaza de presencia de MAP/MSE, incursiones armadas o imposición de códigos de conducta por parte de los GANE. Durante el 2021 se han registrado al menos 74.800 personas afectadas por estas restricciones en 16 de los 32 departamentos del país (50% del territorio nacional), siendo los departamentos de Chocó, Antioquia y Norte de Santander, los que reportan una mayor frecuencia de este hecho<sup>47</sup>.



**Los actores humanitarios también han evidenciado restricciones para el desarrollo de misiones y actividades en terreno.**

Además de las causas descritas, durante el 2021 se registraron amenazas directas contra personal humanitario, vigilancia hostil durante trayectos y

actividades, retenes ilegales, hurto e incineración de vehículos. Estos hechos, además de poner en riesgo al personal humanitario y las misiones, en muchas ocasiones causa el retraso, reorientación e incluso cancelación de proyectos y actividades enfocadas en la respuesta humanitaria. Durante este año, se han registrado al menos 56 eventos relacionados con restricciones al acceso humanitario en los departamentos de Norte de Santander, Meta, Arauca, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Guaviare, entre otros<sup>48</sup> ya sea contra instituciones locales/departamentales o a las organizaciones humanitarias.

**Así mismo, persisten los ataques contra misiones médicas.** Entre enero y diciembre del 2021 se registraron 385 eventos, de los cuales 37 (10%) fueron cometidos por grupos armados no estatales, 46 ataques (12%) fueron cometidos por familiares de los pacientes. Llama la atención que al menos 302 (78%) se dieron por parte de la comunidad; sin embargo, hay que tener en cuenta que, al menos 256 ataques se produjeron durante la protesta nacional y la movilización social entre el 28 de abril y junio, donde las ambulancias, el personal de salud y algunas instalaciones fueron atacadas en los disturbios y bloqueos reportados en todo el país. En relación con el total de 2020 (325 ataques), se observa un incremento del 18 por ciento, donde Valle del Cauca (debido a bloqueos en el marco de las protestas sociales) y Norte de Santander son los departamentos con mayor número de denuncias de estos ataques<sup>49</sup>.

47. Monitor-OCHA, corte a diciembre 2021

48. Idem

49. <https://noticias.canal1.com.co/nacional/2021-ano-mas-violento-contra-personal-salud-pais/>  
[https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Gaby/Colombia/retos\\_humanitarios\\_colombia\\_2021.pdf](https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Gaby/Colombia/retos_humanitarios_colombia_2021.pdf)

## Impacto de los desastres de origen natural en las personas, los sistemas y en el acceso.



**Se reportan emergencias por desastres de origen natural en lugares con alto impacto humanitario por presencia de actores armados no estatales (Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Putumayo).**

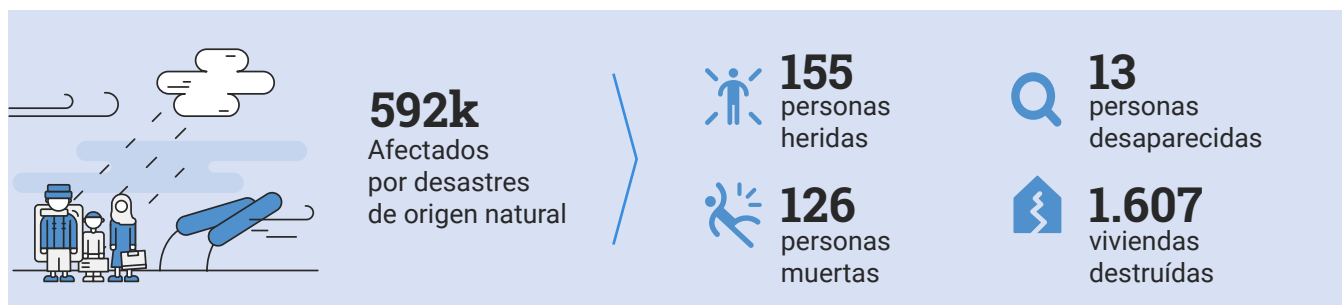
En 2021, al menos 592.535 personas resultaron afectadas por 3.490 emergencias a raíz de desastres de origen natural, en su mayoría por inundaciones y crecientes súbitas (30%) que tuvieron lugar cerca a comunidades que no contaban con recursos y/o capacidades para implementar los planes de preparación y/o respuesta de mitigación de desastres. Ante las afectaciones por desastres, normalmente se ven incrementadas las necesidades en términos de alojamientos, acceso a agua segura y servicios de saneamiento básico, atención en salud física y mental y por supuesto, la seguridad alimentaria de la población. Las necesidades humanitarias originadas a partir de desastres de origen natural se profundizan aún más, cuando los eventos tienen lugar en municipios con presencia y accionar activo de los GANE, dado que la población se enfrenta a situaciones de doble y triple afectación (especialmente cuando las víctimas y/o afectados se incluyen refugiados y migrantes).

No obstante, se resalta la gestión de administraciones locales y del nivel nacional por parte de los comités de gestión de riesgos y desastres y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para dar una respuesta humanitaria inmediata durante la fase preparatoria y de emergencia. Preocupan las emergencias por desastres naturales de gran escala, en donde más de 20.000 personas son afectadas en un mismo evento<sup>50</sup>.

Los recursos y planes de respuesta complementaria de los socios humanitarios están dirigidos a situaciones generadas por el impacto de los factores de la violencia armada, mientras que la atención a afectaciones por desastres naturales presenta más limitaciones en la respuesta, debido a los recursos limitados disponibles. Existe otro vacío relacionado con los daños sobre los cultivos y otros medios de vida de la población, los cuales se prolongan en el mediano y largo plazo y dificultan el acceso a alimentos.

Los sistemas de provisión de servicios de agua, acueducto y alcantarillado son generalmente afectados por los desastres de origen natural, exponiendo a la población a graves necesidades en términos de agua, saneamiento e higiene. Además, los cultivos de pan coger y medios de vida, son afectados al igual que las viviendas e infraestructura comunitaria de la población (escuelas, centros de salud, etc.). Adicionalmente, debido a las condiciones geográficas propias del país y específicamente de las zonas de acceso remoto, se dificulta la provisión de ayuda humanitaria en territorios cuyas vías de acceso se ven bloqueadas por deslizamientos, inundaciones y/o crecientes súbitas.

En relación con los planes de recuperación que se elaboran a partir de declaratorias de calamidades públicas, es necesaria su evaluación para medir el impacto de los recursos y asegurar un enfoque de resiliencia frente al impacto de las comunidades; lo anterior debido a que se podrían estar generando desastres recurrentes o cíclicos cuya población afectada no estaría saliendo de la pobreza ni de su exposición al riesgo. También, se ha identificado un vacío en la anticipación a las crisis, emergencias y desastres, que debe fortalecerse en las autoridades y la misma comunidad humanitaria, para que el enfoque además de reacción también sea de preparación.



50. Emergencias por Inundaciones reportadas a lo largo del año en Putumayo, Chocó, Bolívar, Magdalena y Córdoba.

## Impacto de la pandemia sobre las personas, los sistemas y el acceso.



**El impacto humanitario intersectorial de la pandemia se extendió durante el 2021 y se espera que continúe siendo visible en 2022.** Entre marzo de 2020 e inicios de

diciembre de 2021, más de 128.800 personas fallecieron en Colombia a causa del COVID-19<sup>51</sup>. Para el año 2021 se registraron unos 35.440 casos positivos en cerca de 78 pueblos indígenas del país; que también requieren una atención diferenciada y focalizada para abordar los desafíos y necesidades particulares que enfrentan.

Más allá del impacto sobre la prestación de servicios de salud a pacientes con enfermedades que requerían tratamiento periódico, también se registró la falta de unidades de cuidado intensivo -UCI- (que se presentó en todos los departamentos del país), y la grave afectación a nivel físico y mental sobre el personal de salud. Los actores humanitarios identificaron que al menos 10,4 millones de personas se vieron afectadas directa e indirectamente por las consecuencias socioeconómicas y humanitarias de la pandemia en Colombia<sup>52</sup>.



**El Gobierno Nacional desarrolló una serie de estrategias para responder ante la crisis socioeconómica creada por la pandemia.**

Más de tres millones de familias se beneficiaron del programa de Ingreso Solidario, se tomaron medidas para alivios económicos sobre el pago de servicios públicos, se realizó devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los hogares más vulnerables<sup>53</sup>. Sin embargo, a partir de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y posterior aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, se generaron altos niveles de inflación en los productos de consumo básico. Esta situación ha ocasionado una disminución

de la capacidad de poder adquisitivo y de los medios de vida por la pérdida de empleos -especialmente en mujeres, incrementando el fenómeno de feminización de la pobreza-, la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes a causa de las dificultades para acceder a la educación virtual – que a su vez ha incrementado las dinámicas de reclutamiento, uso y utilización-, entre muchos otros. WFP estima que al menos 3,5 millones (49% de las personas con necesidad de seguridad alimentaria)<sup>54</sup> de personas en entornos rurales y urbanos sufren inseguridad alimentaria en el país, como consecuencia directa de la pandemia. Igualmente, se destaca el impacto socioeconómico que influye en el acceso a alimentos, teniendo en cuenta la tasa de desempleo<sup>55</sup> y el aumento de la informalidad<sup>56</sup>, así como la pérdida del capital productivo y el aumento del endeudamiento a causa del COVID-19, que alerta para tomar medidas que mitiguen las emergencias y afectaciones en la salud física y mental de las comunidades vulnerables.

En Colombia aproximadamente 4,5 millones de personas (el 68.4% de las personas en necesidad a nivel nacional) no cuentan con acceso a fuentes de agua mejorada. Al menos un millón de personas en 425 municipios se encuentran en estado severo de necesidad y 3,2 millones de personas en 347 municipios en estado crítico. La Alta y Media Guajira, el Pacífico Nariñense y el Catatumbo en Norte de Santander son territorios con amplias brechas de acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene, principalmente en el área rural, con dificultades en el acceso a los elementos críticos del sector que se acentuaron y se visibilizaron con la pandemia del COVID-19. Se identifica una relación entre la violencia basada en género (VBG) y la brecha de acceso al agua y saneamiento básico dados los escenarios de riesgo a los que son expuestas las niñas

51. INS Coronavirus en Colombia - Datos: <https://www.ins.gov.co/Noticias/paginas/coronavirus.aspx>

52. Plan Intersectorial de Respuesta COVID-19 - Versión N°1-2 <https://www.humanitarianresponse.info/es/op%C3%A9rations/colombia/document/covid-19-response-plansummary#:~:text=Este%20plan%20est%C3%A1%20basado%20en,respuesta%20a%20la%20COVID%2D19>

53. Medidas <https://coronaviruscolumbia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-ayuda-social.html>

54. Según información generada por los socios del clúster SAN para el HNO 2022.

55. De acuerdo con el DANE a corte del agosto de 2021 la tasa de desempleo en el total nacional fue 12,3 por ciento, mientras que para los hombres la tasa de desempleo nacional fue de 9,4 por ciento, y para las mujeres se ubicó en 16,4 por ciento.

56. De acuerdo con el DANE en 23 ciudades y áreas metropolitanas del país la informalidad laboral fue del 49 por ciento entre enero y marzo de este 2021, mientras que en el mismo periodo del año pasado fue del 47,5 por ciento.



y las mujeres en la búsqueda de estos servicios en territorios lejanos y con alta conflictividad.

Dentro de este contexto, se configura un reto para el sistema de educación al no garantizar estos servicios a los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2019-2020<sup>57</sup>, evidencia el deterioro del acceso al sistema de educación en Colombia debido a la pandemia, dado que, el total de inasistencia escolar pasó de 2,7 por ciento en 2019 a 16,4 por ciento en 2020 debido a: i) la pandemia que produjo una transición de la educación presencial a la virtual (remota, a distancia), y, ii) el bajo acceso y cobertura a internet en la zona rural con un 26 por ciento.



**La atención de otras enfermedades fue desatendida debido a la contingencia por la pandemia.** Adicionalmente, al menos 3,2 millones de personas (69.2% de las personas a nivel nacional) no cuentan con acceso a servicios sanitarios seguros, lo que facilita la proliferación de diferentes vectores que producen enfermedades crónicas como el dengue y la malaria, que fueron desatendidas dada la coyuntura por COVID-19.

Cabe resaltar que durante los meses de cuarentena estricta se fortaleció la injerencia de los GANE en las zonas de difícil acceso con baja presencia estatal, que implicó mayores riesgos de protección y un aumento en sus necesidades humanitarias.

### Impacto por Movimientos Mixtos Transcontinentales en las personas, los sistemas y el acceso



**El incremento de movimientos mixtos transcontinentales aumentó las necesidades humanitarias de la población refugiada y migrante -proveniente de Haití, Cuba y otros países - y de las comunidades de acogida en Urabá<sup>58</sup>.** Para los refugiados y migrantes en ruta hacia Estados Unidos y Canadá, Colombia es un país de

tránsito estratégico, que conecta el sur con el centro de América. Esto, junto con una serie de factores exógenos (como el impacto económico de la COVID-19 en Brasil y Chile, la consecuente cancelación de visas en estos dos países a las personas haitianas, así como los desastres naturales y la inestabilidad política en Haití) generó un aumento en el número de refugiados y migrantes transcontinentales que llegan desde las fronteras con Brasil, Ecuador y Perú al territorio colombiano.

Al ingresar a Colombia, esta población, que se estima en más de 115.000 personas, enfrenta riesgos de protección asociados a la presencia y acciones de los grupos armados no estatales a lo largo de los departamentos del Pacífico -principal ruta de tránsito migratorio-. Al mismo tiempo estas personas presentan múltiples necesidades humanitarias generadas por sus mismas condiciones de migración y que se profundizan por la imposición de políticas migratorias restrictivas para su ingreso a Centroamérica.



**El paso de personas en movilidad transcontinental por el país también ha tenido un fuerte impacto en las comunidades de acogida** ubicadas cerca de la frontera con Panamá (Acandí y Necoclí), donde el acceso al agua es precario, la disposición de basuras se ha vuelto insuficiente por el aumento de la población que llega y los precios de los alimentos han sufrido una hiperinflación relacionada con el poder adquisitivo de los migrantes -que ingresan al país con dólares-. Si bien la respuesta a la emergencia humanitaria en Necoclí y Acandí (Urabá) se ha consolidado en gran medida, sobre todo por la disminución del número de personas que arriban a la zona, es importante subrayar que los movimientos migratorios en esta región han estado históricamente sujetos a fuertes fluctuaciones cíclicas. No hay que dejar de lado otras rutas de salida de estos migrantes menos visibles, quienes cruzando el país por la costa Pacífica llegan a municipios como Juradó, entre otros. En los últimos siete años, las oficinas de terreno del ACNUR en la región han sido testigos de una

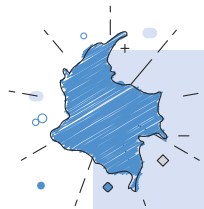
57. <https://www.dane.gov.co/index.php/en/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2020>

58. Informe MIRA. Emergencia por incremento del flujo de movimientos mixtos transcontinentales en Necoclí y Acandí ([Ver enlace](#))

disminución estacional durante el final del año, seguida de un aumento de este movimiento en el primer trimestre del año siguiente, lo que pone de manifiesto que sigue siendo imprescindible reforzar las capacidades locales en términos de preparación para emergencias y contingencias. En este contexto, es urgente establecer rutas migratorias marítimas seguras para las personas en movimiento entre Colombia y Panamá, ya que el uso de embarcaciones clandestinas y el cruce del Tapón del Darién representan un grave riesgo de protección para las personas en movimiento, sobre todo por la presencia de grupos armados no estatales y el entorno natural hostil.

#### TAPÓN DEL DARIÉN/CHOCÓ. COLOMBIA

Movimientos de migrantes.  
Crédito de la foto: OCHA.



**Colombia sigue siendo el mayor receptor personas refugiadas y migrantes venezolanos<sup>59</sup>.**



**1.8M**

**Personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela que viven en el país.**



**344.688**  
regulares



**1.182.059**

en proceso del Estatuto Temporal de Protección



**315.643**  
irregulares



59. <https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021>

## Impacto por eventos excepcionales



### Más de 155.000 afectados por las inundaciones en la subregión de La Mojana.

Desde el 27 de agosto tras las lluvias intensas en la región de La Mojana a la altura del sector Cara e' Gato en el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar), se presentó el desbordamiento del río Cauca por el rompimiento del jarillón. Lo anterior generó múltiples inundaciones en 11 municipios de Bolívar, Sucre y Córdoba. Con base en las estimaciones de la UNGRD, al menos 155.588 personas (38.972 familias)<sup>60</sup> fueron afectadas. Sin embargo, debido a limitaciones logísticas en la toma de registros, la reticencia de las comunidades para dar sus datos personales por el temor de ser incluidos en listas electorales, entre otros, sólo el 60 por ciento de las personas afectadas fueron incluidas en el Registro Único de Damnificados (RUD).

Los grandes daños en viviendas, pérdida de bienes, enseres, cultivos e incluso vidas han profundizado necesidades sectoriales ya existentes en esta zona, las cuales están relacionadas principalmente a seguridad alimentaria y medios de vida, agua, saneamiento básico e higiene y salud. Es importante destacar los vacíos frente a las pérdidas de los pequeños productores, que afectará la recuperación de hogares rurales vulnerables, con limitado acceso a programas de protección social.

La magnitud de la emergencia ha requerido la activación y movilización de la capacidad de respuesta de todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres (SNGRD), liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en coordinación con organizaciones humanitarias, y los recursos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF por sus siglas en inglés) asignados

por OCHA, y otras contribuciones asignadas por la cooperación internacional<sup>61</sup>, para brindar una respuesta complementaria. La emergencia en La Mojana seguirá siendo crítica y se prevé su extensión por al menos seis meses (hasta abril de 2022), fecha estimada de reconstrucción del dique.

El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Córdoba realizó dos evaluaciones MIRA, una en Ayapel<sup>62</sup> y otra en La Mojana<sup>63</sup> en donde se evidenciaron las necesidades más urgentes en los sectores de seguridad alimentaria y medios de vida, albergues, salud y agua, saneamiento e higiene. Desde este espacio de coordinación se ha complementado la respuesta institucional en articulación con la UNGRD, y además se preparó un Plan de Respuesta Rápida para atender a la población hasta enero de 2022. El IDEAM alertó sobre la segunda temporada de lluvias que inició en septiembre de 2021 y su impacto sobre la población de la zona, aumentando los niveles de inundación en la subregión.



### Multiplicidad de desplazamientos masivos en Nariño en mayo y a lo largo del año<sup>64</sup>.

La zona del "Triángulo de Telembí" (municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán) ha sido fuertemente afectada por la presencia de múltiples actores armados no estatales<sup>65</sup>. La población sufre constantes hechos victimizantes (incluyendo homicidios selectivos, ataques directos contra población civil, masacres, amenazas e intimidación) que generan desplazamientos masivos, mayoritariamente hacia las cabeceras municipales de estos municipios. Con más de 28.900 personas desplazadas a lo largo de 2021, Nariño es el departamento más afectado por este flagelo con múltiples necesidades sectoriales, principalmente de protección.

60. <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/emergencia-la-mojana>

61. Comunicado de Prensa. Asignación fondos CERF a Colombia. <https://nacionesunidas.org.co/noticias/comunicados-de-prensa/asignacion-fondos-cerf-a-colombia/>

62. <https://assessments.hpc.tools/assessment/a32e3cdb-9897-49de-b199-28db82ee96>

63. <https://assessments.hpc.tools/assessment/cc0f91b0-7d7d-45c5-8d45-21b2cdfc14ff>

64. Documentos informativos sobre la situación de Nariño, disponibles en [salahumanitaria.co](http://salahumanitaria.co) <https://www.humanitarianresponse.info/operations/colombia/search?search=nari%C3%B1o>

65. [https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210929\\_acaps\\_mire\\_colombia\\_analisis\\_regional\\_de\\_necesidades.pdf](https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210929_acaps_mire_colombia_analisis_regional_de_necesidades.pdf)

Las administraciones locales ya han reportado falta de alojamientos temporales para gestionar la estadia de las familias desplazadas, que en muchos casos hacen parte de resguardos indígenas Awá y consejos comunitarios de la zona. Hasta el momento, no hay diálogos ni acuerdos entre los diferentes actores armados que hacen parte de la disputa territorial y pugnan por el control social, por ende, se espera que el impacto humanitario sobre la población de la zona incremente en 2022. Ante este escenario se esperan eventos de desplazamientos masivos y confinamientos, reclutamiento, uso y vinculación de niños, niñas y adolescente, masacres, homicidios selectivos, violencia basada en género, entre otros ataques a civiles.



#### **Aumento del confinamiento en Chocó.**

Entre enero y diciembre de 2021, al menos 65.685 personas han sido confinadas en Colombia, de las cuales al menos 33.376 han sufrido este hecho victimizante en Chocó<sup>66</sup>. Los municipios de Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó, Litoral de San Juan e Istmina, afrontan una grave situación humanitaria tras la incursión de un nuevo GDO en territorios previamente controlados por un GAO. Lo anterior, ha generado múltiples enfrentamientos y también ha incrementado la instalación de MAP/MSE en zonas de acceso estratégicas en estos municipios. Por estas razones, las comunidades indígenas Emberá Dóbida, Emberá Katío, Wounaan y afrodescendientes de la zona, han sido forzadas a confinarse para proteger su vida. Además, el acceso humanitario no ha sido garantizado en todos los casos, por lo cual, tanto instituciones como miembros del ELC de Chocó no han podido ingresar a las comunidades confinadas para dar una respuesta humanitaria por más de dos meses tras conocerse la emergencia.



#### **Actores armados disputándose el control territorial de Argelia (Cauca) y Buenaventura (Valle del Cauca).**

Estos dos municipios también presentan una crisis humanitaria debido a la multiplicidad de grupos delictivos

organizados (GDO) y el consecuente aumento en el número de enfrentamientos y combates que en 2021 han desplazado a más de 23.000 personas y confinado al menos a 4.000 personas. Las administraciones locales ya han reportado carencias financieras, de infraestructura y de personal para atender las emergencias reiterativas en estos municipios. Los ELC de Cauca y Valle del Cauca han articulado la respuesta humanitaria para responder complementariamente en términos de seguridad alimentaria, alojamientos, salud y agua, saneamiento e higiene. Sin embargo, las características de seguridad de los municipios requieren de una intervención más allá de la emergencia y que sirva para estabilizar las condiciones de seguridad y disminuir los riesgos de protección que afronta la población.

#### **Violencia Basada en Género**

En Colombia los factores de violencia armada tienen un impacto humanitario diferenciado en mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (comunidad LGBTIQ+). En especial, las mujeres y niñas pertenecientes a los grupos étnicos indígenas y afrodescendientes, que habitan en zonas rurales y/o cuentan con algún tipo de discapacidad, se enfrentan a patrones culturales patriarcales con consecuencias violentas a nivel familiar y comunitario (violencia física, psicológica, económica, patrimonial y social). A lo anterior se suman las afectaciones por la presencia, influencia y/o control de grupos armados, incrementando las restricciones a la movilidad como prácticas de control social e incluyendo el control de los cuerpos y conductas de mujeres y personas LGBTIQ+, incluyendo el de población refugiada y migrante venezolana.

Respecto a los desastres de origen natural, existen muy pocas cifras e información desagregada por género, edad, etnia y discapacidad sobre las personas damnificadas y afectadas en Colombia, sin embargo, se estima que las mujeres son mayormente afectadas

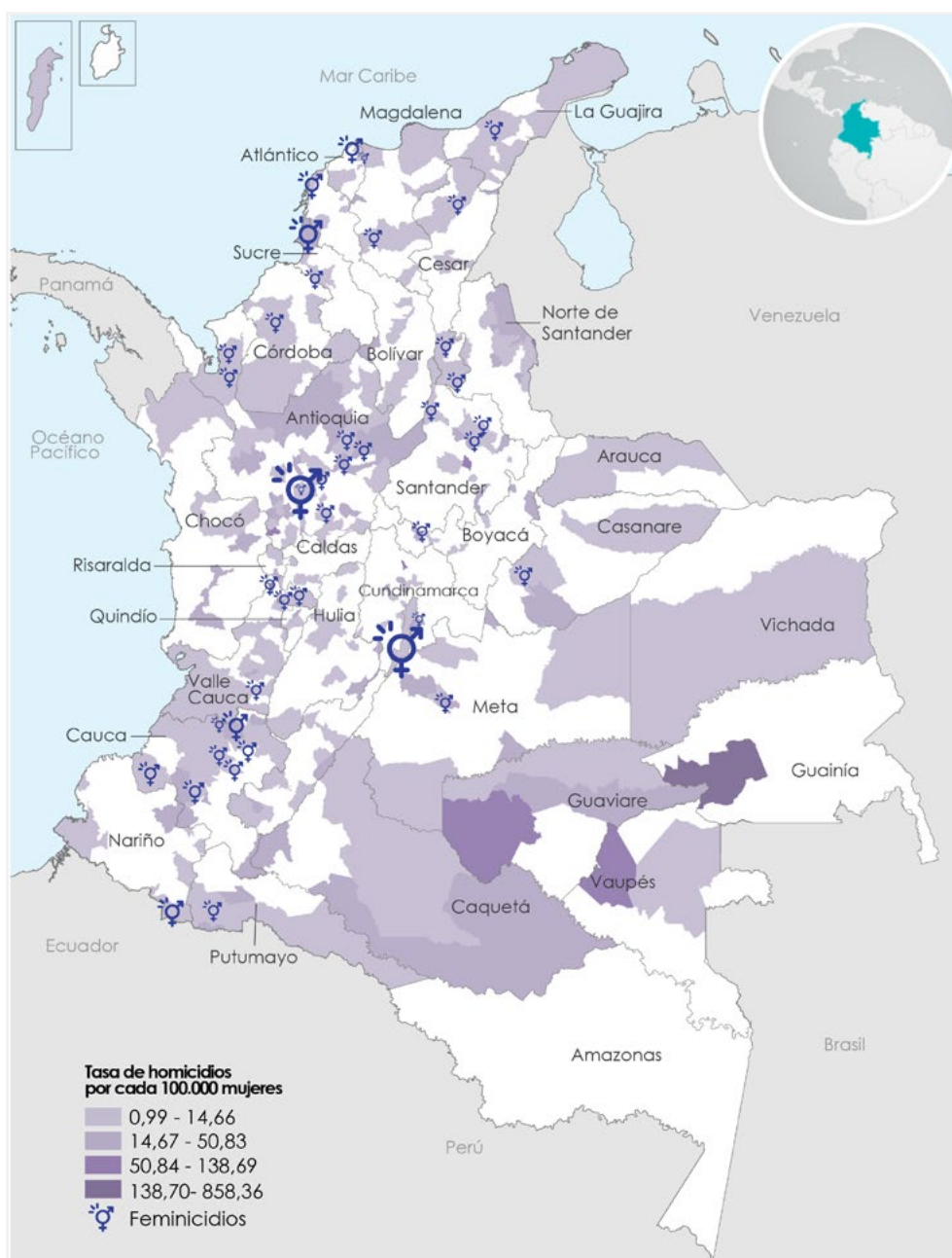
66. OCHA. Monitor de Violencia armada y desastres. ([Ver enlace](#))



debido a que están en la primera línea de respuesta, y se convierten en cuidadoras de sus familias y comunidades gestionando la recuperación. No obstante, en situaciones de emergencia (de cualquier tipo) donde no se cuenta con alojamientos temporales seguros, hay exposición a riesgos por la falta de privacidad considerando que en muchas ocasiones hay hacinamiento y no se cuenta con condiciones de habitabilidad digna. Todas las

y los sobrevivientes de VBG, incluidas las víctimas/ sobrevivientes de actos de explotación y abuso sexual (EAS) cometidos por personal humanitario, presentan necesidades que requieren la intervención multisectorial urgente; se incluye la garantía de servicios de protección, salud, alojamientos, transporte, agua y saneamiento, y la generación de medios de vida.

### Homicidio de mujeres en Colombia entre enero y septiembre de 2021



Fuente: Subgrupo de Violencia Basada en Género, [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/8112021\\_infografia\\_situacionvbg\\_ene\\_sep\\_v6.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/8112021_infografia_situacionvbg_ene_sep_v6.pdf)



**SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/GUAVIARE, COLOMBIA**

Caseta comunal de charras.

Crédito de la foto: NRC, 2021.

## IMPACTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Durante 2021 se identifica un aumento de la población con inseguridad alimentaria en 14 por ciento aproximadamente, en donde al menos 5,7 millones de personas se encuentran en una situación crítica de acceso a alimentos, es decir, al menos 2,4 millones de hogares ingieren menos de tres comidas al día; 2,2 millones de familias comen dos veces al día, 179 mil hogares una vez y 23 mil hogares en ocasiones no tienen ni una sola porción de comida diaria<sup>67</sup>.

Las regiones con mayores necesidades de seguridad alimentaria son la Centro-Sur (Amazonas, Vaupés, Putumayo) y los departamentos de Nariño, Arauca, La

Guajira, Bolívar, Sucre, Antioquia y Chocó, donde hay mayor preocupación en términos de malnutrición y desnutrición infantil, y de mujeres gestantes y lactantes por las restricciones para acceder a una alimentación adecuada, y a los servicios de salud. Este impacto se agudiza por las afectaciones multisectoriales como las situaciones agroclimáticas (sequía e inundaciones), el COVID-19, paro nacional o protestas sociales, y los factores de violencia armada, afectando en mayor medida a la población rural, mujeres rurales dedicadas a actividades agropecuarias, grupos étnicos, hogares con jefatura femenina, refugiados, migrantes (venezolanos y transcontinentales), retornados de Venezuela y niños y niñas menores de 5 años.

67. Encuesta Pulso Social del DANE realizada en febrero 2021, <http://ieu.unal.edu.co/en/medios/noticias-del-ieu/item/con-la-pandemia-una-de-cada-tres-personas-sufre-de-inseguridad-alimentaria-en-la-mayoria-de-capitales-del-pais>

## 1.3

## Alcance del análisis

El análisis ha abarcado todos los departamentos del país y los resultados muestran que los impactos y preocupaciones corresponden especialmente a **2.9 millones personas que habitan en lugares apartados de difícil acceso de 29 departamentos (90% del total nacional)** a lo largo y ancho del país, preocupando especialmente las zonas pacífico, noroccidente, frontera oriental y centro-sur). Al menos el 38 por ciento de las personas en necesidad han tenido **repercusiones en su bienestar físico y presentan afectaciones a su salud mental por la exposición a riesgos de protección y contra su integridad**; ya sea por agresiones físicas como actos de violencia sexual, heridas, atentados, accidentes con MAP/MSE, por la amenaza que supone vivir bajo el control de grupos armados, por la exposición a otras violencias que se invisibilizan, o por enfermedades adquiridas por la falta de acceso a los medios de vida que aseguran el bienestar.

De igual manera, según las dinámicas del contexto y las diferencias propias de cada grupo en relación con la vulnerabilidad y las desigualdades que enfrentan las poblaciones, se identificaron cerca de **2.6 millones de personas (34% de las personas en necesidad) quienes requieren una atención en un mediano plazo para asegurar sus estándares de vida**, debido a las barreras de accesos a servicios, bienes y medios de vida fundamentales, ya sea por condiciones de seguridad como parte del control e intimidaciones que sufren o el acceso físico, que condiciona la respuesta, el desborde de capacidades para realizar la atención necesaria o limitaciones en los presupuestos o el recurso humano de las instituciones que no se da de manera oportuna. Así mismo, se estima que al menos **4.8 millones de personas (61% de las personas en necesidad) adoptan diferentes mecanismos de afrontamiento** para solventar sus necesidades básicas, que, ante la falta de ingresos o las fuentes para acceder a éstos y en caso de no adoptarse medidas para la integración socio

económica como parte del nexo entre lo humanitario y el desarrollo, podrían empezar a configurarse colapsos en sus medios de vida en un largo plazo.

Entre los principales grupos vulnerables priorizados por tener necesidades derivadas de la múltiple afectación y riesgos latentes, se destacan personas víctimas de desplazamiento, confinamiento, personas refugiadas y migrantes, personas afectadas por desastres de origen natural, y aquellas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes. Las mujeres (2,7 millones), niñas (1,2 millones) y niños (1,2 millones), representan la mayoría (66%) de las personas en necesidad, y hacen parte de todos los grupos mencionados anteriormente. Además, es importante destacar que, el 76 por ciento de las personas en necesidad están bajo la influencia de grupos armados no estatales, sumándose a la situación de vulnerabilidad de esos grupos poblacionales.

El análisis también ha identificado a aproximadamente **1,9 millones de personas pertenecientes a grupos étnicos, de las cuales 629.600 pertenecen a pueblos indígenas y 1,3 millones a comunidades afrodescendientes**; vale la pena considerar que estos grupos, principalmente los que habitan en la región Amazónica, Pacífico y zonas fronterizas, presentan serias barreras de acceso a servicios de salud además de victimización en diferentes hechos, a pesar de contar con medidas de protección especiales de sus derechos como individuos y de sus territorios ancestrales. De igual manera, en el período de tiempo del análisis se identifican a 454.000 personas en situación de desplazamiento que no han superado su situación de vulnerabilidad, al menos 54.000 personas víctimas de confinamiento que mantienen restricciones en su movilidad y acceso, y más de 913.000 personas afectadas por eventos de origen natural que deterioran sus condiciones de vida. Además, 830.000 personas que hacen parte de las comunidades de acogida,

que presentan diferentes niveles de severidad por las condiciones socio-económicas precarias y también requieren de atención priorizada y humanitaria a sus necesidades en sectores como protección, salud, seguridad alimentaria, medios de vida y alojamiento; al mismo tiempo, estas personas presentan niveles de presión adicionales porque reciben y apoyan a otras personas que también son afectadas por diferentes factores, mientras sus necesidades no son atendidas por el desborde de capacidades de respuesta.

A todo este escenario de la situación interna del país, se suman 4,8 millones de personas refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, tanto con vocación de permanencia como pendulares, en

tránsito por el continente, comunidades de acogida y retornados colombianos, quienes con diferentes estatus requieren de asistencia humanitaria, ante las afectaciones en Colombia que se suman a su condición ya compleja derivadas de los determinantes de la crisis en el vecino país. A estos movimientos migratorios se suman personas de otras nacionalidades que realizan trayectos transnacionales, y que en su paso por el país enfrentan desafíos y necesidades que impactan en su bienestar y medios de vida. Los reportes dan cuenta de hasta 22.000 migrantes transnacionales represados y expuestos a riesgos de protección internacional y necesidades básicas; no obstante, el flujo puede variar de manera drástica, siendo una coyuntura de seguimiento y atención.

## Alcance del análisis en Colombia

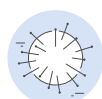
### CONDUCTORES



Factores de violencia



Fenómenos climáticos

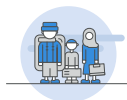


Impacto pandemia



Movimientos migratorios

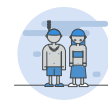
### GRUPOS VULNERABLES



Desplazados/Confinados



Población bajo control/influencia GAO



Comunidades étnicas



Mujeres, niños y niñas



Adultos mayores/con discapacidad



Comunidades anfitrionas/ Afectados por desastres

### NECESIDADES SECTORIALES



Mortalidad/morbilidad



Inseguridad alimentaria severa/malnutrición



Barreras de acceso a servicios/bienes/derechos



Acceso a medios de vida

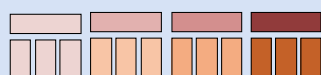


Pobreza multidimensional

Evaluaciones  
Datos cualitativos

MSNA, otras evaluaciones  
PIN sectorial y severidad

Necesidades  
intersectoriales  
sectoriales



+



+



=

PIN  
intersectorial/  
Severidad



**PiN de grupos vulnerables por departamento**

DEPARTAMENTO	INTERSECTORIAL	PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	COMUNIDADES ANFITRIONAS	PERSONAS DESPLAZADAS	PERSONAS CONFINADAS	AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES	PIN BAJO INFLUENCIA GAO
Amazonas	23,552	699	36	265	-	26	28,455
Antioquia	656,601	17,430	34,400	70,289	5,184	52,023	668,318
Arauca	96,293	2,362	21,771	6,857	-	36,162	104,548
Atlántico	710,667	10,483	6,788	786	-	34,641	22,759
Bogotá D.C.	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	643,239	14,280	49,031	21,283	-	221,935	421,520
Boyacá	54,372	2,037	10,486	217	-	1,564	21,837
Caldas	258,090	7,282	3,326	479	-	5,763	54,777
Caquetá	100,817	2,773	5,461	8,646	-	11,913	135,523
Casanare	116,667	3,852	6,164	954	-	947	102,892
Cauca	310,501	6,383	52,449	29,921	158	26,234	754,763
Cesar	246,080	6,281	13,094	2,329	-	5,330	162,587
Chocó	255,866	2,277	39,751	52,823	28,224	144,854	306,493
Córdoba	208,694	4,097	14,382	27,164	41	5,848	446,895
Cundinamarca	32,764	1,202	10,589	37	-	926	-
Guainía	15,322	147	15,228	668	-	75	22,557
Guaviare	23,137	411	347	1,905	-	10,263	38,500
Huila	317,708	19,551	5,259	3,515	-	9,053	180,609
La Guajira	312,128	4,202	20,186	1,929	-	78,301	194,194
Magdalena	477,209	13,053	8,902	3,049	-	86,415	217,360
Meta	74,032	1,934	2,610	3,975	-	14,097	125,778
Nariño	381,453	10,391	183,987	85,484	5,941	9,282	548,395
Norte de Santander	390,230	7,036	179,961	69,101	13,976	14,560	213,290
Putumayo	93,571	2,522	6,120	6,473	56	49,977	164,560
Quindío	140,531	6,174	317	260	-	1,026	-
Risaralda	125,297	4,092	2,958	1,923	127	17,095	46,125
Santander	531,652	16,747	16,313	1,213	-	13,881	87,800
Sucre	308,990	11,295	100,507	6,606	-	31,101	273,135
Tolima	374,080	11,317	14,730	5,052	-	6,243	171,660
Valle del Cauca	293,960	4,689	5,353	39,859	233	9,479	238,396
San Andrés y Providencia	16,168	390	73	-	-	11,961	-
Vaupés	25,206	355	34	293	-	1,078	1,761
Vichada	79,066	525	89	990	-	1,781	84,982

**PiN de grupos vulnerables por departamento**

DEPARTAMENTO	INTERSECTORIAL	INDÍGENAS	AFROS	NIÑAS	NIÑOS	NIÑAS Y NIÑOS	ADULTOS	ADULTOS MAYORES	MUJERES	HOMBRES
Amazonas	23,552	11,608	391	4,848	5,102	9,951	11,799	1,803	11,347	12,205
Antioquia	656,601	10,077	127,450	97,466	102,551	200,017	375,879	80,704	331,808	324,793
Arauca	96,293	2,515	4,561	16,330	16,866	33,197	54,568	8,529	48,189	48,104
Atlántico	710,667	12,388	57,851	103,732	107,441	211,173	410,550	88,944	364,113	346,554
Bogotá D.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bolívar	643,239	1,871	222,179	101,937	107,077	209,014	356,292	77,933	322,749	320,490
Boyaca	54,372	3,335	971	8,184	8,706	16,889	27,333	10,150	26,565	27,808
Caldas	258,090	13,812	6,531	29,677	30,996	60,673	147,695	49,723	133,266	124,824
Caquetá	100,817	2,202	3,380	17,366	18,260	35,627	55,184	10,007	49,984	50,834
Casanare	116,667	2,055	1,884	18,569	19,395	37,964	68,038	10,665	57,831	58,836
Cauca	310,501	79,484	73,475	46,615	48,532	95,147	174,736	40,618	155,215	155,286
Cesar	246,080	14,346	23,446	40,800	42,497	83,297	138,353	24,430	125,216	120,864
Córdoba	208,694	22,618	46,606	34,429	36,055	70,484	111,285	26,925	104,190	104,504
Cundinamarca	32,764	65	566	4,078	4,374	8,452	16,686	7,626	15,563	17,202
Chocó	255,866	37,345	178,224	48,800	50,769	99,570	132,609	23,688	128,904	126,962
Huila	317,708	4,503	4,225	50,445	53,165	103,611	173,566	40,531	158,940	158,767
La Guajira	312,128	159,233	40,365	60,531	62,282	122,813	165,198	24,117	159,772	152,356
Magdalena	477,209	7,737	65,894	79,686	83,912	163,598	260,323	53,288	237,921	239,288
Meta	74,032	5,008	1,733	12,857	13,307	26,164	40,054	7,814	35,824	38,208
Nariño	381,453	72,123	150,464	61,785	64,351	126,137	210,332	44,985	192,650	188,803
Norte de Santander	390,230	3,019	5,623	58,213	61,056	119,269	225,317	45,644	198,326	191,904
Putumayo	93,571	15,457	4,604	15,427	15,922	31,349	53,407	8,815	46,429	47,142
Quindío	140,531	727	3,445	15,242	15,976	31,218	81,639	27,674	72,947	67,584
Risaralda	125,297	9,026	4,202	15,830	16,620	32,450	70,622	22,225	64,616	60,681
Santander	531,652	656	17,426	68,711	72,250	140,961	310,527	80,165	270,974	260,678
Sucre	308,990	44,497	54,092	48,144	50,650	98,795	170,162	40,034	153,180	155,810
Tolima	374,080	20,936	5,003	49,271	52,009	101,281	207,374	65,425	188,337	185,743
Valle del Cauca	293,960	5,589	170,787	48,722	49,920	98,642	156,219	39,098	153,048	140,912
San Andres y Providencia	16,168	17	2,734	2,114	2,186	4,300	9,532	2,336	8,370	7,799
Guainía	15,322	10,218	120	3,495	3,663	7,158	7,228	936	7,374	7,947
Guaviare	23,137	2,085	957	4,209	4,408	8,618	12,496	2,023	10,870	12,267
Vaupés	25,206	19,766	292	6,398	6,552	12,949	10,703	1,553	12,037	13,169
Vichada	79,066	35,282	489	17,247	18,240	35,488	39,033	4,544	37,326	41,739



#### CHOCÓ. COLOMBIA

Misión en terreno.

Crédito de la foto: Bram Ebus.

## 1.4

# Condiciones Humanitarias y Severidad de las Necesidades

### PiN distribuido por grupos vulnerables



**1,3M**  
Comunidades  
afrodescendientes



**629,6k**  
Pueblos  
indígenas



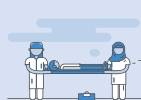
**913,8k**  
Personas afectadas por  
desastres naturales



**830,7k**  
Comunidades  
anfitrionas



**454,3k**  
Personas  
desplazadas



**196,2k**  
Personas en situación  
de discapacidad



**53,9k**  
Personas  
confinadas



**5,8M**  
Personas que viven  
bajo influencia de  
los GANE



**3,8M**  
Mujeres



**2,4M**  
Niños y niñas

Las profundas condiciones humanitarias de las personas en necesidades en Colombia, particularmente algunos grupos vulnerables analizados en el Panorama de las Necesidades Humanitarias del país, permitió la priorización de estos por parte de los Equipos Locales de Coordinación y el EHP; lo anterior, como consecuencia de múltiples emergencias humanitarias por vivir bajo la influencia de los GANE, necesidades básicas insatisfechas multisectoriales y situaciones de pobreza estructural. Las características del contexto donde habitan estos grupos, los factores de riesgo existentes, la victimización o afectación no discrimina y tiene sus características de acuerdo con la edad, sexo o pertenencia étnica, y se agrava cada vez más con diferentes niveles de severidad. En otros casos, por la débil o inexistente presencia Estatal, la capacidad de respuesta oportuna e integral de la institucionalidad e incluso comunidad humanitaria resulta insuficiente ante el impacto y desigualdades que ha dejado la pandemia en estos grupos vulnerables, muchos de ellos además habitan en zonas de riesgo y están propensos a sufrir afectaciones por los fenómenos climáticos.

## **Gravedad intersectorial de las necesidades**

### **Bienestar físico y mental**

Los grupos vulnerables priorizados presentan consecuencias en la salud mental que resultan de las dinámicas de la violencia ejercida por los grupos armados, incluyendo la contaminación con MAP/MSE, los eventos asociados a desastres naturales y el impacto de la pandemia. Estas personas que por lo general son mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes a grupos étnicos, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, requieren atención rápida para asegurar el acceso a medidas de protección y atención psicológica por el impacto en la salud física, reflejadas en casos como VBG, de malnutrición que ocasiona enfermedades o la pérdida de vida, e incluso de heridas y/o lesiones físicas por causa de otras agresiones o ataques.

## **Condiciones de vida**

El deterioro de las condiciones de vida de las personas se refleja en consecuencias que ha dejado la crisis económica agudizada por la COVID-19, como la pérdida de empleo y la consecuente inseguridad alimentaria, las dificultades de acceso a derechos como la educación, servicios de salud, necesidades que requieren garantizar acceso o soluciones para generar sustento/ingresos y medios de vida.

Las consecuencias en las condiciones de vida de las personas que son víctimas de desplazamiento se enfocan más en la dificultad de acceder a servicios de agua y saneamiento básico, salud, educación y pérdida de alojamiento y fuentes de ingresos. Por esta razón, se debe garantizar el acceso a educación, soluciones en términos de alojamiento, alimentos y medios de vida.

Consecuencias en las condiciones de vida de las personas afectadas por situaciones de eventos naturales son similares a las de emergencias por eventos de violencia, entre ellas, la dificultad de acceso a agua y saneamiento básico, salud y educación, además de la pérdida de alojamientos, bienes domésticos (necesidades básicas insatisfechas – NBI-), y medios de vida representados en producción agrícola u otros medios de subsistencia. Estas necesidades requieren de intervenciones en un mediano plazo para garantizar el acceso a estas privaciones/carencias sectoriales para evitar que la severidad ocasione un daño irreparable.

## **Mecanismos de afrontamiento a la crisis**

Entre los mecanismos de afrontamiento negativos más frecuentes se identifica la migración a las ciudades, la venta de medios de producción, dejar a los niños y niñas a merced de los grupos armados para el reclutamiento, uso u utilización de éstos en las filas armadas o como informantes de dichos grupos, matrimonios adolescentes de las niñas, situaciones que requieren de acciones de prevención y protección de estos grupos vulnerables que cada vez más están siendo impactados.



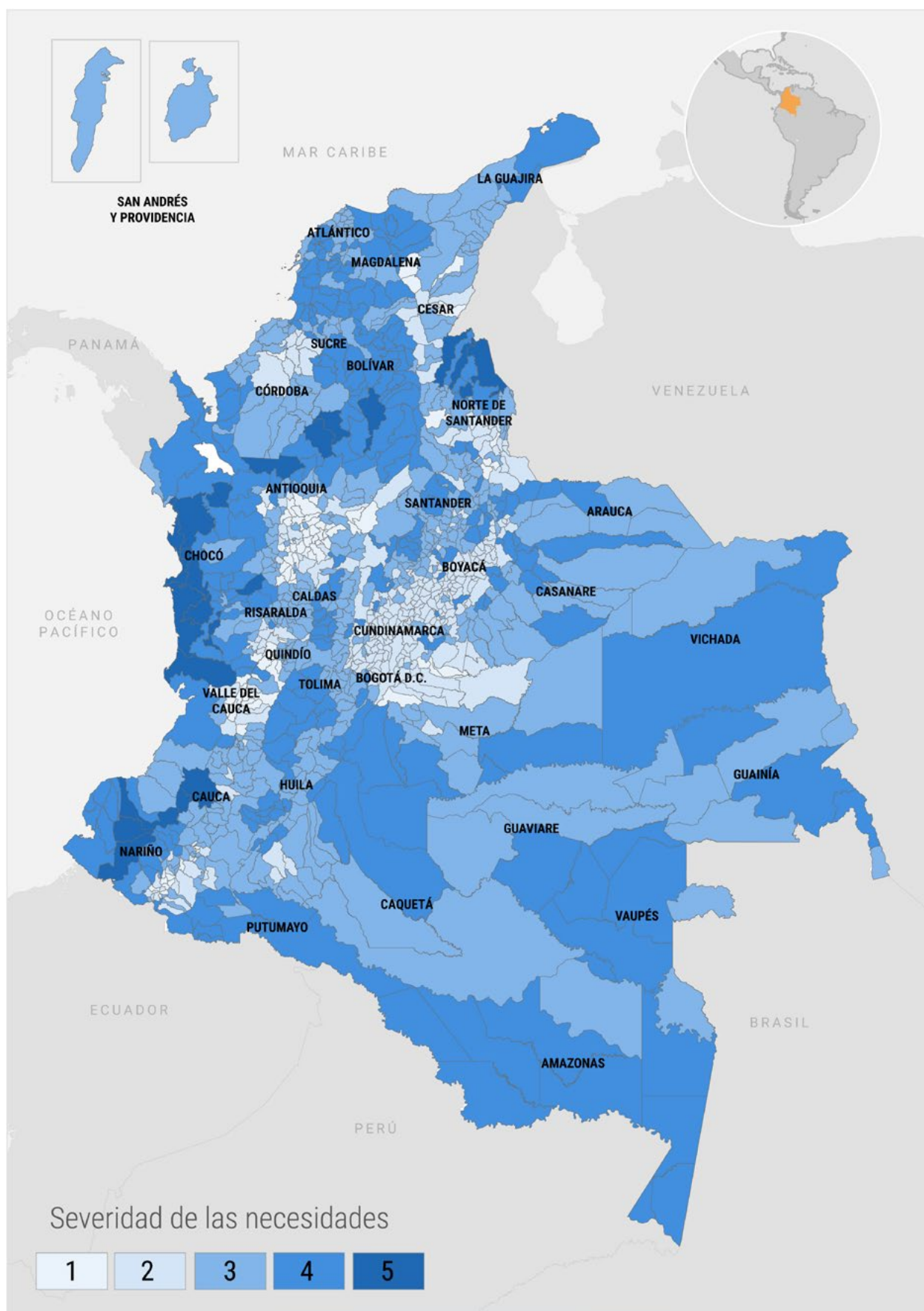
## Grupos más vulnerables

Miles de personas (k)

GRUPO POBLACIONAL	PIN	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO	FACTORES ASOCIADOS	SUBREGIÓN
Personas bajo la influencia de GANE	<b>5.8M</b>	-	5.5k	2.9M	2.4M	430.2k	Violencia	Pacífico, noroccidente y nororient
Comunidades Afrodescendientes	<b>1.2M</b>	25.3k	180.3k	485.7k	702.7k	91.4k	Violencia e inundaciones	Pacífico y noroccidente
Desastres naturales	<b>913.8k</b>	6.6k	41.2k	436.3k	422.2k	55.3k	Inundaciones, deslizamientos, sequía	Caribe, noroccidente, pacífico y sur
Comunidades anfitrionas	<b>830.7k</b>	31.4k	204.1k	368.9k	361.2k	100.4k	Desplazamientos, desastres, movimientos migratorios mixtos	Nororient, noroccidente y pacífico
Pueblos indígenas	<b>629.6k</b>	1.8k	52.1k	249.5k	342k	37.9k	Desplazamientos, desastres, movimientos migratorios mixtos	Pacífico, caribe y oriente
Personas desplazadas	<b>454.3k</b>	3.7k	17.7k	100.8k	242.6k	110.7k	Factores de violencia armada	Pacífico, noroccidente, nororient y sur
Personas en situación de discapacidad	<b>196.2k</b>	8.1k	81.4k	123.1k	68.1k	4.9k	Violencia, COVID-19	Caribe, centro y noroccidente
Personas confinadas	<b>53.9k</b>	-	-	774	13.7k	39.4k	Factores de violencia armada	Pacífico y noroccidente

GRUPO VULNERABLE	PERSONAS EN NECESIDAD	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
Adultos	<b>4.3M</b>	154.4k	1.9M	2.7M	1.4M	151.8k
Mujeres	<b>3.8M</b>	138.4k	1.6M	2.4M	1.3M	142.9k
Hombres	<b>3.8M</b>	133.5k	1.5M	2.3M	1.3M	150.2k
Niños y Niñas de 0 a 17 años	<b>2.4M</b>	74.5k	802.2k	1.3M	935.7k	113.4k
Niños	<b>1.2M</b>	38k	408.8k	708.3k	478.5k	58.1k
Niñas	<b>1.1M</b>	36.5k	393.3k	678.7	457.1k	55.2k
Adultos mayores	<b>972.9k</b>	42.9k	479.6k	648.5k	296.4k	27.9k

## MAPA NIVELES DE SEVERIDAD 2022



## Grupo vulnerable: Mujeres

POBLACIÓN TOTAL	DE LAS CUALES: MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
<b>3,9M</b>	<b>138k</b>	<b>1,7M</b>	<b>2,4M</b>	<b>1,3M</b>	<b>143k</b>

### Necesidades humanitarias afectan mayoritariamente a las mujeres.

Al menos 3,9 millones de mujeres presentan necesidades multisectoriales derivadas de la violencia basada en género, la agudización de los factores de violencia armada, el impacto socioeconómico tras la pandemia de la COVID-19, la crisis migratoria y los desastres de origen natural. Al menos 2,2 millones de mujeres, niñas y adolescentes están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia basada en género (física, sexual, psicológica, económica, etc.), violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad e integridad sexual y feminicidios; los daños físicos, psicológicos, sexuales y económicos que enfrentan las sobrevivientes tiene repercusiones a nivel individual, comunitario y social. Las mujeres refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela enfrentan múltiples afectaciones por las desigualdades de género previas a la crisis migratoria y exacerbada por las mismas, durante su cruce fronterizo, tránsito a lo largo de la 'ruta del caminante' y permanencia en Colombia. La limitación de los fondos para la atención, los ejercicios de revictimización, así como la debilidad de las rutas de atención y de los mecanismos de protección agravan la situación de riesgo, disminuyen la confianza de las mujeres en la institucionalidad y dificultan la denuncia, erradicación, mitigación y atención de estas situaciones.

Las mujeres cabeza de hogar resultaron gravemente afectadas por la emergencia sanitaria y socioeconómica producto de la pandemia de la COVID-19, enfrentando necesidades en los ámbitos de seguridad alimentaria, recuperación temprana y medios de vida. La falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva



se ven reflejados en el aumento de los embarazos no planeados, así como en las morbilidades relacionadas con la gestación, las ITS/VIH y las violencias intrafamiliares y basadas en el género. A nivel psicológico el incremento de casos reportados de violencia intrafamiliar y basada en género se ha asociado principalmente al maltrato físico y verbal a las mujeres del hogar quienes durante más de 5 meses estuvieron encerradas con sus agresores debido al aislamiento preventivo obligatorio.

# Grupo vulnerable: Niños y Niñas

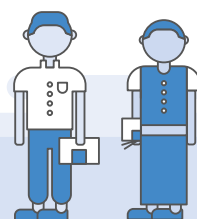
POBLACIÓN TOTAL	DE LAS CUALES: MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
2,4M	-	802k	1,4M	936k	103k

## Niños, niñas y adolescentes y jóvenes con necesidades humanitarias y de protección.

Entre 2020 y 2021, la Defensoría del Pueblo ha publicado Alertas Tempranas para 188 municipios de 27 de los 32 departamentos del país<sup>68</sup>, en donde se presentan altos riesgos o casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Los Equipos Locales de Coordinación (ELC) también han recibido información mediante denuncias no formales, misiones de evaluación y entrega de respuesta humanitaria que permiten aseverar (a pesar de no contar con cifras oficiales) un incremento en las dinámicas del reclutamiento. Lo anterior se atribuye a la atomización de grupos armados no estatales, su reconfiguración y su interés por incrementar su control territorial y social, especialmente en Putumayo, Caquetá, Nariño, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Vaupés, Guainía, Meta, Guaviare, Córdoba, Bolívar, entre otros departamentos.

Los factores de violencia armada, los desastres de origen natural y la continuación de la COVID-19 causan un aumento en la vulnerabilidad y factores de riesgo para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, particularmente, de comunidades étnicas, campesinas y/o que habitan en lugares dispersos y con poca capacidad institucional que presentan diversas barreras de seguridad alimentaria, acceso a agua y saneamiento básico, alojamiento, entre otras<sup>69</sup>. En primer lugar, cerca de 1,4 millones de niños, niñas, adolescentes y

jóvenes, en su mayoría pertenecientes a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas presentan necesidades humanitarias de protección ante el riesgo de reclutamiento, uso, utilización por parte de grupos armados no estatales, el trabajo infantil, la violencia y explotación sexual, los desplazamientos, muertes, mutilaciones y otros efectos de accidentes con MAP/MSE, entre otros, particularmente en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander<sup>70</sup>.



Para 2022, se estima que:



2.4M

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes presentan necesidades humanitarias

113k (4,6%)

Tienen necesidades críticas clasificadas en severidad catastrófica

Ubicadas en



23

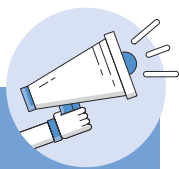
Municipios del país con grandes impactos y exposición a riesgos.

68. Visor de Alertas Tempranas <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Tablero>.

69. <https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2020/08/05/un-pueblo-resiliente-el-pueblo-indigena-wayuu-de-colombia>

70. La Defensoría del Pueblo ha identificado riesgo de reclutamiento, uso y utilización en 157 alertas tempranas, desde que fue puesto en marcha este sistema en 2017. Solo en el año 2020 emitimos un total de 45 alertas tempranas que advierten sobre esta problemática en 238 municipios, entre otros, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Véase en: <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/9912/Defensor%3%ADa-lanza-la-estrategia-2021-A%3%B1o-Contra-el-Reclutamiento-Forzado-de-Ni%C3%B1os-y-Adolescentes-reclutamiento-infantil-reclutamiento-forzado-Defensor%3%ADa-manos-rojas-conmemoraci%C3%B3n.htm>





***“Nos preocupan especialmente los jóvenes porque pueden ser reclutados por grupos armados. Estar desplazados y desempleados los pone en mayor riesgo”***

**- Representante de una autoridad local de Caucasia, entrevista IDMC**

Por otra parte, un gran número de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela presenta problemas de nutrición y padecen enfermedades que requieren atención médica constante. Igualmente es una población que requiere su asistencia a la escuela como un escenario de protección, dado que por su vulnerabilidad se han convertido en objetivo de abusos sexuales, laborales, trabajo forzoso y mendicidad<sup>71</sup>.

En segundo lugar, se estima que, cerca de 1,4 millones de niños niñas, jóvenes y adolescentes presentan necesidades de protección por el contexto de violencia armada<sup>72</sup>. En la primera infancia existe necesidad de educación inicial debido a un incremento en la deserción escolar por causa de la pandemia, donde al menos 381.268 niños, niñas, jóvenes y adolescentes abandonaron sus estudios en 2020, las tasas de deserción más altas se presentan en los departamentos de Cesar, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Se resalta que a causa de la deserción escolar aumenta el riesgo de reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados. Por otra parte, la coyuntura por el COVID-19 deterioró los resultados de aprendizaje, aumentando el número de niños y niñas con resultados mínimos e insuficientes; la calidad educativa más baja se presenta en los departamentos de Guaviare, Guainía, Cesar, Amazonas, Vichada, Vaupés y San Andrés y

Providencia<sup>73</sup>. Con las medidas preventivas tomadas ante la pandemia la falta de acceso a conectividad fue determinante contra la permanencia en la educación de niños, niñas y adolescentes. Las zonas rurales son más afectadas por la falta de acceso a educación a distancia y donde también se evidencia la más baja cobertura de internet es en Chocó, San Andrés, Caquetá, Putumayo, Arauca, Cauca y Nariño.

Las comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales, junto a los refugiados y migrantes de Venezuela, son la población principalmente afectada por el reclutamiento, uso y utilización. Se sabe de tácticas de este hecho victimizante que están teniendo lugar en escuelas (razón por la cual muchas familias deciden desplazarse de manera individual y/o enviar a sus miembros más jóvenes a otros departamentos y/o municipios para protegerlos. También se identifican situaciones de intimidación y amenaza directa a las familias de los jóvenes, adolescentes, niños y niñas, que terminan por coaccionarlos para unirse a las filas y/o actividades ilegales de los GANE. Además de las tácticas de reclutamiento, también existen las tácticas para lograr vinculación y utilización, mediante el ofrecimiento de mejores condiciones de vida, oportunidades laborales, motos y otros medios de transporte, celulares y tabletas electrónicas, entre otros bienes de lujo para convencer a la población a unirse a los GANE.

Si bien los hombres, niños, adolescentes y jóvenes varones son reclutados mayoritariamente para hacer parte de las filas armadas de dichos grupos, las mujeres y niñas son reclutadas y/o utilizadas como “campaneras” o informantes, para combatir, patrullar, armar explosivos, entre otros. Ellas están más expuestas a violencia sexual, dado que en algunos casos son forzadas a mantener relaciones sexuales y/o sentimentales de corto y medio plazo con miembros de los GANE y con posibles nuevos reclutas, como acto de convencimiento para que se unan a dichos grupos<sup>74</sup>. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes también son

71. UNAL. La difícil situación de la niñez migrante venezolana. Véase en: <http://ieu.unal.edu.co/medios/noticias-del-ieu/item/la-dificil-situacion-de-la-ninez-migrante-venezolana>

72. Según el subgrupo de niñez del clúster de Protección

73. Según datos del clúster de Educación en Emergencias

74. Información basada en el análisis e insumos cualitativos que realizaron los ELC

utilizados, junto a los adultos, como “raspachines” o cultivadores de la hoja de coca. En algunos reportes se informa que las comunidades son forzadas por los GANE a proteger dichos cultivos frente a actividades de erradicación forzada.

En 2021, se mantuvieron las afectaciones relacionadas con el difícil acceso a las zonas rurales y dispersas, además de una baja conectividad que limita la educación virtual o a distancia. Asimismo, se identifican dificultades para el retorno a las clases presenciales por confinamientos, restricciones a la movilidad y acceso y desastres de origen natural.

Es importante anotar que en el contexto humanitario las mujeres, niñas, niños y adolescentes son quienes están en mayor riesgo de experimentar situaciones de explotación y abuso sexual (EAS). Por tanto, es clave continuar estableciendo acciones frente a estos hechos, fortaleciendo el cumplimiento de los estándares mínimos de operación en prevención y protección contra la explotación y abuso sexual (PEAS) por parte de todos los actores involucrados en la respuesta humanitaria<sup>75</sup>.



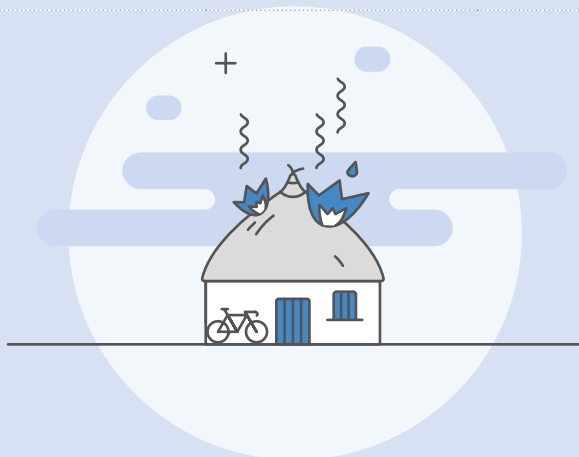
#### MAPIRIPÁN/META. COLOMBIA

Escuela Jorge Eliecer Gaitán  
Crédito de la foto: NRC, 2021

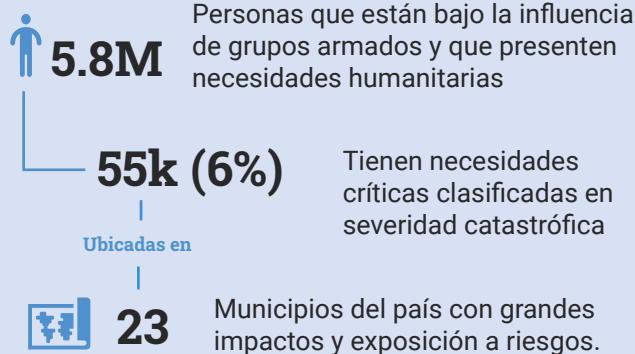
75. Estándares mínimos de Operación de PEAS establecidos por el IASC (2012).

## Grupo vulnerable: Personas que viven bajo la influencia y control de grupos armados

POBLACIÓN TOTAL	DE LAS CUALES: MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
<b>5,8M</b>	<b>-</b>	<b>6k</b>	<b>3M</b>	<b>2,5M</b>	<b>0k</b>



Para 2022, se estima que:



### Vivir bajo la presencia, influencia y/o control de grupos armados no estatales (GANE)

Aproximadamente 5,8 millones de personas se encuentran bajo la influencia y/o control de grupos armados no estatales, se estima que 4,6 millones de personas están en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos como consecuencia directa de la violencia y al menos 689.000 personas están en alto riesgo de sufrir algún daño producto de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el próximo período. Dicha población presenta diversas afectaciones sobre su bienestar físico y mental, así como en el desarrollo de su proyecto de vida.

Entre 2017 y 2021, la Defensoría del Pueblo ha emitido 61 Alertas Tempranas en las que identifica alguna forma de imposición de normas de conducta y/o pautas de comportamiento de la población por parte de grupos armados principalmente, en Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca<sup>76</sup>. En otras zonas

del país, como Norte de Santander y Arauca, los grupos armados no estatales amenazan a población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, expendedores de drogas, trabajadoras sexuales, ladrones y personas que cometen violencia sexual.

Durante 2021, se incrementó el número de emergencias por desplazamiento masivo (57%) y confinamiento (51%), respecto a 2020; lo anterior, fue generado en su mayoría por amenazas en contra de la población civil por parte de los GANE. La situación de seguridad ha empeorado para la población de los territorios con presencia de más de un actor armado no estatal. Municipios como Argelia (Cauca), Buenaventura (Valle del Cauca), las zonas del Telembí y la Cordillera (Nariño), la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), Bojayá, el Litoral de San Juan, Alto, Medio y Bajo Baudó (Chocó) son los lugares con el mayor número de emergencias reportadas durante 2021, y también con el mayor número de actores armados no estatales con alguna acción de violencia reportada durante 2021.

76. Defensoría del Pueblo. <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Tablero>

Vivir bajo la presencia, influencia y/o control de los GANE tiene un impacto humanitario intersectorial, que va más allá de las emergencias masivas. Este impacto se genera a partir de múltiples violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que influyen sobre los riesgos de protección enfrentados por la población a nivel individual, familiar y comunitario. Los GANE imponen códigos de conducta a través de panfletos amenazantes, toques de queda y paros armados que limitan la movilidad libre de la población (principalmente en horas nocturnas) y generan fronteras invisibles, limitando así, el acceso a bienes y servicios básicos y a derechos fundamentales.

En muchas zonas controladas por grupos armados y donde falta la presencia constante integral del Estado, los GANE regulan muchas facetas de la vida cotidiana de la población incluyendo su movilidad, su capacidad de obtener alimentos o de garantizar sus medios de vida. Según el análisis realizado en diferentes ELC, se conocen casos puntuales en donde la resolución de tensiones en las comunidades fue mediada por los actores armados no estatales y donde la imposición de medidas violentas para prevenir el contagio de la COVID-19 fueron ejercidas sobre la población civil.

Existen diferentes bienes y servicios que son distribuidos de acuerdo con las consideraciones de los GANE. En comunidades rurales de acceso remoto se ha reportado el decomiso de alimentos -incluyendo animales de caza- para alimentar a los miembros de estos grupos armados. Así mismo, se restringe el uso de instrumentos para la comunicación -celulares, tabletas electrónicas, etc.- según lo establezca el GANE y para beneficiar sus operaciones armadas (por esta razón muchos confinamientos sufrieron demoras de hasta dos meses en su reporte y visibilización a la institucionalidad). En algunos casos, las mujeres y niñas de las comunidades son forzadas a mantener relaciones sexuales e inclusive relaciones sentimentales con miembros de estos grupos para asegurar la protección de sus familias y comunidades.

Los GANE implementan prácticas de control social a través de lo que ellos denominan “*limpieza social*”. En este proceso paradójicamente se convierte en objetivo militar cualquier persona que incumpla códigos de conducta impuestos por dichos grupos, tales como: ladrones, trabajadores sexuales, población con orientaciones sexuales e identidades

de género diversas, expendedores y consumidores de drogas alucinógenas. Los/las adolescentes y jóvenes han sido históricamente víctimas de esta práctica, que no solamente se expresa en el asesinato, sino también en amenazas, desplazamientos, hostigamientos, control de las manifestaciones de expresión de éstos, entre otros. En muchos de estos casos, las comunidades temen denunciar los hechos victimizantes ante las autoridades locales por las represalias y amenazas que podrían tener los GANE en su contra, al considerar a quienes realizan estas denuncias como informantes o colaboradores de la Fuerza Pública o el grupo armado opositor especialmente en zonas de disputa o donde el control territorial ha empezado a ser ejercido por otro grupo.

En los municipios con alta presencia de actores armados no estatales, el uso de la tierra y bienes privados de la población está sujeto a las actividades ilícitas que lleven a cabo los GANE (desde narcotráfico hasta minería ilegal y deforestación). Hay reportes de personas que, son obligadas a vender sus tierras y/o a participar en actividades ilícitas. Las comunidades se ven forzadas a desplazarse a territorios donde sus derechos fundamentales y el acceso a servicios básicos puedan ser provistos sin intervención ilegal de dichos actores. Sin embargo, en muchos casos las administraciones locales de las comunidades de acogida no cuentan con los recursos económicos ni la capacidad de respuesta suficiente para garantizar la atención de necesidades humanitarias de las personas desplazadas en el mediano y largo plazo; así que muchas comunidades optan por retornar sin garantías de seguridad, corriendo el riesgo de ser revictimizadas por los mismos hechos en el corto y mediano plazo.

En cuanto a los territorios con presencia de múltiples actores armados no estatales, se presentan constantes enfrentamientos por el control territorial que dejan a la población en medio del fuego cruzado. En dichos territorios ha incrementado la instalación de MAP y por estas razones, las comunidades son forzadas a confinarse para proteger su integridad física y mental.

En el período preelectoral se ha identificado que, para incrementar el control social sobre la población, los GANE han amenazado y/o atacado directamente a líderes comunitarios, candidatos locales y miembros activos de espacios democráticos y de toma de decisiones comunitarias.



## Grupo vulnerable: Comunidades étnicas

POBLACIÓN TOTAL	DE LAS CUALES: MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
<b>1,9M</b>	<b>27k</b>	<b>232k</b>	<b>735k</b>	<b>1M</b>	<b>129k</b>

**Comunidades étnicas. Las personas de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas concentran las necesidades más severas.**

Al menos 1,9 millones de personas pertenecientes a comunidades étnicas presentan necesidades humanitarias, desde las cuales el 67 por ciento corresponde a población afrodescendiente y el 33 por ciento a comunidades indígenas, ubicadas en regiones como el Pacífico donde es necesario incluir la asistencia técnica a cabildos y autoridades indígenas ya que los mecanismos de protección colectiva y de autoprotección no suelen ser suficientes. En el Noroccidente, Orinoquía, Amazonía y Caribe se concentran las necesidades más severas, siendo los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables.

El bienestar físico, la autonomía y supervivencia de los pueblos étnicos se ven gravemente amenazados por la carencia en la provisión de servicios básicos de salud, alimentación, agua y saneamiento, entre otros, agudizada por la pandemia de la COVID-19. Tras las emergencias humanitarias por desastres o por factores de violencia armada, las comunidades étnicas presentan altas necesidades de alojamiento. Los pueblos indígenas ubicados en zonas rurales poco habitadas, cerca de pasos fronterizos, o controladas por redes de narcotráfico y del crimen organizado, tienen mayores dificultades de acceder a los centros



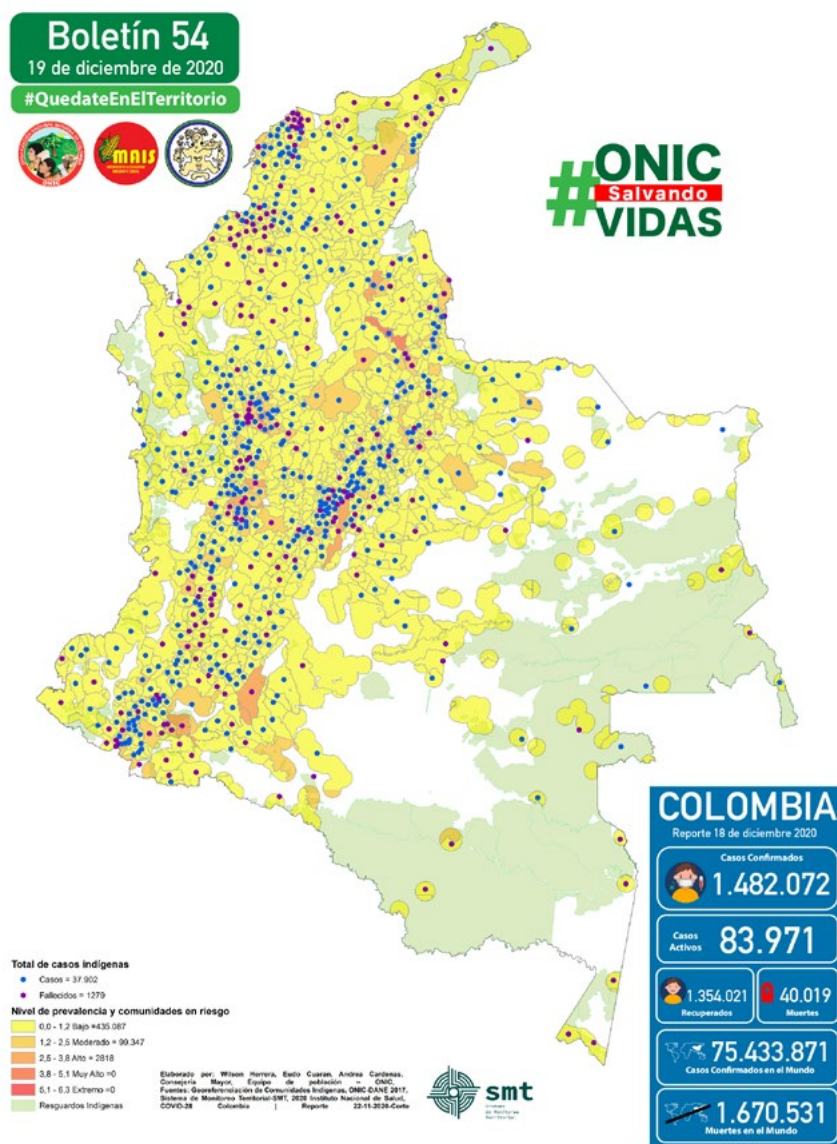
de atención o a los sistemas de protección social. Los problemas de discriminación étnica, violencia de género, violencia no convencional, minería ilegal, y deforestación acelerada son otras marcas importantes que afectan de sobremanera a los pueblos indígenas<sup>77</sup>.

77. Pueblos indígenas y COVID-19 en América Latina. Véase en: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PUEBLOS%20INDIGENAS%20Y%20COVID-19.pdf>

Con todos los antecedentes se hace necesario reflexionar sobre el panorama humanitario de los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes, que hacen parte de los grupos con mayores niveles de vulnerabilidad y que han sido afectados en el último periodo por múltiples afectaciones como la violencia, desastres de origen natural y por la COVID-19; esto da cuenta de las micro afectaciones que implican el desarraigo del territorio y las afectaciones al tejido colectivo de los pueblos, afectando especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas y afrodescendientes.

Estas afectaciones no solo generan un desequilibrio individual frente a la calidad de vida, la salud de las personas y la pérdida de capacidades individuales, sino que debilitan la estructura organizativa y espiritual de los Pueblos al limitar el acceso a sitios sagrados, para el desarrollo de pagos espirituales para mantener el orden desde las leyes de origen y mitos fundantes. Además, tienen un efecto de detrimento sobre sus sistemas de cuidado, como los mecanismos propios de salud donde médicos y autoridades espirituales no pueden sostener sus huertas de plantas medicinales, afectando las semillas y los cultivos propios y,

### Comunidades indígenas rurales y urbanas en riesgos por cercanía a centros poblados con casos confirmados según prevalencia y letalidad del virus



Fuente: Corte 13 de diciembre: <https://www.onic.org.co/noticias/4096-boletin-054-sistema-de-monitoreo-territorial-smt-onic-informacion-para-proteger-la-vida-y-los-territorios>

generando insuficiencias en la seguridad alimentaria y nutricional. Adicional a la limitación de los medios de vida, se limitan las oportunidades para adolescentes y jóvenes especialmente mujeres quienes tienen acceso limitado a centros educativos, además de ser cooptados por el reclutamiento forzado o las economías ilegales en estos territorios.

Por otro lado, **los asesinatos sistemáticos efectuados contra líderes indígenas y afrodescendientes** han evidenciado la situación crítica que se presenta en los territorios posterior al Acuerdo Final con la extinta guerrilla FARC-EP. De 421 asesinatos (teniendo en cuenta que la pandemia generó demoras para verificar casos de 2020), 130 corresponden a líderes comunales, 67 a líderes comunitarios, 69 a líderes indígenas, 33 a líderes campesinos, 18 a líderes afrocolombianos, sumados a 12 casos de sindicalistas y 10 de defensores de víctimas, entre otros. El impacto de este fenómeno sobre las comunidades indígenas es desproporcionadamente alto, y entre el 10 y 15 por ciento de las víctimas fueron mujeres<sup>78</sup>.

Este tipo de violencias afecta de manera contundente el pilar fundamental de los pueblos indígenas y afros, debilitando vocerías y estrategias de protección como las sendas de cuidado y autoprotección de territorios y del corazón de las comunidades, siendo los líderes la columna vertebral de los pueblos étnicos en sus componentes de participación, protección y cuidado colectivo.

Dentro de esos desafíos, se evidencian oportunidades de fortalecimiento de los sistemas propios de salud, en los que se resignificó para algunos pueblos indígenas el *volver al origen* como misión de los senderos de protección desde las organizaciones nacionales y regionales de los pueblos indígenas y en algunos territorios interétnicos como en los departamentos de Chocó y Cauca. Lo anterior, permitió establecer mecanismos propios de cuidado desde el sistema indígena de salud propia e intercultural, además, en el tiempo de confinamiento, la guardia indígena fortaleció su rol como garante de la preservación de la armonía y la protección de los pueblos indígenas con la articulación permanente entre médicos tradicionales, sabedores ancestrales y autoridades espirituales que sostuvieron los territorios en este periodo de pandemia. Aun así, son preocupantes los indicadores en materia de salud sexual y reproductiva y nutrición, donde los servicios estuvieron limitados y los indicadores con relación a la mortalidad materna, desnutrición y otras enfermedades crónicas aumentaron para el presente año.

En 2021, **se destacaron las afectaciones de comunidades indígenas por la presencia de MAP/MSE en Antioquia, Chocó y Guaviare**. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) registró **24 nuevas víctimas indígenas entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de septiembre**, incrementando en un 20 por ciento el número de víctimas indígenas registradas en comparación con el 2020.

78. Seguimiento en medios: Human Rights Watch presenta Informe sobre situación de Defensor@s de Derechos Humanos en Colombia ([hchr.org.co](https://www.hchr.org.co))

# Grupos vulnerables: Personas desplazadas, confinadas y población de acogida

POBLACIÓN TOTAL	DE LAS CUALES: MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
<b>1,3M</b>	<b>35k</b>	<b>222k</b>	<b>471k</b>	<b>618k</b>	<b>251k</b>

## Aumento de las consecuencias humanitarias de la población desplazada, confinada y población de acogida.

Según la Defensoría del Pueblo<sup>79</sup> de Colombia, los colectivos mayoritariamente afectados por este fenómeno son aquéllos que enfrentan una situación de vulneración histórica y estructural, tales como las comunidades étnicas indígenas y afrodescendiente (en el 59% de los casos) y la población campesina. **Las personas en situación de desplazamiento forzado** son vulnerables (454.000 personas) porque en ellos concurren factores como la pérdida de la tierra y de la vivienda/hogar, el desempleo, que los deja en unas condiciones de vulnerabilidad propiciando la marginación, el incremento de la morbilidad y de la mortalidad, la inseguridad alimentaria, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros y la desarticulación social, adicionales a los efectos traumáticos del desarraigo y desalojo. Cabe resaltar que la causa principal de los desplazamientos son las amenazas (45%) directas contra la población civil por parte de grupos armados no estatales (GANE), los enfrentamientos entre grupos armados no estatales (31%) entre otras acciones armadas.

En 2021 la cantidad de personas desplazadas internas en el país aumentó en un 176 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020<sup>80</sup>, mientras que los datos registrados por la UARIV muestran un aumento del 29 por ciento en el mismo período<sup>81</sup>; este escenario aumenta las necesidades de protección, alojamiento, seguridad



Para 2022, se estima que:



**53,9k**

Personas confinadas que presentan necesidades humanitarias

**830k**

Personas que pertenecen a una comunidad de acogida y presentan necesidades humanitarias

**454 k**

Personas desplazadas que presentan necesidades humanitarias

**111k (24%)**

Personas desplazadas en nivel de severidad crítico

**39k (73%)**

Personas confinadas en nivel de severidad crítico

**100k (12%)**

Personas de comunidad de acogida en nivel de severidad crítico



Ubicadas en

**23**

Municipios del país con grandes impactos y exposición a riesgos concentran a personas confinadas con un nivel de severidad catastrófico.

79. <https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10268/Defensor%C3%ADa-alerta-ante-el-aumento-de-eventos-de-desplazamiento-masivo-y-confinamiento-de-comunidades-desplazamiento-confinamiento-Defensor%C3%ADa.htm>

80. OCHA. Monitor 2021. Corte a 31 de diciembre de 2021

81. Fuente: UARIV-RNI con corte a 31 de diciembre registra en 2021 123.953 personas desplazadas y en 2020 96.1551 (<https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/enfoqueDiferencial>)



alimentaria, salud y en otros sectores relacionados a su bienestar y subsistencia. En algunos municipios en Nariño, Chocó, Cauca, Antioquia y Norte de Santander el desplazamiento forzado profundiza las necesidades existentes de las poblaciones que se convierten en **comunidades de acogida** de personas desplazadas internas, así como de refugiados y migrantes; y de afectados por desastres de origen natural, ejerció presión adicional sobre estas comunidades y territorios, aunada al desbordamiento de la capacidad de respuesta de las administraciones locales ante la recurrencia de estos eventos. Esto conlleva retos importantes en torno a la integración de todas estas poblaciones vulnerables, ocasionando el incremento de escenarios de discriminación y, en el caso de la población refugiada y migrante venezolana de xenofobia, lo que dificulta su integración.

A diferencia de la población víctima de desplazamiento forzado, las **personas confinadas** sufren necesidades humanitarias específicas de: i) **protección** -dado que su integridad física se encuentra en constante riesgo ante la

presencia y accionar de los GANE; ii) **seguridad alimentaria** -dado que la instalación de MAP o las amenazas de los GANE, cohiben a la población de acceder a sus cultivos de pan coger, zonas de pesca y caza comunitaria -; iii) **salud** -no se permite la movilidad para acceder a puestos de salud propiciando el aumento de los síntomas psicosomáticos relacionados con la ansiedad y el miedo de vivir bajo el accionar de los actores armados-; y por último iv) **educación** -la asistencia a las escuelas se imposibilita, dado que aumentan los riesgos de reclutamiento forzado en las instituciones y en las vías que conducen a éstas, limitando o anulando las expectativas de vida de los niños, niñas y adolescentes-.

Miles de personas sufren múltiples desplazamientos incrementando el nivel de vulnerabilidad y afectando particularmente a grupos étnicos y mujeres jefes de hogar.



MUNICIPIOS DE MAGÜI PAYÁN Y ROBERTO PAYÁN / NARIÑO. COLOMBIA

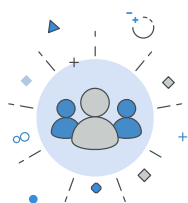
Población en evento de desplazamiento.

Crédito de la foto: Felinto Córdoba, OCHA, 2021

# Evaluación de Necesidades Multisectoriales (MSNA) - Colombia 2021

Los diversos choques que afectaron a Colombia durante 2021, tales como las nuevas dinámicas de la violencia, desastres, flujos migratorios regionales y la pandemia de la COVID-19, impactaron las vulnerabilidades estructurales de los hogares, lo cual se vio reflejado en LSG entrelazadas que afectaron a una buena parte de los hogares en los departamentos de evaluación. De manera general, la población desplazada interna y los grupos étnicos evaluados (afrocolombianos e indígenas) reportaron niveles de necesidades no cubiertas más altos y de una forma acentuada en las LSG de los sectores de: Agua, higiene y saneamiento (WASH) y Salud.

## Resultados destacados



Un poco más de la mitad

**55%**

de los hogares de población de acogida reportaron tener al menos una necesidad no cubierta en uno o más sectores de interés.

### A nivel departamental

Las proporciones más altas de hogares con una o más necesidades no cubiertas para población de acogida fueron reportadas en:

**90%**

La parte norte de Nariño (en la subregión 2)

**86%**

La Guajira

### La población desplazada interna

reporta el porcentaje de necesidades no cubiertas más alto

**84%** de los hogares

Seguida de la población:

**75%** Afrocolombiana

**68%** Indígena

En el área de evaluación.



Más de un cuarto de los hogares de población de acogida

**28%**

indican tener una LSG en más de un sector simultáneamente, mostrando la interconexión de estas necesidades.

### Las LSG en los sectores de

**26%** Salud

**22%** WASH

**20%** Seguridad Alimentaria

**18%** Alojamiento

Presentaron los porcentajes más altos para población de acogida.

### Las LSG presentadas en el punto

**anterior** coinciden parcialmente con las prioridades percibidas de los hogares tal y como fueron reportadas:

**68%** Empleo

**68%** Comida

**44%** Apoyo para el alojamiento








MUJER INDÍGENA EN GUAINÍA, 2021

Por REACH.

### La población afrocolombiana




reportó LSG considerablemente más elevadas en:

-  **48%** WASH
-  **36%** Seguridad alimentaria
-  **35%** Alojamiento

Comparadas con el resto de los sectores.

### La población indígena





reportó LSG considerablemente más elevadas en:

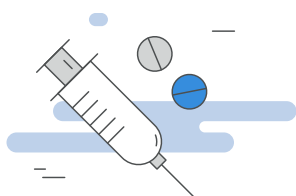
-  **43%** WASH
-  **34%** Alojamiento
-  **32%** Salud

Comparadas con el resto de los sectores.

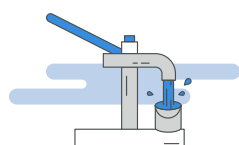
### La población desplazada interna

reportó LSG más altas en todos los sectores evaluados, siendo los sectores prioritarios resaltados por estos hogares:

-  **49%** Alojamiento
-  **45%** WASH
-  **46%** Seguridad Alimentaria
-  **36%** Salud



**El acceso a servicios de salud en los 3 meses previos a la recolección de datos se vio principalmente limitado por barreras reportadas de disponibilidad del servicio** (incluyendo centros de salud, tratamientos, medicinas y personal médico). Los hogares de población de acogida que reportaron haber buscado asistencia médica indicaron que fue principalmente debido a una urgencia (55%); en paralelo, la COVID-19 fue también una razón reportada por el 18% de los mismos.



La mayoría de la población de acogida indicó consumir agua de una fuente mejorada

**87%**

durante el mes previo a la recolección de datos; en contraste, la parte de la población que reportó que no logró acceder a una fuente mejorada se encuentra especialmente concentrada en ciertos departamentos:

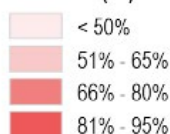


**En Vaupés el 75%** de los hogares reportaron la lluvia como su fuente principal de agua



**En el norte de Nariño (subregión 2) y Norte de Santander**  
El 25% y 17% de los hogares (respectivamente) indicaron como fuente principal un río, quebrada, nacimiento o manantial.

% de hogares de población de acogida con necesidad(es) no cubierta(s)



### En cuanto a alojamiento

Aún cuando la mayoría de los hogares de la población de acogida indicó habitar en casas o departamentos terminados (79%) al momento de la recolección, las condiciones reportadas de las viviendas son precarias; a modo de ejemplo, casi la mitad de los hogares reportaron tener goteras en su vivienda cuando llueve (48%).

**Los hogares de población de acogida** indicaron que la modalidad predilecta en caso de ser beneficiarios de asistencia humanitaria es:

**44%** Dinero en efectivo

Seguido de:  
**30%** Comida

**Los hogares de población de acogida** reportaron preferir recibir información relacionada a la asistencia humanitaria por:

**78%** Teléfono

**39%** WhatsApp

**33%** Cara a cara





La mayoría de las personas desplazadas sufren múltiples desplazamientos, incrementando el nivel de vulnerabilidad y afectando particularmente a grupos étnicos y mujeres jefes de hogar.



# 300

personas desplazadas entrevistadas expusieron las necesidades que afrontan en cuanto a condiciones de vivienda



**Veces que las personas entrevistadas habían sido desplazadas:**

#### En Quibdó

Más del  
**30%**  
tres veces o más

**30%**  
dos veces o más

**39%**  
una vez

#### En Caucasia

**23%**  
tres veces o más

**23%**  
dos veces

**59%**  
una vez

#### En ambos casos preocupa:



El nivel de revictimización de la población y el porcentaje de jóvenes y niños, niñas y adolescentes a los que afecta

Encima del  
**49%**

#### Alta participación de comunidades étnicas que se reconocen como:

**94%** afrocolombianos  
(en Quibdó)

**22%** afrocolombianos  
(en Caucasia)

**13%** indígenas  
(en Caucasia)

Resultados de una encuesta realizada por IDMC en septiembre de 2021 **sobre los impactos del desplazamiento en las víctimas y en las comunidades de acogida de Quibdó (Chocó) y Caucasia (Antioquia)**. De las personas desplazadas y entrevistadas en Quibdó, más del 30 por ciento había sido desplazado tres veces o más, el 30 por ciento dos veces o más y el 39 por ciento una vez. En Caucasia el 23 por ciento de las personas desplazadas entrevistadas habían sido desplazadas tres veces o más, el 23 por ciento dos veces y el 59 por ciento una vez. En ambos casos preocupa el nivel de revictimización de la población, que además se caracteriza por un alto porcentaje de jóvenes y niños, niñas y adolescentes (por encima del 49%). Para ambos casos hay una alta participación de comunidades étnicas (94% se reconocen como afrocolombianos en Quibdó y el 22% y el 13% como afrocolombiano e indígena en Caucasia, respectivamente).

Las 300 personas desplazadas entrevistadas expusieron las necesidades que afrontan en cuanto a condiciones de vivienda y en sus comunidades de acogida. Refirieron precios de arrendamiento altos y hacinamiento, además de sentirse inseguros constantemente al no tener redes

de apoyo, medios de vida y documentación que permita dar fe de su condición de víctimas. Así mismo, los niños y niñas no retoman de manera regular e inmediata su asistencia a clases en las comunidades de acogida; en todos los casos entrevistados la inserción escolar demoró más de 11 meses.

Los jefes y jefas de hogar ven afectada la generación de ingresos al perder los empleos de sus lugares de desplazamiento y en la mayoría de los casos no pueden obtener un mismo salario en la comunidad de acogida -particularmente las mujeres-. En promedio el 47 por ciento de los entrevistados reporta que su condición de salud ha empeorado desde el desplazamiento y hay menos acceso a la asistencia de servicios de salud física y mental en sus comunidades de acogida, al tener que pagar con recursos propios la atención que, aunque limitada, previamente recibían de forma gratuita en sus lugares de origen. El acceso a servicios de salud está supeditado a la Empresa Prestadora de Salud del municipio y si ésta no está activa en el lugar de acogida del desplazamiento masivo, las personas afectadas sufren restricciones de acceso a estos servicios.

## Grupo vulnerable: Afectados por eventos de origen natural

POBLACIÓN TOTAL	DE LAS CUALES: MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO
914k	7k	41k	436k	422k	55k



### Afectados por eventos de origen natural y otras manifestaciones del cambio climático.

En relación con la población afectada por emergencias de origen natural, existen vacíos de información en los censos de las administraciones municipales y en los reportes de la UNGRD, por lo que no se cuenta con información desagregada por edad, sexo y etnia para los grupos vulnerables afectados por esta causa. Sin embargo, considerando las aproximaciones del Departamento Nacional de Estadística (DANE), se presume que al menos el 28 por ciento de la población afectada por estos eventos son niños, 30 por ciento mujeres, 14 por ciento adultos mayores, cinco por ciento indígenas y 11 por ciento afrocolombianos<sup>82</sup>. En relación con el impacto sobre los pueblos étnicos, esto implica adicionalmente que las afectaciones por desastres tienen un fundamento espiritual y depende de las cosmogonías ancestrales de vida de los pueblos, partiendo del relacionamiento del ser humano con la tenencia del territorio, el cuidado del agua, las acciones extractivistas de los suelos y los recursos minerales sin regulación. De igual manera, la falta de procesos de consulta previa a los territorios interétnicos que desbordan la posibilidad de armonizar en su medida los efectos del cambio climático.

Las poblaciones afectadas por desastres de origen natural, en donde las necesidades no se cubren,

deciden dejar sus viviendas de manera permanente, habitar a la intemperie o en condiciones de hacinamiento en comunidades de acogida que no están capacitadas ni preparadas para responder ante tales eventos. Por lo anterior, se suelen generar situaciones de conflictividades comunitarias y problemas de convivencia, sumado a factores como el temor al desalojo, inseguridad, desempleo, además de las dificultades de acceso a alimentos y agua potable por falta de infraestructura. Las necesidades más prioritarias se relacionan con **i) seguridad alimentaria y nutricional** (ante la pérdida de cultivos y medios de vida), **ii) alojamientos** tras los daños a las viviendas, **iii) agua, saneamiento básico y salud** para prevenir la transmisión de enfermedades por medio de vectores, asegurar el consumo de agua potable y prevenir el contagio de COVID-19<sup>83</sup> y otras enfermedades.

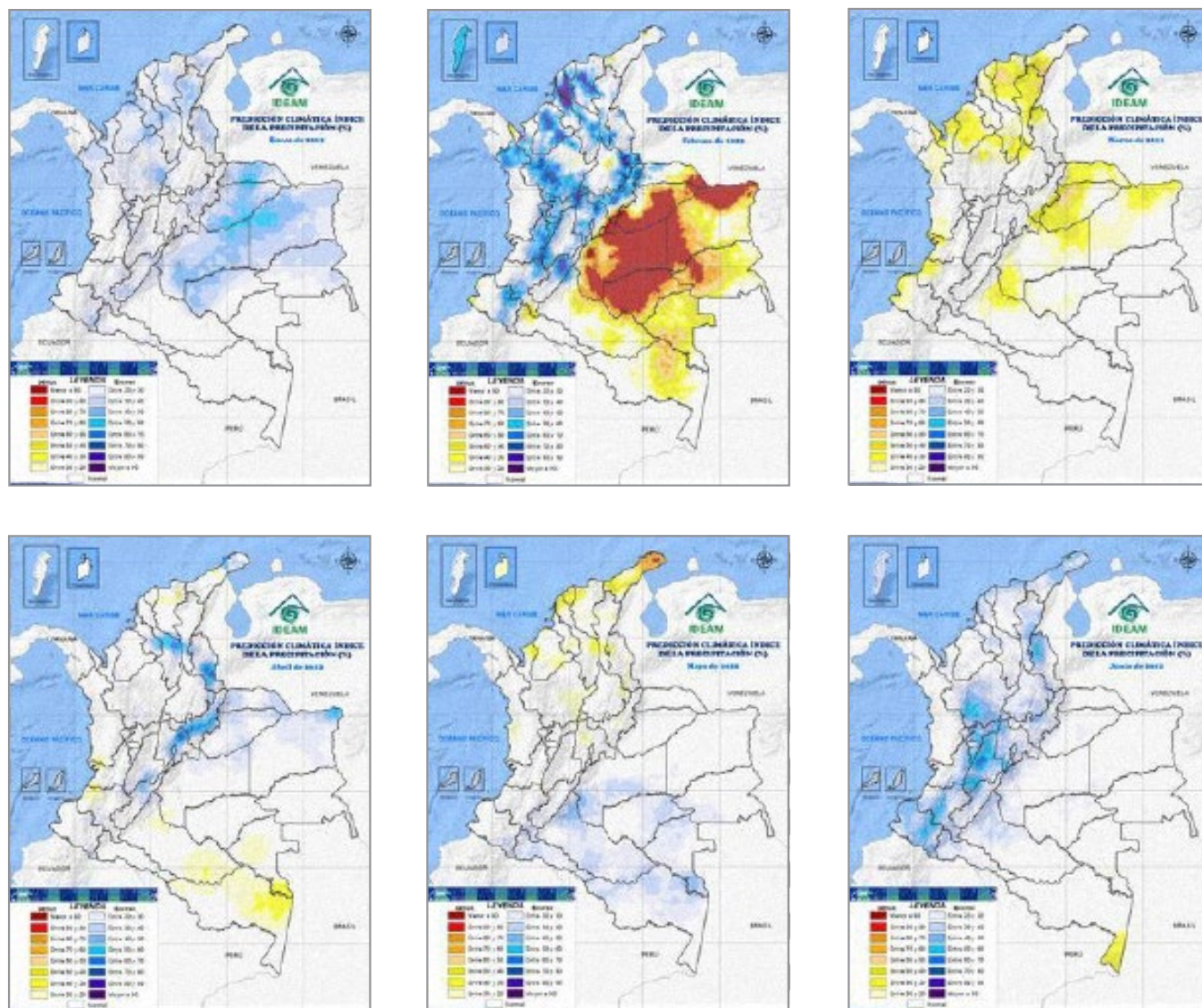
Por último, cabe señalar la doble afectación de población reasentada, ya sean desplazados internos, refugiados y/o migrantes provenientes de Venezuela u otras poblaciones, que se ven afectadas por desastres origen natural en sus lugares de acogida, que suelen caracterizarse por ubicarse en zonas de riesgo o por tener limitaciones en el acceso y gestión de servicios públicos, lo que en últimas conlleva una vulnerabilidad crónica y, en casos de eventos de desastres, una múltiple afectación.

82. OCHA. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210922\\_infografia\\_impacto\\_y\\_tendencias\\_humanitaria\\_agosto\\_2021\\_vff.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210922_infografia_impacto_y_tendencias_humanitaria_agosto_2021_vff.pdf)

83. OCHA. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia\\_impacto\\_y\\_tendencias\\_humanitarias\\_entre\\_enero\\_mayo\\_2021\\_vf\\_2.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_impacto_y_tendencias_humanitarias_entre_enero_mayo_2021_vf_2.pdf)

## Mapas de pronóstico del índice de precipitación

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y JUNIO DE 2022



Fuente: Informe de de predicción climática a corto, mediano y largo plazo. IDEAM (2021).

1.5

# Número de personas en necesidades

## Cifras actuales



En Colombia se identificaron al menos 7,7 millones de personas en necesidad que viven en 744 (66%) de los 1.122 municipios, en su mayoría en zonas rurales dispersas de difícil acceso; el incremento respecto al año anterior fue de un millón de personas, consecuente con el deterioro de la situación humanitaria del país por todos los factores mencionados en las secciones anteriores.

Se destacan grupos vulnerables con necesidades multisectoriales, como son los 5,8 millones de personas (76%) que viven bajo la influencia y control social y territorial de estos GANE en 373 municipios y en medio de múltiples violaciones a los derechos humanos; dichas violaciones son uno de los factores determinantes de la gravedad de las necesidades que, sumado a la contaminación con armas y la presencia de cultivos de uso ilícito, son advertidos como parte de los riesgos inminentes en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Entre las personas en necesidad, es importante destacar las vulnerabilidades particulares de comunidades étnicas que como afrodescendientes (17%), indígenas (8%), mujeres (35%), y los niños, niñas y adolescentes (32%) también son foco de atención.

En este sentido, la priorización geográfica se determina por las 2,9 millones de personas que viven en municipios clasificados en nivel de severidad extremo, quienes se concentran particularmente en la costa Pacífica (Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño), Bajo Cauca antioqueño y Catatumbo en severidad tres y cuatro con zonas apartadas y de difícil acceso (56%). De este total, cerca de 293.000 (4%) presentan necesidades agudas (por vivir en municipios clasificados en un nivel de severidad 5 o catastrófico), y están localizadas en áreas rurales dispersas de 23 municipios de seis departamentos (Bolívar, Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Cauca), que requieren atención urgente por la criticidad del impacto en sus vidas y un colapso en su bienestar.

Otros 2,6 millones de personas con necesidades extremas viven en 279 municipios (25%) clasificados en un nivel de severidad extremo, y también necesitan una respuesta humanitaria intersectorial para mitigar afectaciones ante la falta de acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales que podrían estar a punto de colapsar; estas personas también se concentran en su mayoría en zonas rurales dispersas y otras en ciudades intermedias.





#### MONTERÍA/CÓRDOBA, COLOMBIA

Corregimiento de Loma Verde

Crédito de la foto: OCHA.

Una mayor proporción corresponde a las 4,8 millones de personas viviendo en municipios clasificados en nivel de severidad severa, distribuidas en 442 municipios (39%) con una alta exposición a riesgos. Las zonas priorizadas hacen parte de los departamentos de Amazonas, Putumayo, Vaupés, Vichada, Caquetá, Guaviare y sur del Meta, La Guajira, Antioquia y Córdoba. Adicional a la priorización e identificación de estas personas con necesidades, se determinó que el 25 por ciento de ellas pertenecen a grupos étnicos, ya sean pueblos indígenas o afrodescendientes, particularmente en el Pacífico y sur del país.

Preocupa en algunas ocasiones la doble afectación que se da por la confluencia de factores de violencia armada y emergencias climáticas, de donde se destaca que al menos 301.000 personas ubicadas en 557 municipios no han superado la afectación por emergencias asociadas a desastres, y de éstos, al menos 318 están bajo la influencia de grupos armados. Todas las personas en necesidades clasificadas en diferentes grupos vulnerables requieren de asistencia humanitaria en 2022 y serán objeto de seguimiento.



PERSONAS EN NECESIDAD A NIVEL PAÍS

**7.7M**



**51M**

Población total



**73,9k**

Personas desplazadas

**166**

Eventos masivos



**65,6k**

Personas confinadas

**56**

Eventos

#### DESPLAZAMIENTOS Y CONFINAMIENTOS

**55,6k**

Población indígena

**43k**

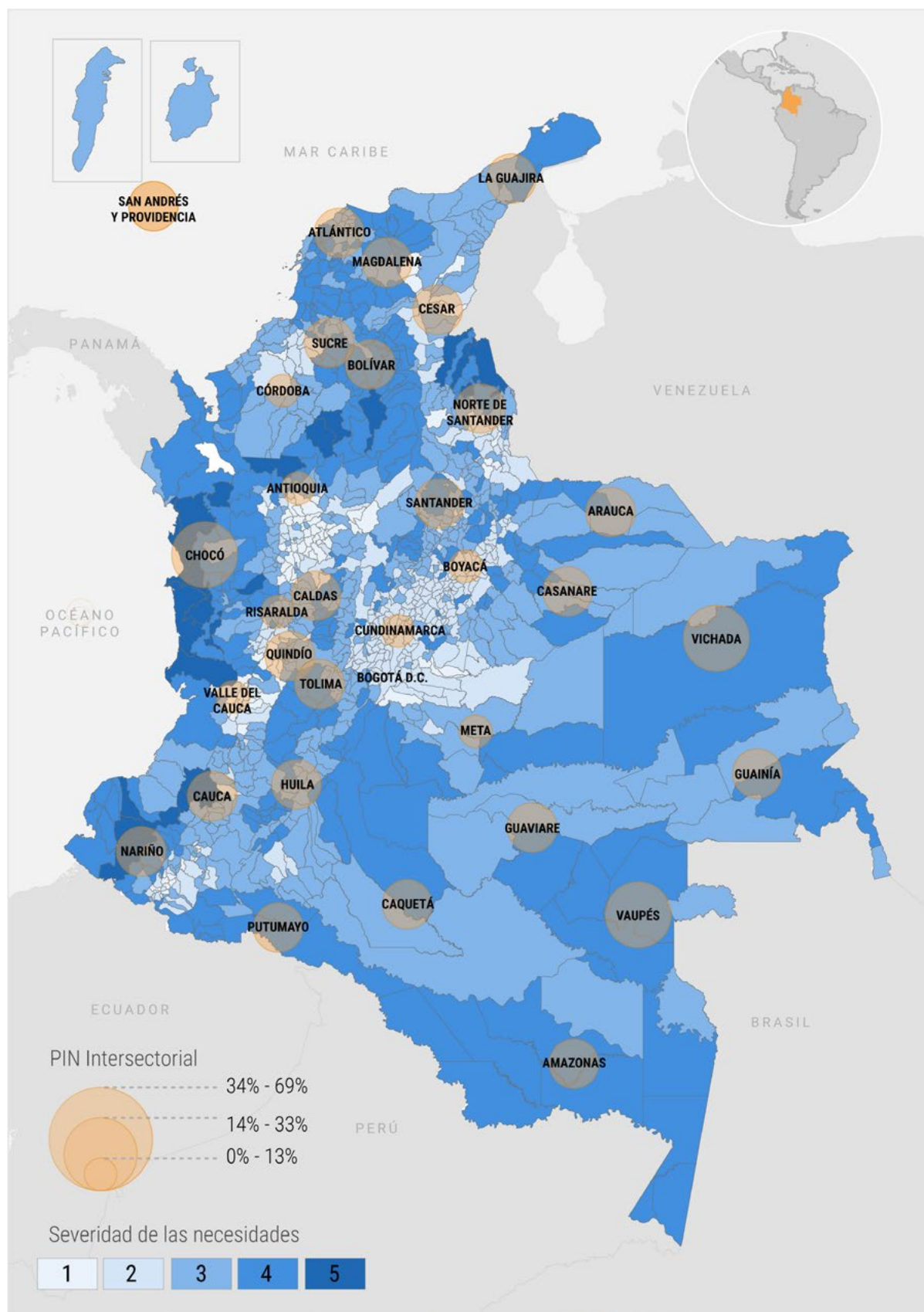
Población afrodescendiente

**592k**

Afectados por eventos de origen natural

Fecha de corte: Diciembre 2021

## MAPA PiN Y NIVELES DE SEVERIDAD 2022



Fuente: Monitor OCHA

## TABLA DEL PIN DESAGREGADO POR DEPARTAMENTO Y SEVERIDAD (VARIACIÓN CON EL PIN 2021)

DEPARTAMENTO	SEVERIDADES					TOTAL
	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERO	EXTREMO	CATASTRÓFICO	
Amazonas	-	-	474	23.078	-	23.552
Antioquia	113.081	405.176	382.607	226.178	47.816	656.601
Arauca	-	-	44.798	51.495	-	96.293
Archipiélago de San Andrés	-	-	16.168	-	-	16.168
Atlántico	-	-	667.388	43.279	-	710.667
Bogotá, D.C.	-	1.026.194	-	-	-	0
Bolívar	-	-	341.841	291.943	9.455	643.239
Boyacá	-	189.291	27.477	26.895	-	54.372
Caldas	-	-	242.774	15.316	-	258.090
Caquetá	-	4.461	78.904	21.913	-	100.817
Cauca	-	76.892	259.332	-	51.169	310.501
Casanare	-	-	94.684	21.983	-	116.667
Cesar	28.174	32.878	246.080	-	-	246.080
Córdoba	9.425	187.560	208.694	-	-	208.694
Cundinamarca	-	451.324	18.443	14.321	-	32.764
Guainía	-	-	9.650	5.672	-	15.322
Guaviare	-	-	20.325	2.812	-	23.137
Chocó	-	-	13.265	152.709	89.893	255.866
Huila	-	-	207.401	110.307	-	317.708
La Guajira	-	-	151.013	161.115	-	312.128
Magdalena	-	-	174.343	302.866	-	477.209
Meta	7.509	125.955	49.553	24.479	-	74.032
Nariño	15.826	140.624	48.314	280.831	52.308	381.453
Norte de Santander	3.887	31.569	316.326	31.350	42.554	390.230
Putumayo	-	3.110	22.250	71.321	-	93.571
Quindío	-	-	140.531	-	-	140.531
Risaralda	-	48.721	111.879	13.418	-	125.297
Santander	-	26.297	463.563	68.089	-	531.652
Sucre	-	-	116.910	192.080	-	308.990
Tolima	-	-	250.419	123.661	-	374.080
Valle del Cauca	94.130	464.800	42.795	251.165	-	293.960
Vaupés	-	-	922	24.284	-	25.206
Vichada	-	-	3.499	75.567	-	79.066
<b>Total general</b>	<b>272.032</b>	<b>3.214.851</b>	<b>4.772.622</b>	<b>2.628.129</b>	<b>293.194</b>	<b>7.693.945</b>



## Impacto regional

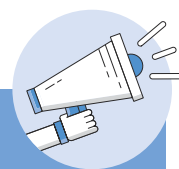
Las consecuencias humanitarias que sufren los grupos vulnerables en necesidad en varios territorios del país se manifiestan de forma diferente y dependen de la influencia de factores como la ubicación geográfica, el nivel de cobertura de servicios básicos, sus características culturales, su contexto histórico, sus recursos naturales y posición estratégica e incluso los mecanismos de afrontamiento de las personas afectadas frente a riesgos y amenazas.



LA PEDRERA/AMAZONAS, COLOMBIA

Brigada de salud de UNFPA

Crédito de la foto: OCHA



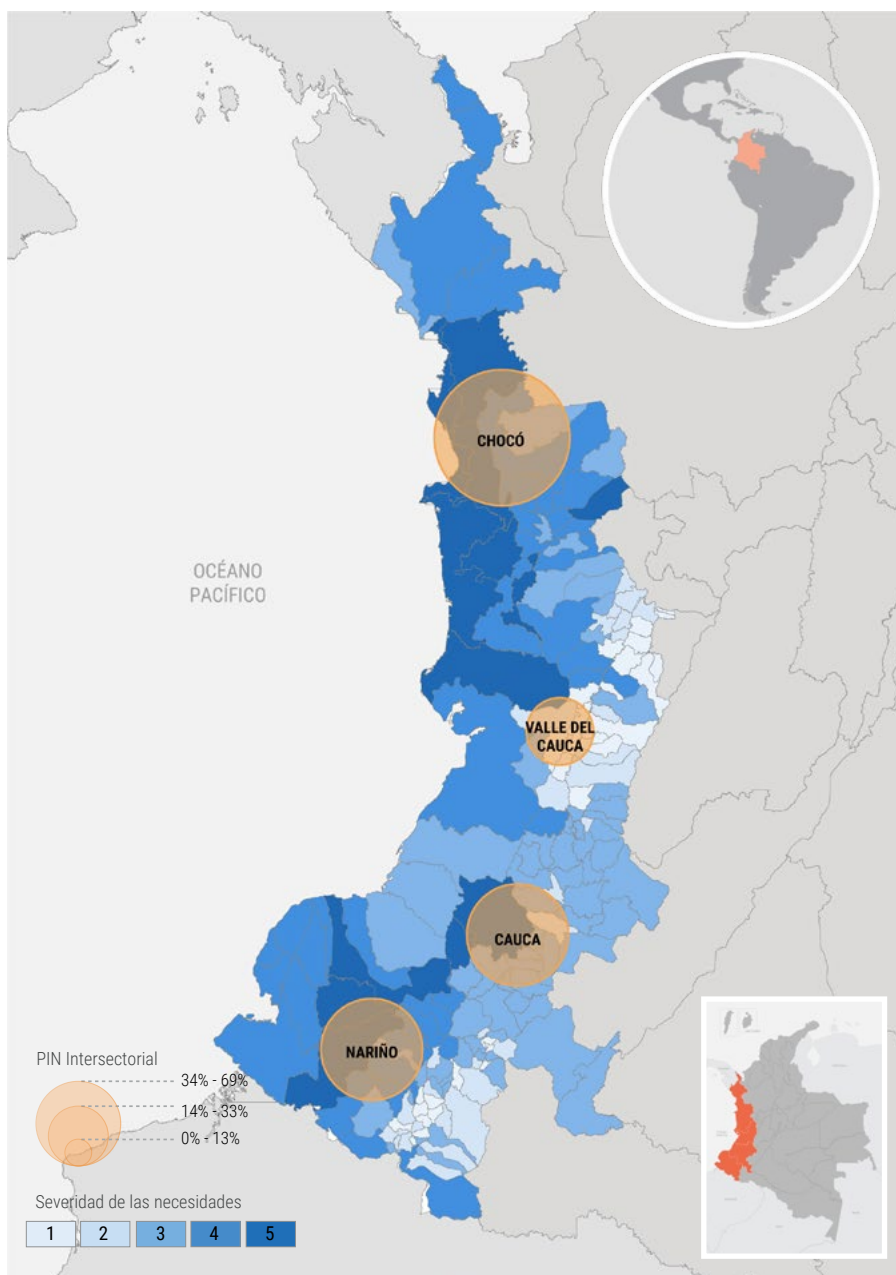
Existen factores estructurales que definen estos territorios, como las necesidades básicas insatisfechas (NBI), los altos índices de pobreza multidimensional, bajos niveles de escolaridad, baja cobertura del sistema de salud y violencias estructurales relacionadas con el no reconocimiento de diversas etnias y culturas que impactan en los medios de vida y mecanismos de resiliencia colectiva/comunitaria o individual de la población. A continuación, se presenta un análisis regional de las particularidades que afronta la población de las diferentes zonas del país.



## Región Pacífico

La región del Pacífico es una de las zonas más afectadas y complejas del país y requiere una atención particular. Los departamentos que componen la región Pacífico son Chocó (frontera con Panamá), Valle del Cauca, Cauca y Nariño (frontera con Ecuador). Estos territorios cuentan con una ubicación geoestratégica que facilita las rutas marítimas al océano Pacífico haciéndoles proclives al desarrollo de actividades ilícitas como el cultivo, procesamiento y tráfico de coca, la minería ilegal, las extorsiones, la explotación de oro y otros minerales. Se destacan

municipios como Tumaco, El Charco, Olaya Herrera (Nariño), El Tambo y Argelia (Cauca) que han concentrado históricamente grandes extensiones de cultivo de coca, y el departamento del Chocó que para 2020 registró un aumento del 25% en el total de área cultivada de coca. Cabe destacar que cerca del 57% del área cultivada de coca se concentra en territorios afrodescendientes e indígenas<sup>84</sup>. La ubicación geográfica de estos municipios también ha resultado en que su población sea objeto de una doble afectación frecuentemente por la recurrencia de desastres de origen natural como inundaciones y deslizamientos de tierra.



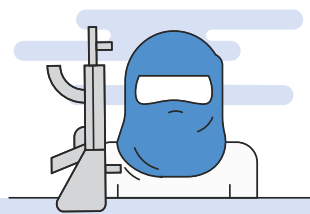
84. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020, UNODC ([ver enlace](#))

Dados los intereses de diversos GANE en estos departamentos, se han registrado constantes enfrentamientos, homicidios, amenazas selectivas, reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, instalación de MAP/MSE, desplazamientos masivos y confinamientos prolongados. En los departamentos del Cauca y Valle del Cauca se observa una dinámica enfocada en el debilitamiento de las estructuras sociales desde la violencia selectiva contra líderes y lideresas sociales, étnicos o autoridades étnicas, mientras que en los departamentos de Nariño y Chocó el accionar de los GANE se centra en instrumentos de violencia a una escala masiva contra comunidades, consejos comunitarios y resguardos indígenas.

### En Chocó:

Durante los últimos cuatro años, el departamento ha observado una tendencia al incremento en las afectaciones por confinamiento, una reducción significativa en las víctimas por desplazamiento forzado y una dinámica de multi-afectación de algunas comunidades rurales afrocolombianas e indígenas que se concentran en los medios de vida, seguridad alimentaria y salud asociada a necesidades de agua y saneamiento. Sólo el 12 por ciento del territorio del departamento está destinado a la producción de productos agrícolas lo que impacta la disponibilidad de recursos sobre todo en comunidades anfitrionas. La pandemia ha incidido en el aumento de las muertes maternas y del embarazo adolescente, ante la ausente o precaria infraestructura básica, vial y la falta de acceso a servicios de salud.

En la región del Baudó, alertan los niveles de desnutrición en menores de cinco años, la mortalidad materna (por abortos no seguros) y la muerte por otras enfermedades prevenibles. La salud mental y protección de las personas se ve afectada constantemente por el control y accionar armado de los grupos armados no estatales, quienes también limitan la movilidad de las comunidades dejando víctimas de desplazamientos masivos, confinamientos, homicidios, reclutamiento forzado. Es necesario implementar medidas de respuesta y protección a las personas sobrevivientes



### Incidentes reportados durante 2020 en la región Pacífico



Fuente: Monitor-OCHA (2020). Fecha de corte: diciembre 2021

de explotación sexual y otros hechos victimizantes, al igual que estrategias de respuesta para la recuperación de cultivos e ingresos para garantizar la seguridad alimentaria.

### Valle de Cauca:

Se identifican necesidades de educación en emergencia, debido a la pandemia por COVID-19, donde muchos niños, niñas y adolescentes desertan del sistema educativo por la carencia de conectividad y acceso a electricidad; también se identifican necesidades de agua, saneamiento e higiene, atención en salud, seguridad alimentaria, nutrición y protección. La Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas para Jamundí y Tuluá<sup>85</sup>, en las cuales se manifiesta

85. Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. <http://alertastempranasdpc-dev.azurewebsites.net/?anioBusqueda=2020&critorioBusqueda=Valle+del+Cauca>

que persiste la violación a los derechos humanos, los desplazamientos, restricciones a la movilidad de las comunidades y presencia de GAD. No obstante, es Buenaventura el municipio que desde finales de 2020 ha registrado al menos 11 eventos de desplazamientos masivos con más de 11.600 víctimas y 5 confinamientos con 3.400 víctimas por el accionar de GDO y GAO incurriendo en violaciones a los derechos humanos, tanto en zona urbana como rural.

Hay un subregistro de casos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes y trabajo infantil en niños en situación de calle. Adicionalmente, se identifican a los niños y niñas y a las personas en condición de discapacidad física y/o cognitiva como un grupo poblacional vulnerable puesto que se han identificado barreras de acceso a servicios de educación, salud y alimentación. Es importante mencionar que, las personas provenientes de Venezuela están sufriendo una doble afectación al ser desplazadas de manera interna por hechos de violencia (situación que también ocurre en Norte de Santander y Cauca; en estos casos es importante garantizar una atención específica y diferencial en términos de orientación legal y atención integral según sus necesidades y afectaciones.

### Cauca:

Comunidades de la zona norte y suroccidente del Cauca tienen presencia de cultivos de uso ilícito, control territorial y enfrentamientos entre los GANE que dejan a civiles en medio de fuego cruzado. Hay una contaminación significativa por MAP/MSE, y debido a ello los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de accidentes -10 nuevas víctimas fueron registradas por la OACP en el año 2021-. Se presenta reclutamiento, uso y utilización evidenciado en ocho alertas tempranas vigentes. Los grupos más afectados son los pueblos indígenas y afrocolombianos de la zona del Pacífico, norte y

sur caucano. Además, la pandemia impactó la libre movilidad hacia los cultivos, generando afectaciones en la seguridad alimentaria también en comunidades urbanas. La Gobernación decretó “Estado de alerta permanente” frente a feminicidios y otros hechos de violencia contra mujeres y niñas<sup>86</sup>.

En Argelia se destaca la situación de desplazamiento forzado, especialmente desde zonas rurales aledañas al centro de la municipalidad. A lo largo de 2021, este municipio ha reportado una intensificación de los factores de violencia armada, reflejada en 15 eventos por desplazamiento masivo, en donde al menos 6.778 personas han sido desplazadas por enfrentamientos y combates, incluyendo refugiados y migrantes. Esto representa un incremento del 1.400 por ciento en relación con lo reportado en el año 2020 (tres eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 871 personas en los municipios de Guapi y Argelia). El territorio además registra contaminación por artefactos explosivos en 42 municipios del departamento y en 41 se han reportado accidentes o incidentes; 16 son considerados como zonas de alta afectación, y en seis municipios (Suarez, Corinto, Buenos Aires, Caloto, Santa Rosa y Miranda) se encuentran suspendidas las misiones de desminado humanitario por condiciones de seguridad inadecuadas.

### Nariño:

Se destacan constantes enfrentamientos y violaciones de derechos humanos a comunidades de zonas rurales y en particular al pueblo indígena Awá, ocasionadas por la presencia y accionar de los GANE en la costa Pacífica, cordillera y frontera con Ecuador, en especial en los municipios de Tumaco, Roberto Payán, Magüí Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. En dichos municipios se reporta una **crisis de protección** y en muchos casos algunas de las alcaldías municipales se han declarado en incapacidad financiera para atender algunas de las emergencias.

86. <https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66766/gobierno-del-valle-eleva-alerta-por-asesinatos-de-mujeres/>

Durante la pandemia de la COVID-19, en gran parte de los municipios con mayor afectación (Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, Ricaurte, Policarpa, Leiva y Cumbal) se incrementaron las restricciones a la movilidad en un 148 por ciento<sup>87</sup> y control en zonas rurales por amenazas de los GAO y GDO; todas estas emergencias y afectaciones también impactan a un número indeterminado de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela

residentes en estas zonas, bajo un contexto de doble afectación. En municipios como Magüí Payán no se ha podido acceder para brindar respuesta humanitaria debido a las condiciones de seguridad. Adicionalmente, más del 70 por ciento de los estudiantes en áreas rurales no tuvieron acceso a la educación virtual, aumentando aún más los riesgos a violencia contra la niñez, intrafamiliar y reclutamiento, uso y utilización.

#### ROBERTO PAYÁN / NARIÑO. COLOMBIA

Población desplazada en albergue.

Crédito de la foto: Felinto Córdoba, 2021



87. Según [Monitor-OCHA](#), entre enero y 6 de diciembre de 2021 respecto al mismo período en 2020





DIBULLA/LA GUAJIRA, COLOMBIA

Evaluación MIRA

Crédito de la foto: UNICEF, José Rojas.

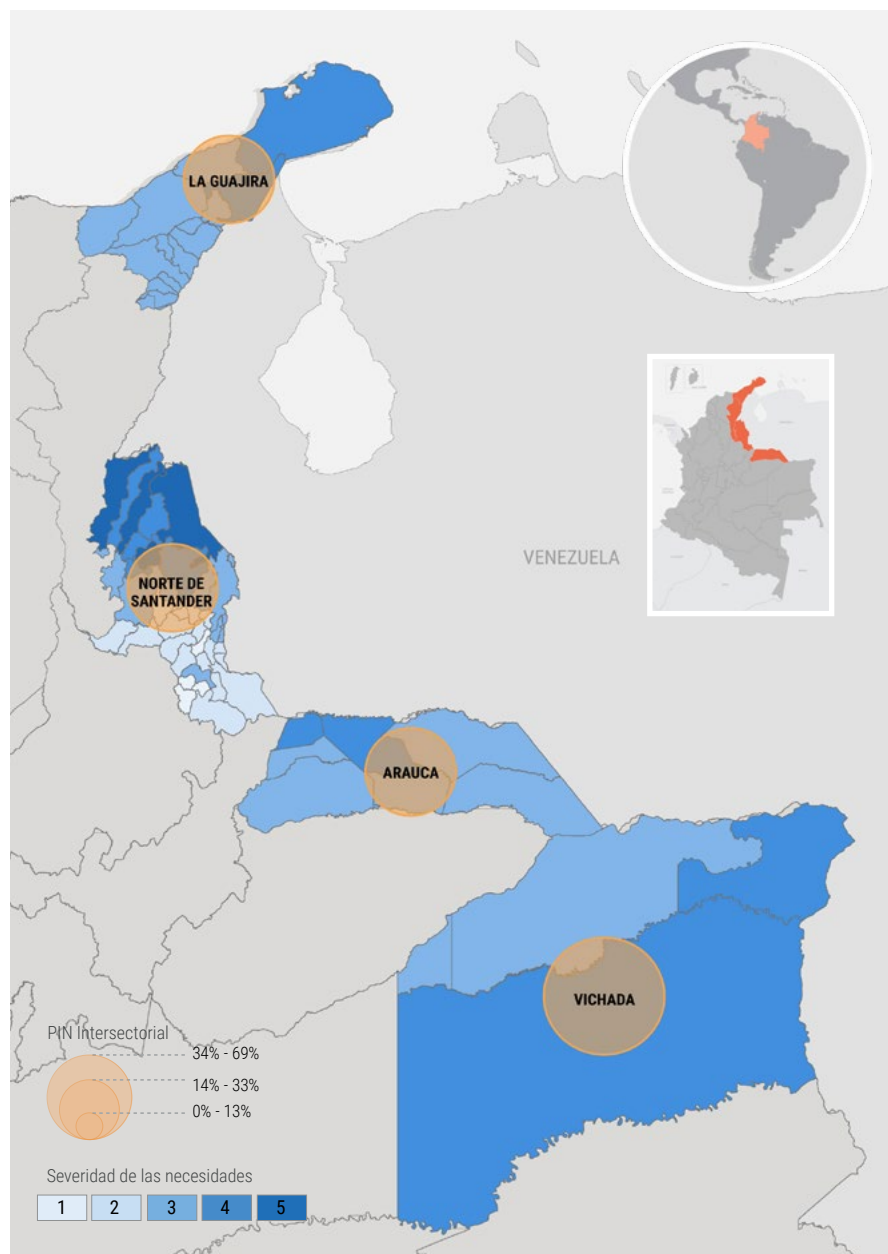
### Región Nororiental (frontera con Venezuela)

**En la frontera nororiental con Venezuela, los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Vichada presentan necesidades humanitarias asociadas a múltiples impulsores.**

La agudización de la violencia y las dinámicas de los grupos armados no estatales que se disputan el control territorial y las económicas ilícitas, especialmente en la frontera y zonas periféricas y/o dispersas con precario acceso a servicios y bienes fundamentales, aumentaron las vulneraciones en la población civil. El impacto se da de manera diferencial a las comunidades étnicas y campesinas, líderes y lideresas sociales, mujeres, niños, niñas y adolescentes, refugiados y migrantes, retornados provenientes de Venezuela, población de acogida y excombatientes en proceso de reintegración y reincorporación. Al compartir frontera con Venezuela, los departamentos tienen una elevada presencia de personas refugiadas y migrantes con vocación de permanencia y pendulares que enfrentan grandes barreras frente al acceso a derechos, servicios básicos

y oportunidades de medios de vida que se complejizan por los factores de violencia armada, la baja capacidad de respuesta local y la desigualdad y pobreza de las comunidades de acogida.

Adicionalmente, los desastres producto de la ola invernal y las variaciones climáticas, así como la emergencia sanitaria y socioeconómica por la pandemia de la COVID-19, acentuaron las necesidades en la salud física y mental de la población, el acceso a agua segura, saneamiento básico e higiene, alojamiento, educación y seguridad alimentaria y recuperación temprana en esta zona del país. Se destaca el alto riesgo de reclutamiento uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de comunidades campesinas, indígenas y población refugiada y migrante, así como de las violencias basadas en género y la presencia de artefactos explosivos que no sólo generan incidentes y/o accidentes sino también restricciones de movilidad y de acceso a medios de vida, limitaciones en la práctica de costumbres y tradiciones culturales, deserción escolar, entre otros.



## La Guajira

Las comunidades indígenas ubicadas en este territorio desértico y periférico de Colombia continúan presentando necesidades asociadas a los altos índices de pobreza (61,8%)<sup>88</sup> que están muy por encima de las cifras nacionales<sup>89</sup>, las cuales se agudizan por la presencia de grupos armados no estatales, las

consecuencias de la crisis humanitaria en Venezuela, la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19, el cambio climático y las conflictividades socioambientales por la extracción de carbón<sup>90</sup>. Se identificaron necesidades en la provisión de alimentos, altos niveles de desnutrición infantil<sup>91</sup> y con bajo peso al nacer<sup>92</sup>, importantes carencias de infraestructura

88. PNUD. (2021). Pobreza y desigualdad en la Región Caribe colombiana ¿Cómo recuperar la senda del desarrollo sostenible? Véase en: UNDP\_Co\_PUB\_Documentos\_Desarrollo\_Pobreza\_y\_Desigualdad\_en\_Region\_Caribe\_Abr22\_2021.pdf

89. DANE. Necesidades Básicas Insatisfechas: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

90. CINEP. <https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/tag/La%20Guajira.html>

91. HRW. (2021). El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia. <https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2020/08/05/un-pueblo-resiliente-el-pueblo-indigena-wayuu-de-colombia>

92. INS. [https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021\\_Boletin\\_epidemiologico\\_semana\\_44.pdf](https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_44.pdf)

y brechas para la provisión de agua y saneamiento básico, así como un escaso acceso a servicios de salud. En abril de 2021, la pandemia de la COVID-19 generó una situación de salud pública preocupante debido al alto nivel de contagio<sup>93</sup>; también aumentó la deserción escolar y generó efectos económicos negativos que podrían agudizar la pobreza y limitar aún más el acceso a bienes y servicios.

Alrededor de 41.000 personas resultaron afectadas en agosto de 2021 por las fuertes lluvias, crecientes súbitas, deslizamientos y fuertes vientos resultados de la temporada de ola invernal ocasionando necesidades en el acceso a albergue, seguridad alimentaria, salud y agua, saneamiento e higiene<sup>94</sup>. Aunque en menor proporción que otras zonas del país, en este departamento la presencia y accionar de unos grupos armados en algunas zonas también deja impacto en civiles por las agresiones y control social y territorial. Adicionalmente, las personas en movimientos migratorios mixtos provenientes de Venezuela se insertan en un contexto de afectación múltiple marcado por la presencia y accionar de grupos armados no estatales que incrementan el riesgo de vulneración de sus derechos humanos y las barreras para el acceso a medios de vida y subsistencia.

#### Norte de Santander:

La agudización de los factores de violencia armada en la región de Catatumbo, Cúcuta y área metropolitana, debido a la disputa por el control territorial de la frontera y las economías ilícitas y el impacto humanitario que genera su expansión y fortalecimiento así como al debilitamiento y degradación de sus prácticas<sup>95</sup> ocasionaron graves daños en la integridad, la salud y vida de las víctimas de las nuevas dinámicas de la violencia. Entre estas se encuentran, siete desplazamientos forzados masivos que afectaron a 918 personas en

2021<sup>96</sup>, homicidios, secuestros, feminicidios, riesgos de reclutamiento forzado, uso y utilización en campos de cultivos de uso ilícito, mendicidad y trabajo infantil de niños, niñas, adolescentes y jóvenes<sup>97</sup>, entre otras afectaciones en las que se involucra poblaciones con existentes como sucede con la población refugiada, migrante y retornada de Venezuela, población de acogida, comunidades étnicas y mujeres sobrevivientes de violencia basada en género.



#### Incidentes reportados durante 2020 en la región Frontera Nororiental



**36** Personas víctimas de masacres en

**9** Eventos



**18** Acceso humanitario



**65** Amenaza o control social



**43** MAP/MSE/TE



**42** Secuestros

Fuente: Monitor-OCHA (2020). Fecha de corte: diciembre 2021

93. OCHA. <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-impacto-por-contagio-de-covid-19-en-0>

94. OCHA. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20092021\\_actualizacion\\_01\\_alerta\\_por\\_inundaciones\\_en\\_la\\_guajira\\_vf.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20092021_actualizacion_01_alerta_por_inundaciones_en_la_guajira_vf.pdf)

95. Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N. 035-2020, Alerta Temprana N. 050-2020.

96. OCHA. Monitor de violencia armada.

97. Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana N. 050-2020; Alerta Temprana N. 035-2020, Alerta Temprana N. 004-2021.

La llegada de al menos 164.229 personas refugiadas y migrantes<sup>98</sup> provenientes de Venezuela, aumenta significativamente sus necesidades de protección, alojamiento, acceso a agua, alimentos, educación, salud y medios de vida. Por otra parte, en 2021 Norte de Santander se consolidó como el departamento con mayor área de cultivos de uso ilícito con 40.116 ha., que representa el 28 por ciento del área neta nacional de cultivos de uso ilícito; el municipio con mayor afectación es Tibú, con 19.334 ha., es decir, el 13 por ciento del total nacional<sup>99</sup>. Las limitaciones que tienen las personas para acceder a ingresos económicos, servicios y bienes básicos, así como la gran extensión de los cultivos de coca y la fuerte influencia de los GANE en la región hacen que la población vulnerable local, incluyendo los refugiados y migrantes, se vea obligada a trabajar en el cultivo de la coca, como una manera de obtener ingresos y garantizar su supervivencia. Adicionalmente, la ausencia de estrategias de desarrollo alternativo para intervenir este fenómeno dejan como única intervención las acciones de erradicación incrementan las tensiones entre la población y las fuerzas militares<sup>100</sup> y pueden llegar a desencadenar movilizaciones y/o emergencias humanitarias.

Así mismo, en 2021 se presentaron emergencias humanitarias producto de la ola invernal atípica que provocó desastres, tales como inundaciones, deslizamientos, afectaciones en las estructuras y limitaciones de la movilidad<sup>101</sup>, que exacerbaron las necesidades de acceso a agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición y salud de la población.

### **Arauca:**

Los enfrentamientos entre los GANE que se disputan el control territorial y social mediante la imposición de normas de conducta y/o pautas de comportamiento de la población<sup>102</sup> aumentan la probabilidad de ocurrencia de emergencias humanitarias y las necesidades de protección, particularmente de las comunidades indígenas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres y de los refugiados y migrantes en tránsito y residentes en Arauca.

El departamento recibió en 2021 cerca de 5.877 personas<sup>103</sup> (71% venezolanos, 22% colombianos retornados y 7% ciudadanos con doble nacionalidad) en búsqueda de protección internacional, tras operaciones militares de la fuerza pública de Venezuela (FANB) en contra de otro grupo delictivo organizado colombiano con presencia en el vecino país, situación que afectó la capacidad de respuesta de las entidades territoriales<sup>104</sup>. Por su parte, en octubre de 2021 la comunidad indígena Makaguán del Resguardo Indígena La Esperanza ubicado en el asentamiento La Antioqueña, se desplazó en su totalidad a la zona urbana del municipio de Tame (Arauca) por el homicidio de un civil por parte del grupo armado organizado con presencia en la zona. Cabe destacar que desde el año 2018 no ocurrían desplazamientos masivos en el departamento, y que preocupa la alta probabilidad de ocurrencia de nuevas emergencias de comunidades étnicas como consecuencia del accionar de los GANE<sup>105</sup>. También, se ha observado un incremento en la estigmatización hacia los excombatientes en proceso de reincorporación,

98. Migración Colombia. Distribución de Venezolanos en Colombia - Corte 31 de agosto de 2021. Véase en

99. UNODC. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. (págs. 11, 72). (corte julio 2021). Disponible en: [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_Monitoreo\\_de\\_territorios\\_afectados\\_por\\_cultivos\\_ilicitos\\_2020.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf)

100. Análisis cualitativos por parte del Equipo Local de Coordinación Norte de Santander

101. OCHA. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing\\_humanitario\\_norte\\_de\\_santander\\_enero-junio\\_2021\\_vf.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/briefing_humanitario_norte_de_santander_enero-junio_2021_vf.pdf)

102. Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana No. 023-2021.

103. <https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-reporte-situacional-araucuita-24-abril-3-mayo-2021>

104. OCHA. Emergencias humanitarias reportadas por los Equipos Locales de Coordinación (ELC) en abril de 2021. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe\\_de\\_emergencias\\_humanitarias\\_reportadas\\_elc\\_enero-abril\\_2021.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe_de_emergencias_humanitarias_reportadas_elc_enero-abril_2021.pdf)

105. OCHA. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/07102021\\_alerta\\_de\\_situacion\\_por\\_desplazamiento\\_en\\_tame\\_arauca\\_vf.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/07102021_alerta_de_situacion_por_desplazamiento_en_tame_arauca_vf.pdf)



que limita su participación en ejercicios democráticos y sociales -y eleva el nivel de riesgo de protección y seguridad de los liderazgos y genera una afectación masiva en los medios de vida y subsistencia; adicionalmente, los excombatientes estigmatizados enfrentan retos para la integración social y económica.

En cuanto a las afectaciones por desastres<sup>106</sup> de origen natural, las inundaciones han afectado principalmente a las comunidades ribereñas donde se genera un escenario de doble y triple afectación, tanto en colombianos que habitan asentamientos y hacen parte de comunidades de acogida, como en población refugiada y migrante venezolana (incluyendo aquella en necesidad de protección internacional asentada en Arauquita). Dichas inundaciones afectaron las viviendas y los medios de vida de las poblaciones ubicadas en las zonas rurales y urbanas de Saravena, Arauquita, Tame y Arauca. Las necesidades más críticas están relacionadas con la seguridad alimentaria, soluciones de alojamiento, acceso a agua segura y salud<sup>107</sup>.

#### **Vichada:**

En el departamento se acentúan las necesidades humanitarias asociadas a los índices de pobreza<sup>108</sup> debido a la confluencia de distintos grupos armados no estatales. Los movimientos migratorios mixtos, en su mayoría pendulares pero también con vocación

de permanencia, la creciente migración de indígenas binacionales y mestizos (colombo-venezolanos), y el aumento de las dificultades sociales y económicas del departamento tras la pandemia por COVID-19<sup>109</sup>. Se han identificado desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, trata de personas, amenazas a líderes sociales y reclutamiento, uso y/o utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Acorde a lo anterior, las principales necesidades se presentan en los sectores de educación, alojamiento, agua y saneamiento, protección, seguridad alimentaria y nutricional. Adicionalmente, se presentan otros efectos negativos tales como las limitaciones de acceso a servicios, afectaciones psicológicas a nivel familiar, pérdida de tierras, casos de trata de personas y abuso sexual, a lo que se le suma los casos incidentes de MAP/MSE en el municipio de Cumaribo.

Las inundaciones que se presentaron entre mayo y agosto agudizaron las necesidades ya existentes, ocasionando la pérdida de cultivos y fuentes de ingresos. Por otro lado, en época de verano la sequía, afectó a las comunidades rurales, además de generar impacto a la biodiversidad por incendios en el Parque Nacional El Tuparro. Ambos escenarios han ocasionado el desplazamiento de población indígena a los cascos urbanos, afectando sus condiciones de vida y acentuando las carencias en el acceso a derechos y servicios.

106. <https://www.undrr.org/es/news/llego-el-momento-de-decirle-adios-los-desastres-naturales>

107. OCHA. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/alerta\\_b2b\\_inundaciones\\_arauca\\_15072021\\_rv\\_ocha\\_hat.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/alerta_b2b_inundaciones_arauca_15072021_rv_ocha_hat.pdf)

108. DANE. Necesidades Básicas Insatisfechas: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

109. Defensoría del Pueblo. Alerta No. 005-2021



#### REGIÓN DE LA MOJANA, COLOMBIA

Respuesta en Emergencia, OCHA.

Crédito de la foto: OCHA

### Región Noroccidental

**La zona Noroccidental conformada por Córdoba y Antioquia, el Sur de Bolívar y Sur de Sucre,**

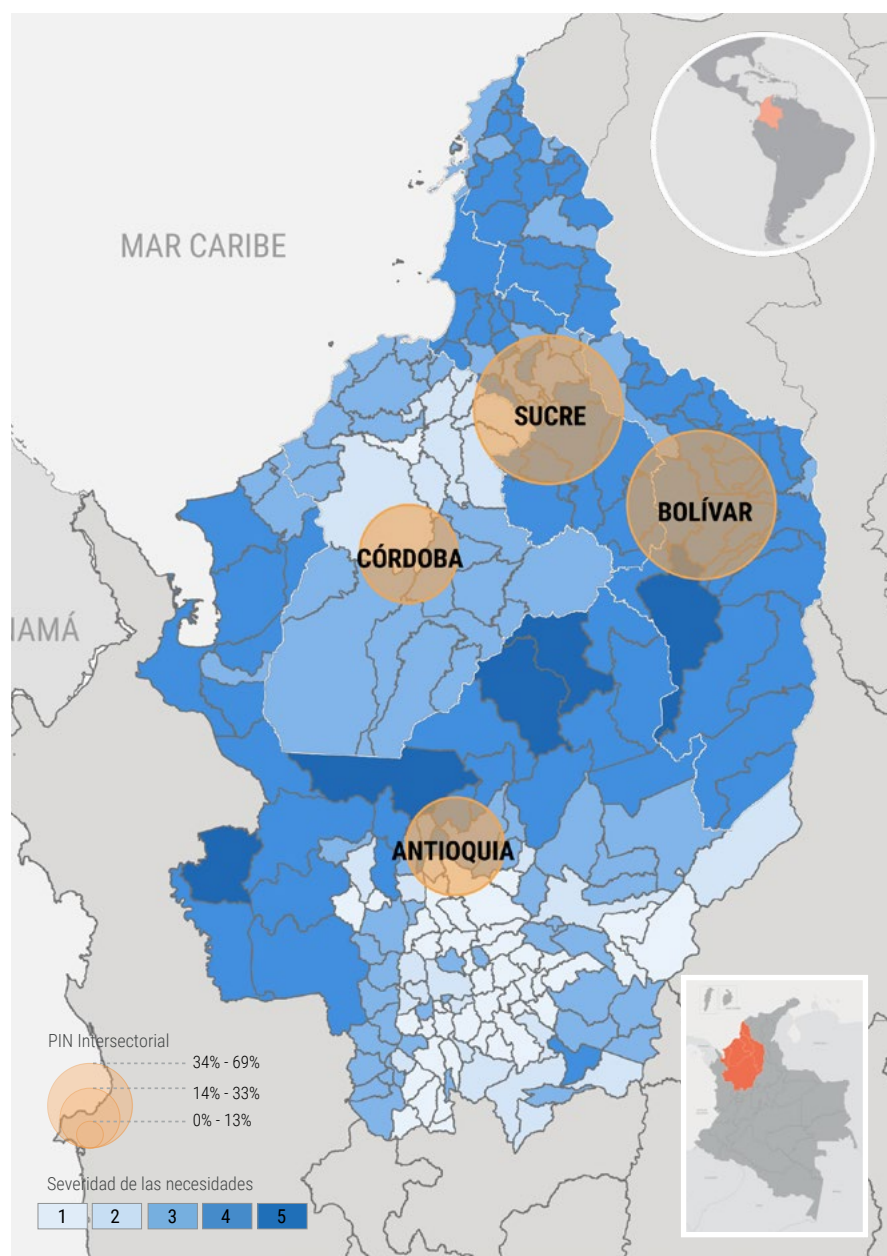
se presenta como una vía estratégica para las economías ilegales por ser un corredor de salida hacia Centroamérica y el Caribe; por ello diferentes GDO y GAO intentan ganar el control territorial y social de la zona, a través de enfrentamientos, amenazas, homicidios, y ataques directos contra la población civil. En 2020, Córdoba, Antioquia y Bolívar presentaron un aumento en la presencia de cultivos ilícitos en un

30 por ciento, 27,5 por ciento y 18 por ciento (cerca de 4.800 hectáreas) respectivamente; sin embargo, Valdivia, Tarazá y Cáceres (Antioquia)<sup>110</sup> se mantienen como principales enclaves productivos del país, y son cooptados por parte de los GAO que se disputan la zona<sup>111</sup>. Situaciones de desplazamientos forzados y confinamientos, junto a eventos asociados a desastres de origen natural, configuran situaciones de múltiple afectación en esta región; las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, y los refugiados y migrantes (tanto venezolanos como transcontinentales) son los más afectados.

110. [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_Monitoreo\\_de\\_territorios\\_afectados\\_por\\_cultivos\\_ilicitos\\_2020.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf)

111. Según la densidad de cultivos de coca medida en hectáreas por kilómetro cuadrado en el 2020 se mantiene la tendencia a la conformación de núcleos de alta concentración de siembra, representados en enclaves productivos principalmente en la zona central del país (Bajo Cauca y Bolívar) Al norte del país, las mayores concentraciones se consolidan en la región del Bajo Cauca y Bolívar, en particular en el cañón del río Cauca. Citado de [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_Monitoreo\\_de\\_territorios\\_afectados\\_por\\_cultivos\\_ilicitos\\_2020.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2020.pdf)





Estas regiones sufren fuertes impactos en las temporadas de lluvias y sequía, situación que limita el acceso a servicios, deteriora las condiciones de vida con impacto en la seguridad alimentaria por la pérdida de cultivos para el sustento. Se resalta el paso continuo de los migrantes transcontinentales por esta región como ruta para llegar hacia el norte del continente, en donde se evidencia un subregistro dada la antigüedad y normalización del fenómeno, el cual se vió incrementado en 2021 por la COVID-19 y el cierre de fronteras. Se resaltan los riesgos de protección que este grupo poblacional puede enfrentar en el tránsito hacia

el Urabá o hacia otros municipios de los diferentes departamentos que los acerquen hacia Panamá y que generan afectaciones a sus derechos humanos.

#### **Antioquia:**

Las regiones de Norte, Bajo Cauca Urabá y Nordeste antioqueño, donde se ubican los municipios de Dabeiba, Urrao, Murindó, Vigía, Mutatá y Frontino viven bajo la constante influencia y control de GAO y GDO; esta situación de control ocurre también incluso en zonas urbanas como asentamientos informales y zonas con limitado acceso a bienes y servicios en

Medellín (la capital del departamento). Lo anterior, afecta a los grupos más vulnerables como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas de identidad de género y orientación sexual diversas-LGBTIQ+, adultos mayores, comunidades campesinas, comunidades étnicas, particularmente indígenas (Emberá y Zenú) y personas refugiadas y migrantes.

Las comunidades indígenas con sus asentamientos en zonas lejanas y selváticas no son hablantes del idioma castellano, lo que dificulta las declaraciones o denuncias y limita su registro nacional. La ubicación estratégica del departamento, la práctica de minería ilegal, la siembra de cultivos de uso ilícitos, la construcción de megaproyectos y la presencia de corredores estratégicos para tráfico y comercio de economías ilícitas propicia que sea uno de los departamentos con mayor concentración de hostilidades del país y, por ende, con un gran impacto humanitario reflejado en múltiples hechos victimizantes (31 de eventos de desplazamiento y siete eventos de confinamiento)<sup>112</sup> que mantienen en estado de temor a algunas comunidades y dejan consecuencias en el debilitamiento del tejido social (incluyendo la pérdida de estructuras organizativas y sociales, seguridad alimentaria, medios de vida y salud).

Se destaca la instalación de MAP/MSE como estrategia por parte de grupos delictivos para evitar la erradicación de cultivos de uso ilícito y como un método de control territorial en las zonas de disputa entre grupos delictivos lo que genera restricciones a la movilidad y acceso, y confinamiento dentro de las mismas comunidades. En el transcurso del año al menos 17 personas sufrieron accidentes por MAP (15 mayores de edad y 2 menores de edad)<sup>113</sup>. Los hechos victimizantes han supuesto una mayor incidencia en la violencia basada en género y la violencia sexual y el trabajo doméstico/cuidado no remunerado hacia las mujeres, niñas y adolescentes. El accionar de los grupos armados no estatales tanto

en contextos rurales como urbanos de Antioquia, ha desencadenado afectaciones y vulneraciones continuas a los derechos de la población civil; las disputas por el posicionamiento de GDO y la llegada de otro GAO a territorios donde históricamente no habían tenido presencia, como el municipio de Peque, ha generado un ambiente de zozobra y temor en zonas rurales del Norte, Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Nordeste del departamento<sup>114</sup>. Además, de los constantes desplazamientos masivos y confinamientos, entre otros, se destacan factores como: la trata y tráfico de personas, economías ilícitas y otros riesgos para las personas refugiadas y migrantes venezolanas y transcontinentales.

#### **Córdoba:**

Existe un subregistro de afectaciones por miedo de la población a represalias como parte del control que ejercen los GDO. Los municipios con mayor afectación por factores de violencia armada se concentran en Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y Montelíbano, los cuales hacen parte de la subregión del sur de Córdoba. Se presentó un aumento significativo de los hechos victimizantes por factores de violencia armada para el año 2021, sobre todo en las amenazas a docentes, líderes comunitarios e indígenas, y participantes y líderes de las protestas sociales en el país<sup>115</sup>; mientras la zona sur del departamento presentó un alto riesgo de ocurrencia de casos de violencia sexual por parte de GDO. Llama la atención la naturalización de las restricciones de movilidad y acceso por las imposiciones de horarios por parte de los grupos armados, ante las afectaciones que causa en los medios de vida e incluso en la salud mental de las personas afectadas. Existen riesgos de protección para niños, niñas y adolescentes en las zonas rurales y dispersas al no tener acceso a educación, generando tiempo libre en sus territorios, lo que se ha materializado en reclutamiento, uso y utilización, y embarazos no deseados<sup>117</sup>.

112. Monitor OCHA, corte 31 de octubre de 2021

113. Monitor OCHA, corte 31 de octubre de 2021

114. Los municipios con más recurrencia de accidentes de MAP son: Tarazá, Murindó, Frontino, Mutatá, Cáceres, Campamento, Dabeiba en la zona rural de estos municipios <https://www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Situaci-n-V-ctimas-Minas-Antipersonal-en-Colombia/yhxn-eqqw/data>, corte 30 de septiembre de 2021

115. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing\\_humanitario\\_antioquia\\_enero-junio\\_2021\\_vf.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_antioquia_enero-junio_2021_vf.pdf)

116. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia\\_enero\\_a\\_junio\\_2021\\_cordoba\\_vf.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_enero_a_junio_2021_cordoba_vf.pdf), Corte 31 de julio del 2021.

117. [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia\\_enero\\_a\\_junio\\_2021\\_cordoba\\_vf.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_enero_a_junio_2021_cordoba_vf.pdf), Corte 31 de julio del 2021.

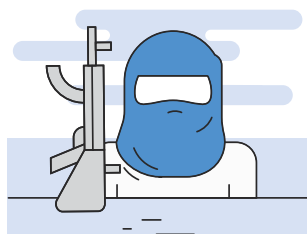


Durante 2021 se presentó el aumento en los accidentes por MAP/MSE en un 100 por ciento en comparación al año 2020 (4 eventos); en zona rural del municipio de Tierralta durante labores de desminado militar. La instalación de estos artefactos se ha realizado como estrategia de control territorial, lo que ha afectado a la población civil, e incluso estas prácticas han sido identificadas al interior de resguardos indígenas. Se identifican como poblaciones especialmente vulnerables a las comunidades indígenas Emberá Katío y Zenú, mujeres, personas de identidad de género y orientación sexual diversas- LGBTIQ+, niños, niñas y adolescentes, y afrodescendientes, e incluso población refugiada y migrante.

Adicionalmente, un impulsor clave que ha afectado cada vez más a las comunidades en el sur del departamento es la minería que genera riesgos de protección, medios de vida, seguridad alimentaria, salud y que también afecta el nexo humanitario con la paz y desarrollo (tenencia de tierras, y las garantías de seguridad). También preocupan brotes epidemiológicos (dengue, malaria y la COVID-19) y riesgos asociados a la falta de acceso a servicios de agua y calidad de ésta. En el norte y sur de Córdoba se ha destacado el impacto humanitario en medios de vida, seguridad alimentaria, salud, educación y alojamiento por los desastres naturales, principalmente por los fenómenos de inundaciones por la temporada de lluvias dejando a al menos 20 mil personas afectadas<sup>118</sup>. Se resalta el impacto humanitario de la inundación de la subregión de La Mojana mencionado en la sección de impacto excepcional por emergencias de gran escala.

### **Bolívar y Sucre:**

Durante los últimos años, se ha registrado el recrudecimiento de los factores de violencia armada en estos dos departamentos, ubicados en la subregión de los Montes de María, específicamente en el sur de Bolívar y en el norte del departamento de Sucre. A causa del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en el año 2020, se constató que los GAO y GDO impusieron códigos de conducta en diferentes municipios, ante la ausencia de actores



### **Incidentes reportados durante 2020 en la región Noroccidental**



Fuente: Monitor-OCHA (2020). Fecha de corte: diciembre 2021

estatales y humanitarios. Esta zona es un corredor estratégico para los grupos provenientes desde los departamentos de Antioquia y Córdoba. Se identifica como poblaciones vulnerables, líderes y lideresas sociales, presidentes de JAC, mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades étnicas a comunidades campesinas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas- LGBTIQ+.

Durante 2021 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 018-21 para el departamento de Bolívar por el escenario de riesgo que se configura por la disputa territorial entre GAO y GDO, especialmente en los municipios de Arenal, Santa Rosa

118. Monitor OCHA, Corte 31 de octubre de 2021

del Sur, Montecristo, y Morales<sup>119</sup>. Por su parte, para el departamento de Sucre se emitió la Alerta 009-21, por el escenario de riesgo que configura el reposicionamiento de un GDO en la zona rural del municipio de Ovejas, el cual mediante homicidios, amenazas directas e indirectas, intimidaciones y controles sociales, ha establecido horarios para la movilidad en las vías de la zona rural configurando confinamientos de la población civil<sup>120</sup>.

El deterioro humanitario en esta región del país ha sido producto de los enfrentamientos entre los GANE, los combates entre éstos con las Fuerzas Militares, las amenazas y los asesinatos sistemáticos a líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, además se identifica un alto grado de amenazas hacia líderes de la comunidad LGBTIQ+, ya que existe un enorme rechazo hacia los miembros de esta comunidad por parte de los grupos armados que operan en la zona, atentando contra la vida de estas personas y/o obligándolas a desplazarse hacia otros municipios o departamentos.

Durante 2021, en el departamento de Bolívar se presentaron tres eventos de desplazamiento masivo donde se vieron impactadas al menos 3.000 personas<sup>121</sup>. Igualmente, se identifica un alto riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes. Sin embargo, es menester resaltar que no hay suficientes elementos que permitan analizar la situación de hechos victimizantes causados por factores de violencia armada, debido al bajo nivel de reporte y la baja presencia de los actores humanitarios en estos departamentos.

Frente a los desastres de origen natural, encontramos que en esta zona del país suceden de manera cíclica, las inundaciones en temporada de lluvias, y otros impactos en temporada de sequía. Durante 2021, en el departamento de Bolívar se presentaron 63 eventos de desastres con al menos 87.000 personas afectadas, mientras que, en el departamento de Sucre se presentaron 58 eventos con 34.000 personas afectadas aproximadamente<sup>122</sup>. Es importante destacar la emergencia por inundación en la subregión de La Mojana ante el rompimiento de un dique en el Río Cauca que dejó a 146.000 personas afectadas en ambos departamentos, especialmente en comunidades campesinas<sup>123</sup>, de las cuales más de 1.100 personas eran refugiadas y migrantes y 430 colombianos retornados provenientes de Venezuela. Estos hechos impactaron en mayor medida en el acceso a agua segura, servicios de salud, alimentos, alojamiento y medios de vida.

119. Alerta de Inminencia 018-21, <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91806>

120. Alerta de Inminencia 009-21 <https://alertastempranas.defensoria.gov.co/Alerta/Details/91798>

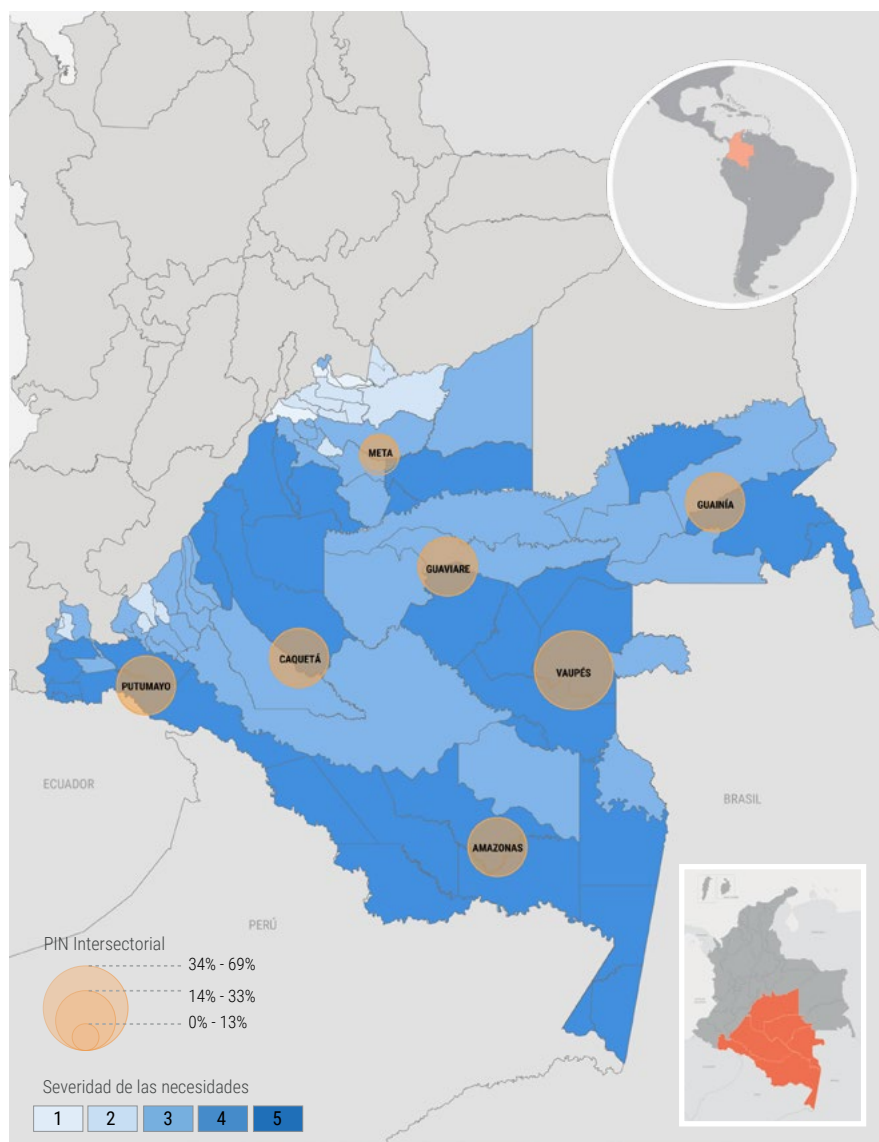
121. Datos de boletín mensual a corte de 31 de octubre de 2021

122. Datos de boletín mensual a corte de 31 de octubre de 2021, datos suministrados por Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

123. <https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/emergencia-la-mojana>

## Región Centro-Sur

La región Centro-Sur está compuesta por los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo (frontera con Ecuador), Guainía, Vaupés y Amazonas, (estos tres últimos en la frontera con Brasil).



PERSONAS EN NECESIDAD REGIÓN AMAZÓNICA (FRONTERA COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y BRASIL)

**355.6k**

**2.1M**  
Población total



**413**  
Personas  
desplazadas

**2**  
Eventos



**299**  
Personas  
confinadas

**3**  
Eventos



**91k**  
Personas  
afectadas en  
eventos de  
origen natural

**323**  
Eventos

Fecha de corte: diciembre 2021

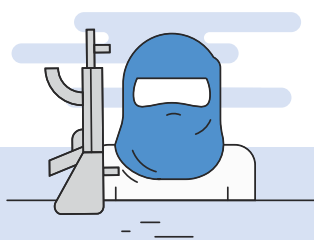
Estos departamentos registran necesidades humanitarias similares ante la dispersión geográfica y diversidad indígena de su población, aunada a la baja presencia institucional que dificulta el registro y atención oportuna ante hechos victimizantes y desastres de origen natural. Por último, la reciente entrada de múltiples actores armados no estatales

al territorio (particularmente en los departamentos fronterizos con Ecuador y Brasil) generan diversos riesgos de protección para la población.

En general hay una baja densidad poblacional con un alto porcentaje de población indígena en los territorios<sup>124</sup>, a excepción del Meta (con 2,1% de población indígena) y

124. Guaviare (9,7% población indígena), Putumayo (14,3%), Guainía, (65%), Vaupés (83%) y Amazonas (59,3%).

Caquetá (1,4%). En la mayoría de los casos, la población indígena no cuenta con documentos de identificación ni con la información de acceso a rutas de atención para víctimas de los factores de violencia armada o para afectados por desastres, sumado a la dificultad económica y logística que implica movilizarse para denunciar cualquier hecho a las cabeceras municipales en donde se concentra la atención institucional. En promedio, al menos el 35 por ciento de la población de estos departamentos (374.790 personas), reportan necesidades básicas insatisfechas relacionadas con las carencias estructurales de acceso a bienes y servicios básicos, especialmente en Guainía y Vaupés, donde esta proporción asciende a 59 y 68 por ciento respectivamente<sup>125</sup>.



#### Incidentes reportados durante 2020 en la región Frontera Amazónica



**39** Personas víctimas de masacres en  
**10** eventos



**15** Acceso humanitario



**157** Amenaza o control social



**15** Reclutamiento, vinculación o utilización de niños, niñas y adolescentes



**47** MAP/MSE/TE



**16** Secuestros

Fuente: Monitor-OCHA (2020). Fecha de corte: diciembre 2020

Actualmente, la población de esta región en su mayoría rural e indígena se enfrenta a la expansión de los GANE y grupos criminales, que buscan el control territorial y poblacional. A pesar de no generar emergencias de carácter masivo (desplazamiento o confinamiento), el accionar de dichos grupos repercute en la situación de seguridad y en riesgos de protección a nivel comunitario a los que se enfrentan las comunidades. Entre éstos, se incluyen: reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes<sup>126</sup>, así como su uso y utilización en economías ilícitas, especialmente en cultivos de uso ilícito, actividades de deforestación y minería ilegal. Esta situación incrementó durante la pandemia debido a la falta de acceso a medios para la educación virtual; también se presentan casos de violencia basada en género, violencia sexual, control social y ataques directos contra civiles por parte de los GANE; accidentes con MAP/MSE, y restricciones a la movilidad y al acceso de bienes y servicios básicos.

Durante 2021, al menos 19.261 personas de estos departamentos se vieron afectadas por restricciones a la movilidad y 299 por confinamientos<sup>127</sup> causados en su mayoría por amenazas e intimidación de los GANE<sup>128</sup>. Además, una parte de las personas desplazadas (en eventos individuales) no dispone de atención de alojamientos o albergues temporales en sus comunidades de acogida y se ven forzadas a establecerse en periferias, viviendas improvisadas, o a hacinarse en casas de amigos y familiares. También, se generan múltiples desplazamientos por los desastres de origen natural -sobre todo por inundaciones-, los cuales dejan vacíos en términos de disposición de albergues temporales, ante la “normalización” de estas emergencias por parte de las entidades competentes a nivel local y en algunos casos por las mismas comunidades.

En la zona se presentan conflictividades socioambientales relacionadas con actividades de erradicación forzada<sup>129</sup> y de prevención de la deforestación, que han generado confrontaciones

125. DANE. Necesidades Básicas Insatisfechas: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi>

126. La defensoría del Pueblo ha publicado Alertas Tempranas de reclutamiento forzado en 29 municipios de estos departamentos durante 2020 y 2021.

127. OCHA. Monitor de Violencia Armada y Desastres (ver enlace)

128. OCHA - Monitor de Violencia Armada.

129. De acuerdo con UNODC, Putumayo y Caquetá, concentran 22% y 15%, respectivamente, de las hectáreas de cultivos de uso ilícitos identificados en el país. Ver Informe



violentas entre la fuerza pública y la población civil, puesto que muchas comunidades participan de estas actividades como sustento de vida y en otros casos son forzadas por los GANE a proteger los territorios donde se ejecutan dichas economías. Ante esta situación, también hay que considerar que algunas poblaciones están siendo afectadas por procesos de restitución de tierras, dado que los terrenos que pretenden ser restituidos se encuentran ocupados por colonos con cultivos de coca y que emplean (laboralmente) a algunas personas de dichas comunidades, por lo cual las áreas de cultivos tradicionales no están siendo utilizadas para tal fin.

Dado que algunos municipios de Amazonas, Vaupés, Guainía y Putumayo se encuentran en zonas fronterizas, se ha conocido el tránsito de migrantes transcontinentales (en su mayoría provenientes de Haití). En este contexto, los GANE se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes para incorporarlos en redes de trata de personas e inclusive reclutarlos en sus filas armadas.

La seguridad alimentaria de la población se encuentra afectada por la deforestación, que ha causado múltiples incendios forestales que terminan por afectar los cultivos de pan coger, además por la presencia y el accionar de los GANE que limita las actividades de caza y pesca. Dicha falta de acceso a alimentos ha generado desplazamientos hacia las cabeceras municipales de las capitales de cada departamento e inclusive, desplazamientos interdepartamentales de familias que no pueden regresar a sus territorios ante la inseguridad alimentaria que enfrentarían allí. Además, de esta situación de inseguridad alimentaria, las comunidades también se enfrentan a carencias de acceso a agua segura para el consumo. A pesar de contar con una rica afluencia de ríos, el agua de éstos se ve gravemente afectada por las actividades de minería ilegal, el vertimiento de residuos de laboratorios de procesamiento de coca, aunado a malas prácticas de higiene por parte de las comunidades, como defecación al aire libre. Ante este escenario se



#### PUERTO NARIÑO/AMAZONAS, COLOMBIA

Entrega de insumos (Protección de los medios de vida) a indígenas  
Crédito de la foto: Cruz Roja Colombiana

dificulta el acceso a agua y a una dieta rica y variada que afecta especialmente a mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Como consecuencia, se generan diferentes enfermedades gastrointestinales, infectocontagiosas, afecciones en la piel, entre otras.

En todos los departamentos de la región a excepción de Meta, la prestación de servicios de salud es precaria. Sólo las capitales cuentan con centros de atención especializados, pero en la mayoría de los casos de gravedad, los pacientes deben ser trasladados a ciudades intermedias para recibir el tratamiento adecuado. La oferta de servicios de salud pocas veces se articula con los procesos de medicina tradicional de las comunidades indígenas -mayoría de la población en estos territorios- y por ello, a veces no es bien recibida por la población que la necesita. Dichas carencias afectan particularmente a la población con discapacidad y a los adultos mayores. Es necesario destacar que, existe un problema de salud pública asociado con el incremento de consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes, quienes además son contratados por grupos criminales para trabajar economías ilegales y reciben este tipo de sustancias como forma de pago.

Adicionalmente, debido al impacto de la pandemia sobre la población de estos departamentos<sup>130</sup>, muchas comunidades indígenas vieron amenazada su supervivencia dado el fallecimiento de adultos mayores por la COVID-19, lo que generó una pérdida cultural, ya que éstos son los que transmiten el conocimiento tradicional de generación en generación. Los coordinadores residentes de Colombia, Brasil y Perú pusieron en marcha el [Plan de Acción Triple Frontera – Colombia, Brasil y Perú](#)<sup>131</sup> desde agosto de 2020. Para realizar acciones de respuesta humanitaria enfocadas a prevenir el contagio y mitigar el impacto humanitario intersectorial generado por la pandemia. Se destaca la decisión del Gobierno Nacional de priorizar los departamentos fronterizos con Brasil (Amazonas, Vaupés y Guainía) para la aplicación de vacuna de una sola dosis con el fin de evitar la proliferación de la variante P.1. Sin embargo, al tener una densidad

poblacional baja y una alta dispersión geográfica el acceso de las autoridades de salud para distribuir y aplicar la vacuna contra el COVID-19 ha sido y continúa siendo un reto en la mayoría de las zonas de acceso remoto de estos departamentos.

Respecto a los desastres de origen natural, en los departamentos de la zona Centro-Sur se presentan inundaciones cíclicas que generan desplazamientos pendulares y afectación a los espacios comunitarios (malocas, escuelas, etc.). Asimismo, las escuelas e internados de la zona cuentan con una precaria infraestructura, que también sufrió deterioro durante la pandemia, y que se ve fuertemente afectada por inundaciones. En general la población con algún tipo de discapacidad física y/o cognitiva no accede a los servicios educativos, dado que las instituciones y los docentes carecen de la formación necesaria para garantizar una educación incluyente.

Las zonas no municipalizadas y áreas de difícil acceso en estos departamentos se ven afectadas por los factores previamente mencionados. Éstos afectan a la población que, en su mayoría, sufre doble y triple afectación y ante este contexto, sus medios de vida se afectan desproporcionalmente. A continuación, se describe el contexto particular de cada uno de los departamentos de la zona Centro-Sur.

### **Meta y Guaviare**

En estos departamentos no suelen presentarse emergencias masivas de desplazamiento y confinamiento. Sin embargo, se presentan desplazamientos individuales y restricciones a la movilidad impuestas por amenazas, panfletos y ataques contra la población civil, perpetrados por los GANE. Durante 2021 los GANE en estos departamentos han buscado establecer el control social y territorial por medio de amenazas e imposición de códigos de conducta contra líderes y lideresas comunitarios -incluyendo aquellos con roles de defensa del medio ambiente-, gobiernos autónomos de las comunidades indígenas y la población rural; a pesar de que éstas

130. OCHA. Alerta de Situación Humanitaria. Impacto por contagio de COVID-19 en la Triple Frontera ([Ver enlace](#))

131. [https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan\\_de\\_accion\\_triple\\_frontera\\_vf.pdf](https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/plan_de_accion_triple_frontera_vf.pdf)

solicitan medidas de protección ante las autoridades competentes, las personas se enfrentan a demoras en la atención e implementación de esquemas de seguridad que en muchas ocasiones también carecen de enfoque étnico y de género para proteger y prevenir riesgos asociados al contexto de seguridad.

Algunas comunidades ubicadas en Vistahermosa, San José del Guaviare, Puerto Rico, Miraflores<sup>132</sup> y Puerto Concordia (Guaviare) y en La Macarena, Vistahermosa, Puerto Gaitán, Barranca de Upía, Uribe, Granada, Mesetas, Villavicencio, Mapiripán<sup>133</sup> y Puerto Concordia (Meta) están en riesgo de desplazamiento forzado -y reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes<sup>134</sup>- por la multiplicidad de acciones armadas que se registran en sus territorios. Por su parte, la población indígena Nukak tiene dificultades para acceder a documentos de registro de identidad y con ello al acceso de ruta de derechos como víctimas de hechos generados por factores de violencia armada o como afectados por eventos de desastres de origen natural.

### **Putumayo (frontera con Ecuador)**

En las zonas del Medio y Bajo Putumayo (particularmente en Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo), se han reportado restricciones a la movilidad y al acceso de la población -con grave afectación sobre resguardos indígenas-. En algunos casos, estas afectaciones fueron causadas por la contaminación por MAP/MSE tras la instalación de dichos artefactos por parte de los GANE para proteger y prevenir el acceso a rutas y cultivos de uso ilícito -sobre todo de unidades de erradicación forzada-. La población de dichos municipios se enfrenta a la influencia y/o control de los GANE que generan constantes amenazas y tensiones sobre la comunidad y afectan gravemente su salud mental. Además, el ELC Caquetá recibe cada vez más información sobre el recrudecimiento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes

de la zona. En este departamento, se requiere especial atención diferencial para las comunidades étnicas, que a pesar de representar solamente el 14,3 por ciento de la población, son afectados desproporcionalmente por las acciones armadas de los GANE.

La falta de conectividad e infraestructura de telecomunicaciones ha tenido un impacto sobre el acceso a educación virtual e indirectamente sobre el incremento de reportes de reclutamiento, uso y utilización de adolescentes y jóvenes que, ante la imposibilidad de acceder a estudios que permitan extender su campo de acción laboral, se ven forzados a hacer parte de economías ilícitas en el departamento. Así mismo, esta carencia de comunicaciones ha imposibilitado que se denuncien hechos victimizantes -como confinamientos<sup>135</sup>- y emergencias por desastres de manera oportuna, dificultando así la provisión de respuesta humanitaria.

Los medios de vida de la población, no solamente se ven afectados por el accionar de los GANE, sino también por los períodos invernales, en los cuales, la lluvia se intensifica y se generan múltiples emergencias por inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos. Durante 2020 y 2021, los 13 municipios de Putumayo han reportado afectación en las vías de acceso, los cultivos, ganadería y otros medios de vida. Así mismo, el impacto de la pandemia sobre los trabajos informales y los precios de los alimentos disminuyó la capacidad adquisitiva de la población afectando particularmente a las personas desplazadas, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Por ello, se requieren actividades de respuesta en recuperación temprana que permitan un sustento para la población en el mediano y largo plazo.

Cabe resaltar que, al ser un departamento fronterizo con Ecuador, se han conocido casos de migrantes transcontinentales (en los municipios de Leguízamo y San Miguel) que sufren riesgos de protección al estar

132. Informe MIRA – Situación crónica por violencia armada en Miraflores ([Ver enlace](#))

133. Informe MIRA – Situación crónica por violencia armada en Mapiripán ([Ver enlace](#))

134. Para Meta y Guaviare la Defensoría del Pueblo tiene activas 5 Alertas Tempranas relacionadas con reclutamiento forzado en los municipios Miraflores, Calamar, El Retorno y San José del Guaviare (Guaviare) y en Mesetas, Puerto López, Puerto Gaitán, Cabuyaron, Puerto Concordia, Mapiripán, San Martín, Acacías, Uribe, La Macarena, Vistahermosa, Puerto Rico y Puerto Lleras)

135. OCHA. Alerta de Situación Humanitaria. Confinamiento en Putumayo ([Ver enlace](#))





#### MAPIRIPÁN/META, COLOMBIA

Escuela Jorge Eliecer Gaitán.

Crédito de la foto: NRC, 2021

expuestos a las acciones de los GANE que operan sobre las zonas selváticas y remotas de los municipios. De igual forma, al ser una ruta de tránsito de refugiados y migrantes venezolanos en camino hacia el sur del continente, esta población también se enfrenta a los mencionados riesgos.

#### Guainía

A la capital de Inírida, arriban personas desplazadas de otros departamentos (Vichada, Meta y Guaviare) y, en menor proporción, de zonas rurales de Guainía, -tanto por causa de los factores de violencia armada como por desastres de origen natural-. Sin embargo, no existe infraestructura de alojamientos temporales que pueda albergar de manera digna a la población, y la mayoría

se ubica en ocupaciones de hecho en la periferia del municipio. Si bien se cuenta con una ruta de atención, se carece de la atención psicosocial inmediata; además el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI)<sup>136</sup> hizo presencia en 2021, pero no es implementado permanentemente. No obstante, se ha evidenciado un desconocimiento por parte de la población de las rutas de atención, y en los casos donde se reportan los hechos victimizantes no se activan las acciones de reparación o no se tiene acceso a las rutas de atención para afectados por desastres. Adicionalmente, se identifica que los programas de alimentación escolar rural no cuentan con un enfoque diferencial teniendo en cuenta, que el 99,9 por ciento de los beneficiarios son población indígena.

136. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas



**En el departamento hay carencias estructurales de acceso a servicios de educación** -los internados carecen de infraestructura y personal para brindar un servicio integral a los niños, niñas y adolescentes y a la población con discapacidad-; **en salud** -las zonas rurales se enfrentan a graves barreras de acceso a atención y medicinas, existen pocos puestos de salud funcionales en el departamento, afectando particularmente a la población en condición de discapacidad, y existe un alto riesgo de mortalidad materno-infantil por la falta de atención inmediata; en relación con el **agua, saneamiento e higiene** -, no hay agua potable en ningún municipio ni alcantarillado y no se cuenta con plantas de tratamientos de agua residuales; adicionalmente, hay contaminación del agua por mercurio y otros químicos tóxicos vertidos por actividades de minería ilegal-. También existe una situación de **inseguridad alimentaria** asociada a la pérdida de cultivos y semillas durante las inundaciones cíclicas que se presentan, y a la falta de capacidad de diversificación de la dieta y falta de acceso a los productos de la canasta familiar -por los altos costos que representa consumir alimentos que se producen fuera del departamento y por la falta de empleabilidad-. Por lo anterior, las edades de primera infancia en población indígena y migrante resultan afectadas y, adicional a ello, la mayoría de las madres gestantes no acceden a controles prenatales y no cuentan con una adecuada alimentación durante su periodo de gestación, situación que genera las principales causas de desnutrición en los niños y niñas.

Los adultos mayores carecen de programas de alfabetización, la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (LGBTIQ+), los habitantes de calle y la población con discapacidad enfrentan necesidades humanitarias intersectoriales en términos de seguridad alimentaria, protección, salud, educación y albergues en Guainía. Por su parte, las mujeres y niñas (incluyendo las refugiadas y migrantes), se enfrentan a riesgos relacionados con violencia sexual

y violencia basada en género<sup>137</sup>, dado que dentro de las comunidades se ha normalizado este tipo de violencias, especialmente por parte de figuras de poder (capitanes, jefes de familia, autoridades religiosas, personal institucional, etc.). En consecuencia, estos hechos ni se implementan acciones a gran escala para prevenirlos.

Similar a lo reportado en los demás departamentos, se presentan casos de reclutamiento, uso y utilización -de población indígena y también de refugiados y migrantes- en zonas de frontera con Venezuela (Inírida, San Felipe, Cacahual) y en zonas limítrofes con Guaviare y Vaupés (Barranco Minas y Garza Morichal) propiciados por la desescolarización, situaciones de abandono y otros tipos de violencia. Sin embargo, las comunidades temen realizar denuncias formales por las posibles retaliaciones que podrían tomar los GANE, quienes los mantienen en situación de vulnerabilidad y además propician la naturalización de hechos como agresiones contra la vida, la libertad e integridad física, desaparición forzada reflejado en Alertas Tempranas<sup>138</sup>.

### Vaupés

En 2021 se ha observado la presencia de actores armados no estatales en los tres municipios del departamento y también en las zonas no municipalizadas. Sin embargo, la comunidad teme realizar denuncias formales ante hechos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes y violencia sexual contra niñas y mujeres. Adicionalmente, debido a las amenazas y a la precaria situación de inseguridad alimentaria en las zonas remotas, se presentan desplazamientos que no son atendidos de manera oportuna en materia de provisión de ayuda humanitaria de emergencia con componentes de alojamiento, alimentación, salud y acceso seguro a agua. Por ello, las personas desplazadas suelen realizar un retorno voluntario sin acompañamiento institucional (sobre todo en las zonas de Alto y Medio Vaupés), que repercute en una posible revictimización por hechos victimizantes similares en el corto y mediano plazo.

137. Violencia física y psicológica, matrimonios precoces forzados y vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos. Briefing Humanitario Guainía ([Ver enlace](#))

138. Subproceso Defensoría del pueblo ATN°056/2019

Se advierte una desarticulación de las entidades institucionales entre sí y con las autoridades indígenas, lo que dificulta la atención a emergencias por violencia y desastres. Ante estos últimos, la asistencia que se presta es precaria y no hay programas de prevención ni obras de mitigación que se implementen para disminuir el impacto cíclico de las inundaciones<sup>139</sup>, vendavales e incendios forestales -los cuales son generados en gran parte por la deforestación por parte de actores ilegales-. La población del departamento se sigue enfrentando al impacto socioeconómico de la pandemia. El aumento en los precios de los alimentos no cesó a pesar de que disminuyeron las restricciones del acceso al territorio, situación que ha afectado de manera significativa el acceso a una dieta variada, sumado a las dificultades de acceso a agua potable que se dan en el departamento.

### Amazonas

En el departamento se ha alertado sobre la presencia de GANE que operan al norte y al oriente del departamento, en las fronteras con Vaupés, Caquetá y Brasil, y también sobre GDO que tienen presencia en el occidente y sur del departamento, en las fronteras con Ecuador y Perú<sup>140</sup>, relacionados con el narcotráfico. Ante esta situación la población se enfrenta a riesgos de protección que, a pesar de no generar emergencias de carácter masivo, sí generan riesgos de protección por dinámicas de reclutamiento forzado, violencia sexual, control social e instrumentalización de la población para la ejecución de economías ilegales (tráfico de personas, cultivos

de uso ilícito, procesamiento y comercialización de la hoja de coca, deforestación, minería ilegal, etc.), de los que también son víctimas las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela y otros países que están de tránsito por el departamento<sup>141</sup>.

Adicionalmente, la población aledaña a los ríos Caquetá, Cotuhé y Putumayo están expuestas aún más al accionar de los GANE, porque estos ríos hacen parte de las rutas de tránsito y movilidad de bienes ilegales. Además, el agua es contaminada por el vertimiento de residuos de minería ilegal y en las temporadas de incremento de lluvias, se presentan inundaciones que afectan la vida comunitaria y que, a pesar de su impacto, no suelen ser atendidas por las autoridades competentes<sup>142</sup>.

En general se percibe una carencia de atención y prestación de servicios y derechos básicos con enfoques diferenciales étnicos que permitan el goce efectivo de sus derechos a las comunidades indígenas que componen más del 59 por ciento de la población del departamento. La población presenta problemas de salud asociados con la falta de acceso a agua potable, a servicios de salud -inclusive la medicina tradicional- que a su vez, y junto al accionar de los GANE, han generado problemas de salud mental que se evidencian en el alto porcentaje de suicidios<sup>143</sup> que se presentan en el Amazonas y en el alto nivel de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes que denuncian las comunidades.

139. OCHA. Alerta Humanitaria. Inundaciones en Vaupés ([Ver enlace](#))

140. Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 002-21 ([Ver enlace](#))

141. OCHA. Briefing Humanitario Amazonas ([Ver enlace](#))

142. OCHA. Alertas de Situación Humanitaria. Inundaciones en Amazonas ([Ver enlace 1](#) y [ver enlace 2](#))

143. Página 22: [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/bt\\_estadisticasvitalas\\_defunciones\\_Iltrim\\_2021pr.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/bt_estadisticasvitalas_defunciones_Iltrim_2021pr.pdf)



## Parte 2

# Análisis de riesgo y monitoreo de situación y necesidades

TELEMBÍ / NARIÑO. COLOMBIA

Misión a Telembí.

Crédito de la foto: Felino Córdoba, OCHA, 2021.



## 2.1 Análisis de riesgos

Es probable que en 2022 se intensifiquen las dinámicas de violencia según análisis de la comunidad humanitaria<sup>144</sup>, teniendo en cuenta que el país se encontrará en el período electoral, y los posibles desastres asociados a fenómenos naturales consecuencia del impacto del cambio climático, los cuales pueden desencadenar emergencias humanitarias que afectarán las vidas de las comunidades que habitan en zonas de alto riesgo, y limitar el acceso humanitario de las organizaciones e institucionalidad para responder a las necesidades en algunos lugares del Chocó, Nariño, Cauca, entre otros.



Frente a la situación de **factores de violencia** generada por los grupos armados no estatales con presencia en 373 municipios, para el 2022 se prevén diversos riesgos con probabilidades de ocurrencia entre alta y media asociados a:

⚠ Se prevé que el accionar de los grupos armados se mantenga estable y ningún actor obtendrá hegemonía en zonas como Riosucio (Chocó), Bajo Cauca (Antioquia) y Tumaco (Nariño) hacia la frontera. Entre los hechos de violencia se reportan las masacres y homicidios selectivos contra líderes y quienes participan en política, en departamentos como Santander, Norte de Santander y algunas zonas de la región Caribe. Sin embargo, **en algunas zonas podría aumentar los factores de violencia armada en relación con el período electoral.**

⚠ Las **dinámicas de violencia armada en el Cauca** permanecerán iguales en los próximos meses, mientras que la zona de la cordillera central puede que empeoren, **alertando sobre un deterioro en términos de seguridad de las ciudades** por factores de violencia armada.

### INFORM Index

NATURAL

6,7

INFRAESTRUCTURA

3,0

HUMANO

7,0

FALTA DE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

3,7

RIESGO Y EXPOSICIÓN

6,9

RIESGO INFORM

5,4

VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA

3,7

CLASE DE RIESGO

ALTO

GRUPOS VULNERABLES

7,8

VULNERABILIDAD

6,2

**INFORM**  
INDEX FOR RISK MANAGEMENT

Para más información visite:

<https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index>

144. [https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20211115\\_acaps\\_mire\\_colombia\\_thematic\\_risk\\_report\\_november\\_2021\\_es.pdf](https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20211115_acaps_mire_colombia_thematic_risk_report_november_2021_es.pdf)

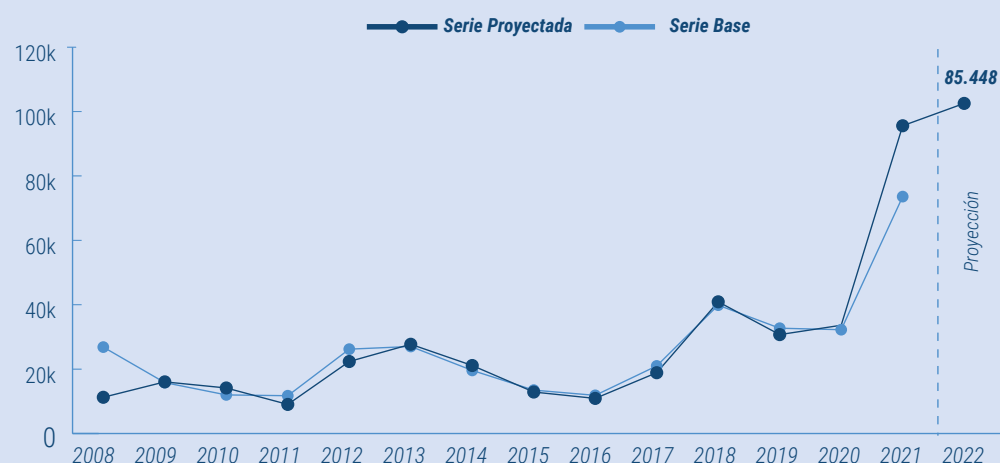


⚠ **Incremento de los enfrentamientos entre los GANE para posicionar su control territorial**, especialmente en Amazonas, Meta, Guaviare, Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. Así mismo, preocupan los riesgos de **incremento de combates ante la estrategia de posicionar más pie de fuerza pública** como medida de estabilización por parte de las administraciones departamentales y nacionales.

⚠ Las estrategias ofensivas de los GANE requieren más combatientes para atacar a los contrincantes,

por ello se prevé un aumento en el reclutamiento forzado, vinculación, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la violencia armada<sup>145</sup>. Esta situación afecta particularmente a las poblaciones indígenas, afrocolombianas y rurales ubicadas en los municipios con presencia de dos o más actores armados no estatales. Además, ante la falta de oportunidades socioeconómicas, la participación en economías ilegales está siendo considerada por las comunidades más vulnerables como una opción para “salir adelante”.

## Desplazamientos masivos proyección 2022



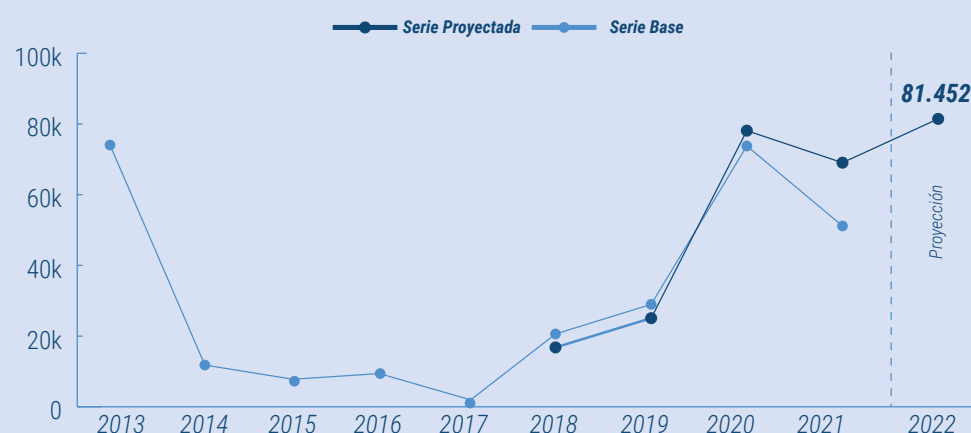
Fuente: UARIV 2017-2021 (fecha de corte julio de 2021)



**85.448**

Personas desplazadas en eventos masivos - cifra proyectada 2022

## Confinamientos proyección 2022



Fuente: Monitor y UARIV  
Más información sobre la metodología [aquí](#)



**81.452**

Personas confinadas - cifra proyectada 2022

145. Informe del Secretario General sobre la niñez en los conflictos armados [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=S](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=S)

⚠ **Aumento de la contaminación por artefactos explosivos, incluyendo minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MSE).** Debido a ello, se espera que se registren nuevos accidentes con dichos artefactos que afectan en la mayoría de los casos a población civil. Se sospecha que, la instalación y uso de estos artefactos ha incrementado durante la pandemia. Por una parte, para proteger vías de acceso y economías ilegales, y, por otra parte, como mecanismos de protección como ofensiva en contra de los grupos armados no estatales contrincantes y la fuerza pública.

⚠ **Violencia en contra de candidatos en elecciones a nivel local, líderes sociales y personas que participen activamente en los procesos democráticos sin concertación con el interés de los GANE.** Como parte de la estrategia para incrementar el control social, se percibe un aumento en el número de amenazas, ataques y homicidios en contra de personas que participan visiblemente en procesos democráticos. Lo anterior, podría agudizarse cuando se abran los procesos de inscripción de candidatos y campañas locales, dado que los GANE utilizan estas posiciones para imponer y difundir sus códigos de conducta e intereses sobre las comunidades. Lo anterior evidencia un **riesgo político orientado hacia una mayor polarización** en medio de las elecciones, un aumento en la inseguridad en las grandes urbes y ciudades intermedias.

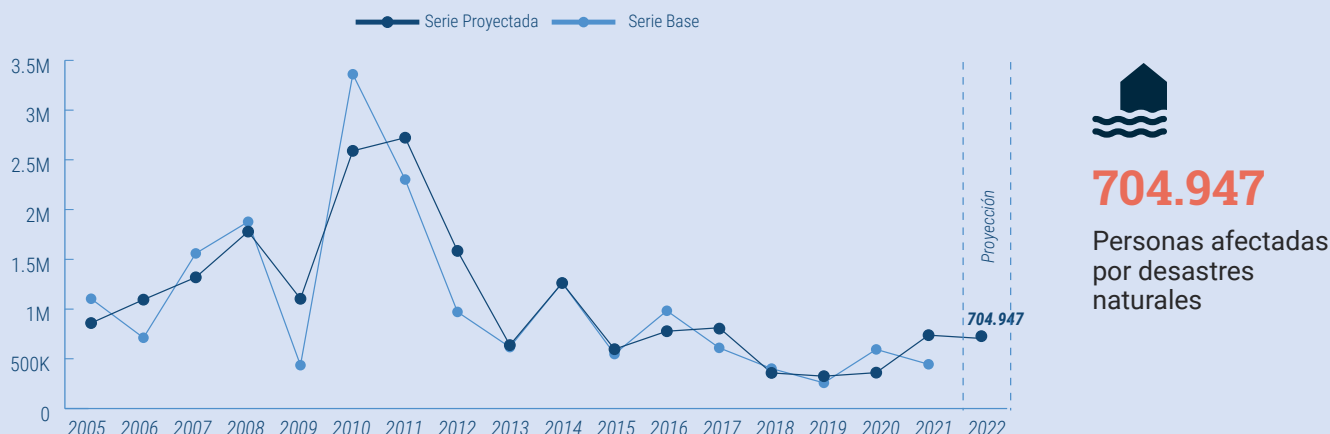
⚠ **Mayor intensidad en las conflictividades socioambientales entre las comunidades y las entidades del Estado.** En los municipios con mayor nivel de actividades ilegales relacionadas con cultivos de uso ilícito, deforestación y minería ilegal (particularmente los departamentos de la zona Centro-Sur) se prevé un aumento del impacto humanitario sobre las poblaciones que hacen parte de dichas economías, bien por elección propia como medio de vida, o por ser coaccionados por los GANE. Lo anterior incluye riesgos relacionados con la posible activación de la aspersión aérea con glifosato, lo que podría generar confrontaciones violentas entre las comunidades y la fuerza pública.

Todo lo anterior, continuará generando necesidades y riesgos en materia de protección como consecuencia de desplazamientos forzados, accidentes con MAP/MSE, confinamientos, ataques, agresiones y control social contra civiles y las consecuentes limitaciones de acceso a servicios básicos y derechos fundamentales, como alimentación, educación, agua segura, condiciones dignas de alojamiento y prestación de servicios de salud; por las mismas causas también habría una reducción de acceso humanitario para organizaciones a las poblaciones afectadas. Los municipios donde se estima serán más visibles las necesidades humanitarias están en Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.

## Factores o escenarios de riesgo en 2022

CHOQUE	ESCENARIOS/FACTORES DE RIESGO	GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS	DEPARTAMENTOS	PROBABILIDAD E IMPACTO
	Incremento de enfrentamientos, combates y otras acciones armadas por proliferación de los GANE	Niños, niñas y adolescentes; comunidades étnicas (afrodescendiente e indígena).	Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.	Alta
	Incremento de contaminación con AEI - MAP - MUSE.	Todos los grupos vulnerables	27 departamentos de 32	Alta
 <b>Factores de violencia</b>	Incremento de Control territorial y/o social por parte de los GANE	Mujeres; niños, niñas y adolescentes; campesinos; grupos étnicos; comunidades indígenas; población.	Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare, y Putumayo,	Alta
	Reclutamiento, vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes, y otros impactos en la niñez.	Niños, niñas y adolescentes; jóvenes y mujeres.	Nariño Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.	Alta
	Coacción para llevar a cabo economías ilegales (cultivos de uso ilícito, deforestación y minería ilegal).	Niños, niñas y adolescentes; jóvenes y adultos de comunidades rurales (incluyendo indígenas y afrocolombianos).	Nariño Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.	Media
	Incremento de los factores de violencia armada en el periodo electoral y riesgos humanitarios.	Candidatos electorales locales, líderes sociales, y miembros visibles de procesos democráticos.	Nariño Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo.	Alta

## Desastres naturales proyección 2022





Fuente: UNGRD

Más información sobre la metodología [aquí](#)





En relación con la situación de **desastres de origen natural**, también se identificaron riesgos con probabilidades de ocurrencia en el 2022 asociado a:

 Pronósticos del IDEAM sobre la **extensión de la segunda temporada de lluvias en Colombia hasta febrero de 2022**, con una posibilidad de ocurrencia del fenómeno de La Niña en un 87-93 por ciento en el primer trimestre del año. No se descarta la posibilidad de ocurrencia de huracanes durante la temporada de vientos fuertes. Por esta razón, las administraciones locales que no tomen medidas especiales para evitar emergencias se verán fuertemente afectadas por deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones generadas por el incremento de las precipitaciones.

 **Doble afectación por fenómenos climáticos y afectación por nuevos factores de la violencia armada.** Al menos un 30 por ciento de las emergencias climáticas tienen lugar en municipios con presencia y accionar de los GANE. Ante este escenario, la población, incluyendo grupos

en dinámicas de habitabilidad particularmente vulnerables, como personas viviendo en asentamientos informales y los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, se verá expuesta a riesgos de protección y necesidades humanitarias intersectoriales asociadas al desplazamiento y/o evacuación por inundaciones y crecientes súbitas.

 Con el **desarrollo de las emergencias durante el fenómeno de La Niña y la temporada de sequía** en otros territorios, **se perderán áreas de cultivos de pan coger.** Este será otro factor que incidirá en la **inseguridad alimentaria de las comunidades rurales.** Así mismo, se generará una afectación en la salud para los grupos más vulnerables: mujeres, niños, niñas, población con discapacidad y adultos mayores.

 Es importante considerar el **aumento de la deforestación en zonas como el sur del Meta y el Guaviare, zonas de sembrado de cultivos ilícitos y de palma de aceite.** De acuerdo con los análisis de riesgo de MARSH<sup>146</sup> las protestas por proyectos mineros y petroleros podrían coincidir en algunas zonas priorizadas con necesidades humanitarias, lo que podría agudizarlas.

146. <https://www.marsh.com/co/services/risk-analytics.html>



## Factores o escenarios de riesgo en 2022

CHOQUE	ESCENARIOS/FACTORES DE RIESGO	GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS	DEPARTAMENTOS	PROBABILIDAD E IMPACTO
 <b>Desastres de origen natural</b>	Doble afectación por fenómenos climáticos y afectación por factores de violencia armada.	Todos los grupos vulnerables	Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Valle del Cauca, Bolívar, Sucre, Córdoba y La Guajira	Alta
	Inseguridad alimentaria	Todos los grupos vulnerables	Nariño, Valle de Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo	Alta



**Considerando el impacto de pandemia por la COVID-19 y sus rezagos socioeconómicos**


Todavía es largo el camino hacia la recuperación de empleos perdidos desde marzo de 2020. **Mientras se logra una recuperación, se mantendrá en el mismo nivel de severidad la condición de inseguridad alimentaria en el país.** Aunado a ello, se mantiene el alto nivel de índices de violencia basada en género, que incrementó durante los meses de cuarentena estricta más allá de los pocos registros e invisibilidad de este hecho por causas asociadas a los factores de violencia, mientras incrementan los índices de feminización de la pobreza, embarazo adolescente, suicidio juvenil, criminalidad en la urbanidad e inconformidad y malestar social en la población, lo que a su vez podría aumentar el riesgo por protestas sociales que se reflejen en confrontaciones violentas con la fuerza pública.

Aún falta que el 56 por ciento de la población del país (28 millones de personas) complete su esquema de vacunación y que los migrantes y refugiados en condición irregular (más de 1,5 millones de personas) puedan acceder efectivamente a la vacuna. Ante esto, **es necesario prever el riesgo de incremento en el número de contagios por COVID-19**, como se ha observado en otros lugares del mundo. Esto traería un consecuente impacto en el número de muertes y restricciones a la movilidad que sean impuestas como medidas preventivas del contagio.

**El aumento de la deuda pública podría juntarse con una lenta reactivación económica en especial la de los grandes proyectos de infraestructura<sup>147</sup>**, la depreciación de la moneda colombiana y la exacerbación de las vulnerabilidades por la pandemia, donde mujeres y jóvenes de familias de bajos ingresos estarán en una posición de desventaja, como lo mostraron las protestas y recientes malestares sociales.


147. (Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- 2021, Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MHCP-)


## Factores o escenarios de riesgo en 2022

CHOQUE	ESCENARIOS/FACTORES DE RIESGO	GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS	DEPARTAMENTOS	PROBABILIDAD E IMPACTO
 <b>Pandemia</b>	Crisis económica a causa de la pandemia	Todos los grupos vulnerables	Todos	Alta
	Suicidio juvenil e infantil	Niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas	Amazonas, Guainía y Vaupés	Alta
	Protestas sociales	Todos los grupos vulnerables	Todos	Alta
	Deserción escolar de niños, niñas y adolescentes	Niños, niñas y adolescentes	Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo	Medio
	Reactivación aspersión aérea	Todos los grupos vulnerables	Municipios PNIS	Medio
	Restricciones acceso a servicios de salud	Niños, niñas y adolescentes; mujeres gestantes y primera infancia; adultos mayores y población	Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Guaviare y Putumayo	Alta
	Seguridad, maltrato, explotación y mendicidad	Niños, niñas y adolescentes y población LGBTI	Todos	Medio
	Embarazo adolescente	Mujeres, adolescentes y niñas	Todos	Medio




### Frente a los movimientos mixtos transcontinentales.


 **Se seguirá presentando una sobrecarga de la capacidad instalada a nivel operativo y financiero en los municipios de la frontera con Panamá,** siempre y cuando las autoridades migratorias de la región no acuerden una estrategia de autorización de paso de migrantes diferente a las cuotas establecidas por día. Frente a esto las **comunidades de acogida seguirán siendo afectadas** por el hacinamiento, la falta de provisión de agua, manejo de residuos e inflación, generada por la llegada abrupta y permanencia de miles de personas.

 **Las personas refugiadas y migrantes se seguirán enfrentando a las vulnerabilidades propias de**

**su condición,** tales como xenofobia, negación de acceso a bienes básicos y servicios de salud y educación estando en muchos casos a la merced de los GANE que controlan municipios a lo largo de la ruta migratoria en el Pacífico colombiano. En el caso de la población proveniente de Venezuela, esto será particularmente relevante en para aquellos que no logren acceder a medidas de regularización tales como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).

 **Se deben contemplar también los posibles riesgos de explotación y abuso sexual a nivel institucional,** es decir, a nivel interno de las organizaciones responsables de la respuesta, así como los riesgos asociados a la ejecución de proyectos y programas humanitarios de manera que se establezcan acciones de prevención y mitigación oportunas y adecuadas.

## Factores o escenarios de riesgo en 2022

CHOQUE	ESCENARIOS/FACTORES DE RIESGO	GRUPOS VULNERABLES AFECTADOS	DEPARTAMENTOS	PROBABILIDAD E IMPACTO
 <b>Movimientos mixtos transcontinentales</b>	Crisis humanitaria en comunidades de acogida por Migración intercontinental	Comunidades de acogida y movimientos transcontinentales	Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Amazonas y Putumayo	Alta

## CÓRDOBA, COLOMBIA

Misión sur de Córdoba

Crédito de la foto: OCHA.





# Proyección de las necesidades



## COLOMBIA

Misión en terreno

Crédito de la foto: OCHA Colombia

En relación con todos los factores de riesgo identificados y expuestos en esta sección, los tres grupos de población vulnerables que se priorizaron para realizar proyecciones son las víctimas por desplazamientos masivos, por confinamiento, y las personas afectadas por eventos de origen natural. Se espera que el aumento en el número de víctimas sea mayor al registrado en 2021 y respecto a la última década.

Esta estimación se realiza considerando la tendencia histórica, el deterioro de la situación humanitaria por la intensificación de las acciones de violencia armada que se prevé, nuevas emergencias asociadas a eventos naturales, otros eventos relacionados al fenómeno de La Niña y otros propiciados por el cambio climático que, en el último año tuvo un incremento exacerbado en comparación con años previos.

## Estimación de víctimas y afectados en 2022

● Tendencia (2016-2021)





## 2.2

## Monitoreo de la Situación y Necesidades

El seguimiento de la situación humanitaria en Colombia, basado en el marco del análisis en relación con los impulsores de la crisis que impactan sobre los diferentes grupos vulnerables priorizados y su ubicación, se realizará conforme a la disponibilidad de datos periódicos con la desagregación requerida para determinar la severidad de las necesidades. Por esta razón, los indicadores críticos seleccionados por los socios del EHP siguiendo la metodología JIAF y que definieron el PiN intersectorial, alertarán a la comunidad humanitaria sobre el desarrollo de la situación humanitaria y necesidades de protección de comunidades. Esta información permitirá realizar un análisis conjunto, tomar decisiones y en caso de ser necesario, actualizar las necesidades y reprogramar la respuesta.

El tiempo del monitoreo está establecido en seis meses, en los cuales se podrá determinar la evolución de la situación en relación con los diferentes factores de riesgo acordados en dicho análisis conjunto, o de alguna coyuntura que, de manera excepcional no estuviera prevista, pero que tenga un impacto de gran magnitud en las condiciones humanitarias de miles de personas.

Los instrumentos que apoyarán este monitoreo serán sistemas y datos oficiales en relación con las afectaciones por los factores de violencia armada, principalmente desplazamientos masivos y confinamientos, datos de afectación asociados a eventos de desastres de origen natural; información relacionada con las barreras de acceso a servicios de salud que configuren situaciones de emergencia con impacto en la salud; la evolución de la inseguridad alimentaria que podría resultar en muertes o graves enfermedades por la desnutrición; sistemas de alerta temprana; y las restricciones de acceso humanitario que limitan la respuesta a las necesidades de las poblaciones afectadas.

**TABLA INDICADORES CRÍTICOS  
SELECCIONADOS PIN 2022**

CLÚSTER	INDICADORES CRÍTICOS SELECCIONADOS
Agua, saneamiento e higiene	Acceso a agua
	Acceso a saneamiento
Seguridad alimentaria y nutrición	Niños y niñas menores de cinco años con riesgo y diagnóstico de desnutrición aguda (moderada y severa)
	Personas con inseguridad alimentaria.
Salud	Población con barreras de acceso a salud
	Mortalidad por causas de vigilancia epidemiológica (infantil, materna, VIA, suicidios, tuberculosis, leishmaniasis, dengue) y Mortalidad Materna Extrema
Recuperación temprana	Población víctima que no ha superado situación de vulnerabilidad en ingresos
Protección	Número de personas en riesgo con necesidades de protección afectadas por emergencias humanitarias derivadas de los factores de violencia armada
Educación	Deserción escolar (en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial)
	Cobertura escolar (en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial)
Alojamiento	Número de personas afectadas por desastres de origen natural, socio natural y/o antrópico no intencional con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales
	Número de personas afectadas por factores de violencia con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales
Intersectorial	Afectación por factores de violencia
	Índice de Pobreza multidimensional

## Parte 3

# Análisis Sectorial

### TUMACO / NARIÑO, COLOMBIA

Taller con niños sobre rutas de desminado.  
Crédito de la foto: CIREC.





### 3.1 Protección

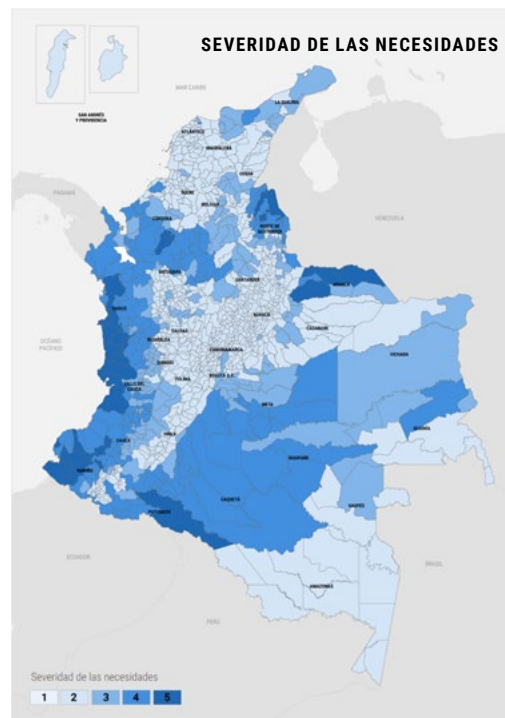
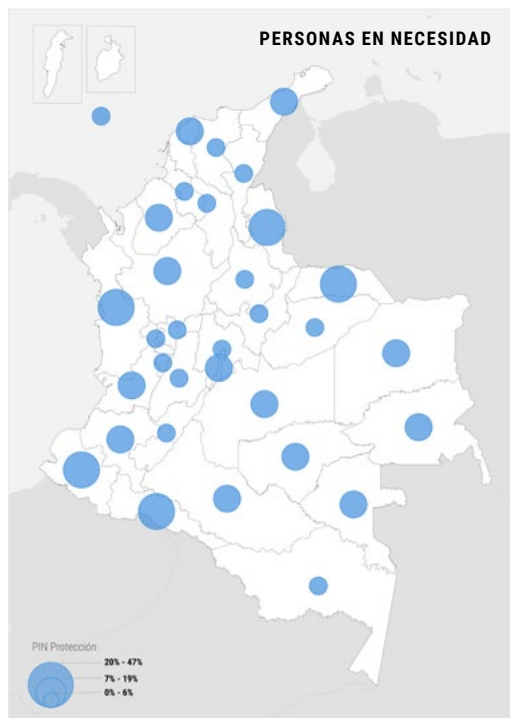
PERSONAS EN NECESIDAD

4,6M

TENDENCIA (2015-2021)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



### 3.2 Seguridad Alimentaria y Nutrición

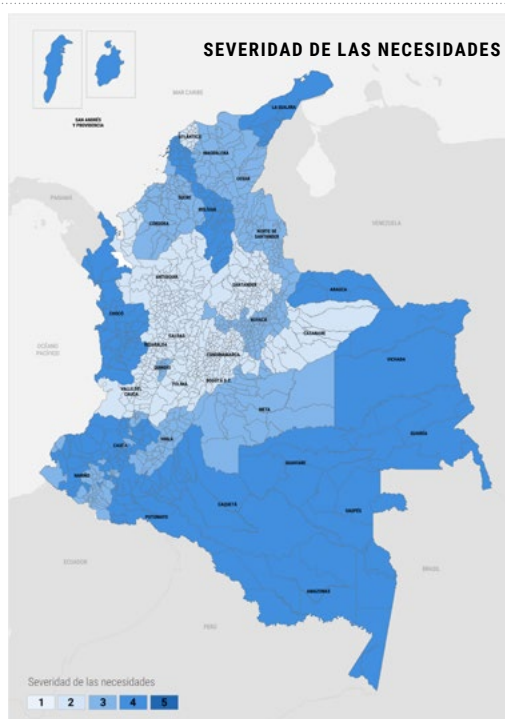
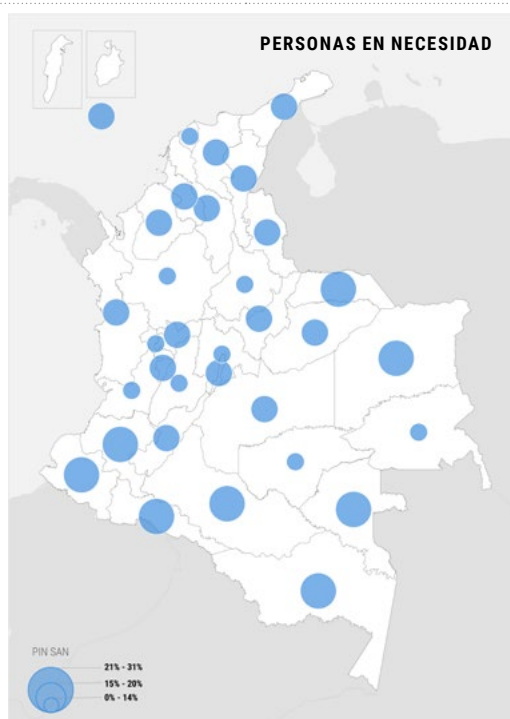
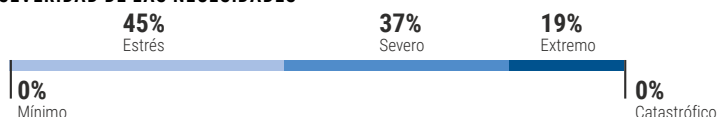
PERSONAS EN NECESIDAD

7,6M

TENDENCIA (2015-2021)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



### 3.3 Agua Saneamiento e Higiene

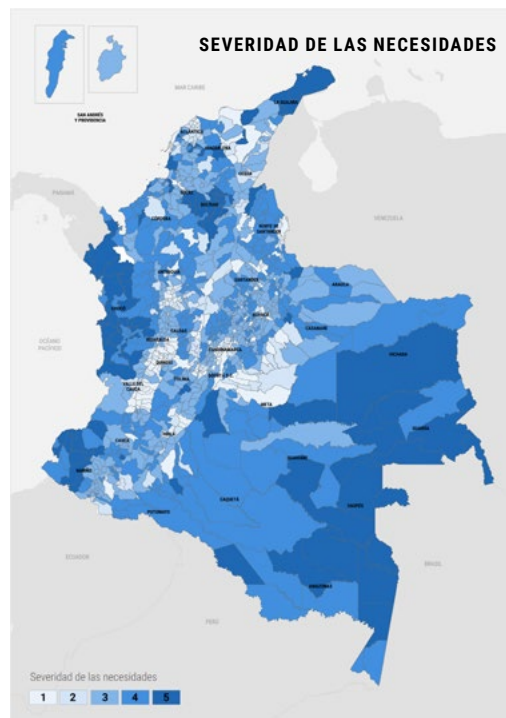
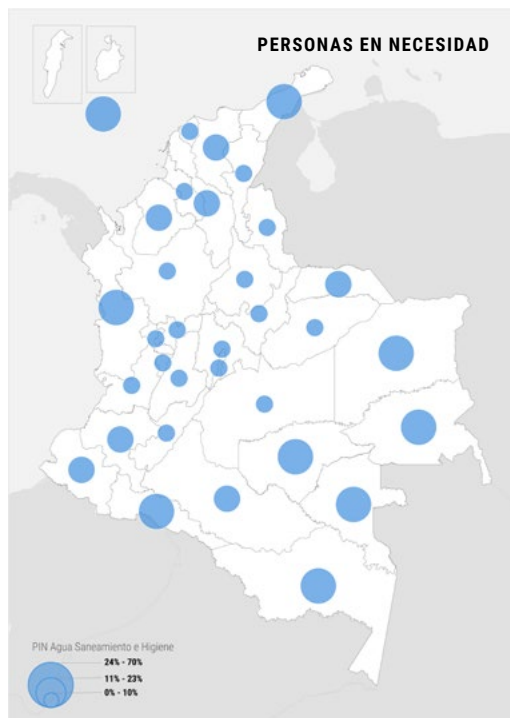
PERSONAS EN NECESIDAD

4,6M

TENDENCIA (2015-2021)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



### 3.4 Salud

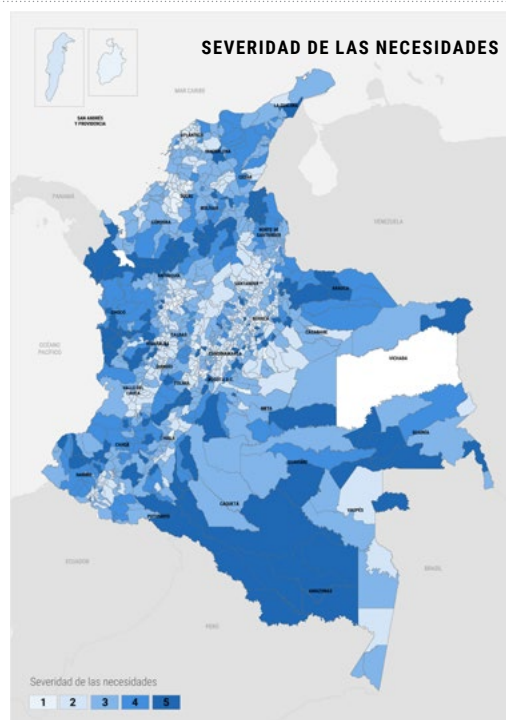
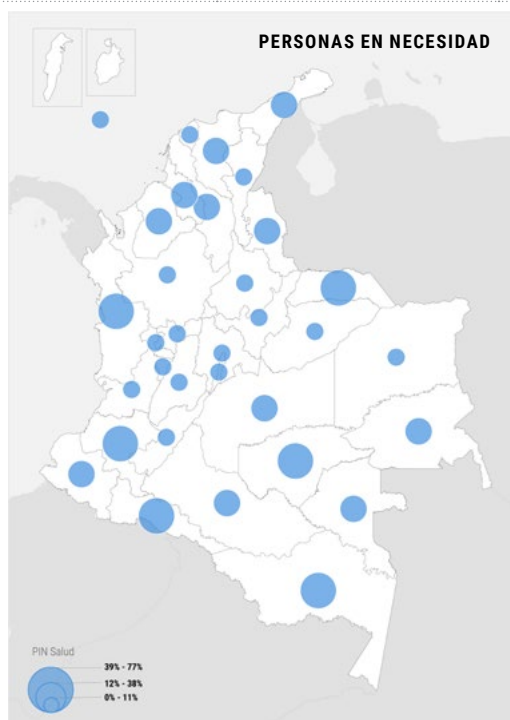
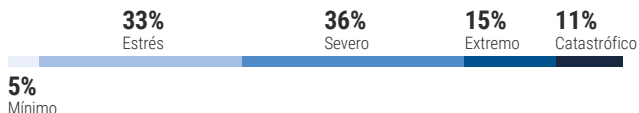
PERSONAS EN NECESIDAD

6,0M

TENDENCIA (2015-2021)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES





### 3.5 Recuperación Temprana

PERSONAS EN NECESIDAD

5,5M

TENDENCIA (2015-2021)



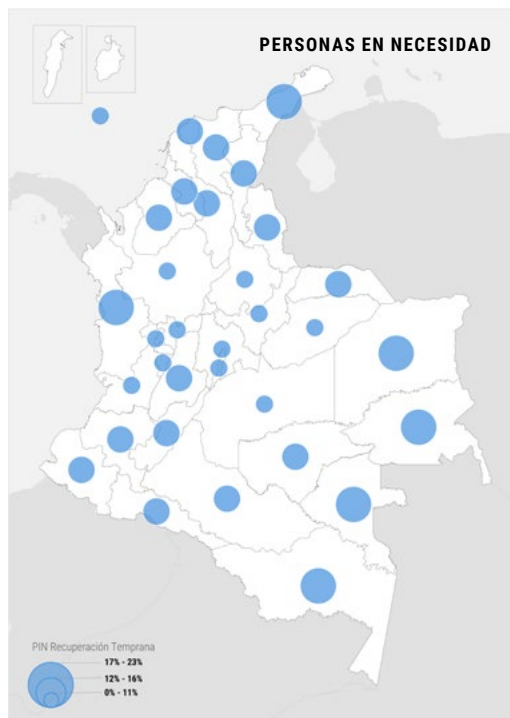
SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES

% 4%  
trés Severo

93%  
Extremo

0%  
Mínimo

0%  
Catastrófico



### 3.6 Educación

PERSONAS EN NECESIDAD

3,8M

TENDENCIA (2015-2021)



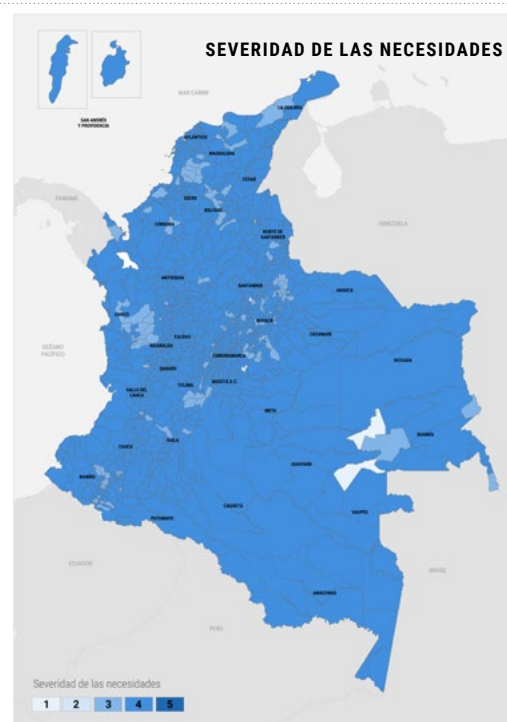
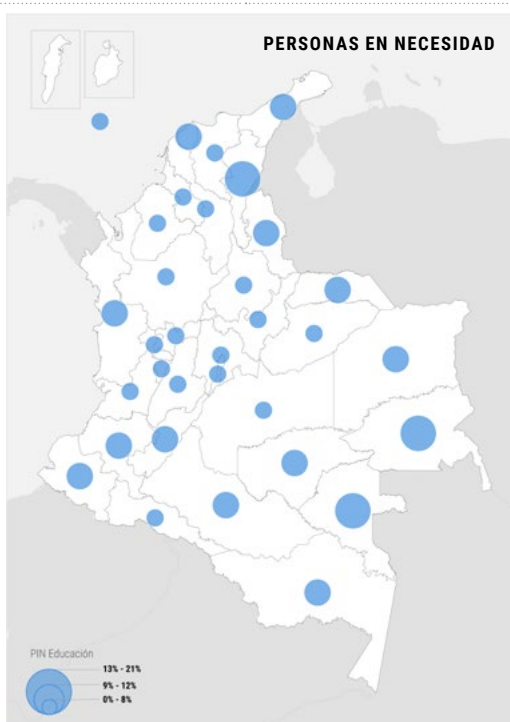
SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES

0% 10%  
Estrés Severo

89%  
Extremo

0%  
Mínimo

0%  
Catastrófico



### 3.7 Alojamientos Temporales

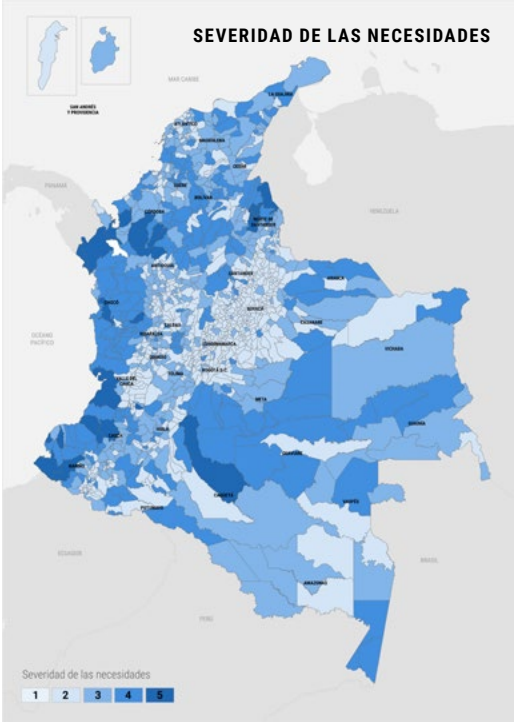
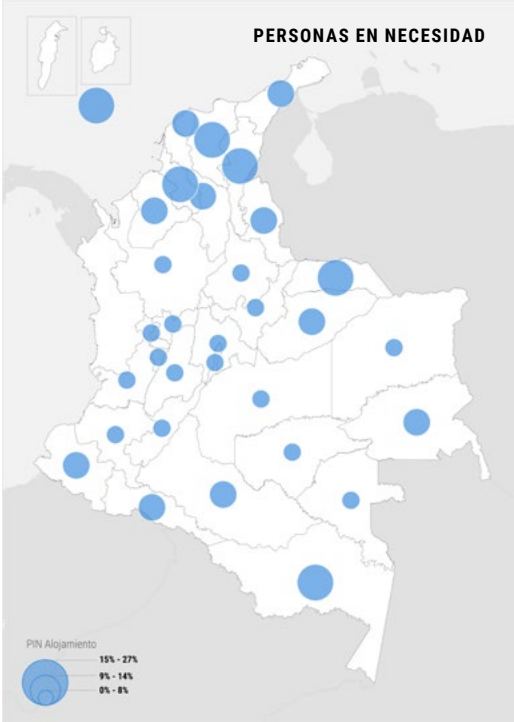
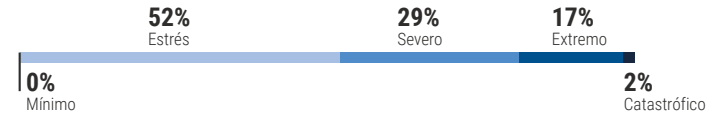
PERSONAS EN NECESIDAD

3,8M

TENDENCIA (2015-2021)



SEVERIDAD DE LAS NECESIDADES



## 3.1 Protección



PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	INDÍGENAS	AFRODESCENDIENTES	PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
4,6M	51%	30%	6,3%	19%	3%

### Análisis de las Necesidades Humanitarias

A pesar de las esperanzas puestas en el Acuerdo Final para reducir los factores de violencia armada, persisten vulneraciones de DDHH y DIH que se concentran de manera desproporcionada en territorios de ruralidad dispersa, territorios étnicos y periferias urbanas.

El último año se caracteriza por nuevas restricciones al acceso humanitario como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, el aumento del control de actores armados no estatales y la profundización de vulneraciones tales como: desplazamiento forzado interno -individual y masivo-, confinamiento, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento, violencias basadas en género, contaminación por minas antipersonal y municiones sin explotar, amenazas, restricciones a la movilidad, temor a la participación por parte de líderes y lideresas sociales, tortura y asesinatos.

Los actores humanitarios presentes en el país definen la situación actual como una crisis de protección. El Clúster de Protección estima que 4,6 millones de personas están en riesgo de sufrir violaciones de sus derechos humanos como consecuencia directa de los factores de violencia armada. De ellos, al menos 2.4 millones de personas están en alto riesgo de enfrentar violaciones a los DD.HH. y al DIH en próximo año, ya que viven en las ZOMAC.

### Proyección de las necesidades

Las necesidades de protección en Colombia seguirán en aumento mientras persistan las debilidades en la presencia estatal para la prevención y gestión del riesgo,

así como la construcción de soluciones y garantías de no repetición para las víctimas en las ZOMAC.

El Clúster de Protección prevé una intensificación de las afectaciones en 2022 en los territorios en confrontación, entre los que se destaca el Pacífico colombiano, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar y Catatumbo, así como en departamentos de frontera como Putumayo y Arauca con efectos desproporcionados hacia comunidades campesinas, indígenas y afro.

Territorios en los que coinciden múltiples emergencias humanitarias: factores de violencia armada, la llegada de personas refugiadas y migrantes que incluso pueden llegar a ser víctimas de la situación interna, la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales extremos y la recurrencia de movimientos mixtos transcontinentales.

En este sentido se considera que, no es posible comparar el caso de Colombia con el de otros países. La severidad de los efectos, la recurrencia de emergencias, la localización de los riesgos y las diversas capacidades de respuesta desafían la comprensión de los vacíos de protección. Comparar este contexto con otras emergencias en el mundo puede invisibilizar la complejidad de Colombia y la urgencia de respaldo para las operaciones de protección en el país. negativo en la protección de la niñez.

**Proyección de las necesidades (2021-2022)**

MILES DE PERSONAS (K)

	PERSONAS EN NECESIDADES	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERA	EXTREMA	CATASTRÓFICA	FACTORES ASOCIADOS	GRUPOS MÁS VULNERABLES
2022	4.6M	-	-	2.2M	1.7M	689K	Factores de violencia armada	Indígenas, afrodescendientes y personas en situación de discapacidad

**Sub-grupo de Protección**  
**Protección de la Infancia**

PERSONAS EN NECESIDAD	NIÑOS	NIÑAS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
<b>1,4M</b>	<b>51%</b>	<b>49%</b>	<b>3%</b>

Para 2021 los niños, niñas y adolescentes en Colombia siguieron expuestos a graves vulneraciones de derechos y consecuencias humanitarias ligadas a los factores de violencia armada, reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual por parte de grupos armados, tortura, homicidio y mutilación, desplazamientos, confinamientos, secuestro y presencia de territorios minados.

**Análisis de las Necesidades Humanitarias**

El Registro Único de Víctimas cuenta con 39.981 registros de afectaciones a niños y niñas por hechos victimizantes en 2020, 36.019 menos en comparación con 2019. Los hechos con más reportes fueron el desplazamiento forzado (26.925 niños, niñas y adolescentes afectados) y amenazas (4.868 niños, niñas y adolescentes afectados).

Durante 2020 y hasta el 17 de marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió 51 alertas en las que identificó riesgos por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en 188 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Caquetá, Amazonas, Valle del Cauca, Norte de Santander y Vichada. En el primer semestre del 2021 se registraron 126 eventos con afectaciones directas a niños, niñas y

adolescentes por factores de violencia armada, según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). Los departamentos con mayor número de reportes fueron Antioquia (22 eventos), Valle del Cauca (22 eventos), Norte de Santander (12 eventos), Cauca (11 eventos), Arauca (9 eventos) y Chocó (9). En estos mismos territorios y para el mismo período, la Coalico informó que se presentaron 36 eventos de reclutamiento, uso y utilización a grupos armados ilegales que afectaron a 96 niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con los informes anuales del Secretario General sobre niñez y conflicto armado<sup>148</sup>, el número de graves violaciones verificadas, perpetradas por actores armados en contra de niños, niñas y adolescentes aumentó en 19 por ciento entre 2019 y 2020 (de 176 graves violaciones verificadas en 2019 a 210

148. [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=S](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2021/437&Lang=S)



verificadas en 2020). En 2020, las graves violaciones más prevalentes fueron el reclutamiento, uso y utilización (116), los asesinatos y mutilaciones (69) y la violencia sexual (9).

En el contexto generado por el COVID-19, los niños, niñas y adolescentes expuestos a desescolarización, o y que habitan en territorios con economías ilícitas y factores de violencia armada, con baja presencia estatal, donde los canales de denuncia son poco eficientes, o no se hacen las denuncias por miedo a represalias, y conviven en entornos familiares y comunitarios de alta vulnerabilidad, se han visto más expuestos al reclutamiento y la utilización por actores armados ilegales.

### Proyección de las Necesidades

La proyección de necesidades para el 2022 supone una agudización de las consecuencias y el impacto humanitario en el país, acompañada de la tendencia

de recrudecimiento de las acciones armadas por la retoma y toma de territorios ligados al cultivo, procesamiento y distribución nacional o internacional de estupefacientes. Por esto se estima que prevalecerán los riesgos de protección para los niños, niñas y adolescentes, con énfasis en comunidades étnicas, refugiados, migrantes y población rural-, y posiblemente causarán un ulterior deterioro de los entornos protectores de la niñez.

Por esto, es necesario fortalecer los entornos protectores a nivel familiar, escolar y comunitario para disminuir los riesgos de violencia, abuso, explotación y negligencia del mismo modo se incita a las organizaciones internacionales y nacionales a desarrollar acciones articuladas para brindar y responder de forma integral a las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes, con especial énfasis en la prevención de violencia sexual, reclutamiento, uso y utilización y accidentes con MAP/MSE/AEI.



TUMACO/NARIÑO. COLOMBIA

Crédito de la foto: UNMAS.

## Sub-grupo de Protección Violencias Basadas en Género

PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	NIÑAS	MUJERES Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	MUNICIPIOS CON PIN	MUJERES Y NIÑAS EN RIESGO ALTO
2,2M	71%	29%	3%	33%	330k

En 2021, emergencias de desplazamientos forzados y confinamientos por factores de la violencia armada, desastres de origen natural y antrópico, la llegada de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y de aquellos en movimientos transcontinentales, y el impacto de la pandemia por COVID-19 han incrementado riesgos y casos de violencia basada en género (VBG). El temor a la violencia sexual ha ocasionado abandono forzado de territorios y se han reforzado redes de trata con fines de explotación sexual. La coyuntura electoral del 2022 podría generar mayores riesgos sobre todo para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

### Análisis de las Necesidades Humanitarias

Las 228 alertas territoriales recibidas por el Área de Responsabilidad de VBG en 2021 desde 14 territorios del país, evidencian un incremento en violencia de pareja e intrafamiliar, sexual, embarazo adolescente, uniones tempranas, afectando principalmente a mujeres y niñas afrodescendientes, indígenas, población LGBTIQ+, con discapacidad, lideresas y defensoras de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) y Ciencias Forenses, ha registrado hasta septiembre de 2021 39.686 casos de VBG: 59 feminicidios, 24.205 violencias de pareja, 15.422 violencias sexuales. Según el PIN de VBG, más de 330 mil mujeres y niñas de 27 municipios en ocho departamentos, se encuentran en riesgo alto y más de 820 mil en riesgo medio. Fondos y recursos humanos y físicos limitados, tolerancia social e institucional, y vacíos en los servicios de atención agravan los riesgos, disminuyen la confianza, y dificultan la erradicación y mitigación de la VBG.

### Proyección de las Necesidades

Las afectaciones humanitarias disminuyen el acceso a servicios de respuesta y las acciones de prevención. Para 2022, se necesita fortalecer la atención en: salud para violencia física y sexual, salud mental, gestión de casos, salud sexual y reproductiva, medidas de protección, justicia, información clave sobre servicios y rutas en VBG, kits de profilaxis post exposición, elementos de higiene menstrual y proyectos de medios de vida. Se resalta la necesidad de datos desagregados, servicios adaptados y accesibles a personas LGBTIQ+, en situación de discapacidad, población indígena y afrodescendiente. Así mismo, el fortalecimiento de capacidades de proveedores de servicios y la articulación con todos los sectores de la respuesta humanitaria son prioritarios.



#### DABEIBA / ANTIOQUIA, COLOMBIA

Taller con niños sobre rutas de desminado.

Crédito de la foto: Corporación Paz y Democracia.

### Sub-grupo de Protección Acción Contra Minas

PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
<b>479k</b>	<b>50%</b>	<b>36%</b>	<b>2%</b>

En 2021, el recrudecimiento de los factores de violencia armada ha exacerbado la vulnerabilidad y el riesgo por la presencia de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar (MSE) de poblaciones rurales, comunidades étnicas, niños, niñas y adolescentes en Colombia. El Área de Responsabilidad de Acción Contra Minas (MA AoR), por sus siglas en inglés, estima que, en 2022, **479,805** personas en 110 municipios están en riesgo de sufrir un accidente por MAP/MSE o de ser confinadas o desplazadas por la presencia de MAP/MSE. Los departamentos en los que se estima habrá mayor afectación por la presencia de MAP/MSE y riesgos de protección para las comunidades son: **Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.**

### Análisis de Necesidades Humanitarias

Las MAP/MSE han matado, herido y mutilado sin discriminar entre población civil y fuerza pública en lo que va del año en al menos 114 víctimas que han sido

registradas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2021 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), 64% civiles y 36% miembros de la fuerza



pública. Preocupa, en particular, la situación humanitaria de comunidades indígenas, las cuales se han visto gravemente afectadas por la presencia de MAP/MSE en 2021, con un total de 24 nuevas víctimas registradas, 10 de ellas menores de edad. En 2021, se observa un incremento del 20% en el número de víctimas indígenas registradas frente al año 2020.

De igual forma, en 2021, las MAP/MSE han afectado la vida cotidiana de las comunidades rurales en Colombia. Los artefactos explosivos han reducido la movilidad de miles de personas, impidiéndoles el acceso a cultivos, centros de salud, agua, lugares de trabajo, escuelas y espacios culturales. El Equipo Asesor Humanitario reporta que de las 40 emergencias humanitarias registradas entre enero y agosto de 2021 por confinamiento, el 8 por ciento estaban asociadas a la contaminación por MAP/MSE. De igual forma, en 2021, 136 de las emergencias por desplazamientos masivos tuvieron lugar de manera recurrente en 45 municipios; 19 de ellos también registraron accidentes por MAP/MSE. De esta misma manera, es alarmante el incremento de eventos y accidentes en algunas regiones del país. Aunque Nariño, Norte de Santander y Antioquia siguen siendo los departamentos con mayor afectación en 2021; se observa con preocupación, la situación humanitaria en Chocó, donde se ha registrado un aumento de 3 a 20 (566%) víctimas entre 2020 y 2021.

Los sobrevivientes de MAP/MSE en Colombia, la gran mayoría población con discapacidad, siguen enfrentando enormes dificultades para acceder a la ruta de asistencia a víctimas, barreras físicas para acceder a la educación u otros servicios, falta de servicios o programas de rehabilitación, e incluso estigmatización. Preocupa que la asistencia se sigue presentando en gran medida a nivel de atención de emergencia, pero la rehabilitación integral sigue siendo limitada. Landmine Monitor, estima que, en Colombia del total de víctimas registradas entre 1990 y 2016, al menos el 50 por ciento aún requerían servicios en salud, rehabilitación y apoyo psicosocial. El Área de Responsabilidad de Acción contra Minas estima que esta situación aún persiste en varios municipios del país.

Finalmente, es preocupante la vulnerabilidad y las necesidades humanitarias de protección que tienen las

víctimas indirectas de los accidentes por MAP/MSE, en su mayoría mujeres y niños, quienes no cuentan con fácil acceso a la asistencia y el apoyo del Estado, y suelen soportar el coste social y económico de cuidar a las víctimas y, al mismo tiempo, asumen el papel de sostén de la familia. El Área de Responsabilidad de Acción contra Minas estima que, por cada víctima directa 4.5 personas de su núcleo familiar o cercano se convierten en víctimas indirectas, y algunos de los riesgos o afectaciones relacionadas para este grupo poblacional incluyen: violencia basada en género, deserción escolar, afectación psicosocial y acceso limitado a bienes y servicios.

### Proyección de Necesidades

En 2022, el Área de Responsabilidad de Acción contra Minas estima un aumento del 79 por ciento de las personas en necesidad con relación al año 2021 debido al continuo uso de MAP/MSE por parte de grupos armados no estatales y su permanente afectación a comunidades. Se observa con urgencia la necesidad de actividades de educación en el riesgo de minas (ERM) y asistencia a víctimas (directas e indirectas), para mitigar los riesgos asociadas a la presencia de MAP/MSE en 2022. Asimismo, se requiere desminado humanitario para eliminar la amenaza de MAP/MSE en las áreas con mayor contaminación; y finalmente, coordinación con otros actores de desarrollo y paz y fortalecimiento de capacidades locales para promover una respuesta adecuada a las necesidades de los sobrevivientes y las víctimas, recientes y pasadas, que siguen en estado de vulnerabilidad y requieren asistencia.



## Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria se realizará a través de la estructura dispuesta por el clúster de Protección: Cuatro Grupos Temáticos de Protección (GTP) ubicados en Norte de Santander, Nariño, Cauca, y Chocó, así como 12 Equipos Locales de Coordinación (ELC) en los territorios mayormente afectados, dos Equipos Humanitarios Locales y el Comité Interinstitucional Humanitario (CIH) de Buenaventura; así mismo, los áreas de responsabilidad de Acción Integral Contra Minas, Violencia basada en Género y Protección de la Niñez. Se pretende realizar misiones al terreno desde las cuales se puedan aplicar Evaluaciones Rápidas de Protección (ERP), u otros instrumentos

de identificación de necesidades humanitarias que le permitan al clúster de Protección acompañar los esfuerzos por fortalecer las redes de protección local. Para efectos de los riesgos e impactos de protección en refugiados y migrantes venezolanos y retornados colombianos y binacionales, se mantendrá la estrategia back-to-back con la estructura del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM). El seguimiento se concentrará en las medidas de asistencia y protección de nuevas víctimas de los factores de violencia armada, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes; las condiciones de retorno de desplazados internos, en términos de seguridad, voluntariedad y dignidad. El monitoreo en acciones de prevención.

## Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	Número de personas afectadas por emergencias humanitarias derivadas de la violencia armada	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
2	Número de personas desplazadas que no han superado la condición de vulnerabilidad generada por factores de violencia armada.	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
3	Niños, niñas y adolescentes afectados por emergencias humanitarias	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)
4	Niños, niñas y adolescentes afectados por violencias físicas y sexuales	Medicina legal
5	Niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser afectados por los factores de violencia armada	Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, el uso, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA)
6	Índice de Violencias Basadas en Género	Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado -UARIV Feminicidios: Registro SPOA Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación Violencia psicológica o económica, física y sexual: Profamilia - ENDS
7	Afectación por presencia de artefactos explosivos	Oficina del Alto Comisionado para la Paz

## 3.2 Seguridad Alimentaria y Nutrición



De acuerdo con el informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI por sus siglas en inglés) publicado por la FAO en 2020, hay una tendencia creciente a nivel mundial del número de personas con hambre y malnutrición en sus diferentes formas. En el mundo, más de 2.100 millones de personas se encuentran en estado de inseguridad alimentaria y en Colombia, 2,7 millones tienen hambre, además, 300.000 niños y niñas menores de 5 años tienen malnutrición (67% por exceso y 33% por déficit)<sup>149</sup>.

Las restricciones generadas por la pandemia de la COVID-19 han deteriorado los sistemas económicos, alimentarios y de salud, con repercusiones negativas en los sistemas agroalimentarios, en la calidad y diversidad de los alimentos consumidos, y en la situación nutricional de las personas especialmente, las más vulnerables, con emergencias preexistentes al COVID-19 y múltiple afectación por situaciones de violencia, desastres y otras emergencias sociales. En la evaluación de necesidades realizada por la FAO sobre el impacto del COVID-19 en los medios de vida agrícolas<sup>150</sup> se destaca que según el índice de estrategias de afrontamiento basadas en los medios de vida (LCSI, por sus siglas en inglés), los hogares agropecuarios se vieron obligados a incurrir en estrategias de estrés

(44%), de crisis (38%) y de emergencia (13%) para hacer frente a la afectación de los medios de vida.

La situación alimentaria y nutricional podría agravarse debido a las afectaciones de las fuentes económicas para la compra de alimentos, el aumento de la tasa de desempleo y empleo informal, la pérdida del capital productivo y el aumento del endeudamiento de los hogares, las dificultades en el acceso a los servicios de salud y nutrición, especialmente los afectados por confinamiento, factores de violencia armada, desastres de origen natural y personas localizadas en zonas rurales dispersas.

### Análisis de las necesidades humanitarias

Para 2022, se estima que 7,6 millones de personas tendrán necesidades en seguridad alimentaria y nutrición en los 1.122 municipios del país<sup>151</sup>.

Según la FAO, ha habido deterioro de las condiciones de la población dedicada a actividades agropecuarias, en especial, las poblaciones rurales y los grupos étnicos, quienes han sido los más afectados por las consecuencias derivadas del COVID-19, el paro nacional y las afectaciones agroclimáticas del 2020 – 2021<sup>150</sup>.

149. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2021) The State of Food Security and Nutrition in the World 2021.

150. FAO (2021) Evaluación de los efectos del COVID-19 en el sistema agroalimentario. <https://www.fao.org/documents/card/es/c/CB4942ES/>

151. Basados en los cálculos de CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security) WFP 2021 e indicadores de situación nutricional (INS, ENSIN 2015).

De acuerdo con la información generada por los socios del Clúster SAN, el 49 por ciento de las personas experimentaron inseguridad alimentaria (45% moderada y 4% severa); en departamentos como Chocó, La Guajira, Putumayo y Amazonas la prevalencia fue mayor del 59 por ciento<sup>152</sup>. Así mismo, el 23,7 por ciento de las personas no pueden acceder a una dieta saludable<sup>153</sup>. Las estrategias de supervivencia a las que acudieron los hogares en condición de desplazamiento y comunidades receptoras fueron gastar los ahorros (52%), comprar alimentos a crédito (50%) y pedir dinero prestado (41%)<sup>154</sup>. El 80 por ciento de los campesinos reportaron afectación por la COVID-19, el paro nacional (80%) y desastres (58%), seguido por los grupos afrodescendientes y comunidades indígenas; el 44 por ciento de las mujeres rurales dedicadas a actividades agropecuarias perciben menos de la mitad de un salario mínimo (\$454.263); adicionalmente se reportaron menores áreas sembradas y se esperan menores cosechas para el segundo semestre de 2021.

Una de las limitantes que se identifica en la actualidad es la poca disponibilidad de información relacionada con la situación nutricional disponible que a la fecha es limitada. Acorde con el reporte del Instituto Nacional de Salud, entre enero y agosto de 2021, Vichada, Vaupés, Guaviare, La Guajira y Arauca fueron los departamentos con mayor prevalencia de desnutrición aguda; a su vez son las zonas de frontera<sup>155</sup> con alta proporción de población indígena y rural<sup>156</sup>. El 44.8 por ciento de los niños y niñas de 6 a 23 meses amamantados tuvieron una dieta mínima aceptable y solo el 12,7% de los niños y niñas no amamantados tuvieron una frecuencia mínima de comidas<sup>154</sup>. Unido a lo anterior, se establece que, las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria por la COVID-19 limitaron el acceso a los servicios de salud y nutrición (intramural y extramural) en 2020 y 2021 y con ello, la identificación de casos de malnutrición y seguimiento al estado nutricional, principalmente en niños y niñas menores de 5 años, las mujeres gestantes y en periodo de lactancia.

Otra de las situaciones que ocasiona necesidades humanitarias destacadas por el Equipo Asesor Humanitario son los movimientos mixtos transcontinentales. Según datos obtenidos en la evaluación de necesidades MIRA<sup>157</sup>, se identificó que la mayoría de las personas acceden a dos comidas al día en promedio. Para esta población se prevén riesgos en mujeres, niños y niñas asociados no solo a la consecución de alimentos, sino también al deterioro de la situación nutricional de las mujeres gestantes, mujeres en periodo de lactancia y niños y niñas. También es latente el riesgo de la presencia de enfermedades transfronterizas, las cuales pueden afectar no solo a las personas, sino también a los sistemas productivos, cultivos y animales presentes en las rutas por donde transita la población migrante.

### Proyección de las necesidades

Para 2022, se espera que las afectaciones derivadas de la COVID-19, la contaminación por MAP, la presencia de grupos armados no estatales, especialmente en la región Pacífica, así como los riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional, se incrementen como consecuencia del desplazamiento, confinamiento y el control de los grupos armados, así como de las aspersiones con glifosato. Adicionalmente, es posible que los medios de vida y los precios de los insumos agrícolas también se vean afectados por estos factores.

También se prevé un posible incremento de casos de desnutrición aguda y deficiencias de micronutrientes en niños y niñas menores de cinco años, madres gestantes y en periodo de lactancia, así como la disrupción de los sistemas productivos y alimentarios, especialmente en zonas rurales y dispersas, pueblos indígenas y afrocolombianos, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Las afectaciones en la seguridad alimentaria y nutricional vinculadas a los factores de violencia armada, COVID-19 y desastres, se suman a las afectaciones y necesidades

152. WFP (2021) Computer-Assisted Telephone Interviewing. Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security- World Food Programme Official.

153. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (2021) The State of Food Security and Nutrition in the World 2021.

154. REACH 2021. Evaluación de Necesidades Multisectoriales de Colombia: Resultados preliminares.

155. Vichada reportó caos de muertes por desnutrición de niños y niñas indígenas (4 casos según lo reportado en la mesa departamental de desnutrición a corte de agosto del 2021).

156. Instituto Nacional de Salud. Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Semana epidemiológica 31. agosto 2021.

157. <https://assessments.hpc.tools/assessment/312c6120-d3fd-43f7-a187-275d42024b5a>

propias asociadas al movimiento de refugiados y migrantes tanto provenientes de Venezuela como aquellos en dinámicas mixtas transcontinentales, y la sobrecarga para los mecanismos de supervivencia de las comunidades de acogida.

De acuerdo con este panorama y la volatilidad del contexto humanitario, para los socios del Clúster SAN son prioritarias las acciones relacionadas con el levantamiento de información de la situación alimentaria y nutricional en poblaciones afectadas, producción de alimentos que garanticen el autoconsumo familiar en la recuperación de las consecuencias de la pandemia; protección y rehabilitación de los medios de subsistencia esenciales para la seguridad alimentaria y nutricional con enfoques de protección, gestión del riesgo agroclimático, étnico y de género. También se han priorizado intervenciones de agricultura en emergencias; asistencia alimentaria en especie y bonos/ efectivo; la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda y las deficiencias de micronutrientes; así como la educación alimentaria y nutricional como parte del fortalecimiento de capacidades institucionales, comunitarias y familiares.

## Monitoreo

El monitoreo de las acciones en Seguridad Alimentaria y Nutrición en el marco del Clúster se realizará de manera semestral, a partir del 345W y recursos propios del Clúster. El reporte sectorial se actualizará en las plataformas previstas por OCHA, el Clúster Global de Seguridad Alimentaria y el Clúster Global de Nutrición.

El monitoreo y la identificación de brechas de la respuesta se realizará cada tres meses en conjunto con los socios, el cual permitirá la toma de decisiones respecto a la continuidad o ajuste en las intervenciones o zonas geográficas de la respuesta en SAN.

Se desarrollarán productos de información basados en datos e indicadores de fuentes oficiales como la UARIV, la UNGRD, el Instituto Nacional de Salud, entre otros. Estos productos serán de apoyo a los análisis de situación del Clúster y sus socios.

Por último, el Clúster promoverá entre los socios la realización de la encuesta del Monitoreo al desempeño de la Coordinación del Clúster (CCPM por sus siglas en inglés) que permita identificar las brechas y oportunidades en la coordinación del Clúster SAN.

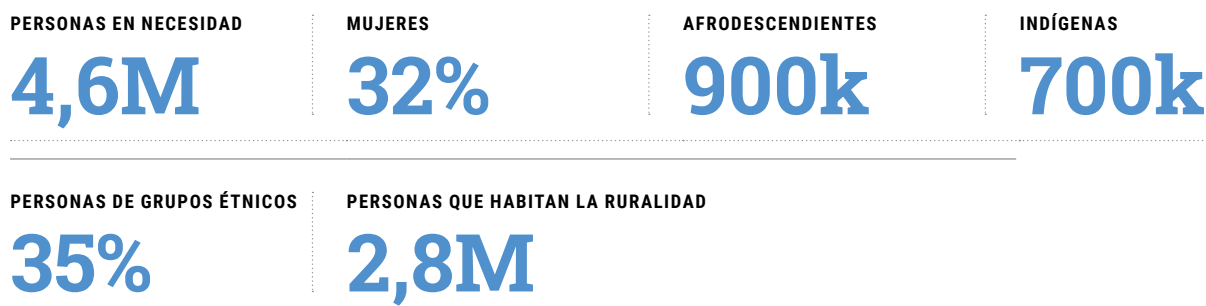
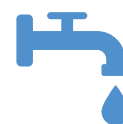
## Tabla de indicadores

#	PROYECCIÓN	FUENTE
1	# de personas con Inseguridad Alimentaria	CARI-WFP
2	# de niños y niñas nacidos vivos a término con bajo peso al nacer	SIVIGILA-INS 2020-2021



### 3.3

## Agua Saneamiento e Higiene



Las comunidades víctimas de los factores de la violencia armada, así como aquellas afectadas por desastres en el país, por la migración transcontinental y las que son más vulnerables ante emergencias sanitarias, carecen de acceso con calidad a los servicios de agua saneamiento e higiene (WASH), y a mensajes de promoción de la higiene y de gestión de los servicios WASH adaptados a su contexto. Esta situación es especialmente crítica en las comunidades rurales (nucleadas y dispersas) y aún más en las comunidades étnicas, debido a las brechas históricas de acceso a los servicios WASH y a la dificultad de recuperar aquellos que se tenían y que se vieron afectados por un desastre, desplazamiento o confinamiento.

### Análisis de las necesidades humanitarias

Según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP, por su sigla en inglés)<sup>158</sup> las mayores barreras de acceso a los servicios WASH en el país se presentan en las áreas rurales, ya que el 13% de las personas no cuentan con acceso a agua, ni siquiera en el nivel básico de calidad. Así mismo, el 16 % de las personas no cuentan con acceso a saneamiento en el nivel básico de servicio de éstos, y el 11 por ciento practican defecación a campo abierto, lo que equivale a más de 5 millones de personas.

Las brechas mencionadas son más intensas y difíciles de cubrir en las comunidades étnicas, especialmente en las afrodescendientes y en las indígenas. Esto se debe principalmente a las deudas estructurales de cobertura de los servicios WASH, a la lejanía de las comunidades y a la dispersión de sus viviendas.

Así mismo, las comunidades rurales han sido las más afectadas por acciones de grupos armados organizados y por desastres. Entre enero y noviembre de 2021, de las 91 emergencias que han presentado necesidades WASH solo 1 fue en área urbana las otras 90 fueron rurales afectando a 33 comunidades campesinas 62 indígenas y 31 afrodescendientes<sup>159</sup>.

Adicionalmente, una vez las personas han sufrido cualquiera de los mencionados hechos y han tenido que desplazarse a otra comunidad aledaña o a cabeceras urbanas, se han encontrado que las comunidades de acogida y los sitios de alojamientos también carecen de acceso a los servicios WASH.

Esta situación agrava las necesidades humanitarias de las personas afectadas/víctimas y de las personas que hacen parte de las comunidades de acogida. Estos fueron los casos de los desplazamientos en la Cuenca

158. Joint Monitoring Programme (UNICEF y OMS) <https://washdata.org/data/household#!/dashboard/new>

159. La suma de los 3 grupos poblacionales no da el total de emergencias, ya que en varias emergencias han concluido como afectados más de un grupo.

del Baudó, los de la Cuenca del Atrato, los de Roberto Payan, Magüí Payan y Barbacoas en Nariño y de las comunidades afectadas por inundaciones en La Mojana.

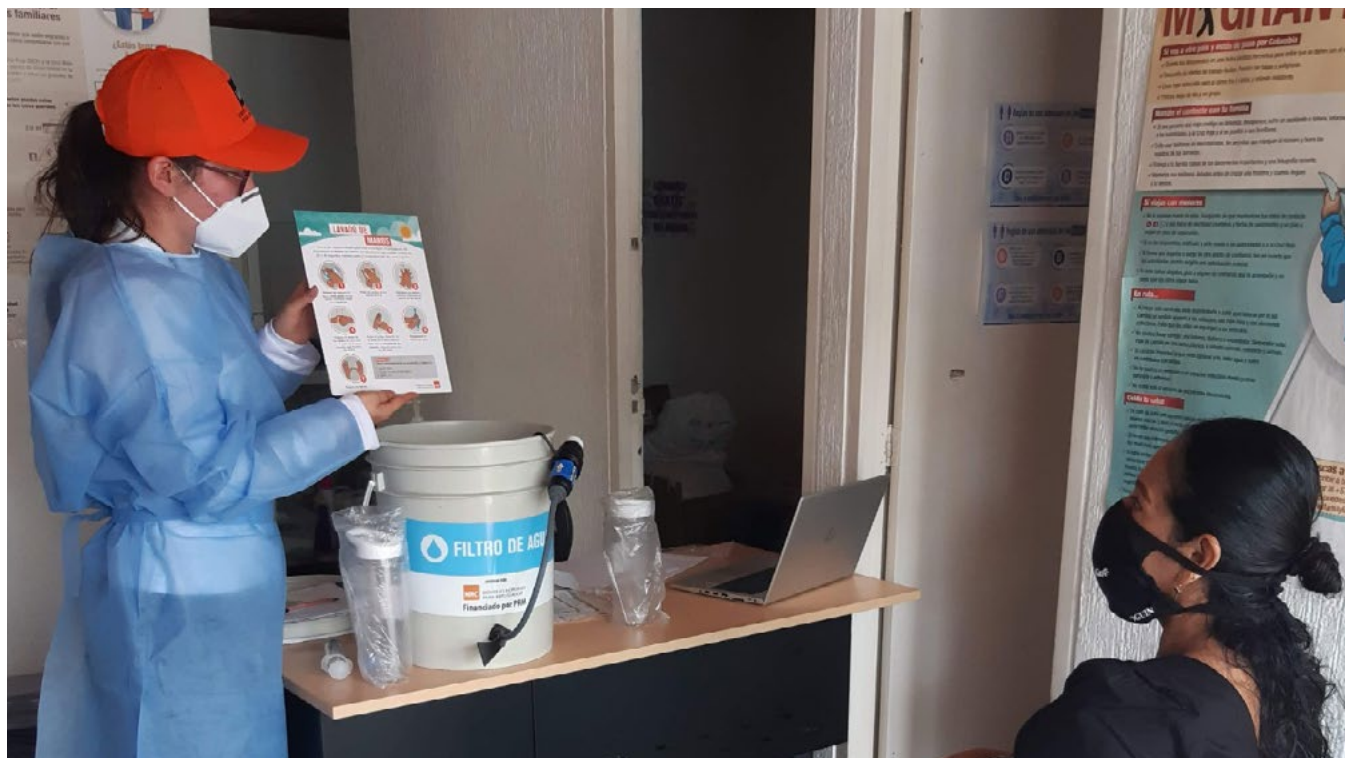
Las comunidades afectadas en general carecen de capacidad de adaptación y de resiliencia ante los eventos climáticos extremos; toda vez que, ocurrido un desastre como una inundación o una avenida torrencial, las comunidades ven averías o afectación en los servicios WASH que tenían. Además, luego del evento se les dificulta volver al nivel básico de cobertura del servicio. Estos fueron los casos de las inundaciones de la segunda temporada de lluvias y el paso de los huracanes Eta e Iota en el 2020 y de las dos temporadas de lluvias del 2021 de municipios y comunidades de territorios como Chocó, Meta, La Guajira, Antioquia, Providencia y Arauca.

En la misma línea, las comunidades, autoridades locales y prestadores de servicios WASH han demostrado dificultad para estructurar, actualizar e implementar, planes para la reducción de riesgos

y desastres que afectan el acceso a los servicios WASH. Así mismo, una vez sucedido el evento climático o el hecho victimizante, presentan barreras para implementar de manera oportuna planes de respuesta y contingencia.

Las comunidades que carecen de los servicios WASH, como fue mencionado, se encuentran en riesgo de adquirir enfermedades transmitibles y prevenibles, como lo son las EDA, IRA y enfermedades de la piel; de estas, los dos primeros grupos de enfermedades son potencialmente mortales para niños y niñas menores de 5 años.

De la misma manera, estas comunidades carecen de conocimientos adecuados a su contexto sobre prácticas de higiene, lo cual sumado a falta de acceso a los servicios WASH, les imposibilita realizar de manera adecuada prácticas de higiene, tales como: el lavado de manos, el manejo de excretas, el manejo de agua en el punto de consumo, la gestión de residuos sólidos, el manejo de vectores y plagas y la gestión menstrual.



**VILLAVICENCIO / META, COLOMBIA**  
Entrega de kit de tratamiento de agua.  
Crédito de la foto: NRC

Las comunidades rurales más dispersas y afectadas por los factores de violencia armada o desastres carecen en general de sistemas comunitarios e individuales de acceso de sistemas de agua, por la falta de todos o de parte de los componentes mínimos de un sistema de agua, como lo son puntos de captación, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución.

Al respecto, según la MSNA<sup>160</sup> el 22 por ciento de las personas afectadas por factores de violencia armada o desastres, no acceden al agua por alguna fuente mejorada. Incluso quienes tienen acceso a algún sistema como punto de abasto, al 10 por ciento de las personas les toma más de 30 minutos entre ir y regresar por el agua incluyendo la espera. Así mismo, el 11 por ciento de las personas objeto de esta evaluación consideraron que la calidad de su agua era mala y el 39 por ciento regular; sin embargo, lo más preocupante es que de éstas el 58 por ciento no hace ningún tipo de tratamiento.

Además de las brechas estructurales, la disponibilidad de agua se ve afectada en las áreas rurales en las temporadas de sequía por la dificultad de almacenar aguas lluvias y por los bajos niveles de las fuentes superficiales, especialmente para aquellas comunidades ubicadas en territorios de bosque secos o semidesérticas como lo son la media y alta Guajira. En el caso de las inundaciones y avenidas torrenciales la disponibilidad se ve afectada ya que estos eventos suelen afectar alguna o todas las partes los sistemas de agua comunitarios y las soluciones individuales.

Por su parte, todos los factores de la violencia armada afectan el acceso con calidad al agua. En el caso de los desplazamientos, los sitios de alojamiento no suelen contar con la capacidad instalada para responder a estas demandas, tal y como se observó en los desplazamientos en Roberto Payán y Magüí Payán en Nariño. En cuanto a los confinamientos, las comunidades enfrentan riesgos de protección al tener que desplazarse para adquirir el agua a una fuente superficial y pueden encontrarse con actores armados y con MAP/MUSE.

Todas las situaciones expuestas agravan las necesidades humanitarias en las comunidades rurales de departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia y Bolívar. En estas zonas, además de no contar con el servicio de agua, las fuentes superficiales desde donde se abastecen las personas están altamente afectadas por actividades antrópicas como la minería, la cual ha modificado el caudal de los ríos y los ha contaminado con mercurio<sup>161</sup>. Así mismo, las fuentes superficiales de otros territorios como el Putumayo, la biorregión Amazónica, la Orinoquia y el Magdalena han tenido efectos en su caudal y en su composición físico química debido a otras actividades antrópicas extractivas y a la deforestación<sup>162</sup>. Esto no solo afecta el acceso actual sino la posibilidad de establecer sistemas comunitarios de acceso con calidad ya que el tratamiento de estas aguas es más costoso.

Las comunidades afectadas por los factores de violencia armada y desastres carecen de servicios de saneamiento de calidad tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Según la MSNA, el 28 por ciento de las personas no cuentan con una letrina o sanitario que garanticen la separación de las excretas humanas, y de estas personas el nueve por ciento realiza defecación a campo abierto. Lo anterior impide que se tenga una adecuada separación de las excretas del contacto con los humanos a través de diferentes rutas de contaminación como lo es la ano-mano-boca. De las que personas que sí cuentan con acceso a un sistema de saneamiento mejorado el 14 por ciento comparten este servicio con otros hogares, lo cual implica riesgos de protección especialmente para las niñas, niños, adolescentes y las mujeres.

Las comunidades rurales carecen de un adecuado saneamiento ambiental a causa de la mala gestión de los residuos sólidos, de las aguas residuales y del precario control de vectores. Así se configura un factor catalizador para brotes de enfermedades por vectores, tal y como fue el caso del brote de dengue en La Guajira entre octubre y noviembre del 2021.

160. Evaluación de Necesidades Multisectoriales de Colombia

161. [https://www.gaiaamazonas.org/uploads/uploads/books/pdf/Reporte\\_ESP.pdf](https://www.gaiaamazonas.org/uploads/uploads/books/pdf/Reporte_ESP.pdf)

162. [https://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2020/03/hidrocarburos\\_amazonia\\_bloques\\_petroleros\\_comunidades\\_indigenas\\_campesinos.pdf](https://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2020/03/hidrocarburos_amazonia_bloques_petroleros_comunidades_indigenas_campesinos.pdf)

En cuanto a los servicios de higiene el 23 por ciento de las personas indicaron dentro del MSNA que no cuentan con lavamanos o con ninguna infraestructura o sistema que les permita el lavado de manos con agua y jabón. En cuanto a la práctica de higiene el 13% de las personas indican que solo usan agua cuando van a lavarse las manos. Además, según la investigación de mercados WASH de REACH llevada cabo en La Guajira y en Norte de Santander las comunidades presentan múltiples brechas de acceso a productos WASH como las alzas de precios, el desabastecimiento y la falta de recursos.

También hay que mencionar que las comunidades tienen diferentes necesidades en cuanto a la higiene según las fases y el tipo de emergencia. Por ejemplo, en una primera fase de las emergencias las comunidades han perdido medios de vida y enseres, por lo cual requieren acceso a elementos de higiene. Ya en las demás fases de las emergencias y en emergencias crónicas/prolongadas, las comunidades requieren mejorar sus prácticas de higiene para que estas logren prevenir enfermedades.

Al igual que los otros hechos generadores de emergencias, en la actualidad en el país hay un flujo considerable de migrantes transcontinentales. Estas personas carecen de acceso con calidad y oportuno a los servicios WASH tanto en sus lugares de entrada, como el departamento de Nariño, como en los puntos de salida en los departamentos de Antioquia y Chocó. Es especialmente crítica la situación del municipio de Necoclí donde se han registrado más de 20 mil personas represadas buscando pasar a Panamá. Sin embargo, las necesidades de estas personas también se presentan en el trayecto donde no tienen acceso a agua potable, ni tampoco a servicios de saneamiento o de higiene, lo cual expone a esta comunidad a deshidratación, contagio de enfermedades y malnutrición.

En cuanto a grupos poblacionales, además de los grupos étnicos, previamente mencionados, hay grupos donde las necesidades de acceso a los servicios de WASH son más críticos.

Al respecto, para las niñas, así como, las mujeres adolescentes, adultas, gestantes y lactantes la falta de acceso a los servicios WASH significa una mayor severidad en sus necesidades humanitarias. Lo anterior,

ya que, la falta de estos servicios significa un riesgo de protección especialmente frente a las violencias basadas en género, toda vez que, por el rol de cuidado del hogar son ellas quienes más frecuentemente se dirigen a las diferentes fuentes por el agua, y también deben salir de sus casas para realizar las prácticas de defecación a campo abierto.

El no tener estos servicios también las expone a enfermedades específicas de su género como lo son las enfermedades del tracto urogenital por la imposibilidad de realizar la adecuada higiene menstrual. La indebida gestión menstrual tiene efectos en la dignidad de las mujeres y en el caso de las niñas y adolescentes el no tener un entorno propicio para esta gestión, también afecta su acceso a la educación.

Los niños, niñas y adolescentes no acceden a servicios WASH de calidad dentro del entorno escolar. Esto se evidenció en los planes de retorno seguro a las clases presenciales, luego del cierre de las instituciones educativas por la COVID-19. De igual manera, se ha afectado principalmente a los niños, niñas y adolescentes de las comunidades rurales y más vulnerables del país que son aquellas que por diferentes motivos no podían acceder a educación virtual. No poder retornar a clases presenciales o retornar a estas sin la capacidad instalada requerida en WASH, representa un riesgo no solo de contraer la COVID-19, sino también, otras enfermedades prevenibles. Además, esto significa la imposibilidad de asegurar otros derechos de los NNA como lo son la seguridad alimentaria y nutricional, protección y educación entre otros.

Así mismo, las comunidades rurales y afectadas por factores de violencia armada, por desastres y por COVID-19 carecen de acceso a los servicios WASH en los centros de salud comunitarios. En la ruralidad no se tiene acceso a la recolección de residuos peligrosos y los centros de salud carecen de acceso al servicio de agua, así como de baterías sanitarias adecuadas para el uso en ese tipo de instalaciones, así mismo no tienen capacidad instalada en servicios de higiene. Todo esto configura un riesgo en la salud, no solo por la imposibilidad de brindar un servicio de salud de calidad sino por la posibilidad de contagio de nuevas enfermedades.



## Proyección de las necesidades

En el 2021 se han presentado constantes emergencias tanto por nuevos factores de la violencia armada, como por desastres de origen natural. El 2022 no va a ser diferente; de hecho, el periodo electoral y factores como el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos sugieren que las condiciones continuarán y en algunos casos empeorarán las condiciones actuales.

Esto es preocupante y más si se observa que el comportamiento del sector WASH para responder a las emergencias ha sido insuficiente y lento; por ejemplo, en el Chocó de las 41 emergencias por causa de los factores de violencia armada solo se atendieron seis de manera total y 11 con acciones aisladas de WASH. Así mismo el promedio de tiempo para responder ante estas emergencias es de dos meses.

Las comunidades son muy vulnerables a los efectos del cambio climático debido además de la ubicación geográfica, a la falta de medidas de adaptación de las comunidades. La temporada de lluvias extremas presentada a finales de 2020 tuvieron efectos en departamentos como La Guajira, San Andrés y Providencia. Por su parte, las dos temporadas de lluvias de 2021 también derivaron en afectaciones; la primera, entre abril y mayo, tuvo mayores consecuencias en territorios como Arauca, Meta y Chocó; y la segunda, entre septiembre y octubre, tuvo mayor impacto en la subregión de La Mojana en municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. Por lo tanto, se espera que los eventos aumenten en intensidad y frecuencia en 2022.

Por otro lado, las comunidades seguirán presentando barreras de acceso a la respuesta humanitaria por la presencia de grupos armados organizados en sus territorios. Por lo tanto, en 2022 estas requerirán de acciones que garanticen protección por presencia, dentro de las cuales las obras de infraestructura y los cambios de comportamiento en WASH, son además de

una manera de atender las necesidades sectoriales y una estrategia para garantizar protección en la comunidad.

Por último, el Estado colombiano sigue en la implementación de la Política de Agua Rural, la cual ha registrado avances, pero sigue requiriendo incrementar la capacidad de las autoridades locales y departamentales para estructurar y visibilizar proyectos exitosos y para acortar las brechas de acceso en la ruralidad.

## Monitoreo

Para la construcción del PIN fueron utilizadas la Encuesta de Calidad de Vida y la Gran Encuesta Integrada de Hogares, ambas lideradas por el DANE. En ese sentido estas serán monitoreadas en lo corrido del año para monitorear el cambio de las necesidades.

Asimismo, se monitorean los avances en la implementación de la política pública del programa Agua al Campo y de las otras iniciativas de acceso a agua y saneamiento rural mediante el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) y el Sistema de Inversiones de Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS). Por último, en cuanto a los sistemas públicos se cuenta con Índice de Riesgo y Calidad e Agua (IRCA) el cual es monitoreado a nivel nacional por el Instituto Nacional de Salud (INS).

De la misma manera, se utilizarán como medio de monitoreo los informes de las evaluaciones de necesidades de los diferentes socios y los informes sobre necesidades de las mesas WASH que existen en los diferentes territorios.

Adicionalmente, el sector está en construcción de una herramienta de monitoreo de brechas, la cual se alimentará de contrastar el PIN, la población meta y los avances en la respuesta según los datos recabados en el Sistema 345W.

## Tabla de indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
1	# de personas que acceden al servicio de agua	Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
2	# de personas que acceden al servicio de saneamiento	Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
3	# de personas que acceden al servicio de recolección de residuos sólidos	Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018
4	# de personas que acceden al servicio de agua sin riesgo	Instituto Nacional de Salud - IRCA
5	# de comunidades rurales que tienen acceso a sistemas funcionales de agua y saneamiento	Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico



AGUA CLARA/ NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Taller MIRA

Crédito de la foto: OCHA, Javier Carrillo, 2021



## 3.4 Salud

PERSONAS EN NECESIDAD

6,1M

MUJERES

34%

HOMBRES

33%

NIÑAS

16%

NIÑOS

18%

En el marco de la situación humanitaria en Colombia hay una combinación de escenarios múltiple afectación, sumados a graves problemas estructurales, que se han agudizado a causa de la pandemia por COVID-19. Estos factores han incrementado las necesidades en todos los sectores, pero son especialmente profundos en el de salud, en donde el número de personas en necesidad asciende a 6,1 millones. En este escenario se destacan los siguientes aspectos:

En Colombia, la población nacional, se encuentra asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en un 98,5%, según cifras del Ministerio de Salud con corte a octubre de 2021; sin embargo, al menos 8 millones de personas se encuentran a más de una hora de distancia de los centros de salud<sup>163</sup> y 2,2 millones experimentan barreras para acceder a servicios de salud<sup>164</sup> lo cual afecta especialmente a las comunidades indígenas y afrocolombianas en la Amazonía y el Pacífico. Sumado a esto, la pandemia ha impactado también el acceso a la atención primaria en salud, teniendo en cuenta que gran parte de los esfuerzos del sector, se han concentrado en la prestación de servicios orientados a la emergencia sanitaria.

Durante la pandemia se observa una fatiga importante en el personal, los sistemas de vigilancia e información y los procesos de respuesta y coordinación. También requieren recuperarse los programas y servicios

sociales que en la actualidad están siendo limitados en las zonas rurales y con dificultades de acceso a salud. Además, se debe prestar atención en salud mental para el personal que ha brindado la respuesta.

En el país hay 17,9 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes, cifra inferior a la establecida como mínima en el Manual Esfera (18). Así mismo, hay pocos insumos, elementos, medicamentos y talento humano para la prestación de servicios de salud, especialmente en zonas rurales dispersas y con mayor afectación por emergencias. Dentro de las principales preocupaciones, se encuentra el incremento en los ataques contra las misiones médicas<sup>165</sup>: en los primeros meses del año se reportaron 189 ataques, lo que supone un incremento respecto a 2020, y las restricciones de acceso; así mismo la cifra de víctimas indígenas en el marco de las acciones de violencia han aumentado un 142 por ciento y de población afrocolombiana un 103 por ciento. En este mismo sentido llama la atención el número de víctimas de MAP y la prestación de servicios de salud, las cuales requieren atención para su rehabilitación de manera complementaria e integral con otros sectores.

### Análisis de las necesidades humanitarias

Con relación con las principales necesidades en salud y las atenciones en el país, encontramos: a. Hasta la semana 43 de 2021 se ha observado un incremento

163. Estimación con base en los resultados del MSNA elaborado por REACH <https://www.reachresourcecentre.info/theme/multi-sector-assessments/cycle/41203/?toip-group=data&toip=dataset-database#cycle-41203>.

164. Las barreras de acceso a salud según el Índice de Pobreza Multidimensional del DANE se calculan así: Personas que dada una necesidad en salud que no implicó hospitalización pudieron acceder a servicios de medicina general, especialista, odontólogo, terapeuta o institución en salud en el último mes.

165. <https://www.icrc.org/es/document/ataques-contra-la-mision-medica-colombia-2021>

del 16 por ciento en la mortalidad materna y un 26 por ciento en la mortalidad materna temprana; *b. En 2020 se registraron 14.273 partos en menores de 14 años.* Los municipios con mayor proporción de partos en menores de 14 años están en Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés. Sin embargo, estos departamentos presentan bajas tasas de reporte de casos de delito sexual, lo cual indica una invisibilización de estas afectaciones y una reducida capacidad institucional para detectarlas; *c. El 47 por ciento de las atenciones por salud mental son realizadas a mujeres, lo cual contrasta con el 29 por ciento en hombres; d. Se observa una mayor mortalidad por enfermedades transmisibles en hombres (52%) y menores de edad (6%).*

Los resultados en salud sexual y reproductiva en el último año muestran un retroceso de más de una década en la mortalidad y discapacidad evitable, y otros daños a largo plazo en la salud de las mujeres y las niñas. La razón de muerte materna alcanzó 76 muertes por 100mnmv (dato preliminar semana 44 2021 INS); los casos de sífilis congénita en lo corrido del 2021 aumentaron en 32 por ciento respecto al año 2020, así como los nacidos vivos en niñas menores de 14 años que se incrementaron en el 9.6 por ciento, lo que se explica en un incremento de los obstáculos para acceder a servicios esenciales de calidad en salud sexual y reproductiva y violencia basada en género. Lo anterior, en parte por la pandemia de la COVID-19 que profundizó la brecha de acceso a servicios, particularmente para las poblaciones en las que ya coinciden las afectaciones por factores de violencia armada, desastres y pobreza estructural, muchas de ellas pertenecientes a minorías étnicas.

Estas poblaciones vulnerables, por razones geográficas, culturales y de seguridad, no logran acceder a un control prenatal ni a otros servicios de salud disponibles. El incremento de las necesidades se da por un bajo desarrollo de la institucionalidad en salud en los municipios más afectados, cuya infraestructura está centrada en las cabeceras municipales, con personal escaso, poco capacitado, con débiles formas de gobierno, infraestructura, equipos y sistemas de referencia que no garantizan por ejemplo el manejo de las emergencias obstétricas o de la atención urgente a las sobrevivientes de violencia sexual; ejemplo de ello son los departamentos de Cauca, Casanare y Putumayo.

La inclusión de territorios prioritarios con ocasión de eventos naturales es uno de los cambios importantes en la priorización de departamentos, como ocurre con la emergencia de La Mojana. Se han considerado los requerimientos en salud que se puedan derivar por las inundaciones y el prolongado desarrollo de las afectaciones, especialmente en los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, dado que la emergencia afecta la prestación de los servicios.

### Proyección de las necesidades

De acuerdo con los análisis realizados se identificó que la población con mayor riesgo en salud en el año 2022 continuará siendo las comunidades étnicas, las personas que sufren confinamiento y desplazamiento forzado, víctimas de MAP/MSE personas refugiadas, migrantes y retornadas, comunidades de acogida, poblaciones bajo control e influencia de GAO y personal de salud que desarrollan sus actividades en estos territorios. Los grupos más afectados son los niños, niñas, adolescentes, gestantes, lactantes, mujeres, personas en condición de discapacidad y personas con enfermedades crónicas o transmisibles.

Teniendo en cuenta la ocurrencia de eventos climáticos intensos en diversas zonas del país, que redundan en inundaciones, deslizamientos, sequías y ciclones tropicales, se podrían presentar situaciones que afecten la infraestructura del sector salud, así como requerimientos adicionales en los servicios de salud y, por ende, menor acceso al sistema de salud. Estas situaciones podrían requerir de la asistencia humanitaria y de la cooperación internacional. Hasta noviembre de 2021 se presentó un incremento de 115 por ciento en el número de personas afectadas por la emergencia en La Mojana, la cual sigue siendo crítica y se prevé su extensión por varios meses.

Adicionalmente, ante la continuidad de los movimientos migratorios mixtos transcontinentales y de población venezolana que siguen en aumento y bajo las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que se han identificado, se podrían ocasionar mayores requerimientos en salud por parte de estos grupos, así como mayor presión de las comunidades de acogida, generando mayor carga en el sistema de salud, cambios en el comportamiento



epidemiológico de los territorios, y el posible aumento en la xenofobia a nivel institucional y comunitaria en los diferentes territorios.

Realizados los análisis de identificación de necesidades en salud, de acuerdo con los datos provenientes de las fuentes oficiales del país, y el reconocimiento de las capacidades, prioridades y presencia de los socios del Clúster de Salud, se destaca la pertinencia de enfocar la cooperación de 2022 en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cauca, Caquetá, Casanare, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Guaviare, Guainía, Meta, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.

Algunos de sus municipios están ubicados en un nivel de severidad 5, en total son 123 municipios según la versión final del PIN. Entre éstos, 74 municipios tienen una cobertura inferior al 30 por ciento de esquemas completos de vacunación contra la COVID-19 (dato

con corte a octubre de 2021), 27 municipios tienen un porcentaje de partos en menores de 15 años superior al 2 por ciento del total, 24 municipios tienen más de un 12 por ciento de su población con barreras de acceso a servicios de salud según el Índice de Pobreza Multidimensional, 22 municipios presentan un “*case fatality ratio*” por COVID-19 mayor al 8 por ciento, 17 municipios tienen una mortalidad infantil superior a 3 casos por 10.000 menores de 5 años y municipios con doble y triple afectación a razón de la confluencia de situaciones de violencia, fenómenos siconnaturales, movimientos migratorios mixtos y la COVID-19.

Así mismo es relevante considerar las afectaciones en la salud mental y física desde un escenario de recuperación que permita identificar la combinación de afectaciones y desde un enfoque de resiliencia, contribuyendo a fortalecer las capacidades locales presente para la respuesta a nuevas emergencias, en un contexto donde se prevé un incremento en los indicadores humanitarios en el país.

## Tabla de proyecciones

	PERSONAS EN NECESIDAD	MÍNIMO	ESTRÉS	SEVERA	EXTREMA	CATASTRÓFICA	FACTORES ASOCIADOS	GRUPOS MÁS VULNERABLES
Junio de 2020	502k	482k	482k	482k	482k	20k	Factores de violencia armada	
Diciembre de 2020	347k	247k	247k	247k	247k	100k	Sequía	
Junio de 2021	331k	155k	155k	155k	155k	176k	Desplazamiento interno	
Diciembre de 2021	290k	90k	90k	90k	90k	200k	Factores de violencia armada	

## Monitoreo

El monitoreo de la situación humanitaria se realizará a través de la estructura dispuesta por el clúster de Salud: Tres subclústeres por ejes temáticos distribuidos así:

- Vida Saludable, Enfermedades Transmitibles y no Transmitibles. Facilitado por la OPS/OMS y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Salud Materna, Salud Sexual y Reproductiva/VBG. Facilitado por UNFPA y el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Niños, niñas y adolescentes. Facilitado por UNICEF y el Ministerio de Salud y Protección Social.

En dichos espacios se propicia el intercambio de información sobre necesidades en salud, las emergencias que se puedan estar presentando, los eventos de interés en salud pública, entre otros aspectos.

Adicionalmente se realizarán visitas territoriales para poder continuar fortaleciendo las mesas de salud como instancias locales de concertación y articulación entre la autoridad sanitaria y las organizaciones de cooperación para el abordaje de brechas y vacíos en la respuesta en salud.

Así mismo se realizará el seguimiento cuantitativo y cualitativo de las acciones implementadas. Respecto del reporte cuantitativo se cuenta con los reportes de las organizaciones a los sistemas de información, incluida la herramienta de información del Clúster<sup>166</sup> que permiten la identificación de los proyectos, la localización geográfica, las acciones desarrolladas y las atenciones efectuadas, entre otros aspectos. De manera cualitativa, el monitoreo y seguimiento se efectúa mediante los espacios de diálogo técnico en el Clúster de Salud y los subclústeres, así mismo desde la voz de los territorios.

## Tabla indicadores

#	EJE DE ANÁLISIS	INDICADOR	FUENTE
01	Covid-19 (mortalidad y cobertura de Vacunación)	# de muertes por 1 millón de habitantes	INS
		# de personas vacunadas por 100.000 habitantes	MSPS
02	Enfermedades crónicas (Cáncer - Diabetes, Enfermedades Huérfanas) (# de personas en tratamiento, sin tratamiento y tasas de mortalidad)	Tasa de mortalidad por Diabetes por 100.000 habitantes	SISPRO
		Tasa de hipertensión x 100 habitantes	SISPRO
03	Enfermedades Transmisibles: Malaria - Dengue	# de casos de malaria	SIVIGILA
		% de dengue grave (#casos dengue grave/número de casos totales de dengue)	SIVIGILA

166. <https://si-clustersalud.org/dashboard/organizacion>

## Tabla indicadores

#	EJE DE ANÁLISIS	INDICADOR	FUENTE
04	Infecciones de transmisión sexual (VIH. SIDA, Sífilis Gestacional y Hepatitis B)	N° de casos sífilis congénita por 1000 NV	SIVIGILA - Estadísticas vitales DANE
		% de transmisión materno infantil VIH	SIVIGILA - Estadísticas vitales DANE
		N° de casos VIH por 100.000 Habitantes	SIVIGILA
		% de transmisión materno infantil HB	SIVIGILA
05	Embarazo adolescente	N° de nacimientos en madres con edades de 15 a 19	Fuente. Estadísticas vitales RUAF DANE
		N° de nacimientos en madres con edades de 10 a 14 años	Fuente. Estadísticas vitales RUAF DANE
06	Mortalidad Materna y Perinatal	Número de muertes Maternas por 100.000 Nacidos vivos	Estadísticas vitales - DANE
		Número de muertes perinatal y neonatal tardía por 1.000 nacidos vivos	Estadísticas vitales - DANE
		Número de casos de Morbilidad Materna Extrema por 1000 NV	SIVIGILA
07	Violencia basada en género (Revisar de manera desagregada la violencia sexual)	N° de casos de violencia física por 100.000 hab.	Indicadores de violencia de género, violencia sexual y violencia física (SIVIGE) que pertenece a SISPRO
		N° de casos de violencia Psicológica por 100.000 hab.	Indicadores de violencia de género, violencia sexual y violencia física (SIVIGE) que pertenece a SISPRO
		N° de casos de violencia por Negligencia y abandono por 100.000 hab.	Indicadores de violencia de género, violencia sexual y violencia física (SIVIGE) que pertenece a SISPRO
		N° de casos de violencia sexual por 100.000 hab.	Indicadores de violencia de género, violencia sexual y violencia física (SIVIGE) que pertenece a SISPRO
08	Mortalidad en menores de 5 años (Desnutrición, EDA, IRA)	Tasa de mortalidad en menores de 5 años por DNT x 100mil hab	DANE - Estadísticas vitales
		Tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA x 100mil hab	DANE - Estadísticas vitales
		Tasa de mortalidad en menores de 5 años por IRA x 100mil hab.	DANE - Estadísticas vitales
09	Cobertura en el esquema general de vacunación (Desagregado por edad, menores de 5 años, gestantes y adultos mayores)	% Cobertura de vacunación con esquema completo (todos los biológicos) para la edad	DANE - Estadísticas vitales

## 3.5 Educación en Emergencias



PERSONAS EN NECESIDAD

3,8M

NIÑAS Y NIÑOS

100%

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

3%

En Colombia, como consecuencia de la pandemia por COVID-19 las escuelas estuvieron cerradas por cerca de 18 meses por lo cual 10,173,890 niñas y niños tuvieron que recibir clases a distancia. En la actualidad, 2.175.608 niños, niñas y adolescentes completan más de 20 meses sin clases presenciales, y de estos el 41 por ciento se encuentra en las 27 secretarías que recoge los municipios focalizados para la implementación del Acuerdo Final (municipios PDET). Además de la pérdida de aprendizajes, la afectación socioemocional y la deserción, los cierres de las escuelas, que son sistemas de vigilancia eficaces contra abusos o violencias, han llevado al aumento de embarazos adolescentes y reclutamiento infantil. Adicionalmente, los contextos de doble y triple afectación especialmente en áreas rurales continúan siendo de gran preocupación puesto que dejan a los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, al ser despojados de los espacios protectores que constituyen las escuelas cuando estas son afectadas por eventos climáticos, cuando las comunidades son desplazadas, y cuando las escuelas son utilizadas como albergues en momentos de crisis.

### Análisis de las necesidades humanitarias

El análisis de las necesidades humanitarias en materia de educación para el 2022 se realizó considerando los indicadores más representativos de la situación general del sector: calidad educativa, cobertura, cobertura en educación inicial y deserción. Adicionalmente, debido a las afectaciones por COVID-19 se ha mantenido el indicador de acceso a internet. Estos indicadores –excepto el de educación inicial, cuya adición corresponde con los esfuerzos del clúster por visibilizar este curso de vida– se usaron en la última versión del HNO 2021 y permiten hacer seguimiento a los cambios en las condiciones municipales.

De cara a 2022 el país se enfrenta a las consecuencias de la pandemia y el cierre de escuelas. Estas incluyen un aumento en la deserción escolar –datos preliminares del Ministerio de Educación muestran que 190.634 niños, niñas y adolescentes abandonaron sus estudios–, un proceso de reapertura con dificultades –a noviembre de 2021 aproximadamente 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes no han regresado a sus escuelas– e

instituciones educativas cuyos históricos problemas de infraestructura agravan la situación y hacen más difícil la adherencia a los protocolos de bioseguridad.

Las zonas rurales y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes más vulnerables, incluidos aquellos pertenecientes a grupos étnicos se enfrentan a peores condiciones. Se observa una correlación entre áreas con bajos resultados en los indicadores de pobreza multidimensional con una baja cobertura a internet y alta deserción escolar. También, una congruencia entre las ZOMAC y tasas mayores de deserción dejan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes expuestos y en riesgo al reclutamiento forzado, uso y utilización en economías ilícitas. Las cifras oficiales muestran que los reportes de reclutamiento aumentaron aproximadamente en un 18 por ciento entre 2019 y 2020 (pasando de 67 a 79 eventos). Por otro lado, 672 municipios se encuentran en severidad 3 y 4 por tasas de cobertura menores al 89,9 por ciento, lo que implica la presencia de un mayor número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por fuera del sistema educativo.





#### COLOMBIA

Crédito de la foto: Save The Children, Milena Rueda.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están enfrentando barreras para su regreso a las escuelas. De acuerdo con la encuesta del MSNA, los principales obstáculos identificados son la falta de equipamiento por parte de las instituciones educativas para enfrentar el COVID-19, y el temor de que las escuelas están muy llenas; esto fue más prevalente en La Guajira, Cesar, Arauca, Córdoba, Antioquia, Nariño, Amazonas, Meta, Vaupés y Guainía. Si bien se han realizado avances importantes en el regreso a la presencialidad, existen vacíos en el seguimiento a la cantidad de días en que los estudiantes asisten a clase, y dificultades en la implementación de la alternancia donde no se ha alcanzado una educación presencial continua. Durante el tiempo que las escuelas abrieron en alternancia en el año 2020 – 2021<sup>167</sup> solo el 3,8 por ciento de los adolescentes de 16 a 17 años accedieron a clases

presenciales en alternancia. Los niños y niñas de 2 a 5 años fueron los que más asistencia en alternancia presentaron con un 49,8 por ciento debido a la necesidad de padres y cuidadores de contar con apoyo para el cuidado durante las jornadas laborales; sin embargo, 1,3 millones de niños y niñas se encuentran en necesidad de atención en modalidades de educación inicial para 2022.

Por otra parte, hay discrepancias y pérdidas en los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes al volver debido a las desigualdades en la calidad y el acceso a la educación virtual, así como las cargas adicionales de cuidado y trabajo que experimentaron en los periodos de confinamiento especialmente las niñas y adolescentes. El índice de pobreza de aprendizaje indica que, a los 10 años, al menos el 50

167. [https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-article-401432.html?\\_noredirect=1](https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-article-401432.html?_noredirect=1)

por ciento de niños en Colombia y América Latina no comprenden un párrafo. Sus estimativos indican que un cierre de colegios durante 7 meses incrementará ese porcentaje a 65 y si se prolonga por un año, subiría a 70 por ciento<sup>168</sup>. Adicionalmente, la evaluación de necesidades implementada por el Clúster de Educación en Emergencias con niños, niñas y adolescentes sobre el retorno escolar arrojó que el 33 por ciento de los encuestados manifestó haber aprendido poco en las modalidades virtuales y a distancia.

Bajo esta misma línea, se destacan las afectaciones socioemocionales en niños, niñas, adolescentes y jóvenes y docentes agravadas por la pandemia con el confinamiento, la violencia intrafamiliar y la crisis económica de las familias, así como por los factores de violencia armada como el desplazamiento forzado o en confinamiento que rompen el vínculo inmediato con los procesos educativos.

Por último, se resalta como una de las necesidades más apremiantes, las afectaciones por desastres de origen natural que durante el último año han tenido un alto impacto negativo en la infraestructura escolar, destruyendo en muchas ocasiones no sólo el mobiliario escolar sino la estructura misma de las construcciones, como ha sido evidenciado por los seguimientos del Clúster y las consultas locales para la construcción del Panorama General de las Necesidades.

### Proyección de las necesidades

Se destacan las siguientes proyecciones de las necesidades en educación:

- El retorno presencial a las escuelas en condiciones seguras y de adaptabilidad para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como el eje central.
- Necesidad creciente de adecuaciones a la infraestructura de las instituciones educativas para garantizar el retorno.
- Afectaciones por desastres de origen natural agravadas por el cambio climático que afecten la infraestructura escolar.

- Si continúan las tendencias de desplazamiento forzado del 2021, se prevé una mayor utilización de escuelas como albergues y una interrupción en la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes que viven en zonas bajo la influencia de actores armados.
- Las zonas rurales y de doble y triple afectación continuarán siendo más afectadas por la falta de acceso a educación y estrategias de permanencia, lo que implica mayores riesgos de deserción, protección, VBG e inseguridad alimentaria al no acceder a alimentación escolar.
- Los docentes tendrán necesidades incrementadas para implementar adaptaciones pedagógicas y metodológicas al recibir a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes presencialmente, incluyendo herramientas de nivelación y refuerzo escolar.

### Monitoreo

Con el fin de aportar al monitoreo de la disminución de esta brecha de la población en condiciones de necesidad, se realizará un seguimiento a los siguientes indicadores:

- Tasa de deserción intracanal escolar por nivel educativo
- Tasa de cobertura neta y bruta por nivel educativo
- Número de niños, niñas y adolescentes con cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE)
- Tasa de extra-edad
- Número de establecimientos educativos en modelo de alternancia
- Cobertura en educación inicial

Estos datos son recopilados por el Ministerio de Educación y permiten hacer un monitoreo a los cambios en las necesidades. Adicionalmente, el Clúster de Educación en Emergencias realiza monitoreos de la situación en los territorios donde se tiene presencia de los socios, con el fin de alimentar los informes situacionales, complementar los análisis que se realizan a partir de fuentes oficiales y contar con información actualizada para la respuesta oportuna.

168. Banco Mundial, 2020.

## Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
01	Tasa de Deserción en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial	SIMAT
02	Tasa de cobertura en educación Básica y Media en el Sector Educativo Oficial	SIMAT
03	Número de estudiantes evaluados en las pruebas saber 11 en el segundo periodo de 2020	ICFES
04	Número de población entre los 5 y 19 años sin acceso a internet	CNPV 2018
05	Cobertura de educación inicial en modalidades del ICBF y transición	ICBF

## 3.6 Alojamientos Temporales



PERSONAS EN NECESIDAD	MUJERES	HOMBRES	ADULTOS MAYORES	NIÑOS Y NIÑAS	PERSONAS CON DISCAPACIDAD
<b>3,8M</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>55%</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>

En relación con las personas que presentan necesidades sectoriales identificadas en 2021 se produjo un incremento con respecto a las cifras del año anterior, con una estimación de 3,8 millones de personas por causa del recrudecimiento de las acciones de violencia, afectaciones por el clima y análisis de la situación habitacional en el país. Según la priorización, al menos 900.000 personas tienen necesidades severas concentradas en 887 municipios y 200.000 personas presentan necesidades agudas y se encuentran ubicadas en 23 municipios.

Como parte del análisis se tuvieron en cuenta indicadores de referencia como: i) acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales para mantener la salud, seguridad y dignidad para las personas afectadas por desastres de origen natural, socionatural y/o antrópico no intencional; ii) acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal, infraestructura comunitaria temporal y artículos domésticos esenciales para las personas afectadas por los factores de violencia armada; iii) acceso a soluciones adecuadas de alojamiento e infraestructura comunitaria de la población (retornada, reubicada y/o en proceso de integración local) afectada por los factores de violencia armada y eventos naturales.

### Análisis de las necesidades humanitarias

Considerando las condiciones humanitarias y el análisis de la severidad relacionado al bienestar físico y mental, se determinó la atención urgente en un corto plazo con relación al acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal, infraestructura comunitaria temporal y artículos domésticos esenciales, de las personas y comunidades afectadas por las nuevas dinámicas de la violencia, desastres de origen natural y la COVID-19. Así mismo, el acceso a soluciones adecuadas de alojamiento e infraestructura comunitaria de la población afectada por factores de violencia armada, y su relación con los medios de vida y apoyo a soluciones duraderas a mediano plazo, fueron los determinantes del análisis de la severidad asociado a la posibilidad de acceder a bienes, servicios y medios de vida.

Según la MSNA liderada por REACH, el alojamiento es una de las tres necesidades más citadas por la población encuestada (población desplazada interna, población indígena, población afrocolombiana, población de acogida). Los principales daños reportados en las viviendas fueron: techo, suelos, puertas y ventanas y divisiones; el 69 por ciento de las personas desplazadas reportó tener goteras en el techo. Sobre acceso a fuentes de energía y tipo, las personas desplazadas enfrentan un 20 por ciento más de barreras al acceso (uso de madera o sin fuentes de energía) respecto a la población de acogida.

En cuanto al espacio habitable: los ocupantes presentan condiciones de hacinamiento<sup>169</sup> y están expuestos a riesgos por inseguridad física de sus estructuras. Los

169. Encuesta Calidad de Vida, DANE 2019.



alojamientos están severamente comprometidos, por lo que la integridad de las personas está en riesgo inmediato. Las personas afectadas no disponen de artículos domésticos esenciales para mantener y restaurar su salud, seguridad y dignidad.

Las personas desplazadas, no tienen acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal suficientes (albergues, centros colectivos o reutilización de infraestructura comunitaria para alojamiento, carpas, alojamiento en hoteles u hospedajes de corta duración y/o alojamiento en familias de acogida), ni artículos domésticos esenciales durante la primera fase de las emergencias o si acceden, éstos no siempre cumplen los estándares mínimos.

Las personas de la comunidad afectada y comunidad de acogida se ven gravemente perjudicadas por la inexistencia, saturación o interrupción de los servicios por falta de acceso a la infraestructura comunitaria crítica durante la atención humanitaria (instalaciones para atención primaria en salud y salud mental, espacios para educación en emergencias, infraestructura social para la atención humanitaria, alumbrado público, entre otros).

Las personas retornadas, integradas y/o comunidades de acogida no disponen de la infraestructura comunitaria y servicios esenciales que les permita su recuperación y tránsito hacia las soluciones duraderas (acceso a servicios públicos, instalaciones de salud, instalaciones educativas, accesos por carretera o rutas de evacuación, infraestructuras para el acceso a medios de vida, telecomunicaciones o energía).

Frente a los grupos vulnerables priorizados, se realizó un especial énfasis en las personas desplazadas internas, poblaciones afectadas por desastres de origen natural, comunidades indígenas y afrocolombianas, mujeres gestantes y lactantes, personas adultas mayores y/o con enfermedades preexistentes y personas en condición de discapacidad, migrantes extracontinentales afectados por riesgo de salud pública, por desastres de origen natural y/o factores de violencia armada, líderes o defensores de derechos humanos y personas LGBTIQ+.

Las áreas geográficas con mayor impacto para el clúster se focalizaron en departamentos como: Norte de Santander, Arauca, Chocó, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas, con relación al acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal, infraestructura comunitaria temporal y artículos domésticos esenciales, de las personas y comunidades afectadas por los factores de violencia armada, desastres de origen natural y COVID-19. Así mismo, es importante ofrecer el apoyo a soluciones duraderas a través del acceso a soluciones adecuadas de alojamiento e infraestructura comunitaria de la población afectada por las nuevas dinámicas de la violencia, para facilitar su retorno al lugar de origen, integración o reubicación, en articulación con los sectores de recuperación temprana, y medios de vida.

## Monitoreo

Las actividades del sector incorporarán el monitoreo de indicadores que darán cuenta de las necesidades de las poblaciones priorizadas y con afectaciones existentes y nuevas.

## Tabla indicadores

#	INDICADOR	FUENTE
01	Número de personas afectadas por desastres de origen natural, socio natural y/o antrópico no intencional con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales	Consolidados 2020 - 2021 de Población afectada UNGRD (desastres de origen natural)  DANE (Proyección 2021)
02	Número de personas afectadas por los factores de violencia armada con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales	UARIV (hecho victimizante: desplazamiento forzado individual, masivo y confinamiento) 2020  DANE (Proyección 2021)
03	Número de personas afectadas por los factores de violencia armada (retornada, reubicada y/o en proceso de integración local) con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales	DANE, Censo nacional de población y vivienda 2018 (Proyección 2021)  UARIV (hecho victimizante: desplazamiento forzado individual, masivo y confinamiento) 2020



### NARIÑO, COLOMBIA

Alojamiento colectivo temporal  
Crédito de la foto: NRC, C. Jepsen.



## 3.7 Recuperación Temprana

PERSONAS EN NECESIDAD

5,5M

MUJERES

51%

HOMBRES

49%

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES  
Y JÓVENES

10%

INDÍGENAS

9%

AFRODESCENDIENTES

18%

En el marco de la situación humanitaria en Colombia hay una combinación de escenarios de múltiple afectación, sumados a problemas estructurales de pobreza, desigualdad y violencia estructural, que se han agudizado a causa de la pandemia por la COVID-19. Estos factores han incrementado las necesidades en todos los sectores, pero se destaca el sector de recuperación temprana en materia de afectación a la macro y microeconomía del país, impactando de manera considerable a la generación de ingresos y a la canasta familiar de los hogares, especialmente afectando a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de informalidad laboral.

Los impactos de la COVID-19 no sólo han generado una emergencia sanitaria en el país, sino que han dejado una situación de recesión económica por las medidas de confinamiento que han conllevado, lo cual ha dejado al país en un proceso paulatino y complejo de recuperación socioeconómica.

Desde que se reportó el primer caso en el país el 2 de marzo de 2020, los indicadores económicos y sociales según fuentes del PNUD, han mostrado retrocesos que se ven reflejados en menores condiciones de bienestar frente al 2019 y, de hecho, condiciones similares a las

del 2010 retrocediendo más de 10 años en los avances en los objetivos de desarrollo sostenible (PNUD 2021). Esta situación de profundización de la pobreza multidimensional en muchas partes del país, sumada a situaciones recurrentes de desastres de origen natural y factores de violencia armada relacionada con la presencia de grupos armados al margen no estatales y su accionar (control territorial y disputa de economías ilícitas, situaciones de confinamiento, amenazas, asesinatos selectivos a defensores de DDHH, así como el incremento de desplazamientos masivos), que hacen que en este último año la situación humanitaria del país se haya deteriorado considerablemente, debilitando el proceso de estabilización y de consolidación de la paz en el país.

### Análisis de las necesidades humanitarias

Frente al incremento de las personas en necesidades en diversos contextos de multi afectación se quiere dar un énfasis a los procesos de reactivación socioeconómica poscovid. Cabe resaltar que, el país perdió a causa de la pandemia alrededor de 5,9 millones de empleos<sup>170</sup> y que la tasa de desempleo sigue aún por encima de dos dígitos, ubicándose en 11,8 por ciento a noviembre de 2021, según el DANE.

170. DANE, MinHacienda-2021

Por lo anterior, este año se ha considerado necesario tener en cuenta el índice de informalidad laboral el cual es casi del 50 por ciento evidenciando un incremento, e igualmente el indicador de Pobreza Multidimensional rural, buscando priorizar territorios rurales dispersos, los cuáles se identifican con mayores brechas estructurales, mayores dificultades de recuperación socioeconómica y mayor vulnerabilidad asociada a factores de violencia armada y desastres de origen natural.

Por otro lado, también es parte de los territorios con necesidades humanitarias prioritarias aquellas zonas urbanas y periurbanas marginales dónde existen asentamientos que carecen de procesos de integración con las ciudades capitales o intermedias, y que tienen serias dificultades de acceso a servicios básicos, problemas de regularización de barrios y dificultades habitacionales por la precariedad de las zonas, falta de planificación territorial y recurrente exposición a riesgos de desastres naturales.

De igual manera, es parte de las prioridades humanitarias, tener en cuenta las poblaciones víctimas que no han superado la situación de vulnerabilidad económica. Dentro del Índice de Restablecimiento Socioeconómico de Derechos (IRSE)<sup>171</sup>, priorizado en este PIN, se identifican 2.244.716 de víctimas que si bien se considera que han superado su situación humanitaria requieren de medidas de estabilización para lograr procesos de soluciones sostenibles. Se considera que, de éstas, al menos 119.302 víctimas necesitan específicamente medidas de generación de ingresos para superar su situación de vulnerabilidad.

Esto se relaciona también con la superación del estado de cosas inconstitucionales que afectan a la población víctima, y en especial, a la población desplazada y que instan al deber del Estado de cumplir con medidas que permitan brindar oportunidades suficientes para lograr soluciones sostenibles que logren superar la dependencia de la ayuda humanitaria y pasar de una fase de emergencia a una fase de estabilización y de reconstrucción del proyecto de vida. Esto significa que es también relevante tener en cuenta las necesidades

humanitarias no sólo de personas que están viviendo hechos victimizantes recientes sino también aquellas víctimas que son desplazadas de larga duración y que no han logrado superar la situación de vulnerabilidad, principalmente por factores socioeconómicos. Adicionalmente, y dadas las condiciones agroclimáticas del país y la temporada de lluvias con crisis súbitas por inundaciones, crecientes y avenidas torrenciales en la segunda mitad del año 2021, así como el desastre recurrente de la Mojana es necesario seguir trabajando en pro del fortalecimiento de capacidades locales para la gestión del riesgo y buscar también procesos de recuperación integral de medios de vida.

También es importante tener en cuenta los procesos humanitarios y de recuperación temprana en contextos de consolidación de la paz, y, por lo tanto, priorizar territorios con necesidades humanitarias en zonas PDET o en territorios de reincorporación de población excombatiente de manera a apuntar a estrategias de *triple nexo* que permitan además de responder a situaciones emergentes enfocadas sobre todo a la recuperación de medios de vida y al restablecimiento de derechos, trabajar en lógica de prevención de nuevas conflictividades. En este sentido, cabe tener en cuenta que, de acuerdo con las cifras de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, hay 12.925 personas en proceso de reincorporación de las cuales 9.647 residen fuera de los antiguos ETCR y 2.460 aún viven en estos.

En las zonas PDET de acuerdo con el censo del 2018 hay 5,6M de personas, de las cuales el 21 por ciento son población afrodescendiente, y el 8,4 por ciento son población indígena. De los 170 municipios priorizados, 151 son categoría 6, lo que implica que la capacidad de gestión institucional es muy limitada lo que plantea una necesidad de apoyo tanto en lógica de fortalecimiento institucional como en la implementación de medidas de recuperación y resiliencia comunitaria con enfoque de *nexo*. Adicionalmente, en estas regiones a través de los Planes de Acción para la Transformación Territorial se han identificado al menos 10.594 iniciativas relacionadas con los pilares 6 y 8, recogiendo principalmente necesidades priorizadas en materia tanto

171. UARIV, 2021



humanitarias como de reactivación socioeconómica, producción agropecuaria, reconciliación, convivencia y construcción de paz.

Las principales necesidades humanitarias más destacables para el sector de recuperación temprana se encuentran en los siguientes territorios: frontera sur, frontera norte, región amazónica, territorios vulnerables a desastres naturales, zonas de acogida de población víctima de los factores de violencia armada y migrante principalmente en ciudades capitales e intermedias y territorios priorizados en procesos de consolidación de la paz. De este universo de territorios con necesidades humanitarias, desde el sector de recuperación temprana habrá una delimitación espacial también basada en las capacidades de respuesta por parte de los miembros del sector.

Las poblaciones focalizadas son: poblaciones campesinas, comunidades étnicas, poblaciones de acogida en territorios fronterizos, contextos rurales dispersos, y contextos urbanos y periurbanos en zonas de asentamiento, territorios PDET y zonas prioritarias en materia de consolidación de la paz. De manera transversal, hay una focalización poblacional que tiene especial énfasis en mujeres, jóvenes, víctimas, población damnificada por desastres naturales, comunidades de acogida y supervivientes de VBG.

### **Proyección de las necesidades**

Aunque la cifra de crecimiento macroeconómico es más alentadora para el país para finales de 2021, preocupa que el mercado laboral no se recupera al mismo ritmo. La CEPAL (2021) proyecta un crecimiento de la economía en Colombia por encima del 7%; sin embargo, el desempleo es elevado y el ritmo de la generación de empleo no es homogéneo al ritmo de crecimiento o de recuperación económica. También, cabe decir que los datos macroeconómicos, pueden no verse reflejados a nivel de los territorios y especialmente en poblaciones más expuestas a situaciones de vulnerabilidad, haciéndose evidente las brechas de desigualdad y las brechas poblacionales existentes. Esto hace que sea necesario enfocarse en el trabajo de recuperación de medios de vida integrales para las comunidades afectadas por crisis emergentes, pero también en procesos de estabilización socioeconómica

en contextos de postcrisis y con poblaciones vulnerables priorizadas.

Adicionalmente, la ola invernal que ha acechado la mitad de 2021 y que se proyecta también para 2022, puede seguir ocasionando procesos de damnificación en zonas vulnerables a desastres naturales como se ha visto en la zona de La Mojana recientemente, buscando la proyección de acciones de respuesta temprana pero también la apuesta por soluciones más estructurales que permitan adaptarse al contexto y a los desafíos del cambio climático con un foco puesto en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para la gestión del riesgo.

También es de prever que, dado que 2022 es un año electoral, los procesos de polarización social y política seguirán haciendo mella, ahondando en la crisis de protección existente que afecta principalmente a líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH, población excombatiente y jóvenes, siendo esto un tema de especial riesgo para la consolidación de una paz sostenible en el país. Lo anterior, requiere toda la atención del sector, focalizando el trabajo en territorios PDET, pero también en las zonas allegadas a los AETCR (Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) y a nuevos puntos de reincorporación y, así mismo, en zonas urbanas y periurbanas más vulnerables. Se busca generar procesos que articulen los temas humanitarios, con temas de paz y desarrollo lo que implica generar brechas de oportunidad que permitan a la vez de atender situaciones de amenaza y riesgos, generar dividendos de paz que permitan prevenir nuevas conflictividades y fortalecer capacidades locales de protección, autonomía, autogestión, cohesión social, y gestión integral del riesgo (desastres, factores de violencia, COVID-19, etc.)

Así mismo, es importante promover procesos de soluciones duraderas principalmente en contextos PDET, y acelerar procesos de retorno, reubicación o integración local en contextos tanto rurales como urbanos que permitan responder a las necesidades más apremiantes tanto de las personas en procesos recientes de desplazamiento forzado como aquellas en procesos de larga duración que necesitan apoyo para superar situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

## Monitoreo

Con el fin de aportar al monitoreo de los indicadores de la población en condiciones de necesidad y de contribuir desde el sector a la reducción de brechas, se realizará un seguimiento a los siguientes indicadores de fuentes institucionales:

- Tasa de informalidad Laboral –DANE
- Tasa de desempleo-DANE
- Pobreza multidimensional -DANE
- Indicadores de Riesgo de Desastres y afectación de daños- UNGRD
- Indicadores de precipitación-IDEAM
- Desplazamiento forzado y hechos victimizantes-UARIV
- Índice de superación de la vulnerabilidad
- Indicadores de riesgo de violencia-Defensoría de pueblo

Lo anterior, buscando monitorear las situaciones de vulnerabilidad y riesgo por factores de violencia armada, así como por desastres naturales y pobreza multidimensional poniendo énfasis en los temas

de recuperación de medios de vida en contextos de crisis, así como en la superación de la vulnerabilidad socioeconómica en contextos de postcrisis. Al monitorear situaciones tanto de riesgo como de vulnerabilidad, se busca evaluar tanto la identificación de la afectación de la población como la búsqueda de estrategias de prevención, reparación y no repetición.

Ante este escenario de monitoreo, se realizará una focalización sectorial, territorial y poblacional, en aquellas zonas priorizadas en procesos de estabilización para la paz, como lo son los municipios PDET, y los territorios con AETCR y nuevos puntos de reincorporación. Y, asimismo, se priorizarán aquellas zonas de multiafectación donde existen situaciones de vulnerabilidad por riesgos de desastres de origen natural, factores de violencia armada o zonas con alta afluencia de población migrante.

De igual manera, se utilizará como medio de monitoreo los informes de las evaluaciones de necesidades de los diferentes socios, y los avances en la respuesta según los datos recabados en el Sistema 345W.

## Tabla indicadores priorizados por el sector

INDICADORES PIN	FUENTE	CORTE DE DATOS
Afectación vivienda y medios de vida por desastres naturales	UNGRD	2021
Victimas de factores de violencia que superan vulnerabilidad en todos los criterios a excepción de generación de Ingresos	UARIV	2020
IPM Centro Rural Disperso	DANE	2020
Informalidad-rural Disperso 10%	DANE	2020

INDICADORES FOCALIZACIÓN SECTORIAL	FUENTE	CORTE DE DATOS
Municipios PDET	Decreto 893 de 2017	N/A
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	Decreto 1274 de 2017	N/A
Índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático	Tercera comunicación nacional de cambio climático	2020
Índice de Riesgo de Victimización	UARIV	2020



## Parte 4

# Anexos

---

ITUANGO / ANTIOQUIA. COLOMBIA

Crédito de la foto: OCHA, Andrea Acuña.



# 4.1

## Fuentes de los datos

El estudio intersectorial se soportó en la elaboración de un análisis compuesto por bases de datos con desagregación geográfica a nivel de municipios (los 1.122 del país). Para ello, se utilizaron trece fuentes de información cuantitativa de datos abiertos del Gobierno de Colombia centradas en las siguientes dimensiones de análisis: Población, Desplazamiento, Desastres, Salud, Educación, Violencia y Acceso a Servicios. (ver fuentes en nota metodológica).

De igual forma, los resultados de los talleres realizados a nivel territorial con los Equipos Locales de Coordinación (ELC), Equipos Humanitarios Locales (EHL) y las evaluaciones de necesidades fueron utilizados como insumo para la ponderación de la severidad intersectorial por municipio.

En los espacios de dichos talleres, se pudieron validar las severidades derivadas del análisis de información cuantitativa y contrastarlas con el contexto y las dinámicas locales; y las evaluaciones de necesidades realizadas durante 2020 y 2021 fueron utilizadas para ponderar la severidad intersectorial, en tanto pueden dar cuenta de posibles vacíos o brechas de información.

Para las organizaciones y agencias que hacen parte del Equipo Humanitario de País y que contribuyen con la respuesta humanitaria, contar con información de corto plazo que provea datos precisos sobre las necesidades humanitarias más urgentes de la población, es fundamental para lograr una respuesta adecuada, pertinente y eficiente. En este contexto, como parte del ciclo de programación humanitario, durante

### Evaluaciones de necesidades

Número de evaluaciones

EVALUACIONES	SOCIOS PROMEDIO POR EVALUACIÓN	SOCIOS EN LA MNSA
82	6	35

Número de evaluaciones

METODOLOGÍA	EVALUACIONES
ERN	40
JMMI	1
MIRA	24
MNSA	1
OTRAS	16



2021 las organizaciones y agencias humanitarias, desarrollaron 94 evaluaciones de necesidades. De éstas el 87 por ciento (82 en total) se enfocaron en emergencias causadas, por los nuevos factores de la violencia armada, desastres, COVID-19 y movimientos transcontinentales. Las demás evaluaron necesidades de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela.

Por la inminencia de las emergencias, la mayoría de las evaluaciones realizadas (82) fueron evaluaciones rápidas, de las cuales: 24 fueron evaluaciones rápidas multisectoriales (MIRA, por sus siglas en inglés); 40 evaluaciones rápidas de necesidades (ERN) por parte del Consorcio MIRE, 1 fue iniciativa de evaluación de monitoreo de mercados (JMMI); y 1 fue una evaluación de necesidades multisectoriales (MSNA por sus siglas en inglés) en 2021.

Así mismo, la mayoría de las evaluaciones fueron coordinadas a pesar de utilizar diferentes metodologías y cuestionarios; se contó con la participación de seis organizaciones en promedio por cada evaluación, con la excepción de la MSNA en la que participaron 35 socios solamente; tres de las 59 evaluaciones realizadas fueron desarrolladas por una sola organización.

Las evaluaciones se desarrollaron en diferentes departamentos; la totalidad de los 32 departamentos han recibido por lo menos una evaluación, obteniendo información sobre la realidad de todos los sectores.



No obstante, este alcance es limitado en relación con la cantidad de municipios cubiertos frente al total. Se cubrieron 136 municipios, cerca del 11 por ciento del total de municipios del país. Los departamentos de la región Pacífico (Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Antioquia) son en los que con mayor frecuencia se desarrollan evaluaciones de necesidades por ser los departamentos donde con más frecuencia se presentan emergencias.

Las evaluaciones brindan información sobre las necesidades de los siguientes sectores: Protección (91%), Seguridad Alimentaria y Nutrición (78%), Albergue (75%), Salud (72%) y WASH (72%), y en contraste, Educación (47%) y medios de vida (16%) son los que menos información incluyen en las evaluaciones.

Educación (47%) y medios de vida (16%) son los que menos información incluyen en las evaluaciones.

Finalmente, de las evaluaciones realizadas sobre la situación humanitaria del país, el 23 por ciento cuenta con información de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela afectada por desastres, factores de violencia armada y la COVID-19, en situación de doble y triple afectación.

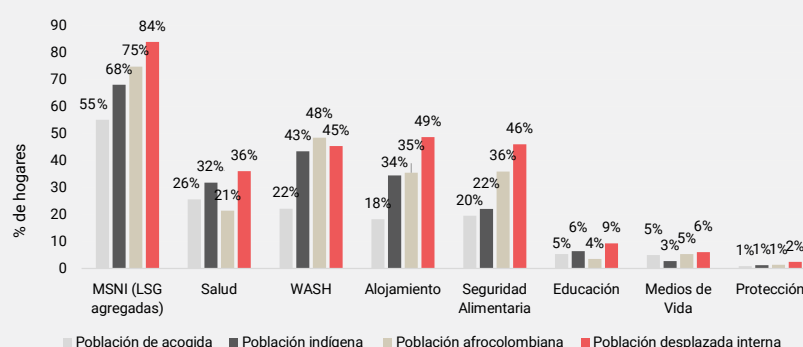
## Evaluaciones por departamento y clúster

									
	PROTECCIÓN	SALUD	EDUCACIÓN	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	WASH	MEDIOS DE VIDA	ALOJAMIENTO Y ALBERGUE	TRANSFERENCIAS MONETARIAS	TOTAL
Amazonas	3	3	3	3	3	3	3	0	3
Antioquia	23	24	18	18	18	18	18	5	28
Arauca	7	7	7	8	9	1	9	3	12
Archipiélago de San Andrés	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Atlántico	2	2	2	2	2	2	2	0	2
Bogotá D.C.	5	3	5	0	2	6	2	0	7
Bolívar	1	1	1	1	1	1	1	0	3
Boyacá	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Caldas	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Caquetá	1	1	1	1	1	1	1	0	2
Casanare	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Cauca	8	5	5	8	8	2	2	0	8
Cesar	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Chocó	13	13	13	13	13	8	5	3	13
Córdoba	5	5	5	8	8	3	3	0	8
Cundinamarca	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Guainía	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Guaviare	2	2	2	2	2	2	2	0	4
Huila	1	1	1	1	1	1	1	0	1
La Guajira	2	3	1	1	1	1	1	0	7
Magdalena	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Meta	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Nariño	22	18	21	23	24	21	18	6	25
Norte de Santander	3	3	3	3	3	3	3	3	12
Putumayo	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Quindío	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Risaralda	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Santander	1	0	0	0	0	0	0	3	8
Sucre	1	1	1	1	1	1	1	0	2
Tolima	2	2	2	2	2	0	0	0	2
Valle del Cauca	8	8	6	8	11	6	4	1	12
Vaupés	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Vichada	1	1	1	1	1	1	1	0	1

# Evaluación de Necesidades Multisectoriales (MSNA) Colombia 2021

La Evaluación de Necesidades Multisectoriales (MSNA por sus siglas en inglés) es una evaluación conjunta co-liderada por la Iniciativa REACH y por OCHA en 18 países, incluyendo por primera vez a Colombia en 2021. La MSNA tiene como objetivo nutrir el proceso del HNO/HRP a través de la identificación de las condiciones humanitarias de los hogares del país, expresadas por los mismos integrantes de estos hogares. Esta sección presenta brevemente las principales tendencias encontradas en el análisis de los datos cuantitativos recolectados en 17 departamentos<sup>172</sup> de Colombia por 35 organizaciones<sup>173</sup>, las cuales, de manera presencial, encuestaron a hogares de poblaciones prioritarias<sup>174</sup> entre el 3 de agosto y 10 de septiembre del 2021.

## Proporción de hogares que reportaron LSG por sector y población



El análisis de los datos se centra en siete sectores<sup>175</sup> de interés y combina un análisis descriptivo de las variables y un índice de necesidades multisectoriales (MSNI por sus siglas en inglés)<sup>176</sup>. Éste último se basa en asignar a cada hogar una puntuación de severidad expresada en una escala de 1 a 4+ por sector para determinar si el hogar tiene una *brecha de nivel de vida* (LSG por sus siglas en inglés) y en qué nivel de severidad se encuentra. Así, mientras que la LSG representa

una necesidad sectorial no cubierta, la agregación de los valores máximos de dichas LSG determina el MSNI por hogar según la misma escala de severidad. Se considera que los hogares con una puntuación de severidad del MSNI igual o superior a 3 tienen al menos una necesidad no cubierta.

*Para más información sobre esta evaluación, por favor consulte el [Centro de Recursos de REACH](#)*

172. Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle de Cauca, Vaupés y Vichada. Seis de estos departamentos, fueron divididos en dos sub-regiones con base a condiciones de seguridad contrastantes; los departamentos siguientes presentan resultados independientes en subregiones 1 y 2: Antioquia, Cauca, Córdoba, Nariño, Norte de Santander, Valle de Cauca. Para más información, favor de consultar los [Términos de referencia](#).

173. Organizaciones: Acción Contra el Hambre, ACNUR, APOYAR, ASATAV, CCCM, Cidemos, COMFIAR, CORPROGRESO, CORSOC, Cruz Roja Colombiana, Diócesis de Montería, Diócesis de Tibú, FAO, Fundación Alianza por la Solidaridad, Fundación Guajira Naciente, FUPAD, HAI, HALU, HI, INTERSOS, Mercy Corps, NRC, REACH, OCHA, OIM, ONU DDHH, Opción Legal, OPS/OMS, Pastoral Social / Caritas, Save the Children, UNFPA, UNICEF, WFP, World Vision y ZOA.

174. Población de acogida, población desplazada interna, población afrocolombiana (incluye negro, raicero y palenquero) y población indígena.

175. Sectores: Educación en emergencia (EeE), Seguridad alimentaria y nutrición (SAN), Salud, Agua, saneamiento e higiene (WASH), Salud, Alojamiento, Protección, así como Recuperación temprana y medios de vida (RT y MV).

176. Dichos análisis son representativos (95% nivel de confianza y 7% rango de error) para población de acogida en los departamentos donde se alcanzó la muestra aleatoria (Amazonas, Antioquia, Arauca, Córdoba, Guainía, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander y Vaupés) e indicativos para población desplazada interna. Los datos de comunidades de acogida y sus agrupaciones por comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas) que se presentan en este documento corresponden a dichos departamentos y por lo tanto son representativos. Favor de tomar en cuenta que los datos no hacen distinción entre el tipo de entorno de la población (rural o urbano). Como referencia, en los departamentos de Putumayo, Valle de Cauca, Cauca, Arauca, Meta, Guainía y Antioquia, la recolección de datos se vio parcialmente limitada por condiciones de seguridad y falta de capacidad para acceder a ciertas zonas remotas.



#### REGIÓN DE LA MOJANA. COLOMBIA

Respuesta en Emergencia, OCHA.  
Crédito de la foto: OCHA Colombia.

## 4.2 Metodología

La metodología para el cálculo de personas en necesidad (PiN) intersectorial para el *Panorama de Necesidades Humanitarias* (HNO) 2022 por parte del Grupo de Trabajo de Análisis Intersectorial Conjunto (JIAG) en el marco del Grupo Temático de Manejo de Información (GTMI), con el apoyo de iMMAP, se desarrolló siguiendo la metodología global JIAF<sup>177</sup> en el que se analizan los eventos impulsores o choques que afectan las condiciones humanitarias en la población a partir de tres pilares: i. Estándares de vida, ii. Mecanismos para afrontar el choque y iii. Bienestar físico y mental.

Para el ejercicio del 2021, se realizó una selección de “conductores o impulsores de la crisis” que determinan las necesidades humanitarias en el país que requieren asistencia por las necesidades desencadenadas (víctimas que dejan los factores de violencia armada, afectaciones por desastres de origen natural, afectaciones por la COVID-19 y afectaciones por vulnerabilidad extrema y población de riesgo, realizado a través del IPM<sup>178</sup>); se definen para cada uno de ellos los indicadores que determinen el impacto sobre los grupos vulnerables, asignando una carga poblacional

177. JIAF - Joint Intersectoral Analysis Framework, por sus siglas en inglés.

178. IPM: Índice de Pobreza Multidimensional



según los niveles de severidad del 1 al 5, en donde 1 son estándares mínimos aceptables y necesidades básicas satisfechas y 5 corresponde el colapso total de los estándares de vida, a nivel intersectorial.

Para ello, se **seleccionó el escenario de análisis** compuesto por **bases de datos con desagregación por área<sup>179</sup> a los 1.122 municipios** del territorio nacional, tomando en cuenta su población como número de casos dentro del análisis y basado en la evidencia de los datos.



**1**  
Acceso a  
**agua**



**2**  
Acceso a  
**saneamiento**



**3**  
Personas con  
**inseguridad alimentaria**



**4**  
Niños y niñas menores de cinco años con  
**riesgo y diagnóstico de desnutrición aguda (moderada y severa)**



**5**  
Población con  
**barreras de acceso a salud**



**6**  
**Mortalidad por causas de vigilancia epidemiológica**  
(infantil, materna, suicidios, tuberculosis, leishmaniasis, dengue) y mortalidad materna extrema



**7**  
Población víctima que  
**no ha superado una situación de vulnerabilidad en ingresos**



**8**  
Número de personas en riesgo  
**con necesidades de protección afectadas por emergencias humanitarias derivadas de los factores de violencia armada**

Así mismo, **se seleccionaron los indicadores sectoriales** que, desde una visión estratégica, ponen una mayor presión en la inminencia de las necesidades humanitarias; de esta manera, **de los 52 indicadores propuestos por los clústeres fueron seleccionados doce indicadores críticos para el cálculo intersectorial:**



**9**  
**Deserción escolar**  
(en educación básica y media en el sector educativo oficial)



**10**  
**Cobertura escolar**  
(en educación básica y media en el sector educativo oficial)



**11**  
Número de personas afectadas por  
**desastres de origen natural, socio natural y/o antrópico no intencional con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos esenciales**



**12**  
Número de personas afectadas por  
**factores de violencia armada y con acceso a soluciones adecuadas de alojamiento temporal y artículos domésticos**

**De manera complementaria también se seleccionaron dos indicadores intersectoriales con mayor relevancia (críticos) para este análisis, sumando un total de catorce indicadores críticos:**



**13**  
Afectación por factores de  
**violencia armada**



**14**  
Índice de  
**Pobreza Multidimensional**

179. Escenario B Metodología JIAF.

## Marco de análisis intersectorial conjunto

JOIN INTERSECTORIAL ANALYSIS FRAMEWORK (JIAF),  
por sus siglas en inglés

Contexto		
Político	Económico	Socio-cultural
Legal y político	Tecnológico	Demográfico
Medio ambiente	Seguridad	Infraestructura



### PERSONAS QUE HABITAN EL ÁREA AFECTADA

Evento/impacto	
Conductores/impulsores	Factores subyacentes/ Vulnerabilidades preexistentes



### PERSONAS AFECTADAS

Impacto		
Impacto en el acceso humanitario	Impacto en los sistemas y servicios	Impacto en las personas

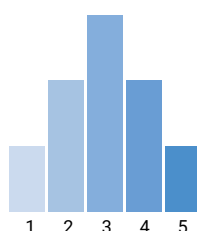


### Condiciones humanitarias

#### Personas en necesidad



#### Severidad de las necesidades



### Priorización de las necesidades y preocupaciones actuales y previstas

Como se mencionó anteriormente, se prepararon los indicadores sectoriales e intersectoriales con datos a nivel de municipalidad, severidad y cantidad de personas, de igual forma se calcularon los porcentajes relativos de personas bajo cada una de las severidades asociadas a cada uno de los indicadores. La selección de la severidad de cada indicador a nivel de municipio se hizo usando la regla del 25 por ciento en donde, por definición, la severidad asociada al indicador para un área específica corresponderá al primer nivel de severidad en que el valor de porcentaje acumulado, sumando desde el nivel de severidad más alto hacia lo más bajo, sea  $\geq 25\%$ . Es decir, se clasifica la severidad del indicador, cuando al menos el 25% de la población está experimentando las condiciones relacionadas a este nivel o más alto.

De esta manera, se procedió a calcular el nivel intersectorial de severidad de los municipios según tres dimensiones críticas, con el fin de realizar un análisis simplificado y multidimensional de la severidad: i) la media de los indicadores por municipio que tienen las puntuaciones más altas, conforme a la metodología JIAF, centrándose solo en el 50% de los indicadores que tienen las severidades mayores. Así mismo, se toma en cuenta, ii) evaluaciones de necesidades: nivel de severidad estimado con el análisis de las brechas en las evaluaciones de necesidades aplicadas en el país, y iii) factor cualitativo o "juicio de expertos": compuesto por los datos que arrojaron los ejercicios cualitativos de los talleres HNO regionales de terreno (ELC). Los dos últimos elementos se aplican solamente a los municipios en donde se hicieron evaluaciones o cubiertos por los talleres regionales.



Para tener más detalles sobre las metodologías desarrolladas y acceder a los datos con los resultados sectoriales e intersectorial correspondiente al PiN y severidad, por favor consultar el siguiente enlace:

<https://data.humdata.org/dataset/pin-intersectorial-2022-colombia>

## 4.3

## Vacíos de información y limitaciones

La recolección de datos completos y confiables para los indicadores seleccionados en la construcción del análisis de necesidades del HNO 2022, según la metodología JIAF, constituyó uno de los retos más importantes del proceso de análisis de necesidades. A pesar de lograr un resultado representativo a nivel municipal, se identificaron algunos vacíos y limitaciones que deben abordarse de manera temprana, antes de dar inicio al Ciclo de Programación Humanitaria en futuros procesos. Los principales vacíos de información y limitaciones identificados se relacionan a continuación:

- Se observó la *limitación de algunas fuentes de información que por su naturaleza cuentan con desagregación departamental y no municipal*. Ese tipo de indicador no permite una comparación del impacto de las crisis entre los municipios de un mismo departamento. Lo anterior, exigió recurrir en algunos casos a métodos estadísticos para lograr el cometido.
- Algunos de los indicadores seleccionados no lograban dar el alcance requerido para la clasificación según las cinco escalas de severidad determinadas en la metodología.
- Se identificaron *fuentes oficiales que cuentan con toda la información y niveles de desagregación, sin embargo, algunas tienen un rezago significativo* por el periodo lo cual imposibilita tener datos actualizados. Por lo anterior, se recomienda determinar con anticipación toda la información que se va a requerir, con el fin de hacer con tiempo todas las solicitudes formales a instituciones u organismos encargados.
- Se advierte un vacío por el subregistro en algunas bases de datos consultadas y utilizadas; por lo tanto, la baja capacidad de recolección de datos en zonas de difícil acceso en el país y factores sociales como el temor a denunciar por parte de la comunidad, son grandes limitantes para el análisis de información precisa y veraz que dé cuenta de la dimensión y gravedad de la situación en el país. En contraposición la MSNA se hizo en zonas de difícil acceso como un avance en relación con este problema.
- La *desagregación del PiN para grupos vulnerables, incluso en categorías de género y edad, es una de las principales limitantes* con las que se ha contado desde el 2020. Si bien la metodología propone obtener esta información directamente de las fuentes consultadas, se hace imposible llegar a este nivel de detalle en la mayoría de las bases consultadas, lo que evidencia grandes vacíos respecto a las desagregaciones demográficas (incluyendo desagregación étnica) requeridas para mostrar con certeza el número de personas en necesidad correspondientes a cada uno de los grupos vulnerables.
- Esto, al igual que en 2020, indica la *necesidad de plantear alternativas desde el enfoque metodológico para aquellos países en los que se presentan estas barreras y limitantes de información*. Ante esto, se plantea un trabajo conjunto con los socios humanitarios para que se incluyan en sus evaluaciones indicadores sobre los grupos vulnerables, lo que podría mejorar la colecta de datos desagregados.
- Para el análisis de este año, se tuvieron en cuenta las evaluaciones de necesidades recolectadas en el terreno. Sin embargo, se identificó que la consolidación de la información de las evaluaciones de necesidades no se está haciendo de manera rigurosa, dado que *no es posible en algunas ocasiones identificar las zonas en donde se aplicaron las evaluaciones*.
- Por lo anterior, es de vital importancia *robustecer y promover la recolección de datos a nivel de los territorios para los clústeres* y, de esta manera, cuando sea aplicada una encuesta, los puntos focales se encarguen de diligenciar asertivamente los formularios en donde relacionen toda la información mínima posible (clúster al que pertenece la encuesta,

municipios o territorios en donde se aplicó, objetivo, etc.). Con ello, se espera que al realizar los análisis se puedan evidenciar una mayor robustez sobre las brechas y sopesar los vacíos de información entre los datos cualitativos y cuantitativos.

- Finalmente, tal como se planteó en el HNO 2021, es importante resaltar la *necesidad de fortalecer las capacidades en manejo de información a todos los niveles de la arquitectura humanitaria, y poner como centro del análisis los grupos poblacionales identificados*, de modo que en el futuro se cuente inicialmente con información más precisa, confiable y desagregada para robustecer aún más los procesos y cerrar las brechas identificadas; y acorde a lo anterior, focalizar la respuesta de la manera más consecuente frente a los objetivos propuestos.



CÓRDOBA, COLOMBIA  
Visita a mina el Alacrán



## 4.4

**Acrónimos**

<b>ACNUR</b>	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados	<b>GAO</b>	Grupos Armados Organizados
<b>CBPF</b>	Country-Based Pooled Funds	<b>GAPD</b>	Grupos Armados Pos-Desmovilización
<b>ACPC</b>	Ataque Contra la Población Civil	<b>GEIH</b>	Gran Encuesta Integrada de Hogares
<b>AEI</b>	Artefactos Explosivos Improvisados	<b>GIC</b>	Grupo Inter Clúster
<b>AGC</b>	Autodefensas Gaitanistas de Colombia	<b>GIFMM</b>	Grupo Inter agencial sobre Flujos Migratorios Mixtos
<b>CANI</b>	Conflicto Armado No Internacional	<b>GTMI</b>	Grupo Temático de Manejo de Información
<b>CICR</b>	Comité Internacional de la Cruz Roja	<b>GTP</b>	Grupos Temáticos de Protección
<b>CIDH</b>	Corte Interamericana de Derechos Humanos	<b>HNO</b>	Humanitarian Needs Overview, por sus siglas en inglés
<b>DDHH</b>	Derechos Humanos	<b>HRP</b>	Humanitarian Response Plan
<b>DANE</b>	Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas	<b>ICBF</b>	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
<b>DIH</b>	Derecho Internacional Humanitario	<b>IDH</b>	Índice de Desarrollo Humano
<b>DTM</b>	Displacement Tracking Matrix	<b>INFORM</b>	Index for Risk Management, por sus siglas en inglés
<b>EAS</b>	Explotación y Abuso Sexual	<b>INML</b>	Instituto Nacional de Medicina Legal
<b>EDA</b>	Enfermedad Diarreica Aguda	<b>IRA</b>	Infección Respiratoria Aguda
<b>EHP</b>	Equipo Humanitario de País	<b>ITS</b>	Infecciones de Transmisión Sexual
<b>ELC</b>	Equipo Local de Coordinación	<b>MAP</b>	Minas Anti Personal
<b>ELN</b>	Ejército de Liberación Nacional	<b>MIRA</b>	Multi-Cluster/Sector Initial Rapid Assessment, por sus siglas en inglés
<b>ENDS</b>	Encuesta Nacional de Demografía y Salud	<b>MSE</b>	Municiones Sin Explotar
<b>EPL</b>	Ejército Popular de Liberación	<b>NNA</b>	Niños, Niñas y Adolescentes
<b>ERA</b>	Enfermedad Respiratoria Aguda	<b>NNAJ</b>	Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
<b>ERM</b>	Educación en el Riesgo de Minas	<b>OACP</b>	Oficina del Alto Comisionado para la Paz
<b>ERP</b>	Evaluaciones Rápidas de Protección	<b>OCDE</b>	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
<b>ETCR</b>	Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación	<b>OCHA</b>	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
<b>FARC-EP</b>	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo; antigua guerrilla que hizo parte del conflicto histórico colombiano.	<b>OIM</b>	Organización Internacional para las Migraciones
<b>FMM</b>	Flujos Migratorios Mixtos		

<b>OMS</b>	Organización Mundial de la Salud	<b>UNODC</b>	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
<b>ONG</b>	Organización/es No Gubernamental/es	<b>UPME</b>	Unidad de Planeación Minero-Energética
<b>PAE</b>	Programa de Alimentación Escolar	<b>VBG</b>	Violencia Basada en Género
<b>PAT</b>	Planes de Acción Territorial	<b>ZOMAC</b>	Zonas Más Afectadas por el Conflicto
<b>PDET</b>	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial		
<b>PEP</b>	Permiso Especial de Permanencia		
<b>PIB</b>	Producto Interno Bruto		
<b>PIN</b>	People In Need (Personas Con Necesidad)		
<b>PMA</b>	Programa Mundial de Alimentos		
<b>PNIS</b>	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos		
<b>PPV</b>	Población Proveniente de Venezuela		
<b>REG</b>	Remanentes Explosivos de Guerra		
<b>RUV-UARIV</b>	Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas		
<b>SAN</b>	Seguridad Alimentaria y Nutricional		
<b>SGSSS</b>	Sistema General de Seguridad Social en Salud		
<b>SNARIV</b>	Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas		
<b>SNU</b>	Sistema de Naciones Unidas		
<b>TMF</b>	Tarjeta de Movilidad Fronteriza		
<b>UARIV</b>	Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas		
<b>UNCT</b>	Equipo de País de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés		
<b>UNDAF</b>	Marco de Asistencia para el Desarrollo, por sus siglas en inglés		
<b>UNGRD</b>	Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres		

**PANORAMA DE LAS  
NECESIDADES HUMANITARIAS**  
COLOMBIA

FEBRERO 2022